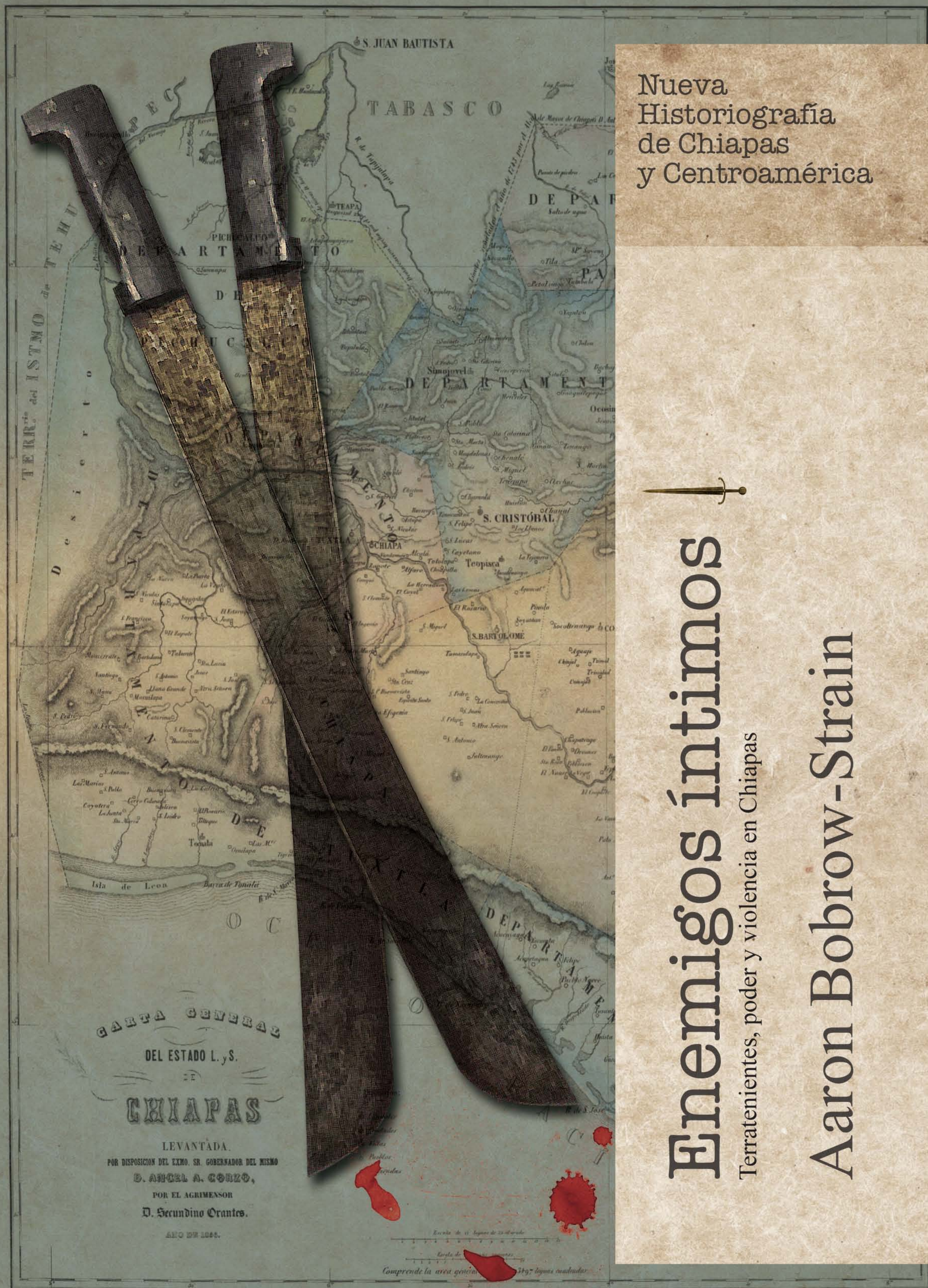

Nueva
Historiografía
de Chiapas
y Centroamérica
Enemigos íntimos
Terratenientes, poder y violencia en Chiapas
Aaron Bobrow-Strain
CARTA GENERAL
DEL ESTADO L. y S.
DE
CHIAPAS
LEVANTADA
POR DISPOSICION DEL EXMO. SR. GOBERNADOR DEL MISMO
D. ANGEL A. CORZO,
POR EL AGRIMENSOR
D. Secundino Orantes.
TABASCO
S. JUAN BAUTISTA
S. CRISTÓBAL
CHIAPA
Longitud Oriental de Mexico.

ENEMIGOS ÍNTIMOS

TERRATENIENTES, PODER

Y VIOLENCIA EN CHIAPAS

Rafael Tovar y de Teresa
PRESIDENTE DEL CONACULTA

Manuel Velasco Coello
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

Juan Carlos Cal y Mayor Franco
DIRECTOR GENERAL DEL CONECULTA-CHIAPAS

HD1331.M6.B6318 2015
LIBRUNAM 1785978



Enemigos íntimos. Terratenientes, poder y violencia en Chiapas / Aaron Bobrow-Strain.— Primera edición. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: UNAM: CIMSUR/ CONACULTA: CONECULTA/UNACH/UNICACH/UNICH/COCYTECH/, 2015. 336 p. il. fotos

ISBN: 978-607-xxxx

1. Terratenientes — Chiapas — Historia. 2. Elite (Ciencias Sociales) — Chiapas — Historia 3. Reforma agraria —Chiapas — Historia. 4. Conflicto social — Chiapas — Historia. 5. Violencia —Chiapas — Historia. 6. Chiapas — Condiciones sociales. I. Traducción de: Bobrow-Strain, Aaron, 1969 — Intimate enemies. II. Título

Primera edición: © 2007, Duke University Press
Primera edición en español: 2015
Diseño e ilustración de portada: Elsa Rodríguez Brondo
Traducción al español: Isabel Vericat Núñez

ISBN: 978-607-02-5133-7

Impreso y hecho en México / *Printed in Mexico*





CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE CHIAPAS







CONACULTA

CONSEJO ESTATAL
PARA LAS CULTURAS
Y LAS ARTES DE CHIAPAS



CHIAPAS NOS UNE

ENEMIGOS ÍNTIMOS

TERRATENIENTES, PODER Y VIOLENCIA EN CHIAPAS

Aaron Bobrow-Strain





México, 2015

Índice

Ilustraciones y mapas

Ilustraciones

Mapas

Reconocimientos

Este libro le debe mucho a muchas personas. Roberto Trujillo me recibió en Chilón e hizo suyo mi proyecto con entusiasmo. Me proporcionó muchos de mis contactos originales, pasó largas horas respondiendo mis interminables preguntas y, junto con Gloria Trujillo, me dieron un sitio donde vivir en Chilón y un lugar a su mesa en el restaurante Susy. La buena disposición de muchos terratenientes y exterratenientes en Chilón, Sitalá, Yajalón y otros lugares para hablar conmigo acerca de sus vidas y problemas hicieron posible este proyecto. Agradezco en especial a Delio Ballinas del Carpio, Alejandro Díaz, Oscar y María Franz, Wenceslao y Deyanira López, Israel Gutiérrez, Samuel Rodríguez Sr. y Jr., Carlos y Amparo Setzer, y Miguel Utrilla, las largas conversaciones y las incontables tazas de café. Alí Reyes, maestro de escuela e historiador de la ciudad, me dio pie a muchas percepciones determinantes y sirvió de cámara de resonancia a mis ideas. Le doy también las gracias al personal en el Centro de Derechos Indígenas en Chilón por la apertura que mostraron hacia mi proyecto.

Hubert Cantón de Grammont y Sara María Lara Flores desempeñaron papeles clave en las primeras etapas de mi trabajo. Hubert ofreció, generoso, la afiliación institucional en el Proyecto Interinstitucional de Investigaciones sobre el Campo en México de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hubert y Sara también me presentaron a Jorge Martínez, mi primer contacto con un terrateniente chiapaneco. Durante mi primer viaje

de investigación, Jorge tomó el teléfono y empezó a organizarme citas con parientes de propietarios de tierras en todo el norte y el centro-norte de Chiapas. Me confesó haberse involucrado con mi proyecto tanto a nivel emocional como intelectual y lo veía como parte de su proceso personal de elaboración de la pérdida de la finca de su familia tomada por los invasores de tierras. Me temo que quizás he llevado mi investigación por derroteros que Jorge y muchos de los otros terratenientes citados más arriba tal vez no aprueben, pero creo que mi trabajo sigue siendo fiel al deseo que ellos mostraron de entender cómo y por qué sus mundos se desbarataron en 1994.

Los estudiosos de Chiapas María Eugenia Reyes, Daniel Villafuerte, Sonia Toledo, Anna Garza, Richard Stahler-Sholk y Neil Harvey me proporcionaron apoyo y aliento incalculables. Jan Rus aportó comentarios acuciosos sobre el manuscrito del libro y se mostró amablemente dispuesto, más allá de sus obligaciones, a corregir mis errores, orientarme a fuentes de archivo claves y a compartir generosamente su abundante conocimiento histórico de Chiapas. El gran entusiasmo de Jan por el estudio de Chiapas es contagioso y sus consejos, invaluables. Jan también compartió fotocopias de las notas de Thomas Benjamin sobre documentos relacionados con Chiapas en el siglo XIX en la Colección General Porfirio Díaz. Agradezco a Thomas Benjamin que haya hecho públicas esas notas. Aunque solo nos vimos una vez, June Nash me alentó de manera determinante durante una comida en su casa en un punto bajo de mi investigación. Tomás Johnson y Teresa Ortiz nos abrieron sus casas y corazones a Kate y a mí en San Cristóbal de Las Casas.

En la Universidad de California, en Berkeley, el comité de mi tesis —Jonathan Fox, Gillian Hart, Nancy Peluso y Michael Watts— lograron un equilibrio perfecto entre rigor y apoyo, dirección e independencia. Michael Watts fue para mí un asesor cuidadoso y una constante fuente de inspiración. Me maravilla la amplitud de su experiencia y la profundidad de sus análisis, y me siento afortunado de haber sido su alumno. También estoy en deuda con Laura Enríquez, Gastón Gordillo, Donald Moore, Joe Nevins y Peter Rosset, por sus aportaciones en momentos decisivos del desarrollo de este proyecto.

Tuve la buena suerte de colaborar con un grupo increíble de estudiantes graduados en Berkeley. Mi especial agradecimiento a Joe Bryan, Jennifer Casolo, Sharad Chari, Rachel Cleaves, Rebecca Dolhinow, Ben Gardner, Greig Guthey, Julie Guthman, Jake Kosek, Claudia Leal, María Elena Martínez, James McCarthy, Nitasha Sharma, Susan Shepler, Shawn Van Ausdale y Wendy Wolford. Cada uno de ellos influyó en este trabajo de manera importante. En el transcurso de mis estudios, también he aprendido mucho de Leslie Gate y Nathan Sayre. Desde que dejé Berkeley he encontrado amistad y nuevas fuentes de discusión intelectual en mis colegas en Whitman College. El apoyo y el estímulo de Paul Apostolidis, Shampa Biswas, Phil Brick, Tim Kaufman-Osborn, Bruce Magnusson, Jeanne Morefield y Jason Pribilsky contribuyeron a hacer posible este libro.

No hubiera podido llevar a cabo este trabajo sin el generoso apoyo económico de Social Science Research Council's International Dissertation Research Fellowship, National Science Foundation' Geography and Regional Science Dissertation Improvement Grant, Humanities Research Grant de la Universidad de California, Human Rights Center de la Universidad de California y el International Teaching and Research Award del Whitman College.

Chad Johnson, Christine Fade y Natalie Hanemann produjeron los mapas. Valerie Millholland, en Duke, me condujo por el mundo de la edición con gran habilidad y paciencia.

Jim y Pat Corbett, Rick Ufford-Chase, John Ostermann y muchos otros afiliados a Borderlinks en Tucson, Arizona, me retaron a comprometerme con las experiencias vividas por «los malos» sin perder de vista mi sentido de la justicia social. Pero si lo he conseguido en parte, ha sido gracias al amor y los infatigables esfuerzos de mis padres, Charles y Dianne. Desde sus raíces en las luchas por los derechos civiles hasta su afán de hacer frente a nuevos desafíos desde Chicago hasta América Latina, ellos son mi ancla e inspiración constantes. Mi hermano Daniel me incita a cada momento a escribir bien y llegar a un público más allá de las ciencias sociales.

Gracias a Hana Ruth Bobrow-Strain y a Samuel Bobrow-Strain por agraciar mi vida. Ellos son para mí fuente de felicidad, de risas, y me

mantienen con los pies sobre la tierra. Por último, mi más profundo agradecimiento a Kate Bobrow-Strain por apoyarme durante este largo proceso. Pido disculpas por los días y noches de tensión cuando iba yo de cabeza dando clases, escribiendo, con las consiguientes angustias. ¡Ah!, y también por soportar el traqueteo de aquel «atajo» de seis horas por Cancuc y Tenejapa cuando estabas embarazada y con mareos en la mañana todos los días (aunque por entonces pensábamos que era simplemente una infección de giardia). Como editora aterrizaste mis peores fantasías y diste vuelo a las mejores. Como amiga y compañera eres incomparable.

I. Reconsideración del caciquismo

1. Introducción

Esta es la historia de unos caciques locales que cayeron en desgracia; hombres y mujeres cuyo mundo de privilegio racial, poder político y monopolio terrateniente, cuidadosamente defendido, acabó desmoronándose. Esta historia examina las experiencias de terratenientes relativamente poderosos enfrentados a un drástico reacomodo del espacio y las relaciones sociales en el centro-norte de Chiapas, México.

Alrededor de 1930, un puñado de terratenientes ladinos y miles de campesinos indígenas libraron, en varios frentes, una batalla campal por el dominio político, económico y cultural de gran parte del centro-norte de Chiapas.[1] Los resultados de esta lucha siguen sin aclararse, pero al menos existe la certeza de que los terratenientes ladinos, otrora los únicos herederos de vastas extensiones de rica tierra agrícola y la fuente casi indiscutible de autoridad moral y política en la región, sufrieron un enorme revés de la fortuna. En los municipios de Chilón y Sitalá, donde sucede gran parte de esta historia, los años de la insurrección a finales del siglo XX auguraron el fin de un modo de vida.[2] El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, seguido de la invasión de más de 100 000 hectáreas de propiedad privada por todo el estado y la subsiguiente

[1] «Ladino» es una categoría racial que usualmente se define en oposición a «indígena», refiriéndose a la persona que habla español y ni lleva un estilo de vida ni sigue costumbres indígenas. Véase el capítulo 3 para un análisis más amplio.

[2] El municipio abarca una población principal y pueblos y rancherías alejados.

redistribución de casi medio millón de hectáreas de tierras, constituyeron un desafío contra el que los terratenientes en Chilón no pudieron o no quisieron defenderse. Aquellos grupos de invasores que actuaron entre febrero de 1994 y finales de 1998, aprovechando la apertura política que dejó a su paso el levantamiento del EZLN, abarcaron todo el espectro de la política mexicana. Muchos de ellos no estaban directamente afiliados al movimiento zapatista.

A medida que aumentaron las invasiones a lo largo de la primavera y el verano de 1994, los terratenientes clamaron justicia. «Le damos al gobierno hasta el 20 de abril. Si para entonces no hay una solución, recurriremos a otros medios», declaró un terrateniente a un periodista (D. Scott 1994). La imagen de terratenientes «recurriendo a otros medios» no requería gran elaboración. La amenaza encajaba con nitidez en las representaciones persistentes de las elites terratenientes chiapanecas como una clase violenta y poderosa de latifundistas modernos. Los influyentes libros de Luis M. Fernández Ortiz y María Tarrío García (1983) y de Antonio García de León (1998 [1985]) ejemplificaron y contribuyeron a reproducir este potente conjunto de representaciones. Estos retratos, a su vez, parecían confirmar la clásica descripción de Barrington Moore (1966) de la conexión entre las elites latifundistas, los regímenes de producción que reprimen a la fuerza de trabajo y la violencia. No obstante, al final, muchos terratenientes en este estado del sur de México, legendario por su violenta política agraria y poderosa oligarquía terrateniente, respondieron a estas invasiones con calma y resignación en lugar de armas y guardias blancas.

Para el año 2000, habían sido desalojadas solo 28% de las casi 1 300 invasiones —en contraposición a 82% de tasa de desalojo en los diez años anteriores a 1994—.[3] En cambio, los intentos de los mediadores del gobierno de resolver sin violencia las disputas culminaron en marzo de 1996, al firmarse los históricos Acuerdos Agrarios que allanaron el camino a una acción sin precedentes de adquisición y redistribución de tierras

[3] Las cifras de 1994-1998 provienen de «Predios desocupados 1994-2000», un mapa inédito que me proporcionó la Secretaría Estatal de Desarrollo Agrario, Tuxtla Gutiérrez. Los datos sobre desalojos de los años anteriores a 1994 provienen de Gómez y Kovic 1993:65.



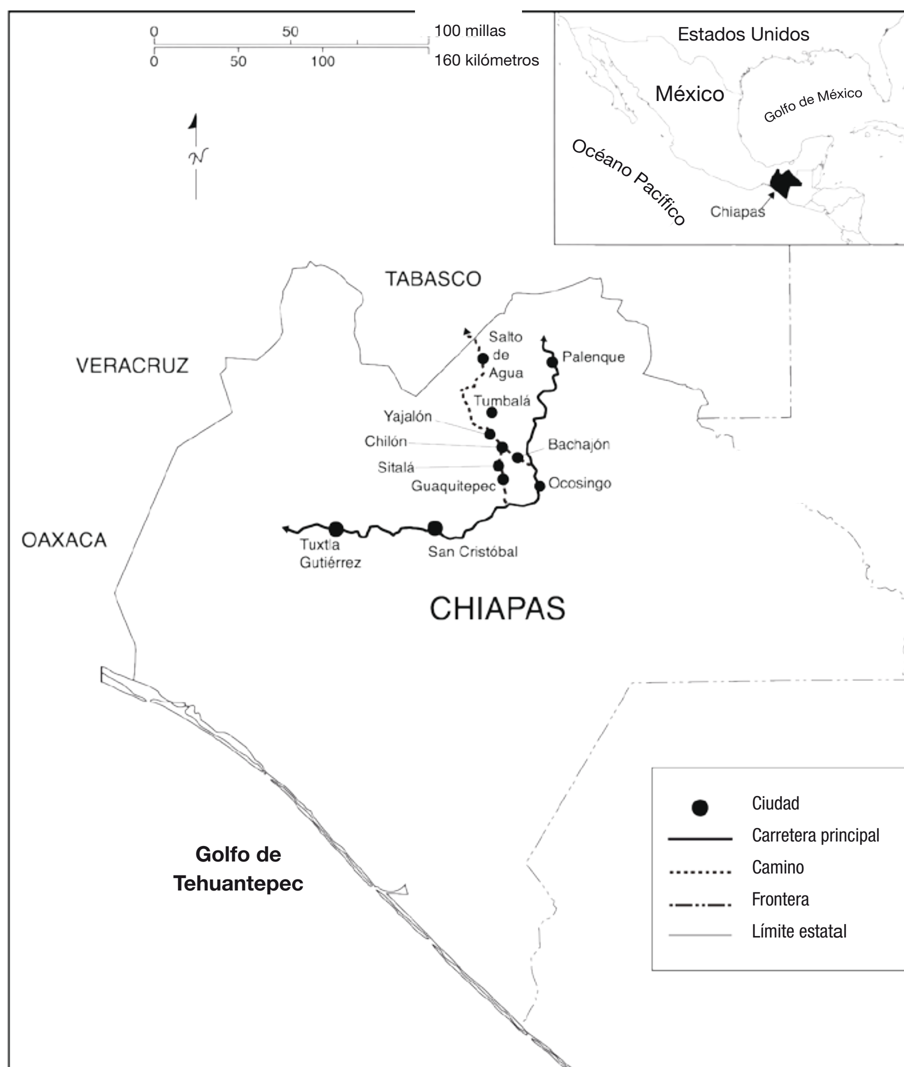
Sede del Municipio Rebelde Autónomo Zapatista Olga Isabel en un antiguo rancho ganadero en las afueras de Chilón. El letrero dice: «Está usted en territorio zapatista. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece» (fotografía del autor).

con subsidio del gobierno. Desde 1996 hasta 2000, grupos de campesinos, terratenientes y funcionarios estatales negociaron la concesión de 244 000 hectáreas —13 % de la propiedad privada agrícola de la entidad— y la rápida resolución de demandas pendientes de la reforma agraria que abarcaban 242 000 hectáreas adicionales de tierras privadas y públicas en favor de los demandantes. Solo tres años después de que el entonces presidente Carlos Salinas declarara el final definitivo de la reforma agraria y dos años después de que promoviera cambios en la Constitución mexicana que permitieron la eventual privatización de las instituciones de la reforma agraria, las invasiones en Chiapas obligaron a volver a situar dramáticamente en el centro de la escena las demandas agrarias, potenciando redistribuciones masivas con una rapidez inusual. Al contrario tanto de los planes de políticos neoliberales como de los temores de críticos de izquierda, la tenencia de la tierra en Chiapas sufrió una rápida «recampesinización» y

«reindigenización» en lugar de privatización y concentración. De 1994 a 2001, tras décadas de cambio gradual, se dio un rápido y para muchos ladinos rurales intolerable triunfo de los líderes políticos indígenas, un enorme paso para acabar con la concentración de la tierra, y una acelerada expulsión de ladinos fuera del estado.

Lo que la mayoría de los observadores sintetiza como «el conflicto chiapaneco» en realidad es una constelación de conflictos diferenciados temporal y espacialmente. Este libro se centra en un trecho de este cambiante «paisaje bélico» (Nordstrom 1997): las luchas entre terratenientes y campesinos en Chilón y Sitalá, municipios chiapanecos del centro-norte a los que me refiero con la denominación abreviada de «Chilón» (véase mapa 1).[4] De este modo, mientras que la mayoría de la gente conoce Chiapas únicamente por asociación con la rebelión zapatista de 1994, este libro cuenta una historia distinta sobre actores diferentes: es el primer

[4] «Chilón», la región geográfica que se aborda en este estudio, abarca la mitad occidental del municipio de Chilón, todo el municipio de Sitalá y partes de Yajalón. De modo que «Chilón», tal como se significa aquí, no encaja cabalmente con el gran (2 500 km^2) municipio maya mayoritariamente tseltal que oficialmente recibe ese nombre. Lo que me interesa es representar los fluidos y «extrovertidos» (Massey 1994) espacios que han generado las luchas en curso entre terratenientes, campesinos indígenas y el estado sobre el alcance y los linderos de la propiedad de la tierra en esta parte del centro-norte de Chiapas. «Chilón» ocupa un singular territorio fronterizo entre las regiones tradicionalmente construidas de Chiapas. Este territorio se extiende en el enclave entre los grupos mayas de habla chol, tseltal y tsotsil, y en los intersticios de las tierras altas del norte del estado, las selvas pluviales de las tierras bajas orientales y la región montañosa del centro. La construcción de «Chilón» como región refleja las localidades históricas de terratenientes ladinos y la extensión de las redes sociales de terratenientes que irradian desde la *ciudad* de Chilón. Así pues, Chilón incluye los municipios de Sitalá y Yajalón —ambos bastiones de terratenientes ladinos— pero *no* la mitad oriental del municipio de Chilón, dominado casi por completo por tres extensos ejidos indígenas (San Sebastián Bachajón, San Gerónimo Bachajón y San Gerónimo Tulijá). Aunque muchos indígenas viven en la ciudad de Chilón y alrededores, una geografía real divisoria separa la porción occidental controlada por ladinos del municipio de Chilón y la mitad oriental mayoritariamente indígena. En 1990, gracias a siete décadas de luchas agrarias, los ejidos indígenas —en particular los grandes ejidos de San Sebastián Bachajón y San Gerónimo Bachajón —controlaban alrededor de 85 % de las tierras agrícolas en el municipio (INEGI 1994). El restante y altamente productivo 15 % seguía concentrado en manos de ladinos alrededor de la ciudad de Chilón. Además de este control sobre la tierra, los terratenientes y comerciantes ladinos mantenían un dominio inquebrantable sobre los gobiernos del municipio de Chilón, Sitalá y Yajalón que se remontaba a mediados del siglo XIX.



Mapa 1. Chiapas.

estudio en lengua inglesa de las movilizaciones agrarias del estado en el periodo 1994-1998 y la única etnografía detallada de los terratenientes ladinos, actores decisivos pero en buena medida olvidados en el paisaje bélico de Chiapas.[5]

En Chilón, las invasiones de tierras comenzaron a primeras horas de la mañana del 14 de febrero de 1994. En dos semanas, campesinos indígenas procedentes de los ejidos de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón, encabezados por la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), habían tomado más de 2 000 hectáreas de cafetales y tierras de ranchos. Para la primavera y el verano, un conjunto diverso de organizaciones, desde el Comité Municipal de Solidaridad, progubernamental, hasta la asociación civil denominada Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC), un grupo de oposición fundado en la teología de la liberación de la línea católica, siguieron a la CNPI en la refriega.

En el paisaje de Chilón estos levantamientos se reflejaban en los brotes tiernos de maíz que aparecían en pastos quemados apresuradamente y en los asentamientos improvisados en los que alguna vez fueron los campos más productivos de la región. Los rancheros sobresaltados contemplaban a la distancia las invasiones, intervenían para salvar ganado y organizaban reuniones de emergencia de la Asociación Ganadera Local (AGL). Aquel marzo, el gobierno municipal ladino de Roberto Trujillo renunció bajo coacción y fue reemplazado por otro, encabezado por Manuel Jiménez Navarro, un indígena líder de la invasión de tierras.

La AGL de Chilón presionó para que comenzaran los desalojos y amenazó con violencia entrado el verano de 1994, pero sus demandas quedaron sin respuesta a medida que funcionarios estatales y federales se fueron distanciando de los terratenientes. Para Navidad, la AGL había flexibilizado sus peticiones: pedía solo 11 desalojos y se ofrecía voluntariamente a

[5] El excelente libro de Neil Harvey (1998) dedica seis páginas al resurgimiento de la lucha agraria en Chiapas posterior a 1994. Villafuerte Solís et al. (1999) y Reyes Ramos (1998*a*) se cuentan entre los pocos estudiosos mexicanos que han escrito la crónica de las invasiones y sus resoluciones. El trabajo de Sonia Toledo (2002) sobre Simojovel, al norte de Chilón, es el único estudio centrado directamente, como este, en la experiencia que tuvieron los terratenientes de estas invasiones de tierras.

vender 36 propiedades a los invasores de las tierras.[6] Salvo raras excepciones, los terratenientes de Chilón terminaron cooperando con un programa a nivel estatal destinado a adquirir y redistribuir tierras a los campesinos demandantes. En definitiva, de acuerdo con los registros del gobierno, solo fue desalojada una propiedad en Chilón y Sitalá, y para 1999, funcionarios del estado habían negociado la adquisición y concesión de más de 7 000 hectáreas a los que reclamaban tierras.[7]

¿Por qué cafetaleros y ganaderos con una larga y reconocida historia de respuestas violentas al conflicto agrario reaccionan a estas recientes invasiones con impasibilidad y resignación en lugar de con armas y guardias blancas? Cuando abordo este acertijo, reconsidero los marcos conceptuales que han guiado tanto tiempo el estudio de los terratenientes y la explotación de la tierra. Este análisis sigue estando firmemente basado en la economía política agraria, al destacar la importancia de lo que David Ricardo, Karl Marx y generaciones de economistas políticos han entendido como la lógica rentista de la producción latifundista. Pero rechazo el determinismo económico y postulo la producción latifundista como una relación social y espacial; no como una cosa, sino como un conjunto de prácticas relacionales que operan en múltiples niveles materiales y discursivos que ordenan el espacio de formas particulares. De ese modo, con base en el trabajo de los estudios agrarios marxistas, el entendimiento posestructural del poder y la geografía humana crítica, sigo el rastro de las conexiones dialécticas entre la agricultura finquera, la política cultural y el ordenamiento del espacio y el territorio.

A grandes rasgos, sostengo que la naturaleza de la producción finquera en Chilón siempre ha estado configurada por luchas en torno a la territorialidad de las fincas agrícolas —diversas constelaciones de prácticas socioespaciales que producen los espacios deslindados de la producción

[6] «Pliego peticionario que presentan los productores agropecuarios del Municipio de Chilón…», 21 de diciembre, 1994, en AGL.

[7] Las ventas de predios para campesinos que reclamaban tierras negociadas por el Banco de Crédito Rural del Istmo y registradas en RP-Y, «Libros de Escrituras Públicas, 1994-1999», de un total de 11 107 hectáreas de propiedades privadas mayores de cinco hectáreas (INEGI 1994).

finquera—. Estas luchas han remodelado constantemente la explotación de la tierra en Chilón, generando con el tiempo una sucesión de nuevas formas inestables. Cada una de estas formas condicionó a su vez las luchas subsiguientes y configuró los canales, obstáculos y oportunidades para la defensa del territorio por parte de los terratenientes. Así que para entender las respuestas de estos a las invasiones de 1994-1998 hay que entender este tipo de producción tanto históricamente como en la coyuntura inmediata alrededor de los conflictos contemporáneos.

Al contrario de la tendencia predominante de tratar a los terratenientes chiapanecos como a una «casta divina» (García de León 1978:31) «perfectamente engranada a sus homólogos de todo el país» (Fernando Ortiz y Tarrío García 1983:152), que ejerce una «hegemonía incontrovertible» (García de León 1998:103) sobre el campo chiapaneco, y que sigue siendo «una constante a través del tiempo» (Tejera Gaona 1997:46),[8] mi perspectiva pone de relieve las incongruencias y contradicciones de esa hegemonía. Por ello, si bien las invasiones de 1994 lograron un reordenamiento de las relaciones sociales y espaciales en Chilón que marcó época, también han formado parte de un proceso activo de lucha mediante el cual la producción finquera ha sido continuamente impugnada y remodelada. Aunque el aclamado analista político mexicano Enrique Krauze (1997:780) declaró que Chiapas era un lugar que la reforma agraria ignoró, la realidad muestra lo contrario. De hecho, la reforma agraria ha efectuado importantes transformaciones del estado de Chiapas, remodelando tanto los paisajes materiales de la producción finquera como las relaciones sociales de la dominación terrateniente. Para entender las respuestas de los terratenientes al vuelco radical de su mundo en 1994 hay que entender esta geografía histórica más amplia del conflicto de tierras en Chilón.

Vinculando pasado y presente, concluyo que las respuestas de los chiloneros a las invasiones de tierras después de 1994 han de verse como resultado de los amplios giros históricos en la configuración de la hegemonía regional y en las formaciones coyunturales de las identidades y los

[8] Véase Bernstein 2004, Bobrow-Strain 2004, Borras 2005, 2003, Deininger 2003, Ghimirc 2001.

intereses de los terratenientes. Sostengo que en los años previos a 1994, los terratenientes ya se encontraban encajonados entre las luchas indígenas por el territorio cada vez más organizadas y el apoyo político y económico en declive del Estado neoliberal mexicano. Atrapados entre estos dos fuegos, los terratenientes encontraron que su capacidad para definir y defender los espacios de la producción finquera se habían erosionado en importantes aspectos. De manera determinante, como parte de estos cambios históricos, los modelos cambiantes de mediación política desplazaron a los terratenientes de sus posiciones como el único nexo entre el campo y la nación, los campesinos indígenas y el Estado —posiciones que habían sido centrales durante mucho tiempo para la construcción y el mantenimiento de las reivindicaciones territoriales de los terratenientes—.

En este contexto histórico, dos formaciones coyunturales de la identidad y los intereses influyeron profundamente en los cálculos que hicieron los terratenientes sobre los costos y beneficios de la defensa territorial violenta después de 1994. En primer lugar, el cambio en la manera en que se posicionaba a los terratenientes y ellos mismos se posicionaban en el país —un proceso complejo elaborado a través de luchas sobre el significado de naturaleza, raza y desarrollo neoliberal— produjo un fuerte sentido de los límites y los obstáculos que significaba recurrir a la violencia. En segundo lugar, el desplazamiento de los terratenientes del papel histórico que desempeñaban como mediadores paternales entre el campesinado y el cuerpo social en términos más amplios produjo un vuelco radical en su sensación de seguridad física. Con el paso de los años, pero de manera explosiva después de 1994, los indígenas, otrora «conocidos» de los terratenientes por un sinnúmero de relaciones íntimas, se volvieron para estos cada vez más incomprensibles e impredecibles. Percibido por los terratenientes como la aniquilación del respeto que los indígenas les habían otorgado antaño, el desplazamiento de la hegemonía suscitó un imaginario geográfico del miedo —un terror palpable y territorializado del «salvajismo» de los indígenas— que empujó a los terratenientes a la resignación después de 1994.

Esta reconsideración específica en términos históricos y geográficos del caso de Chiapas tiene amplias implicaciones para la comprensión de

las transformaciones de la producción latifundista en todo el mundo. De Chiapas a Brasil, Sudáfrica y El Salvador, las elites terratenientes tradicionales —descritas con frecuencia como artefactos en desuso de un lejano pasado— sobreviven y hasta prosperan en los nuevos contextos políticos y económicos. Las convulsiones de la globalización, la reestructuración económica y las movilizaciones campesinas ponen a prueba a estos actores de maneras diferentes —a veces amenazando su propia existencia, otras creando nuevas e inesperadas oportunidades—. Pero, como lo indican desarrollos recientes en cada uno de esos países, las elites terratenientes siguen desempeñando papeles decisivos que influyen en las trayectorias de la reforma política, incluso en países tan sumamente urbanos como México y Brasil. En ninguna otra parte se ve esto más claro como en las respuestas de los terratenientes a una ola de movimientos e iniciativas de reforma agraria que surgieron en todo el mundo a principios de los años noventa.

Después de dos décadas de disminución del apoyo internacional a la reforma agraria, en la actualidad los terratenientes están cada vez más encerrados entre, por un lado, poderosos y nuevos movimientos campesinos que piden la redistribución de la tierra y, por el otro, los estados y las instituciones multilaterales que han redescubierto que la reforma agraria es una herramienta central de la política. En este contexto, la transformación de la producción finquera ha asumido una serie de formas y trayectorias, desde el exitoso «movimiento incívico» de la União Democrática Rural brasileña contra la redistribución, hasta resultados más ambiguos en Colombia, Zimbabue y Filipinas.[9] A pesar de todo, los estudios centrados específicamente en las elites latifundistas contemporáneas son muy escasos, y la mayoría de las apreciaciones de las luchas recientes por la tierra se enfocan en políticas públicas y movimientos campesinos.[10]

[9] Sobre Brasil, véase Payne 2000, Bruno 1997. Sobre Zimbabue, véase D. Moore 2005; *Journal of Agrarian Change* 1(4) (2001, número especial); y Moyo 2000. Sobre Filipinas, véase Borras 2005, 2001. Borras 2003 compara reformas agrarias recientes en Brasil, Colombia y Sudáfrica.

[10] Excepciones notables son Rutherford 2004 sobre Zimbabue, Payne 2000 sobre Brasil y Paige 1997 sobre El Salvador.

Si bien los estudios de las elites latifundistas contemporáneas son escasos, lo es aún más la investigación que trata de interpretar las experiencias cotidianas que viven los terratenientes —personajes construidos normalmente como «los malos»—. A pesar de las transformaciones y metamorfosis en curso de la producción finquera, el manual teórico básico que se ha utilizado para entender esta categoría de la economía política no ha cambiado mucho desde finales del siglo XIX. En este libro trato de dar un nuevo hálito de vida al estudio de las elites finqueras, al tratar la «producción finquera» y la «elite terrateniente» como categorías sin significados fijos, sino que se construyen en todas partes a través de procesos contingentes de luchas sociales. Ante todo, sostengo que los terratenientes (como sujetos complejos) y la producción finquera (como configuración particular del espacio y las relaciones sociales) se constituyen mediante procesos de lucha por la hegemonía.

Nota sobre el trabajo de campo y el método

Investigar el conflicto agrario en Chiapas exige buscar en el desván de la memoria archivos destruidos, papeles roídos por las ratas, informes incompletos y contradictorios emitidos por agencias gubernamentales rivales, actas fragmentadas de procesos judiciales simulados, reportes de «inspecciones *in situ*» realizadas por hombres que nunca salieron de su oficina, auténticas mentiras de actores en todos los niveles de la sociedad, y una colección de documentos catastrales emitidos por más de media docena de organismos a lo largo de los últimos 200 años. La historia del conflicto agrario en Chiapas es la historia de la convergencia sobredeterminada de una monumental incompetencia burocrática, un conflicto de clase a gran escala, relaciones raciales íntimas y luchas por el significado de género, clase y nación. Es la historia de reuniones secretas, favores por debajo de la mesa, resoluciones legales con errores de interpretación deliberados, papeles extraviados, archivos quemados y emboscadas a altas horas de la noche en caminos solitarios. La reforma agraria fue el tipo de proceso en el que

burócratas en la Secretaría de la Reforma Agraria podían perder, y perdieron, fincas de 500 hectáreas.[11]

A pesar de estas dificultades, tomé la decisión de centrar mi investigación en las causas del cambio en Chiapas, plenamente consciente de las múltiples y fuertes críticas a las interpretaciones científico-sociales de la causalidad que emanan de la teoría social posestructural. Mi trabajo representa un intento explícito de mantener en tensión dos tendencias aparentemente incompatibles: por una parte, el deseo de proporcionar explicaciones adecuadas, con la mayor aproximación posible, del cambio social, con la convicción de que se puede lograr y, por otra, el reconocimiento de la naturaleza del conocimiento, construido socialmente de manera inevitable, y sus enredos con el poder. Las reflexiones de Andrew Sayer (2000-2001) sobre el realismo crítico fueron para mí una guía firme en este esfuerzo.

Hice tres viajes de investigación a México en cuatro años (1998-2001), uno que se alargó más de 12 meses y los demás de dos meses de duración cada uno. En 2005 y 2006 regresé a la región para un mes de investigación de seguimiento en San Cristóbal y Chilón. En cada uno de los viajes largos repartí mi tiempo entre las entrevistas a diversos actores en la Ciudad de México, Chilón y San Cristóbal y el trabajo de investigación en nueve archivos locales, estatales y nacionales.

En Chilón entrevisté a más de 50 terratenientes, activos y retirados, que abarcaban cuatro generaciones. Las conversaciones duraron entre 30 minutos y seis horas, aunque muchas de ellas fueron de dos horas. En la mayoría de los casos realicé una o más entrevistas de seguimiento. De ese grupo de 50 terratenientes, tuve mayor proximidad y pasé bastante tiempo tomando café, manejando por los alrededores, visitando ranchos y conversando con ocho de ellos. Opté por no grabar las entrevistas. Dado que muchas de mis discusiones eran de índole delicada y que los propietarios tenían muy fundadas sospechas sobre los académicos extranjeros, la opción

[11] La «Relación de poblados que han solicitado tierras y resultados (1922-1979)», publicación de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Chiapas, encontrada en la biblioteca del INAREMAC, San Cristóbal (documento 1.9.10), proporciona un doloroso recuento de esta especie de absurdo perpetuo.

tenía sentido. Me fui volviendo experto en garabatear, en un cuaderno que llevaba en la mano, transcripciones casi palabra por palabra de las conversaciones. Muchos de mis entrevistados se reían maravillados ante mi habilidad para mantener el contacto visual y el hilo de la conversación mientras escribía casi sin parar. A las pocas horas de cada conversación reconstruía el diálogo a partir de esas notas en largos informes de las entrevistas. De modo que aquí presento el producto de cuidadosos y disciplinados esfuerzos por producir registros de conversaciones extensas con la mayor precisión posible, pero no son reproducciones mecánicas.

Además de entrevistar a propietarios, hablé con líderes de invasiones de tierras; curas, monjas y activistas religiosos laicos; trabajadores de los derechos humanos; funcionarios del gobierno y otras personas estrechamente asociadas a los movimientos campesinos en Chilón. No obstante, esas conversaciones las sostuve primordialmente para verificar las historias de los terratenientes. No representan, desde luego, una perspectiva etnográfica de las movilizaciones indígenas campesinas.

Al reunir todos estos datos en un conjunto de argumentos causales adopté importantes decisiones narrativas. Esta es una *historia* que presenta argumentos causales, pero a la vez intenta transmitir el tono y la textura de las relaciones sociales. Involucra a los personajes en conflictos y avanza hacia su resolución. Empieza y termina de acuerdo con un plan. En suma, no está estructurada para imitar la vida, sino para proporcionar respuestas convincentes a preguntas específicas. Aunque respeto muchos de los esfuerzos en esta dirección, evito la estética no totalizadora de la narrativa posestructural y opto en cambio por imponer cierres explícitamente artificiales a mi material en aras de la comunicación, el argumento y el movimiento. Al mismo tiempo, no se trata, de ningún modo, de una narración objetiva. Me sitúo a mí mismo en el texto, mis motivos y mis interacciones con otros, admitiendo a menudo mi ambivalencia e incertidumbre. «Contar historias no tiene como fin transmitir la pura esencia de la cosa —nos recuerda Walter Benjamin (1969:93)—, sumerge la cosa en la vida del que cuenta la historia, con el fin de volverla a colocar fuera de él… Los rastros

del narrador quedan adheridos a la historia a la manera en que las huellas de la mano de un alfarero se adhieren a la vasija de barro».

Con algunas excepciones, los nombres de la gente, los lugares y las fincas que cito en este libro son reales. Mi ruptura con la tradición etnográfica del anonimato refleja los deseos explícitos de mis personajes. Una mayoría abrumadora de terratenientes me instaron a que usara sus nombres reales y se rieron de la idea de urdir un seudónimo para Chilón (a algunos les gustaría cambiar de nombre a su municipio, pero ese es otro cantar). Esta ruptura con la tradición etnográfica también refleja mi interés por las maniobras del poder. Para el objetivo de entender el poder en el campo chiapaneco, importa mucho que el hermano de Carlos Setzer, Elmar, fuera gobernador de Chiapas, o que Alejandro Díaz Díaz estuviera relacionado con Manuel Díaz Cancino, cuyo nombre aparece reiteradamente en documentos históricos públicos. Lejos de crear un Chiapas totalmente ficticio, utilizando seudónimos no podría haber transmitido esta decisiva dinámica del poder, estas articulaciones de tierra y familia, y este entretejido de lo público y lo privado.

Hice varias excepciones a esa regla: primero, al comienzo de cada entrevista pregunté a los sujetos si querían el anonimato y no escatimé esfuerzos para disfrazar la identidad de los que respondían afirmativamente. Segundo, cuando uso citas de conversaciones casuales o de personas con las que tuve una relación limitada me refiero al hablante con un seudónimo o como «anónimo». Por último, cuando a mi juicio las palabras de un sujeto podrían ser nocivas para las relaciones del hablante, su reputación o su seguridad, me refiero a él anónimamente, al margen de su voluntad. Estas opciones son, por supuesto, subjetivas y difíciles de tomar, de modo que he pecado de cauto.

De principio a fin del libro, uso indistintamente «terrateniente», «finquero» y a veces «chilonero» o «ranchero», en un intento de evitar la repetición aturdidora de un término clave. Con ello no pretendo ninguna diferencia analítica.

Organización del libro

La parte I (capítulos 1-3) introduce la etnografía de la hegemonía de la elite finquera en Chilón y me sitúa como un actor personificado y a menudo en conflicto dentro de la narrativa correspondiente. El capítulo 2 plantea una serie de preguntas éticas, metodológicas y teóricas respecto del estudio de las elites, en tanto que el capítulo 3 establece los marcos teóricos mediante los que entiendo las conexiones entre hegemonía, espacio y los intereses e identidades de los terratenientes.

La parte II (capítulos 4-6) sitúa los acontecimientos de 1994-2000 en el contexto histórico más amplio de 150 años de agricultura latifundista y conflicto agrario. El capítulo 4 comienza con la transformación del campo chiapaneco a finales del siglo XIX. Millones de hectáreas fueron deslindadas y privatizadas durante la segunda mitad del siglo XIX y, casi de la noche a la mañana, más de la mitad de la población indígena del estado se encontró desposeída de sus derechos sobre la tierra y obligada a trabajar en calidad de peones ligados por deudas en fincas cafetaleras. El capítulo 3 muestra cómo, por medio de las complejas maniobras de las escalas superpuestas del aislamiento forzado, de las dos coerciones de la servidumbre por deudas y el alcoholismo cultivado con esmero, y de los rituales elaborados del paternalismo y el respeto, las fincas produjeron a los sujetos. Sostengo que en este proceso de formación de los sujetos fue central la conformación de un conjunto con múltiples escalas de relaciones socioespaciales que colocó las fincas en torno a fronteras hacia dentro y hacia fuera y puso a los terratenientes como los únicos mediadores entre el afuera y el adentro. La posición de los propietarios como el nexo exclusivo entre las fincas y el mundo en términos amplios representa uno de los medios más importantes con los que operó la hegemonía de los terratenientes y, en los años que siguieron, uno de los ámbitos centrales de la lucha entre terratenientes, campesinos indígenas y el Estado.

En el capítulo 5 se estudian las articulaciones de los proyectos del Estado posrevolucionario dirigidos a subordinar al campo. Se sostiene que de esta articulación surgieron formas nuevas y más eficaces de territorialidad

indígena, aun cuando los terratenientes se apropiaron de muchos de los elementos del régimen posrevolucionario para atrincherarse y defenderse de las demandas de los campesinos.

En el capítulo 6 continúo este estudio de los retos a la hegemonía de los terratenientes, enfocándome en una masacre que tuvo lugar en la finca Golonchán de Sitalá en 1980. A primera vista, esta matanza —cometida durante la evicción de invasores de tierras— parecía otra victoria violenta de los terratenientes, pero en este capítulo se sostiene que se debería ver como prueba de una reorientación fundamental en las relaciones entre terratenientes, indígenas y el Estado. Para desarrollar este argumento, en el capítulo se analizan tres factores clave que configuraron el conflicto agrario a finales de los años setenta y principios de los ochenta: en primer lugar, los giros espaciales, económicos y políticos drásticos en la agricultura de las fincas asociados con la transición a la producción ganadera; segundo, la aparición de nuevos actores —defensores de la teología de la liberación en la Iglesia católica y partidos políticos de oposición de izquierda— que fomentaron las demandas territoriales radicales de los indígenas y socavaron aún más la capacidad de los terratenientes para mantener bajo vigilancia, material y simbólicamente, los linderos de sus fincas; y tercero, los conflictos entre grupos campesinos rivales que fueron desviando la atención del Estado respecto de los antagonismos más tradicionales entre terratenientes y campesinos y originaron un descenso del apoyo estatal a los primeros.

Por último, la parte III (capítulos 7-9) se centra en las invasiones entre 1994 y 1998. El capítulo 7 contiene un estudio detallado de ese fenómeno en Chilón y un amplio análisis que abarca todo el estado de las invasiones y su resolución. El interés central es, primero, establecer el perfil de la impasibilidad y resignación de los chiloneros, su incapacidad para defender la territorialidad de la agricultura finquera. Segundo, estudiar las invasiones indígenas de fincas bajo el argumento de que han de ser vistas como mucho más complejas y diversas que simples tomas de tierras dirigidas a conseguir pequeños pedazos para la producción.

Los capítulos 8 y 9 brindan una explicación etnográfica en dos partes, de las respuestas de los terratenientes a las invasiones. El capítulo 8

relaciona cómo los terratenientes construyeron sus identidades en torno a interpretaciones racializadas del significado de «producción», y cómo este campo de significado influyó en sus cálculos de las posibilidades de defender con violencia su territorio. Se aduce que para los años ochenta, y sensiblemente después de 1994, los intentos que hicieron los terratenientes de reforzar el apoyo estatal a la agricultura finquera, articulando su importancia para el país *como productores,* sonaban cada vez más huecos. Al transformarse el campo cultural de la producción, a los terratenientes les pareció que había ocurrido un vuelco total en la manera de funcionar el mundo, un cambio que dejó a los propietarios tambaleándose en busca de nuevas maneras de posicionarse en la nación, y con una conciencia profunda del fuerte sentido de los límites en el uso de la violencia.

El capítulo 9 muestra que los cambios en las estrechas relaciones de los terratenientes con sus vecinos indígenas intensificaron la cautela de los primeros respecto del uso de la violencia. Se esboza cómo la identidad de los terratenientes en Chilón ha sido influida a fondo por una conciencia ontológica (y en definitiva espacial) de que ellos existen como una minúscula minoría rodeada por una numerosa población indígena con frecuencia hostil. En este capítulo se explora el miedo de los terratenientes al «salvajismo» indígena y el papel que este desempeña en el establecimiento de los espacios de producción de las fincas. Sostengo que un imaginario geográfico del miedo, cuyo poder formativo ha tenido flujos y reflujos y ha asumido nuevos significados con el tiempo, siempre ha sido parte de la experiencia vital que se da por supuesta en los terratenientes. Después de 1994, la combinación de invasiones de tierras y el abandono por el Estado desplazó esta conciencia del terreno de lo habitual al del peligro inmediato. La magnitud de las transgresiones indígenas de las geografías demarcadas a partir de 1994 y sus múltiples capas influyeron de manera fundamental en los cálculos de riesgo de los terratenientes y los llevaron a la impasibilidad y la resignación. Por último, en el capítulo 10 esbozo las implicaciones más amplias del caso de Chiapas y especulo sobre las maneras en que las elites finqueras de Chilón siguen rehaciendo su producción bajo las nuevas circunstancias.

2. Sombras sinceras

Etnografía y déspotas comunes

Te digo, mi buen amigo, que el enemigo principal en nuestro negocio [agricultura finquera] no es la liebre, ni el abejorro, ni la escarcha, sino el fuereño.

Antón Chéjov, «El monje negro»

La capacidad de reafirmar lo que es contingente e incoherente en uno puede permitirnos reafirmar a otros que puede que «reflejen» o no nuestra propia constitución.

Judith Butler, *Dar cuenta de sí mismo*

Cuando salía de la ciudad viajando en la parte trasera de una camioneta pickup que transportaba pasajeros por las montañas hasta Ocosingo, al final de mi primer día en Chilón, un viejo indígena me llamó la atención. Bamboleándose con el traqueteo del vehículo, el viejo se inclinó hacia mí a punto de hacerme una importante confidencia. «Usted», acusó con un pellizco cómplice en mi camisa blanca recién planchada y mis anteojos de aro, «está con los curas».

Sonreí ante la recurrente confusión que provocaba mi aspecto pulcro y calculé la respuesta. «No», dije, con la esperanza de sonar lo bastante convincente para tranquilizar al viejo, pensando que él fuera uno de los tantos campesinos indígenas de la zona que se oponía con violencia a la iglesia

de la teología de la liberación, pero no tan convincente como para parecer apóstata si él estuviera del lado de los curas. El gobierno mexicano acababa de expulsar del país a varios sacerdotes extranjeros, y uno de ellos fue acusado de apoyar actividades de la guerrilla en la ciudad cercana de Yajalón. Yo no quería que me asociaran con ellos, pero sí deseaba realmente hacerle una entrevista de improviso a un hombre tan comunicativo.

«Ah, pues debe estar usted con los derechos humanos» dedujo. El viejo hablaba un español fluido, algo bastante inaudito en un maya tseltal de su edad. Miré alrededor en la camioneta rebosante de pasajeros para cerciorarme de si había alguien que pudiera entender nuestra conversación. Hasta los tseltales no hablantes de español reconocerían la frase «derechos humanos» y me incomodaba esa situación política en público.

Respondí sinceramente que yo no estaba «con los derechos humanos», pero el hombre ya no tenía ninguna fe en mis negativas.

«¡Sí que lo está!», dijo en tono triunfal, haciéndome prácticamente un guiño.

«No», insistí, todavía inseguro de las lealtades del hombre o de las de cualquiera de aquella docena de orejas que había de los viajeros en la camioneta. Y entonces, casi tragándome mis palabras, probé con el reportaje de cobertura que había preparado para situaciones políticas delicadas. «En realidad estoy haciendo una investigación sobre la producción ganadera en la región, entrevistando a los rancheros». Esto barrió la sonrisa del rostro del hombre.

«Oh», dijo ya sin conspirar conmigo, «o sea que, entonces, usted está con los ricos».

«Bueno… no lo sé», respondí con torpeza.

«Sí, claro que lo sabe. Usted está con los poderosos, con los que tienen». Contrariado, miró a lo lejos, buscó un punto conveniente a la orilla de la carretera y golpeó el fondo de la vagoneta para avisar al conductor que se detuviera. Sin decir una palabra, pasó por encima de mí, golpeando su lata de herbicida Ranger tras él y desapareció en la selva.

Durante décadas, los campos de la antropología y la geografía dieron poca cabida a la investigación entre los que tienen. Como lo observó Renato Rosaldo (1993:199), «En México, los indios tienen cultura y los 'ladinos', no. Desde la mirada etnográfica, la gente 'civilizada' es demasiado transparente para estudiarla; parece que son simplemente como 'nosotros' —materialistas, codiciosos y prejuiciados—». Hoy, gracias a las cambiantes concepciones del trabajo de campo en la antropología y otras disciplinas, la investigación que escucha detenidamente a los poderosos ha sido reconocida poco a poco como legítima y hasta un tema necesario de la etnografía.[1] A pesar de todo, cuando se lleva a cabo de manera que verdaderamente incluye la posibilidad de una seducción momentánea por las actitudes y los actos de los sujetos de los que se trata, este tipo de etnografía presenta importantes imprevistos para el que la practica. En mi caso, esos riesgos adoptaron dos formas: involucrado y, en el fondo, cómplice (al menos táctica y temporalmente) de las prácticas con frecuencia reaccionarias de los terratenientes, flotaba a la deriva en un limbo, incapaz de conectar con el sentido de justicia de mis sujetos y extraño a mí mismo; renuente a asociarme con la política de los terratenientes pero enajenado de las personas que, como el desconocido indígena y sus curas de la teología de la liberación, podrían haber sido aliados naturales en otras circunstancias. Segundo, y peor aún, temía que mi trabajo, sin pretenderlo, pudiera socavar los esfuerzos por transformar las relaciones de dominación y represión en el campo chiapaneco. Como los estudiosos de «lo blanco» en el seno de los estudios críticos de la raza, me preguntaba si al centrarme en terratenientes relativamente poderosos solo iba a marginar aún más a los indígenas cuyas voces había dejado de lado el análisis académico.

Como muchos investigadores estadounidenses y mexicanos, me introduje en el estudio de Chiapas mediante el activismo. Cuando el levantamiento zapatista electrizó al mundo el primero de enero de 1994, yo trabajaba con una pequeña organización no gubernamental (ONG) en la frontera México-Estados Unidos. Para alguien con antecedentes de

[1] Véase Smith 2006, Rutherford 2004, Nader 1999, McDonogh 1986, Marcus 1983.

activismo solidario con Centroamérica y un prolongado interés por México era fácil dar un salto a Chiapas, en la frontera Sur del país. En la medida en que empecé a visitar el estado y comprometerme con diversas organizaciones de solidaridad zapatista, fue creciendo, no obstante, mi insatisfacción ante el dualismo de campesinos indígenas «buenos» y terratenientes ladinos «malos», en torno al cual giraban muchas de las discusiones en la región. ¿Qué significaría, me preguntaba, tomar en serio —en el sentido etnográfico y teórico— las experiencias vividas por los «malos»? ¿Cómo cambiaría este giro los modos que tenemos de pensar el funcionamiento del poder en el campo chiapaneco? ¿En qué cambiaría esto la comprensión de cómo se crean en general las posiciones de privilegio y dominación? Y, lo más importante, ¿cómo cambiaría las interpretaciones de las políticas que desafían esas posiciones?

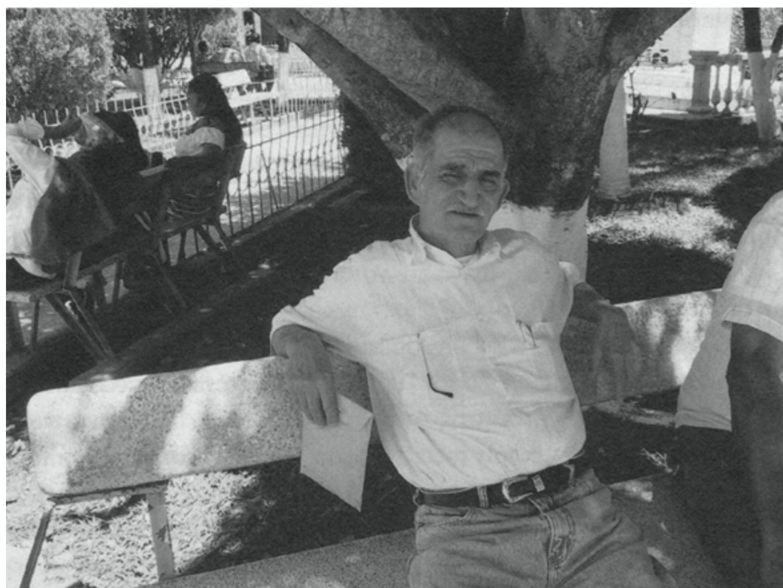
De acuerdo con la obra clásica de Laura Nader (1999), creo que «el estudio de los colonizadores» posee un enorme potencial para volver a encuadrar los debates en torno a la formación del poder, el privilegio y la dominación. Al así hacerlo, desafío un discurso sostenido —presente en Chiapas y en todas partes— que anula la diversidad de los terratenientes, palia su mutabilidad histórica y los inviste con poderes casi sobrehumanos de unidad de clase, dominación política y resistencia al cambio. Las representaciones predominantes de los terratenientes que condensan relaciones e historias sociales complejas en visiones esencialistas tienen un potente eco en el campo chiapaneco porque los temas y la imaginería de esas representaciones reflejan historias reales de dominación y explotación. Pero esos procesos de simplificación son débiles en términos analíticos y empíricamente insostenibles. Las conexiones causales fáciles entre los conflictos contemporáneos y la larga historia de oligarquía y desigualdad de Chiapas encubren décadas de transformación política y económica que han alterado sustancialmente el perfil de la hegemonía de los terratenientes.[2]

Al centrarme en las elites hacendadas de Chilón, invierto radicalmente el relato de la historia y la política chiapanecas contemporáneas construido

[2] Véase capítulo 3 y Ascencio Franco 2002 para una mirada más a fondo a los discursos y luchas en torno al significado de «terratenientes» en la política chiapaneca.

por periodistas, activistas y académicos. Sin embargo, no sugiero que los terratenientes ladinos y sus aliados desempeñaran papeles nobles o heroicos en los 70 años de lucha. Tampoco hay que interpretar la frecuente afirmación de que los terratenientes ladinos han sufrido un daño físico y psicológico tremendo a consecuencia de la batalla por el espacio rural como un intento de mermar la opresión y la represión de los participantes indígenas en la lucha. Dicho en términos simples, sostengo que si queremos entender y quizás avanzar hacia la resolución del conflicto en Chiapas, la investigación de la dominación de los terratenientes ha de comenzar, como lo indica Michel Foucault (2003:30) con respecto al poder en general, «por mecanismos infinitesimales [del poder], que tienen su propia historia, su propia trayectoria, sus propias técnicas y tácticas», y solo entonces rastrear por dónde todos estos mecanismos convergen —a menudo de manera impredecible e inesperada— en formas más generales de dominación. Solo de esta manera se pueden ver las incongruencias e inestabilidades del dominio de los terratenientes, entender las inesperadas trayectorias del cambio agrario emi identificar los puntos potenciales de apoyo para impulsar el cambio social.

Mi introducción a los terratenientes chiapanecos fue por medio de dos hombres que encarnaban la compleja maraña del grupo. Jorge Martínez, esposo de una antropóloga amiga de mis principales mentores académicos en México, se crió en una hacienda en Chilón, dejó su lugar natal para estudiar biología y después incursionó en la política estudiantil de izquierda en la Ciudad de México en los años sesenta. Como una serie de otros terratenientes que encontré en Chiapas, Martínez me sorprendió por la fluidez con que transitaba del lenguaje de sus años marxistas de estudiante a la nostalgia de un pasado rural armonioso fracturado con la incursión de las ideas foráneas de izquierda. Cuando se produjo la pérdida de la finca familiar a manos de invasores indígenas de tierras, Martínez vivía en Villahermosa, Tabasco, donde administraba proyectos de desarrollo comunitario como director estatal del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas



Roberto Trujillo Vera en la plaza de Chilón (foto del autor).

de Solidaridad (FONAES).[3] En 1998 Martínez me presentó por teléfono a terratenientes en todo el norte de Chiapas, con la esperanza de que sus amigos cercanos Fausto Trujillo y Gustavo Utrilla me sirvieran de guías en Chilón. Logré entrevistar a Utrilla una vez, aquel verano antes de que muriera de un ataque al corazón supuestamente inducido por la tensión posterior a 1994. Más tarde conocí a Fausto, novelista y electricista retirado, pero por una serie de razones me hice más amigo de su hermano Roberto.

Balanceándose como Charlie Chaplin, con un sombrero camuflado, Roberto Trujillo Vera caminaba delante de mí, inspeccionando la labor de los trabajadores que habían limpiado la maleza alrededor de las plantas de su cafetal. Al final de sus 60 años, don Roberto había disfrutado de su jubilación después de hacer malabarismos con el trabajo de campo en el programa federal de erradicación de la malaria, en puestos en el gobierno

[3] Una trayectoria bastante común: véase Moguel 1994 sobre la integración de la izquierda mexicana moderada en la burocracia de Solidaridad.

municipal (incluido el de presidente municipal durante el levantamiento zapatista) y como administrador de la finca cafetalera de su familia, El Carmen Tzajalá. Las cosas cambiaron en la primavera de 1994. Como la mayoría de las familias terratenientes ladinas en Chilón, los Trujillo perdieron su finca de 155 hectáreas con las invasiones de tierras indígenas en febrero. En marzo, Manuel Jiménez Navarro, líder del grupo más grande de invasores de tierras, destituyó a don Roberto y a su consejo municipal ladino, y lo reemplazó con un gobierno municipal indígena. Hoy, gracias a su pensión federal y a los ingresos de un pequeño restaurante y hotel, don Roberto cultiva por placer —de *hobby*, como él dice— 14 hectáreas adquiridas después de 1994 a campesinos indígenas leales a los que se les habían concedido títulos de tierras en los años cincuenta a cambio de trabajar en El Carmen.

En algunas ocasiones, cuando caminábamos por el cafetal, don Roberto clavaba en una planta un sable ceremonial charro que usaba en vez de machete. A cada cuchillada, él explicaba por qué no habían deshierbado la planta: una de las hierbas sirve para un buen te, otra se usa para envolver tamales, otra ayuda a mantener el equilibrio de humedad adecuado alrededor de las plantas jóvenes de café. En las frecuentes salidas al campo para visitar el rancho de don Roberto en diferentes momentos del ciclo anual del café, pude ir captando algo de la ecología y el negocio del café de sombra. Más importante aún, recorrí la topografía de la infancia de don Roberto, observé sus interacciones con los trabajadores indígenas y vi cómo él miraba el paisaje en transformación de Chilón.

Desde arriba de una loma, don Roberto señaló, a través de un claro en los árboles que daban sombra, la larga ladera de una colina a la distancia. La ladera sin árboles destaca luminosamente sobre un fondo de montañas cubiertas por el verde oscuro de la selva. Antes de 1994, Elí Rodríguez, el ganadero más prominente de Chilón, era el propietario del cerro, conocido como Xixontonil, y lo había convertido en un extenso pastizal. Don Roberto prosiguió: «Estos pastos fueron de los más productivos en Chilón. Mirabas por allá y solo veías el verde lleno de puntos color café,

con ganado. Después [en febrero de 1994] indígenas de Piquinteel —del otro lado del cerro— lo invadieron. Ahora míralo. Tiene unas milpas por allá, de un lado, y el resto está cubierto de monte».

La perspectiva que tiene don Roberto de los cambios en el uso de la tierra después de 1994 es notablemente benevolente. Para la mayoría de sus amigos la conversión de los pastos en extensos trechos de monte «baldíos», «sembrados solo con maíz», simboliza el desperdicio y la devastación que ha acarreado la concesión de tierras a las comunidades indígenas después de las invasiones de 1994. Imágenes como esta del cerro Xixontonil cubierto de hierbas sirven de piedra de toque para el coraje increíble que acongoja al mundo ladino. Don Roberto, no obstante, trata de mantener un punto de vista más positivo y relaciones más fuertes con sus vecinos indígenas. Solo sacude la cabeza y mi atención se dirige a los sonidos de un juego de básquet y vítores en tseltal que suben flotando desde la selva, allá abajo.

En 1902, el abuelo de don Roberto, un albañil habilidoso, llegó a Chilón con un contrato para restaurar la iglesia del pueblo, del siglo XVIII. Montado en la ola de expansión comercial que acompañó la difusión de la producción cafetalera en la región, el abuelo se quedó en Chilón para casarse con una mujer de una familia finquera. El padre de don Roberto, Benjamín, ayudó a fundar la Asociación Ganadera Local en 1962; fue presidente municipal tres periodos; expandió El Carmen Tzajalá y luchó por conseguir que sus hijos recibieran la educación que él nunca tuvo. En 1988, cuando Benjamín dividió la propiedad entre sus nueve hijos, muchos de ellos tenían carreras brillantes fuera de Chiapas. Solo Roberto, Fausto y Eugenio permanecieron en las cercanías para administrar la finca.

Cuando Benjamín Trujillo donó 16 hectáreas a sus peones acasillados favoritos, se aseguró una fuerza de trabajo estable y agradecida y una defensa táctica frente a las demandas de la reforma agraria (véase capítulo 5). No obstante, no hay que interpretar sus acciones como mera expresión instrumental de un interés económico objetivo. Relaciones asimétricas de paternalismo —que constituyen y están constituidas por terratenientes benevolentes y campesinos leales— saturaban los poros de la vida en las fincas cafetaleras de Chilón y eran, para valerme de la expresión de Raymond

Williams (1980:37), «vividas tan a fondo [que] incluso constituían la sustancia y el límite del sentido común para la mayoría de la gente bajo su dominio». Medio siglo y varias oleadas de movilización campesina después, estos complicados lazos de afecto y explotación persisten en los hijos de Benjamín Trujillo y en los de sus antiguos peones.

Los sonidos del básquet —un deporte tremendamente popular en las comunidades indígenas de Chiapas— llegaban desde un campo de juego que don Roberto había construido para La Providencia durante su periodo como presidente municipal. En diciembre de 2000, residentes de La Providencia —nombre que dieron los antiguos peones de El Carmen a sus tierras— insistieron en que la esposa de don Roberto, doña Gloria, asistiera a su celebración de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Cuando doña Gloria puso reparos, argumentando que su mala salud no le permitiría subir el camino hasta La Providencia, los hombres del lugar le ofrecieron trasladarla desde la carretera hasta su fiesta en palanquín, un gesto profundamente grabado con símbolos de dominación y sumisión racial.[4]

A pesar de las estrechas conexiones entre la familia Trujillo y sus antiguos trabajadores, los residentes de La Providencia habían batallado durante 25 años con el amigo más cercano de don Roberto, Carlos Setzer, un poderoso terrateniente y comerciante alemán-mexicano. El conflicto, consistente en el reclamo, por ambas partes, de casi 70 hectáreas, estalló con violencia numerosas veces a lo largo de los años, incluida una balacera en octubre de 1997 entre hombres enmascarados de La Providencia y empleados de Setzer, con el saldo de un muchacho muerto y muchos heridos. Don Roberto explicó que la gente de La Providencia «nunca nos tocarían a *nosotros*, pero Carlos es otra historia». Las complicaciones en la relación entre La Providencia y los Trujillo eran mucho más profundas. En cierto momento, don Roberto comenta casualmente que «muchas de las personas en La Providencia son catequistas», instruidas por los jesuitas en la misión para enseñar la doctrina cristiana a otros indígenas. Cuando la mayoría de los terratenientes atribuyen en buena medida a la Iglesia católica

[4] En el montañoso estado de Chiapas, el transporte forzado de ladinos era considerado uno de los peores abusos de la mano de obra acasillada por deudas.

progresista y a sus unidades de catequistas indígenas la responsabilidad del levantamiento zapatista y las subsiguientes movilizaciones. «Catequista» es casi sinónimo de «guerrilla» en el mundo de don Roberto.[5]

Don Roberto lleva estas contradicciones con liviandad. A muchos antiguos terratenientes en Chilón, despojados del trabajo de toda su vida por la insurrección, no les queda más que contemplar el deterioro sedimentario de sus casas, la muerte lenta de todo lo que conocían. El abandono por el Estado, las homilías que predican contra ellos los curas, la traición de trabajadores antes leales; se tragan todo esto y mueren de diabetes, de hipertensión, de ataques al corazón, de disgusto, de rabia. Don Roberto padece diabetes, pero desde mucho antes del humo y la furia de 1994. A veces pensativo y reservado pero normalmente comunicativo y propenso a largas y humorísticas anécdotas, don Roberto hace de puente entre las facciones en Chilón. Como miembro voluntario activo del Comité de Salud Pública del municipio, mantiene estrechas relaciones con los integrantes de los gobiernos municipales indígenas que se han formado desde 1994. Aunque yo buscaba a individuos por caminos diferentes a los de don Roberto con el fin de evitar limitarme a su círculo, este tiene un alcance muy amplio. En los inicios de mi trabajo de campo él me presentó a Manuel Jiménez Navarro, el hombre que encabezó la invasión de El Carmen Tzajalá y lo destituyó como presidente municipal. Don Roberto mantiene relaciones algo frías pero cordiales con él.

Como la persona que me presentó con más frecuencia a nuevos individuos, don Roberto contribuyó a elaborar la cara externa de mi trabajo en Chilón, haciendo hincapié en mis fines académicos, así como el recuento de los terratenientes que ya habían hablado conmigo, e interpretando mi compromiso de decir al mundo que «nosotros no tenemos la culpa de todos los problemas que hay aquí». Pese a esta introducción, mi verdadero propósito y mis afiliaciones seguían siendo objeto de debate.

[5] Numerosos relatos académicos confirman el análisis que hacían los terratenientes del papel de la Iglesia en la movilización de los indígenas, aunque, a diferencia de los terratenientes, los académicos no califican esas acciones como manipulación de los «hijos» indígenas. Véase N. Harvey 1998, cap. 3; Nash 2001:163-170.

Los signos de prosperidad que rodeaban mi aspecto de estadounidense indicaban que yo debía ser un aliado natural. Había traído un vehículo Nissan Pathfinder casi nuevo de California para hacer frente a las carreteras maltrechas de Chilón, pensando que un automóvil hecho en México se esfumaría en el anonimato. Sorprendentemente para mí, justo aquel año acababa de salir un modelo de lujo del Pathfinder en el mercado mexicano y era considerado el preferido por las jóvenes elites. Como solo había unos cuantos de ese tipo en todo el estado, el mío se hacía notar; se convirtió en un punto focal de las conversaciones con los terratenientes y, ¡oh, ironía!, contribuyó a conferirme confiabilidad. Los agitadores izquierdosos no manejan Pathfinders.

Mi blancura y mi extranjería también tenían efectos contradictorios. Por un lado, sin la menor intención por mi parte, me beneficié de la profunda creencia de los chiloneros en las jerarquías raciales: «Ustedes los americanos son más inteligentes, de mentalidad más abierta y más científicos. Más chingones, como decimos nosotros», me informó un terrateniente al inicio mismo de una entrevista. «Nosotros los mexicanos somos más mediocres, no tan capaces comparados con los americanos. Pero los indígenas son aun peores. No están motivados para hacer nada. Sí, tienen ánimo de adquirir, nosotros lo hemos visto, pero no de producir ni de comerciar. No tienen ninguna cultura de producción».

Al mismo tiempo, muchos terratenientes que entrevisté pensaban que los sacerdotes y académicos extranjeros, en palabras de un hombre, «habían envenenado la mente de los indígenas en contra de los rancheros». Como Barrington Moore (1966:491) observó, «el desprecio por los extranjeros 'decadentes' y el antintelectualismo» han caracterizado por siglos las actitudes de las clases altas hacendadas amenazadas por las movilizaciones políticas y «nuevas y ajenas fuentes de poder económico». En Chiapas, la culpa del levantamiento campesino cayó de lleno sobre los hombros de agitadores externos. En palabras del hijo de un prominente comerciante y terrateniente: «Antropólogos, sociólogos, historiadores, sacerdotes, monjas, maestros, gente de los derechos humanos y misioneros de México, de Europa, de los Estados Unidos, todos vienen aquí y hacen de nosotros los

explotadores. Les dicen a los indígenas, 'Esta tierra es de ustedes, ustedes la trabajan, quítensela a ellos'».

Sin embargo, con mucha frecuencia el deseo de hablar y ser escuchados se sobreponía al titubeo de los terratenientes a conversar con un extranjero. Las entrevistas solían estar cargadas de emoción; hombres rudos y duros se tragaban las lágrimas, alzaban la voz con coraje o se hundían en largos y desalentados silencios. Mis sujetos hablaban con frecuencia del gran alivio que sentían después de conversar conmigo y me daban las gracias por escuchar, algo que, en palabras de Carlos Cañas, «nadie en Tuxtla [la capital del estado] hace nunca». Cuanto más tiempo pasaba en Chilón, más terratenientes daban mi presencia por supuesta, pero las incógnitas seguían. ¿Qué ventaja táctica se podría ganar con mi investigación? ¿Qué riesgos se corrían? Yo era un probable aliado y directamente un sospechoso, las dos cosas.

Esta tensión salió a la luz de manera inquietante una tarde en Yajalón. Don Roberto me había presentado a un hombre de 80 años que había perdido sus tierras en 1994, y yo estaba haciendo el seguimiento con una entrevista. El hombre me dio a conocer sus abundantes recuerdos de los días pasados como vendedor ambulante, caminando de finca en finca en los años cuarenta, y su esposa volvió a contar con doloroso detalle los sucesos violentos que rodearon la invasión de su propiedad. Los dos juntos me ofrecieron libre acceso a una vieja maleta llena de documentos históricos. Cuando estaba sentado a la mesa de la cocina platicando, comiendo galletas y tomando notas sobre el rico contenido de los documentos, apareció la hija de la pareja. Sus ojos lanzaron una mirada que iba de mí a los papeles y a sus padres, y cuando su padre le ofreció darle explicaciones de mi presencia, ella estalló en una furiosa diatriba. Me acusó de trabajar con «una organización», de usar los documentos para orquestar una nueva ronda de invasiones de tierras, de aprovecharme de los ancianos. Me acusó de tratar de robar documentos y lanzó amenazas veladas contra mi vida. Yo había dejado mis cartas de presentación de Berkeley en Chilón y una larga letanía de terratenientes locales que apoyaban mi trabajo la dejó indiferente. Le ofrecí mostrarle mi permiso oficial arduamente conseguido para llevar a

cabo trabajo de investigación en Chiapas, pero su madre dijo a gritos que esto sería una afrenta a su hospitalidad. Su padre insistió en que yo estaba allí para ayudarlos y la hija y yo encontramos nuestro único punto de acuerdo: mi labor no iba a devolver el rancho a la familia.

Con los ojos dándole vueltas ante la ingenuidad de sus padres, la hija se precipitó a la puerta de salida con una advertencia final: «Si no vemos su libro pronto, va a haber una investigación sobre quién es realmente usted y qué está haciendo en realidad aquí». Su padre se sentó a la mesa un momento mirando fijamente la pila de papeles que había entre nosotros, visiblemente sacudido por la reacción de su hija y cuestionando en silencio su propio juicio. Finalmente alzó la vista y preguntó directamente: «¿Me ayudará su trabajo a recuperar mi rancho?»

«No», respondí, repitiendo la frase ritual con la que empezaba cada entrevista, incluyendo esta: «A lo sumo, mi trabajo despertará la conciencia de que los terratenientes no son tan malos como la prensa hace que lo parezcan». El hombre se puso de pie, frotó sus anteojos y salió del cuarto. Mortificado, casi convencido de que *había* hecho algo mal y queriendo evitar a la hija en caso de que regresara, me levanté para irme, pero su madre me bloqueó el camino, indicando que tenía que seguir examinando los documentos. Quince minutos más tarde, el hombre regresó a la mesa y observó en silencio cómo yo me abría torpemente camino entre la pila de papeles.

Aun cuando compartí celebraciones familiares, monté a caballo con los charros locales y entablé amistad con unos cuantos terratenientes, yo sabía que mis relaciones descansaban en una contención táctica. Había pocas francas mentiras entre nosotros, al menos de mi parte y hasta donde yo podía discernir por medio de una verificación activa de lo que los terratenientes compartían conmigo. En cambio, omitíamos. Disimulábamos, «trazando un velo compuesto de sombras sinceras, que no constituye falsedad, sino que permite a la verdad algún respiro» (Eco 1995:112). Yo cultivaba un semblante neutral y frecuentemente desplegaba un «mmmm» indefinido de psicólogo frente al flujo constante de discurso racista de derecha. Nunca mencioné mi apoyo a muchos aspectos del movimiento zapatista

y ocultaba el compromiso de mi esposa con las cooperativas de las mujeres del EZLN. Los terratenientes, a su vez, disimulaban su participación en actividades indecorosas o ilegales. Cuando regresé al restaurante de don Roberto después de una entrevista con un terrateniente y comerciante de ropa, por ejemplo, aquel me preguntó si el hombre me había confesado ser el principal traficante de armas en la ciudad. No, claro que no, no lo había mencionado.

Los terratenientes mantenían vidas secretas y el abismo entre el discurso y la práctica muchas veces parecía insalvable. Israel Gutiérrez, un comerciante y antiguo presidente municipal de Sitalá, por ejemplo, actuaba como mi principal informante en el lugar. En mi presencia, Israel aparentaba suavidad y sensatez, irradiando un raro tipo de análisis sosegado y cohibido de las décadas de explotación ejercidas por los terratenientes en Sitalá. Pero así fue como don Roberto prologó mi primera reunión con el antiguo presidente municipal: «Sitalá tiene el costumbre de sacarse a sus presidentes [municipales], ya sabes a qué me refiero. Balaceándolos, lanzándolos por un puente. Cosas de este tipo. Pero Israel… Él duró todo su sexenio porque cada día al mediodía salía pistola en mano a los arcos del palacio municipal, tiraba unos tiros al aire y gritaba ¡Quién es el más chingón de Sitalá!»

Opté por no poner en riesgo mis largas y ricas conversaciones con él y evité cuestionarlo sobre la contradicción entre su manera suave de proceder en mi presencia y esta historia. En otras ocasiones, desafié las palabras de los terratenientes con material que las contradecía, de documentos de archivo u otras entrevistas. Al final, ejercité la escucha sigilosa, la observación participante, la interrogación del discurso de los terratenientes y las entrevistas con dirigentes campesinos para asegurarme de que los contenidos de las vidas secretas de los terratenientes no minaban las conclusiones que extraje a partir de mi trabajo de campo.

La existencia de vidas secretas que se me ocultaban no significa que los terratenientes operaran dentro de los límites de una cultura establecida o que yo eventualmente pudiera cruzar un umbral más allá del cual todo se iba a revelar. Los propios terratenientes no acababan de entender del

todo su difícil situación. Desde las misteriosas arquitecturas de la conspiración imperialista y la globalización económica —fuerzas intangibles, tan insustanciales como las ondas de TV, que existen más allá de la voluntad de los terratenientes y están controladas por poderes desconocidos— hasta la emergencia viva, concreta, pero igualmente inexplicable, de la conciencia política campesina, los terratenientes trataban de encontrar maneras de dar sentido a un mundo de cambio y traición. Como yo, ellos deseaban urgentemente comprensión, y fue esta búsqueda común de explicación la que proveyó la base de mi trabajo en Chilón, una base que trascendió los obstáculos de las diferencias políticas, los disimulos y la explotación mutua sobre la que descansa casi cualquier etnografía. A fin de cuentas, aunque a veces fui considerado parte de la amenaza exterior a los medios de subsistencia de los terratenientes y otras veces un elemento del capital simbólico que estos podían desplegar contra sus enemigos, mi presencia e interminables preguntas funcionaron primordialmente como un foro por medio del cual los terratenientes elaboraron sus propios recuerdos e incertidumbres.

Una tarde, en el verano de 1998, después de una larga conversación en la casa de un importante comerciante sobre los orígenes del levantamiento zapatista, Hans, hermano de Carlos Setzer, me llevó aparte y me mostró un fólder. Sacudiendo la cabeza con escepticismo, me instó a que le echara un ojo y viera «lo que piensas, saca tus propias conclusiones». Reunido con un clip dentro del fólder había un grueso informe fotocopiado sobre el alzamiento zapatista titulado: «Surge en Chiapas 'Sendero Luminoso Norte': Avanza el complot narcoterrorista para aniquilar a las naciones de Iberoamérica». Un «informe especial» de la *Executive Intelligence Review* (1994), publicación mensual editaba en casi 12 lenguas por Lyndon LaRouche. El documento proyectaba un asombroso bestiario de aliados extraños supuestamente responsables del alzamiento de 1994: Fidel Castro; el antiguo director de la CIA William Colby; «las legiones de la Iglesia católica»; la «exnarcotraficante Rigoberta Menchú»; y «antropólogos nazis» asociados con el proyecto Harvard Chiapas. Extrañamente, el informe presentaba ideas tradicionales de la izquierda marxista —conspiraciones imperialistas para apoderarse del mineral estratégico de Chiapas y las reservas de

petróleo, los costos sociales de la crisis latinoamericana de la deuda y la amenaza del libre comercio a la soberanía nacional— refractada sobre el espejo carnavalesco de la teoría de la conspiración de derecha. Esta evocación de fuerzas intangibles externas alineadas poderosamente contra la ley y el progreso en Chiapas tenía gran resonancia en los terratenientes que conocí en todo el estado durante mi primer periodo de trabajo de campo. Un ganadero y veterinario de Ocosingo explicaba los orígenes del levantamiento de 1994 de este modo: «Samuel Ruiz [el obispo] y sus comandos catequistas hicieron un trabajo profundo sociológico y psicológico en las comunidades indígenas durante décadas, sembrando el odio a los mestizos y la idea de que los indígenas eran los propietarios originales de la tierra y que debían empezar a tomar la tierra… [pero] *detrás de todo esto hay intereses*. Mucha gente quiere el uranio de Chiapas, en especial nuestros vecinos. Los Estados Unidos quieren que Chiapas se separe de México… para que así sea más vulnerable y fácil de explotar».

Este tipo de discurso surge de la sensación de intranquilidad que les produce a los terratenientes la idea de un cambio inmanejable, pero también desempeña una labor ideológica importante. La conspiración global explica los levantamientos campesinos sin que se requiera ninguna referencia a décadas de relaciones de poder desiguales entre campesinos y terratenientes. El de Ocosingo prosiguió: «Esto es solo una hipótesis, pero le aseguro que nunca hubo pobreza en Chiapas. No se vaya a creer lo que el clero dice sobre el rezago social y el abandono… Cuando un extranjero como usted ve a los indígenas sucios y en harapos, puede pensar que son pobres, pero este es el modo que tienen de vivir su vida. Sin zapatos, sin educación. Ellos tienen su propio estilo de cuidar su salud».[6]

En el verano de 2000, cuando regresé a Chiapas para un segundo periodo más largo de trabajo de campo, las racionalizaciones fantásticas del alzamiento de 1994 y las consecuentes luchas por la tierra en gran parte habían desaparecido. El tiempo y la distancia de los acontecimientos de

[6] En justicia, la actitud de este hombre hacia la pobreza de los campesinos representa una reiteración extrema de un discurso común que describe las relaciones étnicas previas a 1994 en términos románticos. Véanse capítulos 8 y 9.

1994 permitieron la emergencia de relatos más seculares y en definitiva más precisos. La arquitectura común de estas explicaciones describía el colapso de un sistema en el que los ladinos ejercían una hegemonía paternalista benevolente y casi incuestionada en la región. Con el cambio de las lealtades estatales, el surgimiento de nuevos mediadores políticos indígenas, el cultivo de la conciencia política de los indígenas por los curas que promovían la teología de la liberación y los partidos políticos de oposición fueron los reactivos de esta descomposición.

Una tarde, con ajedrez y pan dulce, el notable ex presidente municipal Israel Gutiérrez me ofreció este relato sutil de los recientes cambios arraigados en historias de la explotación de los terratenientes, los modelos de formación estatal y el despertar de la conciencia étnica entre los indígenas:

Israel: [Hace años] los peones no eran libres. Necesitaban el permiso del patrón para salir. O, por ejemplo, si tenían un cerdo al que habían engordado y querían venderlo, tenían que pagar una alcabala, un impuesto al patrón para el permiso de vender el cerdo… Los peones trabajaban cinco días para el patrón y dos días para ellos. El patrón impartía severos castigos y algunas fincas hasta tenían sus calabozos. El finquero castigaba a los trabajadores por errores con multas para mantener al trabajador en la finca. Muchas fincas tenían también alambiques y usaban el aguardiente para mantener al trabajador allí.

Aaron: ¿Cuándo empezó a cambiar esto?

Israel: El sistema empezó a caerse… cuando la gente empezó a formar asociaciones…. Las primeras asociaciones fueron las cafetaleras formadas por el Instituto Nacional Indigenista (INI). El INI llegó y empezó a capacitar y orientar a la gente, a decirles que no tenían que trabajar solamente para un patrón. Que podían comprar la tierra.

Aaron: ¿Cuándo fue esto?

Israel: El INI comenzó… en 1976 y los curas empezaron antes de esto… como en 1963, creo.[7] El INI se centró en ayudar con la producción. El clero…

[7] Aunque la historia de Gutiérrez capta muy bien amplios patrones históricos, yo difiero de él en una serie de detalles. Por ejemplo, la SRA estatal y federal, más que el INI, proporcionó el dinero para adquirir las tierras invadidas en los años ochenta. Asimismo, la presencia del INI

se centró en concientizar a la gente. El INI patrocinaba un programa de asistencia, pero los indígenas tenían que ir a las reuniones para obtener los beneficios. Tenían asambleas y de estas asambleas fue creciendo el sentido de unión. La iglesia y el INI parecían trabajar juntos porque la iglesia daba a los indígenas la idea de que debían tomar las tierras y el INI les daba el dinero para comprar la tierra. Esto fue en los ochenta [cuando los indígenas invadieron docenas de fincas y después buscaron subsidios del gobierno para comprarlas]. El clero enseñaba el valor de la conquista y el INI daba el dinero…. [En 1994] las invasiones fueron más difíciles. Los campesinos tenían la idea de acabar con todo…. Los indígenas no quieren un poco o la mitad, lo quieren todo. Quieren que se vayan todos los mestizos.

Aaron: ¿Y por qué?

Israel: Porque es así como han sido inculcados por el clero, por los agrarios [funcionarios de la Reforma Agraria] y otras ramas del gobierno.

Inconscientemente, mis propias hipótesis de trabajo y las prioridades de la investigación se transformaron al unísono con las perspectivas mutantes de los terratenientes. Al principio, ubiqué las metanarrativas de la globalización y la reestructuración agrícola neoliberal en el meollo de las transformaciones en Chilón. Sin embargo, ya en 2000, mi foco había derivado hacia la micropolítica de las relaciones entre terratenientes, campesinos y actores estatales. De hecho, con algunas excepciones, mis argumentos reflejan casi con exactitud los de los terratenientes con los que comparto el afán común de entender las fuentes del cambio. Nuestras divergencias residen en cómo interpretamos sus significados.

Cuando le pedí que reflexionara sobre los cambios que había visto durante su vida, Oscar Cruz, un joven chilonero cuyo padre había sido torturado y casi asesinado por invasores indígenas de tierras en 1994 espetó una frase críptica: «Antes había más inocencia. Ahora hay más ignorancia». El joven dio vueltas a las palabras en su boca unas cuantas veces: «Inocencia. Ignorancia. Inocencia. Ignorancia», antes de explicarme: «Había inocencia

---

en Chiapas antecede en mucho a 1976 (véase Fábregas Puig 1988). Véanse capítulos 5 y 6 para mi elaboración de estos programas y acontecimientos.

porque había más respeto, más moralidad. Esa inocencia se ha perdido y ahora hay mucho menos respeto. La gente es más liberal. Hay más conflicto ahora porque no hay respeto por la ley».[8]

Al final, esas dos palabras se me quedaron adheridas. Este libro cuenta la historia de terratenientes que creen que han vivido el fin del respeto y la inocencia y el despertar de la inseguridad y la ignorancia. James Ferguson (1999:20), en su relato de las vidas astilladas de los residentes urbanos del Cinturón de Cobre en Zambia, reflexiona sobre «la etnografía del deterioro»: «El curso trágico que las vidas de tanta gente estaba tomando no era solo un hecho antropológico con algún interés teórico; originó dificultades éticas y metodológicas de un tenor que yo no estaba bien preparado para abordar. Mi trabajo de campo me dejó una terrible sensación de tristeza y el reconocimiento de la profunda incapacidad de lo académico para abordar la clase de demandas que la gente me expresaba todos los días». Los terratenientes en Chilón contaban con muchos más recursos y capital cultural para hacer frente a un mundo que giraba fuera de control que los pobres urbanos de Zambia, pero —en particular los terratenientes de edad— tenían vidas definidas por igual por el «deterioro, la confusión y el miedo».

Estos hombres y mujeres se habían metido entre muros de adobe desmoronados, vivieron sus vidas en una población angosta y bajo techos de tejas mohosas. Construyeron modestas fincas de café, vestían trajes blancos planchados los domingos y barajaban unos cuantos apellidos que siempre eran los mismos, como si jugaran a las cartas. Sus hijos fueron a la escuela en la ciudad grande de provincia y escribieron odas patrióticas en las fiestas patrias. A veces se casaron bien. Uno llegó a gobernador. Ahora, sentados en casa, contemplan el deterioro del respeto y la producción, o bien salen en busca de nuevas fuentes de prosperidad. Ellos son los tristes y peligrosos estratos de gente que se siente tan atropellada como otros a los que han pasado por encima. Aquellos chiloneros ancianos que insistieron en que sus hijos confiaran en la educación superior —no en la agricultura— reciben el solaz y el apoyo económico crucial de las carreras de sus

[8] Oscar Cruz es un seudónimo a petición suya.

hijos. Pero hasta esos hijos —veterinarios, abogados, maestros y camioneros— expresan la añoranza de algo perdido.

Como le sucedió a Ferguson, mi involucramiento con los chiloneros y sus pérdidas me produjo tristeza. Esta tristeza, nacida en los contactos humanos hechos en torno a mesas de cocina y cafetales, apareció al apreciar el dolor por la pérdida y el deterioro. Pero, a diferencia de Ferguson, nunca podría aceptar la decadencia de los terratenientes como un total infortunio. La creciente constatación de que la mayoría de las formas de autoridad indígena que surgen entre las grietas del declive de la hegemonía de los finqueros está cortada siguiendo el mismo patrón y material del clientelismo corrupto y violento que los de sus predecesores ladinos, ahondó mi ambivalencia acerca de los cambios en Chilón. No obstante, esos sentimientos nunca se opacaron hasta confundirse con la nostalgia de las épocas más sencillas de la casa grande paterna y sus peones felices. Aunque mi investigación cuestiona muchos aspectos de la fama de rufianes de los finqueros, el tiempo que pasé con ellos me recordaba a cada rato que ellos eran, y en buena medida continúan siéndolo, la rueda de molino de la violencia racista demoledora de la vida diaria.

Lo que sigue, pues, es la historia de un pasado que no fue tan inocente y de un presente que no es tan ignorante como sostienen los terratenientes. A pesar de todo, sustituir el cuento sin mediaciones de la inocencia perdida que relatan los finqueros por un discurso reiterado de condena generalizada sería sustituir una caricatura por otra. En lugar de esto, dándole un giro a la evocación que hace Umberto Eco del disimulo, procuro sustituir los tajantes dualismos de malo y bueno, finquero y campesino, por «sombras sinceras».

3. Relaciones agrarias, identidades terratenientes

Raza, espacio, poder y economía política

> La burguesía rural [es el] terrateniente pequeño y mediano que no es un campesino, que no trabaja la tierra […] pero que quiere extraer una vida cómoda del pequeño terreno de su propiedad [La burguesía rural] desea enviar a sus hijos a la universidad [y da muestras] de un miedo atávico e instintivo al campesino y su violencia destructiva.
>
> Antonio Gramsci, *La cuestión meridional*

Enrique Díaz puso a la vista fotos de la familia cuando estábamos sentados en una banca de tablones en su tendajón de abarrotes. Una imagen de los años veinte me llamó de inmediato la atención. Era un retrato familiar formal, una foto de personas tiesas con cuellos almidonados.[1]

La madre y el padre de Enrique estaban de pie al fondo. Él vestía una camisa de cuello alto, traje blanco y corbata; ella un vestido blanco sobre el que lucía un broche. En primer plano, Enrique y sus hermanos, con pantalones cortos de algodón y camisas almidonadas, eran el reflejo de su padre, al menos de las rodillas para arriba. No obstante, al bajar la mirada hacia la parte inferior de la foto, sus pantalones de algodón terminaban

[1] Desafortunadamente, mi único encuentro con Enrique Díaz fue antes de que yo pudiera obtener copias de fotografías en el terreno.

abruptamente en pies descalzos; pies oscuros, hinchados, agrietados, pies de campesino.

Los propietarios en Chilón y Sitalá comentan a menudo las similitudes entre los campesinos indígenas y ellos. Alejandro Díaz, pariente de Enrique, expresó esta insistencia tan común: «Yo pasé toda mi vida en un rancho rodeado de campesinos. Aunque ahora vivo en un lugar más civilizado [la población de Chilón], todavía tengo muchas costumbres y modales tseltales». Otro hijo de ranchero, al día de hoy un periodista urbanizado de izquierda, agregó a esta imagen: «Yo les llamo la 'burguesía' pero no tienen para nada una vida parecida a la nuestra de clase media [urbana]. Tú y yo tenemos nuestros celulares, nuestro cable [TV]. Esta gente vive con sus sacos de café amontonados en la sala. Les gustan sus tortillitas hechas a mano con sus frijolitos».

Durante la segunda guerra mundial, aunque venía de una de las familias más poderosas de Sitalá, Enrique Díaz se fue a trabajar como bracero en la recolección de ajos en Texas. Cuando hablamos en 2000, Díaz no podía disimular el sentido de superioridad que infundió en él esta experiencia cosmopolita. La próstata ligeramente velluda que le habían extraído recientemente, flotaba en un tarro de aguardiente sobre la banca junto a nosotros mientras estábamos hablando. Es importante conservar estos artefactos de la ciencia médica moderna, me dijo el ranchero octogenario, «para mostrar a los *naturales* que su brujería y supersticiones son cosas del pasado».[2]

Enrique Díaz es parte de una oligarquía con tierras en lugares remotos, un extraño híbrido de trajes cosmopolitas y pies de campesino. Los terratenientes de Chilón son un grupo que desafía las clasificaciones fáciles siguiendo los ejes de clase, raza y género. Lo que importa es cómo las categorías de clase (terrateniente, campesino), raza (ladino, indígena), y género (machismo y masculinidad) llegaron a significar algo para los terratenientes mientras luchaban por definirse a ellos mismos en relación unos con otros, con sus vecinos indígenas y con el Estado.

[2] «Naturales» es una forma arcaica de llamar a las personas indígenas que todavía usan un puñado de viejos ladinos. Véase capítulo 8 sobre el entretejido de raza y naturaleza en Chilón.

Casi todos los hombres y unas cuantas mujeres que pueblan este estudio se identifican como *propietarios*[3] o como *comerciantes y propietarios*. Pero tales etiquetas encubren una considerable diversidad. Todos los «propietarios» que conocí obtenían ingresos de la explotación de la tierra, casi siempre en forma de cultivo del café y la ganadería (al menos antes de 1994), pero la mayoría también tenía fuentes de ingresos fuera de la agricultura. Algunos, como Miguel Utrilla y Carlos Setzer, encajan en la imagen de caciques ricos, con influencia sobre la política regional tras bambalinas, produciendo cantidades considerables de café en vastas extensiones de tierra e involucrados en actividad comercial a gran escala. Otros, como Gabino Vera, quien fue arrestado accidentalmente y sentenciado por pertenecer a una organización campesina ilegal, a primera vista son apenas distinguibles —en modales, vestido, habla y riqueza— de los campesinos prósperos.

Roberto y Fausto Trujillo combinaban sus empleos en puestos en el gobierno, de bajo nivel pero confortablemente sindicados (la Secretaría de Salud y la Comisión Federal de Electricidad, respectivamente) con la administración de sus fincas familiares. Los ingresos de un tercer hermano Trujillo, situado en la alta administración de Pemex, la compañía nacional petrolera, sostenían, en tiempos difíciles, todas las posesiones de la familia. Gracias a la política generalizada de oportunidades educativas y profesionales, solo Eugenia, hermana de Roberto y Fausto, encajaba verdaderamente en la categoría de propietario. Si bien los hermanos turnaban la propiedad de la tierra con carreras que los llevaron lejos de Chilón, Eugenia se quedó

[3] Nótese que ellos nunca usan los términos terrateniente, finquero o latifundista salvo para responder a críticos que han tenido la temeridad de aplicárselos a ellos. Para hacer hincapié, los chiloneros se refieren con frecuencia a ellos mismos como pequeños propietarios, diferenciándose aún más de los grandes y vilipendiados latifundistas. En los capítulos 5 y 8 se estudia cómo los terratenientes se posicionan activamente a ellos mismos en la nación mexicana en términos amplios mediante estas prácticas de etiquetado. «Terrateniente» es *mi* etiqueta, derivada de la economía política agraria. No obstante, los terratenientes se refieren con frecuencia a ellos mismos como «rancheros», un término asociado estrechamente con la transición a la ganadería, descrita en el capítulo 6. Véase Ascencio Franco 2002.



Ladinos prominentes en la parte exterior del ayuntamiento de Chilón, *c.* 1920 (de la colección privada de Alí Reyes).

para hacer de administradora de la finca principal después de la muerte de su padre.[4]

Otros propietarios sobreviven al estilo campesino abriéndose camino lejos de la agricultura y con raquíticos ingresos obtenidos como comerciantes o vendedores de poca monta. Antes de perder sus tierras en 1994 y con un trabajo de tiempo completo como pequeño comerciante, otro terrateniente dependía en gran parte de las remesas que enviaba su hijo que trabajaba como empleado de servicio en Cancún. Después de las invasiones

[4] Eugenia es una excepción. Esta investigación se realizó en gran medida en compañía de hombres. En su mayor parte, las mujeres con las que pasé tiempo remitían mis preguntas sobre la tierra, la agricultura y el conflicto a sus padres, esposos o hermanos. Hubo otras excepciones: Amparo Setzer, esposa de Carlos Setzer, y Deyanira Vega de López, una mujer de edad avanzada que desempeñó un importante papel en las negociaciones con los invasores del rancho de su familia. Ambas mujeres, que relegaron a hombres y mujeres y asumieron papeles tradicionalmente reservados a los hombres, estuvieron implicadas centralmente en la producción de la masculinidad. Es esa producción de la masculinidad en sentido amplio y su relación con las identidades de los terratenientes lo que me interesa.

de 1994-1998, estas diferencias crecieron aún más, ya que la riqueza y el estatus de los que se disfrutaba antes de 1994 determinaron fuertemente en qué medida los propietarios podían negociar con el Estado asentamientos y recuperarse de la pérdida de medios de subsistencia agrarios.

Los terratenientes empleaban con frecuencia el lenguaje de clase y producción para distinguirse entre ellos, y solían diferenciar entre propietarios «reales» y «falsos». Como insistía Eulalio Hernández, «Yo soy un propietario… la ganadería es mi vocación, pero hay algunos dueños de tierra que tienen dinero para ser propietarios de ranchos pero no viven en ellos. Solo los visitan de vez en cuando. No tienen una pasión por producir». A pesar de esas diferencias tan reales, la categoría de propietario ha llegado a significar algo para aquellos que la usan. Aunque este significado es tema de continuo debate, conserva una cierta coherencia en la mente de la mayoría de la gente que se posiciona como propietaria. Quizás sea incluso más notable, como se indica en el capítulo 7, que las respuestas de los chiloneros ladinos a las invasiones de tierras posteriores a 1994 desafiaran las predicciones basadas únicamente en las posiciones de actores individuales con relación a la tierra, la fuerza de trabajo y el capital. En efecto, en los capítulos 8 y 9 sostengo que la respuesta relativamente unificada de los terratenientes a las invasiones activó las formas en que ellos, como grupo, estaban posicionados en los discursos más amplios del desarrollo nacional mexicano, la ciudadanía neoliberal y la violencia racial, que ignoraban las diferencias dentro del grupo.

Al igual que los elementos clasistas de la identidad terrateniente, la raza sirve de eje tanto de la diferencia como de la unidad. Al contrario del uso común en México, donde la etiqueta «mestizo» se usa normalmente para indicar a personas de origen mixto europeo e indígena, yo me refiero a los terratenientes como ladinos. Aunque las nociones latinoamericanas de mestizaje —la fusión de razas— tienen sus orígenes en las revueltas contra el privilegio colonial español de la pureza racial (De la Cadena 2000, Mallon 1996), el propio término sigue evocando la biología y el linaje. «Ladino», por otra parte, aunque es una categoría profundamente contradictoria (Nelson 1999, 2003, Gould 1998, Hale 1996), es ampliamente entendida

en Chilón como una categoría que se vive en la práctica. Alí Reyes, un joven maestro de escuela, hijo de terrateniente, reflexionaba: «'Mestizo' no es muy preciso, porque aquí todos tenemos la sangre mezclada. Tienes a tseltales de cabello rubio y ojos azules, pero que se identifican como tseltales… Cuando usas 'ladino' significa que la diferencia es más de estilo de vida, cómo viste y actúa la gente».

Frente a esta complejidad, la biología y el fenotipo son de poca utilidad para definir a los terratenientes. El abuelo de Alí, Oscar Franz, cuyos padres eran alemanes, está casado con una mujer indígena. Su hijo de piel oscura, el padre de Alí, era un miembro activo de la Asociación Ganadera y perdió la tierra con las invasiones indígenas en 1994. Alí, por otra parte, es de piel más clara que su padre, pero está activamente comprometido en la política indígena local.

A pesar de esta imprecisión, los terratenientes hacen uso frecuente y deliberado de jerarquías raciales basadas en la biología cuando se posicionan a sí mismos en relación con los otros. Este posicionamiento asumió múltiples formas, desde el franco despliegue de jerarquías raciales, rituales sutiles de dominación y subordinación, hasta habituales juegos de palabras autodespectivos, como en un encuentro en el restaurante Susy que revelaba la profunda angustia acerca de la piel blanca:

Israel: Aaron, ¿te gusta tu bistec a la mexicana?
Aaron: Está rico, gracias.
Nango: ¿Pero no estaría mejor con una Rubia [un tipo de cerveza clara]?
Gloria: [una ladina de piel relativamente clara] Lo siento, Arón, aquí somos todas Negras Modelo (un tipo de cerveza oscura).

Así, aunque Carlos Setzer, de ascendencia alemana, menospreciaba abiertamente el linaje de sangre impuro de los ladinos y los ladinos de piel clara se diferenciaban de sus compatriotas de piel más oscura, la categoría amplia de ladino todavía significaba algo. Distinguía claramente a la «gente como nosotros» de los indígenas (aun cuando yo no podía ver diferencias externas entre los ladinos pobres y sus vecinos indígenas [cf. Nelson 1999:75]). Para los terratenientes, ricos y pobres, el término opera

primordialmente para definir y confirmar una oposición binaria entre «nosotros» y «ellos». Más importante aún, posiciona a los terratenientes en un lugar privilegiado en la nación mexicana.

Como lo indica mi conversación en el restaurante Susy, el posicionamiento de los terratenientes con relación a la clase y la raza estaba también saturado de construcciones particulares de género (y viceversa). Históricamente, los caciques y los terratenientes han servido de molde para las descripciones del machismo mexicano (e.g., Paz 1985). El personaje macho, como lo observó Evelyn Stevens (1973:90), está impregnado de un «culto a la virilidad» caracterizado por una «agresividad exagerada». En la formulación clásica de Oscar Lewis, el macho es un hombre que «nunca renuncia ni dice 'basta'… [que quiere] llegar a la muerte sonriendo» (*apud* Gutmann 1996:231).

Los chiloneros confirman de muchas maneras este estereotipo con violentas fanfarronerías y bravuconadas. Un terrateniente que porta un arma me dice: «porque al menos así me llevaré a algunos indios a la tumba conmigo cuando me agarren». Al mismo tiempo, como lo aduce convincentemente Matthew Gutmann (1996:241), el machismo no es una identidad esencial, sino más bien una categoría con «múltiples y cambiantes significados», que siempre existe en tensión con otros discursos y prácticas de la masculinidad. En Chilón, la violencia del macho estaba contrarrestada con frecuencia por otra corriente de la masculinidad impregnada de nociones de responsabilidad y atento ejercicio del poder, estrechamente asociadas con la producción agrícola. De modo que los significados de la masculinidad dependen no solo de la violencia y la virilidad sino también de la prudencia y el arduo trabajo. Esta intersección de virilidad machista y responsabilidad paternal racializada se manifestaba con claridad en la política agraria de Chilón. El paternalismo desempeñaba un papel clave para la definición de las relaciones de los propietarios con sus trabajadores indígenas, construyendo las fincas como familias patriarcales ordenadas jerárquicamente. En otros contextos, esta construcción de la masculinidad como una cuidadosa guía paternal constituyó uno de los idiomas centrales con el que los propietarios experimentaron el conflicto agrario. Como lo explico

más adelante, el tremendo dislocamiento psíquico de las invasiones de tierras fue provocado no por un impulso machista frustrado de pelear hasta la muerte, sino por una falta de conexión con la producción, entendida en términos amplios como la suma de trabajo duro, progreso, masculinidad y vocación.

¿Qué es entonces un terrateniente?

En los textos académicos y populares sobre Chiapas y en el habla cotidiana los términos terrateniente, latifundista y ganadero acarrean enormes significados implícitos. Sobre todo desde el levantamiento zapatista, estas palabras han servido —con mayor o menor exactitud— como una especie de taquigrafía para una ristra de características negativas: opresión de los pueblos indígenas, concentración de la tierra, política corrupta, represión violenta y violencia estructural demoledora. No obstante, este discurso suele agrupar a los terratenientes con otros de «los malos»: «En Chiapas», escribió Thomas Benjamin (1996:223) «[los terratenientes] y el Estado son la misma cosa». De modo similar, sobre todo en los primeros años de los conflictos en Chiapas, los analistas metían con frecuencia en el mismo saco a los terratenientes con las organizaciones paramilitares campesinas.[5]

Mucho de lo escrito últimamente sobre Chiapas trasciende su propia y simple taquigrafía. En efecto, la obra clásica de Thomas Benjamin (1996) traza admirablemente las relaciones complejas y con frecuencia conflictivas entre las facciones de terratenientes y entre estos grupos y los actores estatales, en particular en los debates sobre el Chiapas prerrevolucionario. Asimismo, Fernández y Tarrío, en su *Ganadería y estructura agraria en Chiapas* (1983), ofrece una imagen sumamente matizada de la relación entre terratenientes y el Estado en el Chiapas de mitad del siglo XX, a pesar de su interpretación mecánica del poder de clase. Hasta Antonio García de León (2002:27) ha reconocido el histórico «desplazamiento de la oligarquía tradicional» en Chiapas y ha centrado gran atención en este proceso.

El objetivo de mi reflexión sobre el estudio de las elites terratenientes en Chiapas no es crear un hombre de paja ni enmarcar mis argumentos en

[5] Véase CDHFBLC 1996, por ejemplo.

contraste con las «malas» descripciones de las elites agrarias. Mi objetivo es más bien destacar la limitada extensión de los estudios dedicados a estas elites en una región tan densamente estudiada del México rural. Unos cuantos trabajos menos conocidos sobre la movilización indígena elaboran retratos multidimensionales de los terratenientes (e.g. Alejos García 1999, 1996), en tanto que un grupo incluso más pequeño de estudios centra su atención efectivamente en la historia y los retos contemporáneos de la producción finquera (e.g., Toledo Tello 2002, Reyes Ramos 1998*b*). Es más frecuente, sin embargo, que los terratenientes acechen en los márgenes de la voluminosa bibliografía sobre el Chiapas indígena. O para ser más precisos, los terratenientes actúan como antagonistas: solo interesan en la medida en que configuran los perfiles de las comunidades y se convierten en el objetivo histórico de la resistencia de los indígenas.[6] Cuando la agencia del terrateniente se enmarca de este modo, queda limitada a la gama del control coercitivo e ideológico, ignorando los procesos más complejos de formación del sujeto, la lucha cultural y los conceptos posestructurales de poder que se encuentran en trabajos recientes sobre el Chiapas indígena.

Pero como lo indican las historias que inician este capítulo, las identidades y los intereses de los terratenientes distan de ser monolíticos. Si queremos concebir a los terratenientes como actores de carne y hueso, y no como estereotipos, nos topamos de inmediato con dos problemas. Primero, la elite finquera se ha de contemplar como una categoría construida culturalmente en constante cambio y no como una posición fija con relación a la tierra, la fuerza de trabajo, el capital o el Estado. Y segundo, hemos de analizar con cuidado las formas complejas en que han interaccionado los terratenientes y el Estado, a veces apoyándose unos a otros, a veces socavándose mutuamente y a menudo generando resultados inesperados.

[6] Hay muchas razones posibles para que los terratenientes aparezcan como antagonistas del campesinado indígena en el discurso académico y popular. El relato genealógico auténtico de esta práctica clasificatoria está todavía por escribirse. Pese a ello, construir a los terratenientes como un enemigo unificado y compartido por todos los campesinos indígenas es evidente que tiene efectos culturales e ideológicos potentes. En particular, unifica y brinda una identidad colectiva coherente a lo que de otra manera sería una masa discordante de comunidades y organizaciones indígenas en competencia.

¿Cómo podemos encontrar un marco útil para entender este ensamblaje inextricable de clase, raza, masculinidad y numerosas posiciones más, todas divergentes? Si las respuestas al conflicto agrario surgen de un conjunto de intereses, ¿qué punto de apoyo proporciona la teoría social para entender cómo estos intereses —intereses agrarios, si se quiere— se formaron a partir de una gama tan discordante de posicionamientos?

Durante décadas, la mayor parte de los estudios de las elites terratenientes en todas partes (no solo en Chiapas) y los papeles que desempeñan en el conflicto agrario han exhibido lecturas bastante estrechas de la economía política dirigidas a agrupar a esas elites de acuerdo con tipos puramente económicos que se despliegan en vías predeterminadas de transición económica. Cuando rechazo esta tendencia, no estoy rechazando la economía política. Muy al contrario. La política cultural y la economía política son inseparables en el estudio de la agricultura finquera. Como quedará claro en breve, la economía política agraria de inspiración marxiana —por mucho tiempo el lugar central (o único) del saber dinámico sobre la naturaleza de la producción latifundista moderna— sigue siendo fundamental en mi pensamiento sobre este tema.[7]

Teorización de los intereses agrarios: economía política y política cultural

Desde sus orígenes en los debates del siglo XIX sobre el desarrollo capitalista, los economistas políticos abordaron las categorías de producción agraria y de terrateniente desde ángulos oblicuos con motivos ulteriores. La discusión sobre los terratenientes no solo estaba normalmente ligada a la política antiterratenientes, sino que, más importante aún, la economía política clásica desplegaba la categoría como una manera de trabajar en torno

[7] Por lo tanto, este libro forma parte de los debates vigentes sobre el futuro y los méritos de los estudios agrarios (D. Moore 2005, 1998, Hart 2003, Watts 2002, Bernstein y Byres 2001, Goodman y Watts 1997, Stoler 1995*a*).

a líneas de argumentación que estaban asociadas solo tangencialmente con las relaciones sociales reales de la producción agraria.[8]

A pesar de todo, la economía política clásica —en particular las ideas del economista político conservador David Ricardo y su crítico radical Karl Marx— ha marcado irrevocablemente el estudio de las elites latifundistas. En realidad, en los más de 150 años desde que Marx y Ricardo escribieron, el interés en la producción agraria no se ha desviado ni avanzado mucho respecto de sus fundamentos del siglo XIX.

No es sorprendente, entonces, que al llegar a Chiapas como un etnógrafo del siglo XXI interesado en las categorías de identidad y diferencia, raza, género, clase y significado, las persistentes formulaciones de Ricardo y de Marx tuvieran en mí un gran peso. La herramienta analítica central de estos autores para entender la producción latifundista —el concepto de renta— parecía insípida y poco adecuada para concepciones matizadas del poder, al menos superficialmente. En términos llanos, Ricardo, Marx y la mayoría de los teóricos después de ellos han coincidido en que las elites latifundistas derivaban su riqueza del control político sobre el territorio más que de una producción eficiente. Es decir, los terratenientes usaban el control monopólico sobre la tierra para cosechar ganancias excedentes (llamadas rentas en el lenguaje opaco de la economía política clásica) sin tener que reinvertir las ganancias para incrementar la productividad, simplemente porque su acceso históricamente privilegiado a la tierra y la fuerza de trabajo les permitía producir a un costo inferior al de los otros competidores.[9]

[8] Para Ricardo esto significaba una teoría de la renta del suelo desarrollada para apoyar una argumentación sobre los beneficios del comercio internacional. Asimismo, Marx dedicó a la producción agraria su análisis más exhaustivo como parte de sus esfuerzos por reconciliar la existencia del valor producido aparentemente por la naturaleza (renta diferencial del suelo) con la teoría del valor de la fuerza de trabajo (D. Harvey 1999).

[9] Aquí la discusión está sumamente condensada. Los lectores que quieran un análisis extenso de la relación entre renta y producción agraria en Chilón pueden consultar Bobrow-Strain 2003. Los textos clave en debates más amplios en torno a renta y producción agraria son: Marx 1967 y Ricardo 1919, así como Bernstein y Byres 2001, Paige 1997, 1975, Huber y Saffird 1995, Edelman 1992, Neocosmos 1986, Winson 1982, De Janvry 1981, Richards 1979,

Aunque esta posición monopólica evidentemente dio ventajas a corto plazo a las elites terratenientes, para la mayoría de los teóricos esto también selló su destino. Sin la reinversión de las ganancias, la producción de los terratenientes iba a estancarse y volverse cada vez más incapaz de competir con la agricultura capitalista más innovadora (Fine 1979). La producción latifundista era una forma inestable que acabaría por ser anulada por la competencia capitalista. De modo que los debates subsecuentes se propusieron, como tareas primordiales, elaborar la tipología de las propiedades agrarias realmente existentes de acuerdo con variables puramente económicas y la ubicación de esas formas sobre las vías objetivas de la transición capitalista y lejos de la anticuada agricultura latifundista.[10]

Mientras, a mediados de los ochenta, los estudiosos de la producción campesina descubrieron que el economismo y el centrismo en la clase social se habían cuestionado y desestabilizado desde todas las direcciones.[11]

Por un lado, los estudios de la resistencia campesina (e.g., Scott 1985, Smith 1989) expandieron notablemente las interpretaciones previas de los modos y las posibilidades limitadas de la política campesina (e.g., Paige

---

Fine 1979, B. Moore 1966. Véase Guthman 2004 y Coronil 1997 para aplicaciones innovadoras del concepto de renta.

[10] El interés por las «vías» de la transición agraria se desarrolló bastante pronto en los debates sobre la producción agraria a partir de la constatación de que los cambios en curso en las agriculturas nacionales en todo el mundo durante finales del siglo XIX guardaban poca semejanza con el pasaje inglés clásico del feudalismo al capitalismo descrito en *El Capital*. Lenin (1977), después de exponer su argumentación de que la agricultura rusa estaba pasando de hecho por una rápida transformación capitalista, identificó dos «líneas principales» adicionales de desarrollo capitalista «objetivamente posible» para la agricultura rusa. La «vía norteamericana», con la ausencia de aristocracia terrateniente y la proliferación de pequeñas fincas capitalistas, se ganó la admiración de Lenin por su capacidad dinámica de generar innovación y de expandir el mercado interno. En cambio, la «vía Junker» era puramente «retrógrada», una «metamorfosis interna de la economía feudal terrateniente», en la que «el sistema agrario en su totalidad se vuelve capitalista y por un largo periodo conserva rasgos feudales» (32). Parecía que si se pudieran clasificar adecuadamente estas diferentes iteraciones de la producción agraria, se revelaría una amplia gama de resultados concretos para el desarrollo capitalista (e.g., De Janvry 1981), la democratización (e.g., B. Moore 1966) y la lucha revolucionaria (e.g., Paige 1975). Véase Bernstein y Byres 2001 para una reseña y Neocosmos 1986 para una discusión particularmente lúcida de estas contiendas.

[11] Véase D. Moore 1998 y Stoler 1995*a*, Prefacio, para discusiones de esos desafíos.

1975, Wolf 1969). Por otro lado, las incorporaciones de la teoría feminista (e.g., Hart 1991, Carney y Watts 1990, Deere 1990), los estudios de la subalternidad (e.g., Guha 1982), los estudios críticos de la raza y las interpretaciones foucaultianas del poder (e.g., Stoler 1995*b*) dieron un giro al estudio de los actores campesinos, alejándolo del economismo y orientándolo a la política cultural del cambio económico y social concebida en términos amplios. Desde mi perspectiva, había un doble rasero evidente: los campesinos eran objeto de análisis matizados que oscilaban entre la economía política y la política cultural, en tanto que el interés en las elites terratenientes seguía confinado a la lógica económica de la producción agraria.

Al mismo tiempo, confrontado por las realidades concretas de las luchas de los terratenientes por mantener sus medios de subsistencia y su influencia en el campo chiapaneco, comprendí que la economía política marxiana tenía mucho que ofrecer, en particular después de que llegué a entender la economía política de la agricultura finquera no como una «lógica» definitiva, sino como un proceso de lucha político-cultural por el espacio que operaba en múltiples registros, incluidos la raza y el género. Pero quedaba un problema más: según teóricos clave, los terratenientes, al verse cada vez más incapaces de competir contra una agricultura capitalista más innovadora, se verían propulsados por la lógica económica de las rentas del suelo a responder cada vez con más violencia a los retos de los campesinos por el control que ejercían sobre el territorio (Paige 1997, 1975, B. Moore 1966). Si bien estas obras demostraban con brillantez que la lógica económica de la producción agraria impulsaba a los terratenientes a la violencia, el caso que me confrontaba en Chiapas indicaba que no basta con entender la propulsión económica. ¿Por qué los terratenientes rentistas iban a responder a los retos del campesinado con impasibilidad y resignación en lugar de con esbirros y armas? Si las apreciaciones de la economía política sobre la producción agraria iban a ser tan útiles para el estudio de las elites terratenientes como, por ejemplo, el género o la raza —los cuales yo estaba convencido de que lo serían— tendrían que ser modificadas para evitar las trampas del economismo. Mi meta fue, por tanto, reafirmar la importancia de la economía política en el estudio de las elites terratenientes

y reconsiderar a la vez la concepción limitada que se tiene de la economía política en este tipo de estudios. Para ello, volví a Marx.

Aunque están estrechamente relacionadas, la comprensión que tiene Marx de la capacidad de los terratenientes para obtener ganancias inusuales sin la reinversión productiva difería de manera fundamental de la formulación clásica de Ricardo. La economía de Ricardo naturalizaba las ganancias de los terratenientes (rentas), presentándolas como un «don de la naturaleza» que provenía de las diferencias que se daban naturalmente en fertilidad y ubicación. Marx contrapuso que el control sobre el territorio de los terratenientes no era un don natural sino un proceso de lucha por la distribución «escrito en los anales del género humano con letras a sangre y fuego». Las ganancias (rentas) de los terratenientes presuponían y dependían de la existencia de un sistema históricamente específico de propiedad agraria; una lucha por la distribución en el presente que era a su vez el resultado de luchas por la distribución en el pasado (Hall 1974). Dicho simplemente, la propiedad de la tierra, como todas las categorías de la economía política en los escritos de Marx, no es «algo» fijo; es una relación social (también es, como lo argumento más adelante, una relación espacial) cuyas formas y resultados específicos se pueden entender únicamente mediante análisis concretos de coyunturas histórico-geográficas particulares (Ollman 1976, Hall 1974).

Así pues, aunque muchos teóricos se han tomado a pecho la sugerencia de Marx de que la producción agraria tendería a desaparecer ante la competencia capitalista, tratando a esta como una regla férrea de la transición capitalista, el propio Marx expresó menos certidumbre al respecto. En una carta que cita David Harvey (1999:345), Marx criticaba a aquellos que convertían su «esbozo histórico de la génesis del capitalismo en una teoría histórico-filosófica de la vía general de desarrollo prescrita por el destino a todas las naciones, cualesquiera que sean las circunstancias históricas en las que se encuentren […] acontecimientos sorprendentemente análogos pero que tienen lugar en entornos históricos diferentes conducen a resultados totalmente diferentes».

Por último, argumento que esta cita ni resuelve la pregunta sobre el «destino final» de la producción agraria ni implica la necesidad de batallar más sobre si la producción agraria es verdaderamente transitoria o no. Esta pregunta, en torno a la que se ha derramado tanta tinta, no tiene mucho sentido para mí, ni para los movimientos campesinos que luchan contra la producción latifundista ni para los terratenientes que viven día tras día el caos y alboroto que poco a poco se acrecientan y se transforman en el cambio social a largo plazo. En realidad, si bien sigo una forma específica de producción agraria a través de un arco histórico de decadencia y transformación, no pretendo nada sobre la existencia a largo plazo de la producción agraria como categoría. Para mí, lo central son precisamente los «entornos históricos diferentes» y los «resultados totalmente diferentes» de Marx.

La teoría de la articulación de Stuart Hall (Hall 2002, 1996, Slack 1996) surgió de este análisis no reductivo del método marxista y ofrece una vía menos economista de entender la lógica de la producción agraria. Para Hall, la articulación va más allá de la teorización de las conexiones y determinaciones necesarias (e.g., el intento de Paige de teorizar una conexión necesaria entre las presiones económicas y la violencia de los terratenientes) para centrarse en los modos concretos en los que esas conexiones y determinaciones se generan en el mundo real. En este tenor, el objetivo del saber académico es revelar las relaciones de poder complejas e indeterminadas mediante las que los sujetos, las ideologías y las prácticas se articulan en momentos y lugares particulares. Mi objetivo específico es rastrear los modos histórica y geográficamente singulares en los que han sido posicionados los terratenientes en Chilón debido a múltiples presiones, desde las exigencias de la economía política hasta el significado cambiante de la ciudadanía neoliberal y los imaginarios geográficos del miedo a la raza, y cómo se han posicionado activamente ellos mismos con relación a esas presiones. Los intereses y las identidades de los terratenientes están profunda e inevitablemente grabados por las presiones y lógicas singulares de su modo de producción, pero no son reductibles a estas. Únicamente si se concibe de este modo la producción agraria se pueden entender las

maneras inesperadas en que los terratenientes respondieron a las presiones de la reestructuración económica y la movilización campesina.

Se puede entresacar otra lección de cómo entiende Marx la producción agraria, una lección que ayudará a organizar las fuerzas difusas que constituyen la política cultural de la agricultura finquera. Es un hecho obvio que Marx trata la producción agraria como una relación social dirigida a ordenar el espacio de maneras particulares. La agricultura finquera es una lucha por el espacio y el territorio.

Articulación de las luchas territoriales en Chilón

Este libro estudia las luchas por el territorio en Chilón. En particular, sigue los intentos actuales de los ladinos por defender el orden espacial de la producción agraria frente a las demandas indígenas de tierras y autonomía. Es, por ende, un libro sobre la territorialidad, definida en su sentido más básico como la creación social de un espacio deslindado en un intento de ejercer el control sobre este, su contenido y las prácticas de la gente ahí dentro.[12] Llevo esta definición más lejos: las territorialidades (o los proyectos territoriales) son constelaciones de prácticas dirigidas a delimitar, representar e imponer confines espaciales al servicio de intereses construidos complejamente. Las meditaciones de Henri Lefebvre (1991) sobre las prácticas sociales y la producción de espacio ayudan a depurar esta definición. En primer lugar, para Lefebvre todas las prácticas sociales son espaciales. Producen espacio y están a su vez configuradas por formaciones espaciales existentes. Por ejemplo, las luchas por la tierra en Chilón, con sus prácticas concomitantes de invasión, mapeo, cabildeo, volanteo, asesinato y pleitos legales modelan el paisaje material. Pero son también el producto del modo en que fue configurado el espacio en el pasado. Por ejemplo, en los años cincuenta —como se describe en el capítulo 5— se desprendieron pequeñas propiedades en los bordes de las grandes fincas que se entregaron

[12] Sobre territorio y territorialidad, véase Delaney 2005, Sack 1986, Vandergeest y Peluso 1995.

a campesinos leales para, en teoría, escudar a las fincas mismas. Estas pequeñas propiedades eran los productos espaciales inmediatos de conflictos agrarios previos. A la vez, al servir como una de las bases físicas para el desarrollo de las demandas territoriales indígenas desplegadas en 1994-1998, estas propiedades también modelaron las trayectorias del conflicto agrario subsecuente.

En segundo lugar, Lefebvre demuestra convincentemente que las prácticas espaciales operan en registros múltiples. Su esquema dialéctico para entender la política del espacio ha sido reelaborado (e.g., Harvey 1990) y criticado (e.g., Keith y Pile 1993), pero el punto central sigue siendo que el espacio se produce mediante prácticas tanto materiales como representacionales. En efecto, las prácticas materiales y representacionales son inseparables y están recurrentemente conectadas por relaciones de constitución mutua. La racialización discursiva del espacio por los terratenientes, por ejemplo, ha tenido profundos efectos en el paisaje material de Chilón, del mismo modo que prácticas más obviamente físicas, como la construcción de bardas y caminos, han sido componentes esenciales de la representación y la imaginación del espacio.

Por eso el «cómo» de la territorialidad tal como se presenta aquí es bastante amplio. Como sostiene Nikolas Rose (1999, cf. Watts 2003), el poder opera en buena medida por medio de la creación de «espacios gobernables»: «es una cuestión de definición de linderos, haciendo visible lo que hay dentro de ellos, reuniendo información sobre lo que está incluido y vislumbrando técnicas para movilizar las fuerzas y las entidades que se han revelado» (Rose 1999:33). A su vez, estos espacios «hacen posibles nuevos tipos de experiencias, producen nuevos modelos de percepción…. Son modalidades en las que se compone, modifica y puebla un mundo real y material gobernable» (Rose 1999:32). Por tanto, la creación de espacios gobernables es también la producción de sujetos gobernables. No obstante, en el fondo, en la construcción de territorio hay tres tipos de prácticas entretejidas que desempeñan papeles axiales: la clasificación y delimitación de espacios acotados, la sedimentación de estos espacios con significados que

modelan a los sujetos y naturalizan el territorio, y la imposición de linderos por medio de la vigilancia y la coerción.[13]

Estos procesos de territorialidad y de formación del sujeto no se despliegan automáticamente y sin resistencia: se impugnan y reelaboran continuamente. Las luchas por delimitar y definir territorios siempre y en todas partes encuentran «un paisaje fracturado y saturado de poder, significados culturales y herencias de luchas del pasado» (D. Moore 1998:367). Los esfuerzos por forjar espacios y sujetos gobernables se articulan constantemente con otros proyectos territoriales y son transformados por ellos (Watts 2003, cf. Ong 2000, D. Moore 1999, Li 1999). En este sentido, la territorialidad descansa siempre en un proceso de formación de hegemonía en cambio constante.[14]

Las configuraciones existentes del territorio modelan las técnicas, objetivos, idiomas y canales de la lucha por la hegemonía y, a su vez, generan nuevos confines al espacio. Siguiendo a Gramsci (1971), considero la hegemonía no como una dominación ideológica monolítica sino como el frágil equilibrio de coerción y consentimiento en «un proceso continuo de

[13] Este fragmento de mi definición se basa, en parte, en la formulación concisa de Agnew (2000).

[14] Lefebvre fue uno de los primeros estudiosos en trazar conexiones entre hegemonía y espacio, argumentando con un alto nivel de abstracción que diferentes modos de producción originan formas hegemónicas específicas de espacio. Es evidente que a mí me interesa más el microfuncionamiento cotidiano del poder por medio del cual se articulan el espacio y la hegemonía en un caso particular. También extraigo inspiración y construyo a partir de los escritos de historiadores y antropólogos sobre poder y hegemonía en el México moderno (Joseph, Rubenstein y Zolov 2001, Vaughan 1999, 1997, Rubin 1997, Wells y Joseph 1996, Mallon 1995, Alonso 1995, Joseph y Nugent 1994, Nugent 1993). En una obligada revisión de la historia cultural de México, Vaughan (1999:277) sostiene que el espacio ha sido uno de los focos centrales de trabajo en este campo. Citando al especialista crítico en geografía humana Edward Soja, Vaughan escribió: «El espacio se entiende como socialmente constituido y socialmente constituyente. Las maneras que tenemos de percibir, valorar y ocupar el espacio físico están a su vez moldeadas por nuestras comunidades espacialmente organizadas… y lugares en su interior que nos socializan, crean significados simbólicos y articulan relaciones de poder disparejas». No obstante, aunque muchos de los autores que Vaughan cita hacen explícito su compromiso con los otros factores que esta autora destaca (identidad, género, discurso, ritual y hegemonía), la teoría espacial se ha de leer en la mayoría de los textos siguiendo los hechos. Aquí, yo me propongo dar cuerpo de manera más explícita a las conexiones entre espacio, hegemonía y poder.

formación y sustitución de equilibrios inestables entre los intereses del grupo fundamental y los del grupo subordinado» (Gramsci 1971:182). Como aduce William Roseberry (1994:361), la hegemonía es un «proceso problemático, impugnado y político de dominación y lucha… [que] construye… no una ideología compartida sino un marco común material y significativo para vivir a través de él, hablar de él y actuar sobre órdenes sociales caracterizados por la dominación». Por tanto, en esta lectura que hace hincapié en cómo la hegemonía moldea a los sujetos, las conciencias, las prioridades y las expectativas, Gramsci presagia el interés de Foucault por las maniobras productivas, extendidas y multidireccionales del poder (Foucault 1990:95). Los sujetos nunca «están 'afuera' de campos de dominación ideológica y cultural», como sucintamente argumenta Gastón Gordillo (2002*a*). «Las imágenes y los símbolos que emplean los grupos subordinados para entender o resistir a la dominación están configurados por los procesos de la propia dominación».

Vistas de este modo, las territorialidades de los finqueros —las territorialidades de la agricultura terrateniente— se han de ver como constelaciones de diversas prácticas socioespaciales por medio de las cuales diferentes actores construyen las fincas como espacios delimitados de producción agrícola mediante luchas por la hegemonía. La territorialidad de la agricultura finquera no es algo construido exclusivamente por los terratenientes, sino que es un conjunto de relaciones entre los actores —manifestaciones contingentes de la articulación de diversas territorialidades de terratenientes, de indígenas y estatales que con el tiempo se entrecruzan, socavándose a veces y otras reforzándose unas a otras, y siempre creando nuevas clases de sujetos, abriendo nuevas oportunidades para la acción y cerrando otras—.[15]

[15] Lo mismo debería decirse de las formas de «territorialidad indígena». La territorialidad indígena ha sido tema de investigación desde el periodo colonial (e.g., Viqueira 1997) hasta la Revolución (e.g., Rus 1994) y el presente (e.g., Eber 2003, Nash 2001, Burguete 1999, Harvey 1998, Reyes et al. 1998). Esta investigación ha dado importantes pasos, trascendiendo la visión de las luchas indígenas por la tierra únicamente en términos de producción agrícola para concebir el control sobre la tierra como parte de luchas más generales por la autonomía, la ciudadanía y la democracia. No obstante, es importante evitar la homogenización, esencialización y romantización de la territorialidad indígena. En los capítulos siguientes

II. Formaciones finqueras en proceso

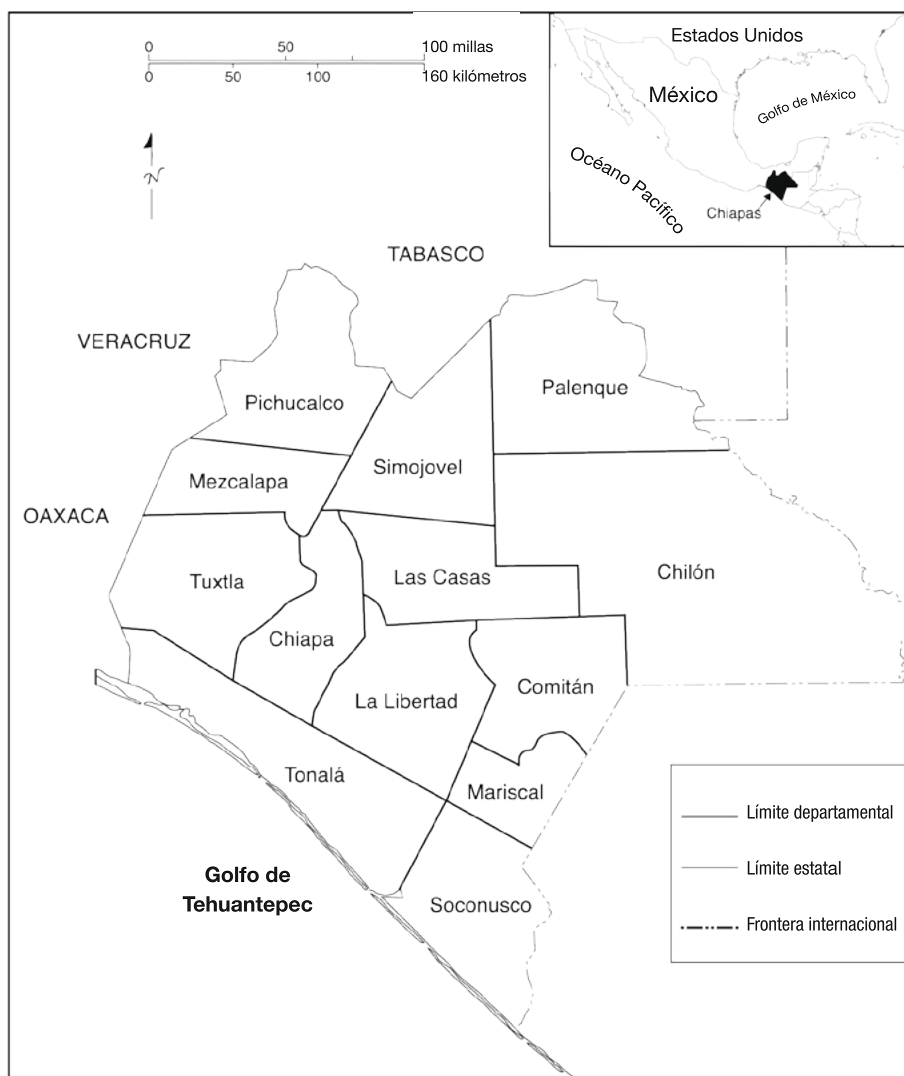
estudio sus múltiples formas entretejidas, que van desde la conducta en busca de rentas de los caciques indígenas a los esfuerzos discursivos dirigidos a construir derechos «primordiales» a la tierra hasta la «restauración» del territorio étnico mediante la expulsión de los ladinos de algunas poblaciones.

4. Los hijos del fruto mágico

La producción de una elite terrateniente, 1850-1920

A finales de los años 1880, Manuel Carrascosa, gobernador de Chiapas, montó una campaña masiva para atraer la inversión internacional al estado. La Exposición Universal de 1889 en París iba a ser el cotillón de Chiapas, su gran acceso al escenario mundial. «Solo el desconocimiento [del mundo] de lo que actualmente valemos, de los recursos con que contamos y lo que podemos llegar a ser en el futuro», escribía Carrascosa, «podrá… impedir que los brazos, las inteligencias y los capitales extranjeros cooperen con los nuestros a un progreso prodigioso» (1889).

Con la exposición ya próxima, Carrascosa reunió un enorme despliegue de la riqueza natural de Chiapas, transportada desde los más lejanos rincones del estado en barcos de vapor, mulas y las espaldas de cargadores indígenas: el ámbar venía del departamento de Simojovel, las plumas de quetzal, los felinos salvajes y las hierbas medicinales de Comitán, los tintes naturales de Tonalá y Palenque. Carrascosa reunió muestras de agua mineral de seis manantiales, jengibre, aguardiente, flores artificiales, vino de palma, quesos artesanales, sales de mesa exóticas y textiles indígenas de todo el estado. La población indígena de Chiapas fue tildada de fuerza de trabajo en busca de un patrón (*apud* Baumann 1985:12).



Mapa 2. Departamentos de Chiapas, 1910 (basado en Benjamin 1996:36).

Cada aspecto de la amplia participación de México en la Exposición de París ensalzaba la nueva «ciencia» del gobierno liberal que se difundía por todo el país a finales del siglo XIX. El pabellón nacional de México, una pirámide azteca en la base de la recién construida torre Eiffel, estaba repleto de exhibiciones sobre higiene, medicina, saneamiento, criminología, antropología, estadística y administración pública (Tenorio-Trillo 1996). La presentación sistemática de las vastas riquezas de México al mundo iba a atraer inexorablemente, en la mente de los tecnócratas liberales del país, la inversión externa y a mantener a flote la economía mexicana. Pero en aquel despliegue de la cornucopia y del potencial de Chiapas reunido por Carrascosa para la exposición, Chilón —entonces aún escasamente poblado por ladinos— apenas estaba representado.[1]

Menos de tres décadas antes, en 1861, el viajero francés Desiré Charnay no había observado nada de particular interés en Chilón. Los indios eran pobres y la mayoría de los ladinos producían solo maíz y frijol, escribió. Incluso la caña de azúcar «no se encuentra hasta Guaquitepec» (Charnay 1956:135). Otros informes del mismo periodo indican que las primeras fincas ladinas alrededor de Chilón sí producían cantidades considerables de caña de azúcar, pero Charnay no se equivocaba en algo: la agricultura ladina en la región era, en su gran mayoría, bastante precaria y estaba a cargo de agricultores pobres en parcelas marginales.

El campo alrededor de Chilón había sido testigo del trasiego de la migración de ladinos y españoles que entraban y salían desde el siglo XVII, y los registros de matrimonios muestran que la mayoría de los apellidos ladinos de los chiloneros de la actualidad estaban ya presentes en 1800. Pero incluso en un censo tan tardío como el de 1892, el vasto Departamento de Chilón reportaba solo 8 237 ladinos, que estaban concentrados en su mayoría en Ocosingo o sus alrededores, a distancia en dirección al este de las

[1] El departamento de Chilón envió muestras de caoba, cedro y fresno. Estas maderas es casi seguro que provenían de las tierras bajas orientales —en la actualidad el municipio de Ocosingo— incluidas en aquella época en el Departamento de Chilón (no el «Chilón» más limitado que estudiamos aquí; véase nota 4 del capítulo 1 para un análisis de mi construcción de «Chilón» como región).

poblaciones de Chilón, Sitalá y Guaquitepec (Rabasa 1895). Cristina Cancino, una joven chilonera, se quejaba en 1896 «Que como en esta población son pocas las familias ladinas, difícilmente encontraría uno de su clase con quien pudiera enlasarse [*sic*]».[2]

Aunque existían claramente tensiones entre los ladinos y las comunidades indígenas (como lo pone de manifiesto un importante levantamiento indígena en 1712 que se estudia en el capítulo 9), sería ir demasiado lejos llamar a la temprana población ladina de Chilón una elite terrateniente. La población ladina era en buena medida una clase de rancheros pobres de la periferia provinciana. El inventario de las posesiones de Mariano Constantino, a su muerte, cuenta bien esta historia: nacido en Chilón, probablemente por los años de 1830, Constantino murió en 1888. Era propietario de más de 900 hectáreas, pero había vivido en una cabaña con techumbre de paja, muros de adobe y escaso mobiliario. Sus otras propiedades consistían en unos cuantos objetos religiosos, dos caballos, dos mulas, unos cuantos burros, cinco cabezas de ganado y un trapiche roto. Después del valor de su tierra (410 pesos), las deudas de dos sirvientes hombres (110 pesos) eran su bien más preciado. Lo mismo que sus vecinos, Constantino producía maíz, frijol, un poco de fruta y algunos lácteos, principalmente para el consumo local. Su principal producto comercial, la caña de azúcar, es probable que la transportaran a la espalda cargadores indígenas hasta San Cristóbal o Comitán, donde la podían destilar y convertir en aguardiente. Constantino no estaba solo en su vida rústica. Un reporte eclesiástico sobre el pago de 10% anual, el diezmo, en Chilón, ofrece un atisbo íntimo de la agricultura ladina: solo un puñado de rancheros ladinos lo pagaron aquel año, aportando a la parroquia un total de menos de 50 pesos de valor en maíz, frijol y azúcar.[3]

[2] «Expediente matrimonial de Atitlano Díaz y Cristina O. Cancino», noviembre 1896, en AHD, expedientes de Chilón, IV.D.2.a.

[3] «Intestado de Mariano Constantino», en API, archivos de Ocosingo, 1888-1890; y «Lista de ciudadanos ladinos que satisfacen los Santos Diezmos del Año de Mil Ochocientos Cuarenta y dos», 17 de octubre, 1842, en AHD, archivos de Chilón, VI. C.8.

Esto estaba a punto de cambiar. Gracias en parte a los esfuerzos de Carrascosa y a una sucesión de gobernadores liberales, el número de fincas comerciales en Chilón se disparó en las últimas décadas del siglo XIX a medida que un complejo de caña y café integrado globalmente comenzó a definir la economía de la región. Para los años de 1880, el cultivo de la caña de azúcar era tan intensivo que el centro-norte de Chiapas llegó a ser uno de los centros más importantes del estado en producción de azúcar. Para los años 1890, la producción de café ya había echado raíces, con 125 000 plantas de café cargadas de fruto o a punto de brotar (Rabasa 1895). Y para 1900, casi todas las familias y fincas ladinas que permanecerían, de una u otra forma, a lo largo de los años 1990 estaban en Chilón. El final del siglo XIX y el principio del siglo XX constituyeron un momento decisivo en el que la intersección del régimen liberal y la lógica local de la producción agraria forjaron los rasgos clave y permanentes de la agricultura finquera y la territorialidad de los propietarios.

Progreso, privatización y la creación de una elite finquera

Unos 60 años antes de que Chiapas viajara a la Exposición de París, México libró una larga batalla por su frontera con Guatemala que establecería el escenario para el desarrollo subsiguiente del estado. En 1842, después de fluctuar casi una década entre Guatemala y México, las elites chiapanecas, encabezadas por la oligarquía terrateniente de Ciudad Real (hoy San Cristóbal de Las Casas), gestionaron la anexión de Chiapas por parte de México (Benjamin 1996:11). Chiapas estaba firmemente asentada en el cuerpo nacional de México, al menos en los mapas. Sin embargo, sobre el terreno, era una periferia remota apenas conectada con el resto del país y había muchos terratenientes que todavía se oponían a la anexión. La tarea de producirlo como un espacio gobernable dentro de la nación mexicana apenas había comenzado.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, sucesivos gobiernos liberales se empeñaron en incorporar a Chiapas al país, y en el proceso, ligarlo

al proyecto liberal más amplio de «orden y progreso», ejemplificado por una administración pública racionalizada, el sometimiento de centros de autoridad rivales dentro del país, un papel del mercado radicalmente ampliado y la diseminación de comunicación e infraestructura modernas. El proyecto alcanzó su punto culminante bajo la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1910). Para los años 1880, este, rodeado de un grupo de tecnócratas asesores llamados científicos, centralizó la toma de decisiones en la Ciudad de México y extendió el control militar y burocrático al campo. Díaz libró campañas militares para «domesticar» a grupos indígenas que merodeaban en el norte de México, debilitó a caciques políticos locales por todo el país, presidió un memorable periodo de concentración de la tierra y atrajo niveles sin precedentes de inversión extranjera, en particular en la agricultura comercial. Carreteras y ferrocarriles se convirtieron en símbolos y agentes de la formación del Estado porfiriano y la promoción de las exportaciones.[4]

En el lejano Chiapas, el «orden y progreso» se desplegó irregularmente. Las carreteras —ocasionalmente transitables, normalmente llenas de lodo— se fueron introduciendo serpenteando lentamente por el estado a finales del siglo XIX. La conexión ferroviaria entre Chiapas y la Ciudad de México siguió siendo una meta escurridiza. Iniciado en 1880, el Ferrocarril del Sureste no iba a finalizarse exitosamente hasta 1935, y los inversionistas ingleses fracasaron reiteradamente en sus esfuerzos por vincular a los productores agrícolas chiapanecos por tren a los puertos de aguas profundas del estado (Chanona 1952). Chiapas siguió estando físicamente distante y sin incorporar del todo a la nación. No obstante, a la vez, toda una gama de formas nuevas de gobierno estatal se iban introduciendo lentamente en el campo chiapaneco y se iba transformando progresivamente el terreno de las relaciones sociales. Para principios del siglo XX, aun cuando diversos actores ignoraban o se apropiaban de las instituciones y funciones de un gobierno central lejano, las luchas por la hegemonía terrateniente fueron articulándose cada vez más en el idioma del gobierno.

[4] Sobre este periodo, véase Cosío Villegas 1994, Buffington y French 2000, González 2001.

Con el fin de que Chiapas reclamara verdaderamente un lugar en la utopía liberal del orden y el progreso soñada por los científicos de Díaz, la «asombrosa exuberancia» (Carrascosa 1883) del estado tenía que ser domeñada, asentada y volverla productiva. El final del siglo XIX en Chiapas, tanto como en México, fue la época de despliegue del proyecto territorial liberal fundado en los registros de tierras, el asentamiento y la expansión de la propiedad privada y la promoción de formas particulares de acumulación capitalista. Estas prácticas, concomitantes a una visión de México como un país moderno y racional, modelaron profundamente el paisaje chiapaneco.

A partir de los años 1830, una serie de leyes federales y estatales abrieron a la privatización vastas extensiones de tierras «baldías» o «sin utilizar». Por ejemplo, bajo la Ley Lerdo de 1863, cualquiera con suficiente astucia institucional y dinero para pagar precios tan bajos como de 75 centavos por hectárea, podía reclamar hasta 2 500 hectáreas (Toraya 1985). Hasta los años 1880, los inversores se aprovecharon en su mayoría de estas leyes para reclamar tierras de la Iglesia católica en Chiapas (De Vos 1994). Sin embargo, con Porfirio Díaz, las tierras que detentaban colectivamente las comunidades indígenas sufrieron cada vez más presiones. Gracias a las leyes porfirianas que facilitaban la privatización de las tierras comunales indígenas, el número de fincas en Chiapas se triplicó y más entre 1837 y 1889 (Rus 2003:7). El tributo que pagaron las comunidades indígenas fue palpable. Al cambio del siglo, las comunidades indígenas independientes con control seguro de las tierras comunitarias casi habían desaparecido por completo de Chiapas (Rus 2003, Pedrero 1981). Los campesinos indígenas despojados de sus tierras —a menudo por medio de fraudes atroces— fueron reducidos a ser prácticamente esclavos en las fincas. Para 1892, 20 000 de los 34 000 residentes indígenas de los departamentos de Chilón y Simojovel eran *baldíos*, trabajadores residentes, con frecuencia muy endeudados con los propietarios, que recibían el derecho a una parcela a cambio de tres o cuatro días de trabajo a la semana en los cultivos del terrateniente (Rus 2003:10). Fue un cambio drástico que ha sido narrado por

los historiadores.[5] Y aunque muchos relatos populares y académicos de ese momento en Chiapas se deslizan suavemente de los hechos de la privatización de la tierra en el porfiriato a la existencia de una elite terrateniente poderosa, en Chilón las cosas no fueron así de simples. Allí, la creación de la agricultura finquera y de una elite terrateniente fue un arduo trabajo, no algo que se desarrollara automáticamente, sino un proceso de varias etapas, testigo del ascenso y la caída de varios grupos de propietarios de tierras y de una gran cantidad de luchas culturales, políticas y económicas.

Los orígenes de las fincas ladinas en Chilón

En julio de 1848, fray Marciano Trejo, cura párroco de Sitalá, respondió a la petición de sus superiores de que reportara el estado de las relaciones indígenas-ladinos en la región. «En estos Pueblos de mi cargo —escribió— no hay vecino alguno ladino».[6] Como hemos visto, hubo una serie de familias de ladinos dispersas que habían cultivado tierras alrededor de las poblaciones de Chilón y Yajalón desde el siglo XVIII, pero la región en conjunto seguía dominada por la producción indígena de subsistencia. Fray Marciano se quejaba de que los vendedores ladinos de aguardiente habían comenzado a pasar por la región y hacía alusión a débiles indicios de problemas «por las medidas de terrenos», pero la producción agrícola ladina aún no había echado raíces alrededor de Sitalá.[7]

[5] Las privatizaciones de tierras a finales del siglo XIX son probablemente —después del alzamiento zapatista en 1994— el aspecto más ampliamente investigado de la historia de Chiapas. Hay una vasta bibliografía sobre el tema y, como no hace mella en mi argumento general, he omitido muchos entresijos de la evolución de estos deslindes y cercados y sus multifacéticas consecuencias para la población indígena del estado. Los lectores que quieran más detalles pueden consultar Olivera y Palomo 2005, García de León 1998, Benjamin 1996, Wasserstrom 1983, o la trilogía de Jan de Vos sobre la conquista de la selva lacandona (2002, 1994, 1988).

[6] Fray Marciano Trejo al Sr. Provisor y Gobernador del Obispado, 4 de julio, 1848, en AHD, archivos de Sitalá, III.A.2

[7] Un censo agrícola de la iglesia en 1851 en Guaquitepec y Sitalá, que no encontró fincas, haciendas ni ranchos grandes, parece confirmar la observación del párroco: «Padrón general

Exactamente 50 años más tarde fray Manuel Zetino, sucesor del párroco, contaba una historia completamente diferente: en un reporte a la misma oficina eclesiástica sobre el estado de los asuntos en su región, el cura refunfuñaba: «Las cosas [en el pueblo de Sitalá] han llegado a un estancamiento total… porque los habitantes en su mayor parte se han ido a las fincas».[8] Mientras que un censo agrícola en 1851 no encontré fincas en Sitalá o Guaquitepec, en 1885 había casi 20.[9]

Estas dos cartas sacerdotales culminan un proceso de rápido cambio social y espacial en el que colonos no indígenas se desplazaron al centro-norte de Chiapas, despojando y privatizando tierras comunales de indígenas y expandiendo el paisaje de fincas de ladinos. Esta oleada de privatización y modernización siguió dos sendas separadas de entrada a la región: una se dirigió hacia el norte desde San Cristóbal y condujo al establecimiento de fincas grandes, con frecuencia con sus propietarios ausentes, que producían maíz, frijol, ganado y, lo más importante, caña de azúcar desde los años 1850; la otra, impulsada por la producción de café, se extendió al sur desde Yajalón, Palenque y Tumbalá, comenzando a finales de los años 1880. Aunque las elites ladinas procedentes de San Cristóbal fueron pioneras en la colonización en dirección norte y concentraron sus esfuerzos en la producción para mercados internos, la segunda ola de colonización tuvo lugar a la sombra de fincas cafetaleras propiedad de extranjeros y miraba hacia el norte en dirección a los puertos de la costa del Golfo.[10]

Para 1900, estos dos movimientos habían colisionado y se habían mezclado en Chilón, sentando los cimientos de la producción finquera que perduraría hasta entrado el siglo XXI, con una importante salvedad: las elites finqueras del presente no son necesariamente las descendientes directas de alguno de los dos grupos de colonizadores de finales del siglo XIX.

---

de Guaquitepec y Sitalá», 3 de julio, 1851, en AHD, archivos de Guaquitepec, IV.D.4.

[8] Fray Manuel Zetino al Sr. Provisor y Gobernador del Obispado, 3 de enero, 1898, en AHD, archivos de Sitalá, IV.C.3-4.

[9] «Padrón general de Guaquitepec y Sitalá», 3 de julio, 1851, en AHD, archivos de Guaquitepec, IV.D.F., y Ramírez 1885.

[10] Este último proceso ha recibido mucha más atención de los académicos. Véase Washbrook 2005, Alejos 1999. Sobre el primero, véase Wasserstrom 1983.

Muchas o la mayoría de las elites finqueras contemporáneas de la zona remontan sus orígenes a comerciantes itinerantes, trabajadores calificados y profesionales pobres que inundaron el centro-norte de Chiapas a finales del siglo XIX y principios del XX para aprovechar las oportunidades de empleo que se habían creado con la expansión de las fincas de caña y café. Normalmente, esos recién llegados encontraban trabajo como mayordomos o capataces de fincas o emprendían negocios que suministraban transporte y abastecían provisiones a las fincas. Estos nuevos pobladores acabaron ahorrando suficiente dinero para comprar parcelas, ya fuera de fincas en decadencia propiedad de extranjeros en el norte, o bien haciendas de azúcar propiedad de ladinos en el sur. Estos hombres se casaron con mujeres de familias ladinas locales, y para principios del siglo XX, los antepasados de los terratenientes contemporáneos de Chilón y Sitalá habían culminado una improbable transición de la ciudad al campo, de capital comercial a producción agraria.

Expansión hacia el norte hasta Chilón: la ruta del alcohol al capitalismo agrario

Cómo y por qué inversores ladinos procedentes de San Cristóbal de Las Casas en el altiplano comenzaron a adquirir tierras en el centro-norte de Chiapas está todavía rodeado de incertidumbre.[11] Hay, sin embargo, varias cosas claras. Primero, comenzando en los años 1850, un número creciente de ladinos empezó a adquirir grandes propiedades en la región. Esta ola de deslindes y reclamaciones de tierras, protagonizadas por prominentes comerciantes y políticos así como por relativamente desconocidos, implicó tanto la toma de tierras comunales indígenas como la adquisición de fincas ya existentes de ladinos. No obstante, en la mayoría de los casos parece que los sancristobalenses compraron tierras previamente registradas y reivindicadas por especuladores. El destacado terrateniente y comerciante de

[11] Estoy investigando este tema; Anna Garza está también estudiando la cuestión desde el punto de vista de una historiadora que se enfoca en los ladinos de San Cristóbal. Véase Garza 2005, Bobrow-Strain s.f.

la era porfiriana Vicente Pineda, por ejemplo, compró unas 2 100 hectáreas cerca de Guaquitepec a dos especuladores de tierras unos años después de que la propiedad fuera originalmente registrada en el catastro, en 1849. Familias de comerciantes menos conocidas en San Cristóbal como los Alcázar y los Zepeda, así como caciques regionales como Abraham Suárez y Porfirio Navarro, también obtuvieron grandes extensiones de este modo, apoderándose de las demandas existentes de tierras y poniendo en su lugar la topografía básica de la fincas de los ladinos que iba a dominar la región durante más de un siglo. Muchas, si no es que la mayoría de las fincas que aparecen en los capítulos que siguen de este libro —San Antonio Bulujib, Junacmec, San José Sierra Nevada, Las Delicias y Golonchán, por nombrar unas cuantas— remontan sus orígenes a este proceso.

Segundo, parece que la caña de azúcar alentó esa ola de expansión. Casi todas las cerca de 70 fincas establecidas en la región alrededor de 1900 declaraban el azúcar como su cultivo comercial principal (Estado de Chiapas 1909). Aunque estas nuevas fincas cultivaban azúcar extensivamente y de acuerdo con «el sistema más primitivo», Chilón emergió como un importante centro azucarero, famoso por la alta calidad de su producto (Rabasa 1895, Estado de Chiapas 1895). En 1900, más o menos una docena de fincas que circundaba la población de Guaquitepec produjeron 400 000 kilogramos de caña de azúcar, 4 000 kilogramos de azúcar refinada, 15 000 kilogramos de azúcar en bruto en forma de bloque y 18 hectolitros de aguardiente legalmente destilados.[12] El hecho de que la producción de caña de azúcar experimentara un auge durante las décadas de producción cafetalera en rápida expansión no es ninguna coincidencia. En el centro-norte de Chiapas, la caña de azúcar destilada y convertida en aguardiente, vendida a crédito a trabajadores indígenas hizo posible la exportación de café. Los registros tributarios de 1903 hablan de lo lucrativo de esta conexión: cada dos semanas, cinco o seis productores legales únicamente en Sitalá declaraban de 50 a 150 litros de aguardiente cada uno, y un terrateniente, Caridad Alcázar, pagó de 20 a 35 pesos en impuestos *a la*

[12] «Guaquitepec: Datos de las producciones agrícolas, año de 1900», 28 de junio, 1901, en API, archivos de Ocosingo.

semana a los funcionarios municipales por su producción de aguardiente. Extrapolándolos a un año, los impuestos por el alcohol que pagaba Alcázar sumarían entre 1 000 y 1 800 pesos. Esta era una cantidad enorme de dinero para aquella época, cuando una cabeza de ganado se vendía por 15-20 pesos, una hectárea de tierra por un promedio de tres pesos, y una hectárea de caña daba unos 25 pesos.[13] Había incontables alambiques para destilar el aguardiente que operaban al margen de la ley y la evidencia en los archivos de incesantes peleas entre los ladinos por el control del comercio clandestino del alcohol habla del alto valor del negocio. Wenceslao López recordaba: «Como [la producción de aguardiente] era ilegal y como rendía mucho dinero, los productores de aguardiente tenían que ser clandestinos y duros. Sitalá estaba lo suficientemente escondido. Los productores de aguardiente tenían sus propias guardias blancas porque se hacía mucho dinero. Como los narcotraficantes hoy».

A principios del siglo XX, la expansión en dirección al norte hasta Chilón había disminuido considerablemente y los latifundistas de la región habían empezado a vender sus fincas en parcelas a una nueva ola de colonos ladinos. Fueron numerosos los factores que contribuyeron a la disolución de las fincas de finales del siglo XIX. Muchas de las elites de San Cristóbal originalmente fijaron sus miras en el centro-norte de Chiapas por su abundante provisión de mano de obra barata (Estado de Chiapas 1895), pero para los años 1900, el abasto de mano de obra indígena endeudada y barata parece haber sido escasa. En 1906, por ejemplo, Samuel Pascacio, que administraba la finca La Naranja para Manuel Pineda, se quejaba de «la dificultad creciente de conseguir peones de campo debido a los enganches que se hacen a diario para poblar los cafetales y monterías establecidos en el Departamento de Palenque [hacia el norte de Chilón]» algo «que no es desconocido de los habitantes de esta región».[14] También es posible

[13] «Recibos de la tesorería municipal de Sitalá, año 1903», en AMS. Estos valores se determinaron promediando el valor estimado de bienes o activos agrarios procedentes de diversos casos de testamentarias en los años 1900.

[14] «Diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el señor Samuel Pascacio en representación de don Manuel Pineda», 14 de septiembre, 1906, en APJ, archivos de Ocosingo.

que muchos terratenientes se hayan cargado de deudas, un problema exacerbado por un importante revés en el mercado del café a finales de los años 1890 (Rus 2005). Los que participaron en la colonización de Chilón en las postrimerías del siglo XIX solían recurrir con regularidad a sus derechos a las tierras como colateral o garantía para préstamos cuantiosos — muchas veces de un total de miles de pesos a 6-18 % de interés anual— y a principios del siglo XX, hay reportes de terratenientes que subdividen sus fincas con el propósito de liquidar deudas.[15]

De modo que, por las razones que sea, las grandes fincas porfirianas de Chilón habían empezado a cambiar de manos para finales del siglo XIX, y las crecientes amenazas de reforma agraria en la estela de la Revolución mexicana (1910-1920) fueron como el golpe final a esta ola de reclamaciones de tierras y de formación de grandes fincas. Wenceslao López, que adquirió El Carmen Saquilá en 1940, en la parte final de este viraje, es una de las últimas personas vivas que participaron directamente en estos cambios. El padre de López había llegado al centro-norte de Chiapas a trabajar como albañil en El Triunfo, una plantación de café propiedad de extranjeros al norte de Chilón. Acabó abandonando la finca, se casó con una mujer de la localidad y se estableció en Yajalón, donde él y su esposa abrieron un hotel. Mientras construían el negocio familiar, agregando procesadora de café y la primera fábrica de hielo de la región, Wenceslao emprendió el camino. Como comerciante itinerante, acumuló una pequeña fortuna surcando las escarpadas sendas montañosas de la región para comprar el producto de fincas locales y abastecerlas con lo que necesitaran. En el curso de estas caminatas, López encontró El Carmen Saquilá, abandonada hacía más de 15 años por su rico propietario ausente, Manuel Penagos. Penagos había reclamado la propiedad en 1897 pero nunca la desarrolló, y la dejó a su vez en manos de Porfirio Navarro, el cacique local. «Navarro era un hombre muy delicado y yo llegué a la entrada de la casa grande todo lleno

[15] «Cuadro que manifiesta el nombre de las fincas del Departamento que tienen gravamen real, cuyos datos han sido escrupulosamente copiados de los libros de hipotecas del Registro de la Propiedad que datan del año 1872», s.f. en API, archivos de Ocosingo. Este cuadro, que ocupa varias páginas, abarca el periodo de 1872-1934.

de lodo tras mi caminata, así que al principio no confió en mí», recordó López, riéndose de su atrevimiento juvenil, «pero cuando le dije que podía pagar mil pesos de depósito por el rancho allí mismo—en aquellos días tener mil pesos era como ser millonario— Navarro cambió de opinión».[16]

Cuando López compró El Carmen, el terreno estaba cubierto de milpas cultivadas por indígenas que se habían ganado una independencia nominal en la finca abandonada. «Puse de inmediato un alto a esto —recordó—, pero les dije que si querían venir a ayudar en el rancho, podían tener toda la milpa que quisieran». A cambio del acceso continuo a las milpas, esta nueva fuerza de trabajo —14 familias en total— iba a emplearse ahora en los campos de López tres días a la semana, haría el mantenimiento los sábados y atendería sus propios cultivos los dos días restantes. Como la mayoría de los nuevos terratenientes ladinos, López plantó caña de azúcar. Sobre todo en los alrededores de Sitalá, que seguía siendo un centro de producción clandestino de alcohol ya entrado el siglo XX. El azúcar era todavía un cultivo lucrativo. A la vez, como muchos de sus vecinos, López fue desviando cada vez más su atención hacia el café.

El café y la expansión hacia el sur en Chilón

Dos cambios que tuvieron lugar a mediados del siglo XIX en la economía internacional impulsaron la privatización de la tierra y el desarrollo comercial en Chilón: primero, las luchas por la independencia frenaron la producción en Brasil y elevaron los precios mundiales por las nubes; segundo, en Guatemala la tierra adecuada para el cafetal estaba saturada, sobre todo por inversionistas alemanes. Estos dos factores, combinados con los esfuerzos del gobierno mexicano para promover la inversión externa, hicieron que el capital cafetalero cruzara la frontera de Guatemala a la costa chiapaneca (Hernández 1979). A medida que las plantaciones saturaron las

[16] Véase «Copia certificada de las diligencias de mensura y adjudicación de un terreno denominado El Carmen Zaquilá adjudicado al Sr. Manuel J. Penagos», 18 de abril, 1897, en WLT.

regiones de la costa y el Soconusco, los inversionistas vieron en el norte la posibilidad de cultivar café en Chilón y Simojovel.

Fueron dos alemanes, Friedrich Kortum y Karl Setzer, los que encabezaron la expansión del café en el centro-norte de Chiapas. Kortum llegó aproximadamente en 1894 y fundó la finca Mumumil en Tila. Karl Setzer, un empleado de una empresa alemana de comercio de productos básicos, le siguió ocho años después, estableciendo una serie de fincas en las afueras de Yajalón. Más tarde siguieron otros —Federico Schilling, los hermanos Morrison, los Kanter y Enrique Mahr— que crearon rápidamente un cinturón de fincas cafetaleras al norte de Chilón y Yajalón. Eran grandes. Una de ellas, El Triunfo, propiedad de la German American Coffee Company, abarcaba 20 000 hectáreas y empleaba a 3 000 trabajadores en los municipios contemporáneos de Tila, Tumbalá y Salto de Agua (Alejos 1999:283).

Un siglo después, Carlos Setzer reflexionaba sobre su abuelo Karl y los otros inmigrantes alemanes:

> Después de la victoria de Alemania sobre Francia en 1870, los alemanes buscaban nuevos lugares a dónde ir. […] Básicamente, Alemania quería importaciones tropicales baratas de modo que envió a sus hijos a conseguirlas. Mi abuelo primero fue a Guatemala y descubrió que todas las tierras buenas habían sido ocupadas, desde las tierras altas hasta Tapachula. De modo que la Bundrum [Compañía de Comercio] lo envió a San Cristóbal. Allí, abriéndose camino sin hablar español ni ningún guía, encontró a otros alemanes que le hablaron de Yajalón. Mi abuelo partió con un grupo de indios chamulas enganchados dirigiéndose a trabajar en la finca Kortum. Los Kortum eran los primeros alemanes en la zona y solucionaban la falta de mano de obra consiguiendo grupos de indios de Oxchuc, Chamula y Cancuc, a los que daban 5 pesos por ir a trabajar en Morelia. Cuando mi abuelo llegó a Yajalón […] toda la producción que había [allá] era caña de azúcar. […] Mi abuelo le compró tierra a un tipo de nombre Romero que la había obtenido de la Kelly Streeter Land Company [que habían deslindado y reclamado muchas tierras de Chilón y Yajalón]. Él buscaba un lugar en el que pudiera instalar una rueda hidráulica, y lo encontró. Regresó a Guatemala y se encontró con su patrón, quien fue a la Ciudad de México a realizar la adquisición.

Miguel Utrilla, un ladino cuya familia estaba firmemente establecida en el comercio del alcohol antes de dedicarse a las propiedades agrarias, me explicó el siguiente paso: la transición de las fincas cafetaleras de propiedad extranjera a propiedad de ladinos.

> Los primeros en traer café a la región fueron los alemanes. Colaborando con sus socios comerciales alemanes, parte de un éxodo comercial alemán, esos hombres establecieron las primeras plantaciones en la zona: Bremen y Hanover. […] Los pocos mestizos que vivían en la zona —en su mayoría pequeños rancheros— comenzaron a estudiar las plantaciones alemanas y vieron una oportunidad para el comercio. Lo típico era que el padre le comprara al hijo una o dos mulas y pusiera al hijo como arriero, a transportar café desde las plantaciones hasta Salto de Agua, donde podía ser transportado por ríos navegables —el Tujilá y el Grijalva— hasta la costa. Estos arrieros llevaban el café a los puestos y regresaban con sal, queroseno y otros productos básicos. Al mismo tiempo, estas familias […] ladinas comenzaron a meterse en el bolsillo unos granos de café, llevándoselos para tratar de sembrar el fruto mágico en sus ranchos. […] Los mestizos vieron el ejemplo de los extranjeros de cómo ser progresista, cómo comunicarse con el resto del mundo, cómo cuando el patrón decía a la gente que hiciera algo, lo hacían. Aprendieron cómo llevar un rancho de las fincas de los extranjeros.

Esta pintoresca historia da una imagen encantadora e inocua del ascenso de la dominación ladina en Chilón, pero oculta toda una historia de desplazamientos, cercados y servidumbre. No obstante, destaca dos puntos importantes: primero, que el régimen de dominación y subordinación que se estableció en esas fincas era, de alguna manera, un híbrido transnacional que adoptaba prácticas que existían en las fincas y plantaciones europeas en las colonias alemanas en África;[17] y segundo, que la producción de café comercial pasó de extranjeros a ladinos durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, es importante agregar una dosis de economía política a la épica prometeica de Utrilla. Para 1899, inversores boyantes por

[17] Por lo menos un terrateniente alemán (Ricardo Franz) aprendió su oficio administrando producción de caucho en Camerún antes de comprar la finca Verapaz en Chilón.

el alza continua de los precios del café habían plantado más de cuatro millones de matas en Chiapas y casi el doble de esta cantidad en viveros a la espera de ser trasplantadas (Rus 2005). Esta burbuja pronto iba a estallar. En el lapso de un año, entre 1898 y 1899, el precio de café cayó de 35 a 15 pesos por quintal (100 libras o unos 46 kilos), aunque los costos de la producción seguían subiendo.[18] En pleno colapso devastador de los precios del café, que se prolongó a principios del siglo XX, propietarios de grandes fincas se quejaron amargamente del costo y las dificultades para conseguir mano de obra (Baumann 1985).

En 1919 grandes propietarios extranjeros del centro-norte de Chiapas, debilitados por esta crisis, comenzaron a vender parcelas a ladinos. Pero fue la Revolución mexicana la que asestó el golpe definitivo. Aunque su consolidación, con sus reformas y contrarreformas agrarias contradictorias, duró hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX en Chilón, las grandes fincas porfirianas de la región —en particular las que eran de extranjeros— fueron atacadas antes. Para 1915, Karl Setzer se quejaba en una carta al cónsul alemán, Enrique Rau, de que gracias a una nueva ley que liberaba a los trabajadores vinculados por deudas, solo quedaban seis de 40 trabajadores permanentes en la finca Hanover (*apud* Baumann 1985:46). Los propietarios de El Triunfo y otras fincas de extranjeros comenzaron a aplicar preventivamente la reforma agraria, dividiendo sus tierras para vender parcelas a ladinos, pero hasta estas estrategias acabaron fracasando. Para 1940, El Triunfo, que otrora había abarcado 20 000 hectáreas, tenía ya menos de 400 (Alejos 1999). En 1946, cuando el administrador alemán de nacimiento Frederico Schilling, abatido por los bajos precios del café y una década de lucha agraria, se ahorcó al colgarse de las vigas de un almacén en la finca, los cimientos de la producción agrícola ladina ya estaban asentados desde Tumbalá hasta Guaquitepec. Abelardo Gómez, cuyo padre había comprado varias parcelas de El Triunfo, musitó pensativo: «Ahora nosotros

[18] «Memorando sobre el café en Chiapas», 12 de octubre, 1899, en CGPD, rollo 165 / XXIV, núm. 15 132. Todas las citas del CGPD que contiene este libro derivan de las notas extensas de Thomas Benjamin. Le agradezco el haber hecho públicas esas notas.

[los ladinos] tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias luchas con los trabajadores, nuestros propios problemas con la reforma agraria».[19]

Las figuras paternas y los indios de las fincas: la creación de elites agrarias, la creación de trabajadores finqueros

> La palabra *cacique* tiene muchas connotaciones negativas, pero realmente ser un cacique es simplemente ser un intermediario. Nosotros somos el puente entre la ciudad y la gente que trabaja en el campo. […] Al menos hasta que hubo televisión, nosotros fuimos el puente cultural que integraba a los indígenas aislados en la cultura nacional
>
> FAUSTO TRUJILLO

Cuando Wenceslao López decidió comprar El Carmen Saquilá disponía de los medios para hacerlo. Ya adentrado el siglo XX solo senderos tortuosos y rastros de mulas conectaban Chilón con el mundo exterior. En consecuencia, la viabilidad económica de la producción de café y azúcar en esa región remota activó la necesidad de transporte barato, usualmente en forma de cargadores indios o atajos de mulas.[20] Los hombres que administraban estas rutas de comercio, organizando el acarreo de café y azúcar a Salto de Agua y San Cristóbal y regresando cargados con artículos básicos para vender a trabajadores y propietarios de las fincas, no tardaron en acumular dinero para comprar tierras. Basándose en su experiencia comercial y en sus conexiones, hombres como López sabían que podían comerciar productos agrícolas mejor que cualquiera de sus competidores, pero ¿podían hacer producir las fincas?

En efecto, ¿cómo fue que un grupo de comerciantes, artesanos y profesionales se reconvirtieron en capitalistas agrarios? La respuesta a esta pregunta está en las prácticas encarnadas y cotidianas de la servidumbre por

[19] Véase López Reyes 2005 sobre este momento en Yajalón.

[20] Le debo a Jan Rus esta observación.

deudas en las fincas, prácticas que literalmente hicieron de los ladinos figuras paternas y súbditos a los indios leales de las fincas.

La política cultural de la servidumbre por deudas

Para finales del siglo XIX, por lo menos la mitad de los cabezas de familia indígenas en el departamento de Chilón estaban vinculados a las fincas como trabajadores residentes en servidumbre por deudas (Rus 2003). Un censo de 1904 de fincas con cultivos de caña y maíz en los alrededores de Sitalá reportaba una gama de «poblaciones en servidumbre», desde 15 cabezas de familia en Tulaquil (200 hectáreas) hasta 133 en Zapacuná (300 hectáreas).[21] Las «reformas» liberales del siglo XIX obligaron a los trabajadores residentes —llamados peones acasillados o baldíos— a «librarse» por la fuerza de sus tierras, intercambiando su trabajo (junto con el trabajo no remunerado de sus familias) por salarios mínimos y el derecho a cultivar una parcela de terreno en la finca. Conforme a prácticas consuetudinarias, los peones trabajaban cada semana dos o tres días para el terrateniente y dos o tres atendiendo sus propios cultivos. El séptimo día los trabajadores y sus familias contribuían «voluntariamente» con trabajo gratuito —la faena o fajina— al mantenimiento general de la finca. Lo normal era que los hombres repararan caminos y construcciones, cortaran leña o compusieran maquinaria, en tanto que las mujeres y los niños lavaban la ropa, cocinaban y hacían la limpieza de la casa grande.[22]

[21] «Estado de Chiapas, Departamento de Chilón, Municipio de Sitalá, Padrón del Número de Contribuyentes de este Pueblo, Año de 1904», (s.f.), en AMS.

[22] Esta descripción proviene de entrevistas con propietarios y campesinos. Un acuerdo informal entre patrón y peón que, por razones desconocidas, llegó a convertirse en texto escrito confirma el panorama general. En el documento firmado por el propietario de Tulaquil, José Morales Abarca, y marcado con la huella dactilar de Juan López Pérez, los dos acordaron que «Morales Abarca ofrece al peon Juan López terreno para que trabaje sus labores de agricultura durante el presente año agricola no cobrandole a este ni un solo centavo de arrendamiento, siempre y cuando de cumplimiento a lo convenido trabajando tres dias semanales pagandole el salario convenido dando tambien su menor hija de ocho años de



Trabajador indígena secando granos de café en el patio de una finca de ladinos, primavera 2001 [fotografía tomada por del autor].

Excepto por este trabajo «voluntario», los cabezas de familia, gracias a las reformas laborales liberales, eran aparentemente trabajadores asalariados capitalistas que ganaban entre 50 centavos y un peso por día de trabajo en la finca. No obstante, el acceso a la tierra servía como el principal incentivo para los trabajadores. Los salarios, ordenados por el estado, en casi todos los casos regresaban de inmediato a los bolsillos de los propietarios cuando aquellos compraban artículos básicos en la tienda de raya de la finca, o en una variación regional específica de esta. Aunque las tiendas de raya existían supuestamente para proveer a los trabajadores de ropa, semillas, herramientas, medicinas y otras mercancías que no se producían en la finca, en la práctica lo que esas tiendas hacían principalmente era traficar con el aguardiente. Como Oscar Franz, antiguo dueño de la finca Verapaz,

edad, Antonia López, para que me ayude con la atencion de un niño en la casa [*sic*]»: «Acta levantada entre José Morales Abarca y Juan López Pérez», 11 de mayo, 1962, en AMS.

recordaba de los años 1930 y 1940: «En aquellos tiempos el patrón vendía mucho aguardiente… los sábados, después de la faena a las cinco o seis de la tarde —era una larga jornada de trabajo— el patrón les vendía aguardiente y ellos se emborrachaban y así es como sus deudas crecían y crecían».

Registradas informalmente con muescas en un palo de madera o con marcas de control —rayas— en un pedazo arrugado de papel, las deudas perseguían a los trabajadores toda la vida y las heredaban sus hijos. Solían ser bastante cuantiosas. Las de los peones iban desde el equivalente a un mes de salario hasta lo de más de un año. Por ejemplo, en 1949, un trabajador de 50 años había acumulado una deuda de 200 pesos —dinero suficiente para comprar una finca de 100 hectáreas en aquel tiempo—.[23] En realidad, los inventarios realizados después de la muerte de los propietarios indican que las deudas de los trabajadores eran uno de sus bienes más importantes, que representaban de 10% a 30% del valor total.[24] En un testimonio vívido del valor de la deuda de un trabajador, un propietario siguió personalmente las huellas de uno, fugitivo, a lo largo de 100 accidentados kilómetros hasta Tabasco, con el fin de cobrar 60 pesos que le debía.[25]

El sistema de la servidumbre por deudas daba bastante cabida al abuso. Los propietarios ejercían un control considerable e ilegal sobre la movilidad de los trabajadores; recurrían al castigo corporal sin medida e inflaban las deudas valiéndose de una serie de medios dudosos. Algunos propietarios reclamaban derechos de pernada con las novias en la noche de bodas, y la violación tenía un importante papel para moldear a ambos, patrón y peón, como sujetos (Toledo 2002, Olivera 1980). Es difícil determinar el grado de los abusos en las fincas porque los trabajadores ligados por

[23] «Juzgados», 11 de mayo, 1949, en AMCH. El precio registrado para las ventas de tierras en los años 1940 y 1950 giraba alrededor de 15 pesos por hectárea (basado en una revisión de documentos en RP-Y). Véanse comentarios en el capítulo 7 sobre informes de precios.

[24] Véase, por ejemplo, «Juicio intestamentario de Manuela Cruz de Navarro», 18 de mayo, 1906, o «Segunda acción de juicio intestamentario del Sr. Abraham Ramos», 28 de julio, 1911, en APJ, archivos de Ocosingo.

[25] «Queja del indígena Diego Guzmán contra el alcalde primero de Yajalón», 30 de enero, 1889, APJ, archivos de Ocosingo.

deudas tenían pocas oportunidades de expresar sus quejas por escrito, pero en los raros casos que aparecen en documentos públicos, ofrecen un atisbo de la violencia cotidiana: Doroteo Maldonado fue amarrado a un poste y molido a palos por el administrador de una finca; Sebastián Hernández fue arrastrado por un caballo hasta la muerte; Antonio López fue abatido a tiros por un mayordomo en un desahogo.[26]

Al mismo tiempo, la escasez imperante de mano de obra daba cabida a la resistencia. Aunque las denuncias de abuso por indígenas raras veces llegaban a constar en documentos públicos, los archivos de Chiapas sobreabundan en demandas de terratenientes contra indígenas por cortar cercas, quemar cultivos y matar animales. En 1930, para citar uno de muchos ejemplos, Absalón Zepeda se quejó de que los residentes de la finca, a veces armados con machetes y escopetas, le robaban constantemente maíz, frijol y herramientas.[27] Hay expedientes que también indican que los trabajadores gozaban de cierta libertad para incitar a un terrateniente en contra de otro. Por ejemplo, en un caso de 1876, los trabajadores se desplazaron en masa de una finca a otra porque «no [podían] ya sufrir los maltratos que recibía[n]», y para los años 1940 huir de una finca a otra se había convertido evidentemente en una clara táctica de resistencia.[28] Los trabajadores que optaban por la huida no se libraban de la deuda —que se transfería al libro de contabilidad del nuevo propietario— pero se supone que ganaban algún beneficio en sus nuevas condiciones.

A pesar del abuso de los terratenientes y de la resistencia de los peones, la servidumbre por deudas fue una base coherente para la producción agraria que persistió desde los años 1880 hasta los años 1980. Como

[26] «Diligencias practicadas contra Porfirio Bautista por maltrato a Doroteo Maldonado», 29 de noviembre, 1897; «Contra Rodolfo Cristo por homicidio», 4 de febrero, 1908; «Contra el señor Fco. Solano por heridas a Antonio López», 9 de septiembre, 1899, APJ, archivos de Ocosingo. En todos los casos de abuso que descubrí, los funcionarios judiciales o exoneraban al supuesto perpetrador o emitían órdenes de arresto que no se llevaban a cabo.

[27] «Juicio por el robo de maíz», 30 de noviembre, 1930, APJ, archivos de Ocosingo.

[28] «Libro de comunicaciones del juzgado», 10 de febrero, 1876 en APJ, expedientes de Ocosingo; «Juzgados», 11 de mayo, 1949, 27 de agosto, 1951; 10 de octubre, 1951; 19 de octubre, 1951; 18 de noviembre, 1951.

sistema de relaciones sociales en las fincas, la servidumbre por deudas en Chilón seguía un patrón común. En efecto, a finales del siglo XIX la agricultura finquera comenzó a desarrollarse de acuerdo con líneas sumamente similares en todo el mundo, desde el delta del Nilo hasta el Elba, desde la isla de Sicilia hasta las montañas de Chile (Richards 1979). Pese a las enormes diferencias geográficas, estas fincas compartían un modelo relativamente análogo de relaciones laborales. Cualquiera que sea el nombre que reciba, este sistema se convirtió en lo que Karl Marx denominó «rentas en trabajo». Marx observó que en esas fincas, «el productor directo trabaja una parte de la semana con instrumentos (arado, ganado de labor, etc.) que de hecho o jurídicamente son de su pertenencia, la tierra que de hecho se halla en su poder, y el resto de la semana la finca del terrateniente, para el terrateniente, sin retribución alguna» (Marx 1982:731).

La tenencia de la tierra «real» o «legal» de los productores campesinos era con frecuencia solo un derecho de usufructo, y en Chiapas, como hemos visto, los peones recibían un salario simbólico junto con el acceso a la tierra. No obstante, los elementos básicos siguen siendo constantes: el acceso a la tierra a cambio de trabajo, y el trabajo para uno mismo y el trabajo para el señor estaban separados en el tiempo y en el espacio.[29] El sistema funcionaba bien para los terratenientes de Chilón, cuyo control sobre la tierra potenciaba virtualmente trabajo gratuito ligado a las fincas mediante coerción, deudas y lazos más sutiles de lealtad.

En su trabajo sobre el Yucatán de la época de la Revolución, los historiadores Allen Wells y Gilbert Joseph (1996) ofrecen uno de los ensayos más sutiles que existen sobre la política cultural de las fincas mexicanas con el sistema de renta-trabajo. Partiendo de estudios previos de este tipo de fincas, que normalmente concebían el poder como algo monopolizado por los terratenientes y ejercido sobre los trabajadores como un garrote, Wells y Joseph ponen de manifiesto el modo mucho más disperso de operar el poder en las fincas de henequén, que funcionaban como tecnologías

[29] En oposición a un sistema de «renta en productos» o «en especie», en el que los campesinos intercambian productos por el acceso a la tierra, y el trabajo para ellos mismos y para el terrateniente no están separados en el tiempo y en el espacio (Marx 1982:736).

espaciales de poder disciplinario que conformaban a los trabajadores como sujetos —por medio del aislamiento estratificado, la coerción y la provisión de seguridad—. Las fincas de caña y café de Chilón modelaban a sujetos por medio del aislamiento estratificado, la doble coerción de las deudas y el alcoholismo, y el paternalismo. La redenominación que yo hago de la tercera categoría de Wells y Joseph señala una diferencia importante entre nosotros: a mí me interesa no solo cómo se conformó a los peones como sujetos, sino también cómo las relaciones sociales en las fincas crearon a los terratenientes como sujetos, en particular por medio de las maniobras del paternalismo.[30]

Aislamiento estratificado

En 1898, elites no identificadas procedentes del centro-norte de Chiapas ofrecieron al gobernador Francisco León un soborno de 30 000 pesos para que cancelara el proyecto de construcción de una carretera que hubiera conectado las fincas de café y caña de azúcar de la región con mercados y puertos distantes. Más tarde el mismo año, León se quejaba con Porfirio Díaz de que el aislamiento geográfico del centro-norte de Chiapas permitía que los terratenientes y comerciantes prácticamente esclavizaran a la población indígena. Con mano de obra esencialmente gratuita en las fincas y transporte de carga proporcionado por cargadores indígenas, que costaba menos que mantener a mulas, los terratenientes y comerciantes no tenían ninguna razón para invertir en la productividad.[31] León, y otros gobernadores antes que él, acometieron este aislamiento al construir carreteras con la esperanza de que la infraestructura física canalizara los recursos a partes más productivas del estado, liberando mano de obra para las plantaciones

[30] Para otros debates clásicos del peonaje por deudas en México, véase Nickel 1997, Knight 1986, Katz 1976, 1974.

[31] Francisco León a Porfirio Díaz, 20 de diciembre, 1898, en CGDP, rol 156/XXII, 17 495. León sostiene que los cargadores indígenas necesitan menos supervisión, atención y alimentación que las mulas. Además, si una mula muere o queda incapacitada, los comerciantes pierden, pero la pérdida de un indígena no cuesta nada al comerciante.

en la costa. Estos esfuerzos se toparon con una fuerte oposición y tuvieron que pasar décadas para conectar efectivamente el centro-norte de Chiapas con el resto del estado. Ya adentrados los años 1960, la mayoría de los terratenientes y comerciantes en Chilón dependían de avionetas para trasladar provisiones y cultivos dentro y fuera de la región.

El aislamiento físico fue solo uno de los modos y parámetros con los que la producción del espacio delimitado se articuló con la hegemonía terrateniente. Más de 100 años después de que León se quejara a Porfirio Díaz sobre el aislamiento de Chilón, otro Díaz, un antiguo terrateniente de Guaquitepec, sintetizó la mayor transformación de las relaciones finqueras que tuvo lugar en un siglo. «Antes, los peones estaban *dentro* de la finca», me dijo, acentuando «dentro» con un gesto en consonancia. «Ahora», declaró abriendo sus brazos de par en par, «ya no están dentro de la finca. Viven fuera de la finca, y solo llegan a trabajar si se les da la gana». En el más simple de los términos posibles, Díaz dio en el clavo del trastorno espacial que sufría la hegemonía terrateniente. Durante más de un siglo, los terratenientes en Chilón lucharon contra un sinnúmero de obstáculos para mantener una frontera tajante entre dentro y fuera, y trabajaron para asegurarse de que los peones quedaran dentro.

Más allá de los esfuerzos por garantizar el aislamiento de la región, este proyecto espacial funcionaba de manera más inmediata a nivel del cuerpo individual. «Los peones», como me recordó el antiguo dueño de la finca Verapaz, «no tenían derecho a abandonar la finca. Si se iban o huían, el dueño enviaba a personas que los persiguieran o bien otros dueños los atrapaban y los enviaban de vuelta». Bajo las reformas liberales en materia laboral, los peones tenían, por supuesto, el derecho *legal* a irse, pero este normalmente se les negaba en el funcionamiento cotidiano de las fincas. Hasta trabajadores de confianza podían recibir castigos severos si trataban de abandonar a sus patrones sin permiso. Cuando un caporal intentó dejar San José Inapilá en 1922, el patrón lo ató de pies y manos, amenazándolo con darle un tiro, y retuvo a su hijo como rehén hasta que el juez local intervino en favor del caporal. Los peones indígenas privados de derechos no tenían tanta suerte. Los propietarios controlaban estrechamente el tránsito

en los caminos que atravesaban sus propiedades, seguían los rastros de trabajadores que habían huido y en un caso registrado en 1911 despojaron a un antiguo peón de todas sus pertenencias, aun cuando el hombre había abandonado la finca legalmente. Los terratenientes mantenían cárceles informales en las fincas y encerraban en ellos a los trabajadores que se escapaban o que amenazaban con hacerlo. Una mujer que había tratado de huir del servicio en casa de un terrateniente fue violada y después obligada a continuar el trabajo doméstico, con su familia observándola.[32]

En todas las relaciones finqueras —en realidad como resultado directo del funcionamiento espacial de las relaciones sociales en la finca— los propietarios se interponían como el nexo único o central entre el adentro y el afuera. Este sistema operaba mediante el comercio, como explicó Israel Gutiérrez: «Los peones no eran para nada libres. Necesitaban el permiso del patrón para salir. O, por ejemplo, si tenían un cerdo al que habían engordado y querían venderlo, tenían que pagar una alcabala, un impuesto al patrón para el permiso de vender el cerdo». De este modo, los dueños se interponían entre los peones y los vendedores itinerantes como el joven Wenceslao López. Los patrones también mediaban entre el mundo exterior y los peones mediante la institución de la tienda de raya.

Por otro lado, se aseguraban de impedir activamente que llegaran a los peones las ideas que venían de fuera. En 1861, Desiré Charnay (1956) observó que la población indígena de Chilón era particularmente obediente a la iglesia. Los terratenientes mediaban hábilmente en la relación de los peones con curas itinerantes para que esta obediencia se extendiera también a las relaciones en la finca. El padre Mardonio Morales, un jesuita que ayudó a difundir la teología de la liberación en Chilón, recordaba que en sus primeras visitas a las fincas en los años 1950, los dueños intercedían en los intercambios que él tenía con los trabajadores: «La primera vez que fui a una de las fincas, cuando yo era muy nuevo, fui a San Juan Cantejaj. Los

[32] «Libro de Juzgados de Sitalá», 13 de mayo, 1922, en AMS; «Queja del indígena Diego Guzmán», 30 de enero, 1889; Agente Municipal en Bachajón a Agente Municipal en Sitalá, 7 de enero, 1911, y Prof. Mariano L. Domínguez a Agente del Ministerio Público, 21 de agosto, 1936, ambos en APJ, expedientes de Ocosingo.

indígenas me invitaron a que fuera a decir misa, pero el finquero me envió su caballo para que me llevara y me recibió con una comida muy buena en la casa grande. Ni siquiera vi a los indígenas hasta el día siguiente, cuando dije misa y bauticé. Como yo todavía no hablaba tseltal, el dueño me tradujo para mí».

Evidentemente, como lo puso en claro el padre Morales, esta mediación operaba no solo creando barreras tangibles entre curas y peones, sino que también influía en las propias interpretaciones de los trabajadores de la finca sobre su relación (inferior) con el mundo exterior: «Cuando les dije a los indígenas que iba a ir a visitarlos sin que lo supiera el finquero, se preocuparon mucho y dijeron, 'Pero nosotros no tenemos caballos para traerlo' y les dije, 'Yo siempre he caminado, no necesito caballos'. Y ellos dijeron, 'Pero no sabemos qué come usted', y yo les dije: 'Con unos frijolitos me contento', y entonces ellos finalmente dijeron, '¿Pero dónde va a dormir? Nosotros no tenemos camas', y yo les dije que dormiría en el piso. Entonces es cuando empezamos a crear *hermitas* —así era como llamábamos a nuestras pequeñas comunidades— y capacitamos a catequistas». Así pues, no fue solo la ruptura por parte del cura de la distancia física entre el adentro y el afuera, sino también su transgresión de geografías cognitivas profundamente arraigadas lo que en verdad desafió la hegemonía terrateniente; fue, en palabras de Morales, «dinamita pura» (Human Rights Watch 1997:3).[33]

No obstante estos retos, el sistema continuó modelando a sujetos dóciles y dependientes hasta muy entrada la segunda mitad del siglo XX. Pero si bien el aislamiento moldeaba a los sujetos, podía hacerlo solo en conjunción con dos rasgos adicionales de las relaciones sociales en las fincas: la pareja deuda-alcoholismo y las manipulaciones abigarradas del paternalismo.

[33] En el capítulo 6 hay una extensa discusión de estos retos a las fincas. Otros actores, incluidos los maestros rurales, también desafiaron estas fronteras. El proceso se estudia en el capítulo 5.

La deuda, el alcohol y el ejercicio de la dominación

En su estudio sobre las mujeres y el alcohol en los Altos de Chiapas, Christine Eber (1995:30) cita a un terrateniente que dice: «Quítale el aguardiente al indio, y ¿qué pasará con el café? Las plantaciones de café funcionan con aguardiente, como un automóvil funciona con gasolina». Esta percepción habla con fuerza de la importancia del aguardiente en las relaciones laborales. Las ventas de alcohol, como lo observa Eber con razón, eran el fundamento sobre el que se asentaba la deuda y se forzaba a la fuerza de trabajo. Pero esta declaración también hubiera podido ser: «Quítale el aguardiente al indio, y ¿qué sucedería con las categorías de peón y patrón?» La existencia misma de peones y patrones como sujetos descansaba históricamente en los mecanismos bastante burdos de la ebriedad. Aun en la actualidad, mucho después de haber extirpado los sistemas formales de servidumbre por deudas, estos mecanismos siguen definiendo a las identidades indígena y ladina.

El alcoholismo entre los indígenas era una presencia constante que atravesaba tambaleándose mi trabajo de campo —no los hígados machacados por la pobreza y poseídos por el diablo que Eber evoca con tanta claridad, ni los significados culturales del alcoholismo encarnados en las comunidades indígenas, sino el «alcoholismo indígena» como un discurso utilizado en la construcción y actuación de la ladinidad—. Tanto si era tratando de llevarme a ridiculizar despiadadamente a un trabajador indígena que había llegado a pedir dinero para «un traguito más», como pontificándome sobre las dificultades de encontrar «buenos trabajadores», aleccionarme sobre los matices del alcoholismo indígena fue una de las formas centrales en que los ladinos me enseñaron cómo ser ladino. Ni una sola vez, durante todo el tiempo que pasé en Chilón, cuando al ir en compañía de un ladino pasábamos por delante de un indígena obviamente ebrio —ya sea tendido a un lado de la calle o en plena calle— el ladino dejó de llamarme la atención y señalar directamente el espectáculo. Sin embargo, rara fue la vez que vi que los terratenientes se negaran a peticiones de los trabajadores de un adelanto para comprar el siguiente trago.

El ritual era el siguiente: un terrateniente llega al restaurante Susy en su Dodge Ram azul. Llega a comer y ha dado aventón a tres trabajadores a la ciudad. Dos de ellos —una pareja de guatemaltecos— se apresuran a ir a comprar víveres juntos. El tercero, un trabajador local de más edad, canoso, borracho y que canturrea, se queda merodeando. Lo inevitable no tarda en llegar. El hombre adopta un tono servil, «Patróóón…» Sigue en tseltal, y el significado de sus palabras es obvio. Riéndose, el terrateniente traduce para mí, para todos lo que están escuchando: «Está pidiendo dinero. Ya sabemos todos para qué. No debería dárselo. Se lo tomará hasta el último centavo». En tseltal, paternal y severo: «*Mayuk* 'no puedo hacerlo'».

El trabajador, «Ay, patrón, por favorcito…»

Se trata de una producción escenificada, con un guión tan antiguo como el café en Chilón. El resultado está predeterminado. Una vez que el terrateniente ha sermoneado bastante y el peón se ha rebajado lo suficiente, una vez que los papeles de dominación y subordinación han sido reafirmados apropiadamente, 20 pesos —más de una jornada laboral— cambian de mano y el hombre se escabulle.[34]

Los ladinos tal vez perciban el alcoholismo como un elemento destructor de las comunidades indígenas y la causa principal de su pobreza, pero no remontan sus orígenes y fuentes a los ladinos. La mayoría de los ladinos se niega categóricamente a extraer conexiones entre la evolución histórica en común de la prosperidad ladina y el alcoholismo indígena, pero las conexiones no pueden ser más claras. Los terratenientes, deseosos de asegurarse una fuerza de trabajo confiable para sus cafetales de trabajo intensivo, tuvieron muchas maneras de crear nuevos trabajadores con servidumbre por deudas y alentar a los existentes a endeudarse más. Los terratenientes hacían responsables económicamente a los trabajadores de daños a la propiedad que tenían a su cargo, añadían las deudas de padres difuntos a las de sus hijos, y convertían a los trabajadores estacionales en

[34] En aras de la justicia y complejidad debe decirse que existen excepciones a este patrón. Roberto Trujillo, por ejemplo, a veces paga los salarios de los trabajadores hombres directamente a sus esposas para que el dinero no desaparezca convertido en botella.

permanentes cobrándoles precios altos por los alimentos.[35] El alcohol, no obstante, era más rápido.

A medida que la producción de café se extendía por la región, las fincas combinaron la producción de azúcar y café en un complejo caña-café sin fisuras en el que el aguardiente destilado del primer cultivo lubricaba la producción del segundo. Otro terrateniente —lo bastante mayor para recordar los años 1930 y 1940— fue brutalmente sincero cuando marcó las tardes de los sábados, después de haber terminado la faena, como el momento crucial en la producción de la servidumbre por deudas: «El propietario invitaba a los trabajadores a un trago el sábado, supuestamente para agradecerles la semana de trabajo, pero en realidad era para que siguieran tomando». Cada botella que seguía era debidamente sumada a las deudas de los trabajadores.

Si estallaban peleas y conducta alborotadora entre los bebedores indígenas, tanto mejor, en especial si eran trabajadores temporales que todavía no estaban ligados a la finca por deudas. Para los patrones deseosos de aumentar su fuerza de trabajo endeudada, la delincuencia era más una bendición que un problema; los delitos cometidos bajo el influjo del alcohol eran una fuente conveniente de las deudas originales de los trabajadores. Numerosos casos que se extienden a lo largo de más de 50 años siguen un patrón notablemente similar: un trabajador indígena sin deudas, con todos los sentidos obnubilados por el aguardiente, entra tambaleándose en pleito con un vecino. Centellean los machetes, y uno de los hombres despierta de su estupor en la cárcel municipal. Las autoridades imponen una multa imposible por alta y lo retienen hasta que un terrateniente local paga la sanción: «Puesto en libertad» de este modo, el hombre y su familia pasan a estar obligados legalmente a trabajar por su benefactor hasta que la deuda se salde en su totalidad; en otras palabras, lo más probable es que por el resto de sus días.[36]

[35] En 1949, por ejemplo, un trabajador itinerante fue obligado a laborar en la finca de José Arévalo hasta que saldó una deuda de 80 pesos en la que había incurrido por la compra de alimentos mientras trabajaba en dos fincas: «Juzgados», 13 de agosto, 1949, en AMCH.

[36] Y tal vez también el resto de los días de sus hijos. Hay varios casos que informan que los hijos heredaban las deudas de sus padres. Se sabe de un caso en que el terrateniente mandó buscar a una mujer indígena y a su hermana para que pagaran con trabajo las deudas que dejó

Cuando un indígena no había cometido ningún delito, el terrateniente podía inventarle alguno. En un caso muy elocuente de 1896, las investigaciones de un tribunal de distrito en Ocosingo encontraron que Juvencio Gallegos, propietario de la finca Chapapuil en Chilón, coludido con autoridades municipales falsificó un documento en el que dos indígenas sin deudas «confesaron» haber matado al caballo de Gallegos. Al final, el tribunal de Ocosingo falló que no había ninguna razón para retener ni acusar a los dos campesinos, pero los multaron de todos modos con 50 pesos a cada uno. Unas semanas después, un segundo terrateniente, José Lara, pagó sus multas y los acogió a ambos como trabajadores en su finca.[37]

Las tiendas de raya también desempeñaban un papel central en el ciclo de la deuda cada vez más cuantiosa inducida por el alcohol. Si bien algunas fincas de la región eran lo bastante grandes para pagar a los trabajadores con vales canjeables solo en sus tiendas de raya,[38] la mayoría hacía arreglos especiales con algún comerciante de una población cercana. Miguel Utrilla, cuya familia regentaba una cantina, una tienda, el alambique legal más importante de la región y por lo menos dos grandes fincas, explicó cómo funcionaba este sistema:

> Las tiendas de raya se encontraban solo en las fincas de extranjeros. […] Los rancheros mestizos no eran lo bastante grandes para tener tiendas de raya. […] El terrateniente mestizo no tenía suficiente dinero para pagar salarios y los campesinos siempre necesitaban dinero para comprar artículos de primera necesidad, entonces iban al patrón a pedirle dinero para medicinas y otras cosas. Antes de las fiestas de julio y diciembre, los indígenas querían tela para hacerse ropa nueva. Así que mi abuelo hizo un arreglo con un comerciante en Yajalón para conseguir tela, medicinas, lo que fuera para los trabajadores indígenas a

el difunto suegro de la mujer. Prof. Mariano L. Domínguez al Agente del Ministerio Público, 21 de agosto, 1936, en APJ, expedientes de Ocosingo.

[37] «Diligencias practicadas en contra de los indígenas Jerónimo y Miguel Hernández por la muerte de un caballo», 23 de abril, 1896, APJ, expedientes de Ocosingo.

[38] Según Israel Gutiérrez, muchas de las fincas perfiladas en los últimos capítulos, incluidas San Antonio Bulujib, Golonchán y Picoté, pagaron con vales canjeables solo en la finca hasta finales de los años 1940. Oscar Franz confirmó que Picoté operaba una tienda de raya todavía en los años 1980.

> cambio de la promesa de café después de la cosecha. Los indígenas conseguían sus provisiones a cambio de la promesa de trabajar para el patrón, el terrateniente obtenía una mano de obra segura, y el comerciante obtenía un mercado seguro y suministro de café.

Aunque la descripción de Utrilla hace hincapié en artículos de primera necesidad benignos —tela y medicinas—, la fortuna de su familia estaba basada en el alcohol, y tanto si la tienda de raya entraba en escena como si no, el alcohol representaba la mayor parte de las ventas de un terrateniente a los campesinos. Como lo observó el padre Morales, los terratenientes eran «siempre compradores y vendedores, *compraventistas,* compraban el trabajo de los campesinos y les vendían alcohol».

Si los efectos embriagantes del alcohol en las interacciones económicas terrateniente-indígena son bastante obvios, la influencia más sutil sobre otros aspectos de las relaciones sociales no es menos importante. El alcohol no solo era una vía de coacción para obtener fuerza laboral mediante los rigores legales de la deuda, sino que también moldeaba sujetos gobernables, cuyo carácter, voluntad y aspiraciones se vinculaban al éxito de la finca. Huelga decir que el alcoholismo rampante hizo que el aprovisionamiento continuo de aguardiente produjera una fuerza de trabajo segura. A veces el alcohol resultaba ser demasiado efectivo para moldear sujetos dóciles, creando trabajadores ebrios a los que era difícil sacar provecho. Además, aunque la adicción los obligaba a dirigirse al patrón para pedirle dinero, esa práctica podía hacer que el escaso efectivo en la cartera de los patrones se convirtiera en deudas que probablemente no iban a ser saldadas, un fenómeno que los terratenientes desaprueban hoy como lo hicieron ya en 1914 (Gremio de Agricultores 1914).

Las organizaciones alineadas contra los terratenientes no tardaron en darse cuenta de esa capacidad del alcohol para producir sumisión. Según el padre Morales, no se podía despertar la conciencia en las comunidades indígenas sin romper primero las trabas del alcohol. No es sorprendente que hoy las comunidades organizadas en torno a la teología católica de la liberación o el EZLN prohíban a los militantes beberlo.

Las relaciones disciplinarias del alcoholismo indígena produjeron sujetos que carecían de autonomía, físicamente adictos y mentalmente subordinados, es decir, que en definitiva dependían de sus patrones. De modo que, aun en los casos en que el alcohol no producía sujetos dóciles y generaba en cambio borrachines charlatanes e inmanejables con tendencia a lesionarse y a duelos de machete que abundan en las actas del juzgado de Chilón, servía para reforzar el sentido de superioridad de los patrones, al brindarles una oportunidad más de reforzar ritualmente su dominio. Extrapolando a partir de las relaciones contemporáneas, se podrían agregar las manifestaciones paternalistas seguramente desplegadas con frecuencia por los patrones y documentadas en expedientes de archivo, cuando los terratenientes aplacaban peleas entre trabajadores y sacaban a peones ebrios de la cárcel. Como lo explica con orgullo Jorge Martínez, «La relación entre [los terratenientes] y los trabajadores era buena. Era una relación patriarcal. Empleo esta palabra en lugar de cacique porque esta última tiene malas connotaciones […] El patriarca era juez, abogado y protector. Cualquier problema que tuvieran los indígenas, se lo llevaban al patrón para que lo resolviera; problemas familiares, en especial problemas que venían del alcohol, que era la causa principal de su pobreza». En suma, el consumo de alcohol modelaba y era modelado por las relaciones sociales formadas bajo el paternalismo, pero esas relaciones nunca son simples.

Paternalismo

Más que una lógica económica, los terratenientes recurren a discursos culturales de paternalismo para explicar cómo funcionan las relaciones laborales en sus fincas. Para los terratenientes y muchos de los trabajadores indígenas, la finca es una familia claramente construida, con papeles establecidos asignados a cada uno de sus miembros. Los propietarios se hacen pasar por padres y actúan en consonancia. Ellos toman muy en serio su responsabilidad paterna de guardar el justo equilibro entre disciplina y perdón, afecto y fuerza. De este modo, los terratenientes reconvierten con buenos resultados los beneficios de la servidumbre por deudas en cargas.

En 1914, terratenientes de los Altos en su respuesta a la prohibición hecha por la Revolución de la servidumbre por deudas, escribieron: «El amo esclaviza a su sirviente, porque el contrato le obliga a darle casa… terreno… montes para explotar sus productos naturales… ropa… y cuidado de la salud de su familia» (Gremio de Agricultores 1914:7).

Estas voces resuenan en el presente, aun cuando en la actualidad la mayoría de los trabajadores viven en tierras ejidales y no en fincas.[39] El paternalismo, o la noción de que las relaciones sociales en la finca se atienen a un contrato implícito de responsabilidades recíprocas, sigue figurando como la justificación central de las relaciones entre terratenientes e indígenas. Tampoco es una noción cínica del todo. El paternalismo proporcionó, y a veces todavía proporciona, a los trabajadores diversas formas de seguridad (cf. Wells y Joseph 1996). Aunque los terratenientes se solían beneficiar de su «benevolencia», los adelantos de la paga y los préstamos de emergencia formaban una red de seguridad fundamental para los trabajadores, y estas salvaguardas se extendían también a otros terrenos. Numerosos casos en los tribunales indican que los trabajadores finqueros buscaban con frecuencia refugio en la casa grande durante incidentes violentos, apelando a los patrones para protección frente a capataces abusivos o grupos indígenas rivales. Al menos en los casos documentados, los propietarios solían cumplir y con sus actos reforzaban su lugar a la cabeza de la familia finquera. Pero la «seguridad» nunca es simple. Lo que es absolutamente central *no* es si los dueños proporcionaban seguridad por altruismo (como a veces ellos reclaman) o por motivos más egoístas (como muchos extraños aducen). Lo que yo espero clarificar son más bien los múltiples efectos del paternalismo en la formación de los sujetos, algo que está completamente ausente en los debates sobre la intención.

En julio de 1998, Gustavo Utrilla me recibió en su sala y fuimos atendidos por una de sus hijas que nos sirvió un café fuerte mientras platicábamos. De joven, Utrilla estudió en el prestigioso Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México, y después regresó a Yajalón en 1976, para

[39] Los ejidos se estudian en el capítulo 6.

hacerse cargo de la finca de la familia. Utrilla se expresaba con claridad y estaba orgulloso y apasionado de su trabajo, su familia y sus relaciones con los indígenas. A pesar de todos los problemas que habían tensado las relaciones ladino-indígenas desde 1994, me dijo, él mantiene un vínculo estrecho con sus trabajadores, antiguos y actuales. Hasta aquellos que ahora viven en ejidos independientes le siguen invitando a beber pozol con ellos. Como su padre antes que él, era padrino de muchos de los hijos de sus trabajadores, y justo la semana anterior había patrocinado una de sus fiestas escolares de graduación.

Cuando me disponía a pedirle que abundara en este punto, sonó el timbre de la puerta. De pie en el patio había un tseltal y su hijo con aspecto fatigado. Utrilla los recibió desde el escalón de la puerta de entrada, hablando tseltal y gesticulando al niño. El tono era de preocupación. Utrilla no tardó en entrar en la casa y regresar con 150 pesos para el hombre. Era una suma considerable, más del salario de una semana, y al hombre se le iluminó el rostro con una sonrisa de alivio, forcejeando con su hijo para que diera las gracias a don Gustavo. En cuanto los dos se fueron, Utrilla me explicó: el hombre era un trabajador temporal que cultivaba su propia parcela ejidal. El hijo estaba enfermo —un trastorno estomacal indefinido para el que había servido de ayuda el médico del gobierno— y el dinero era un préstamo para poder pagar a un médico particular. El hombre lo avaló prometiendo a Utrilla parte de su cosecha de maíz, que se esperaba para enero, con unos seis meses de antelación. Ni una sola palabra del acuerdo se puso por escrito, pero Utrilla confiaba en que le pagaría.

La historia se puede leer en muchos registros. Es probable que Utrilla se fuera a beneficiar —a lo mejor bastante— volviendo a vender el maíz del pago. Como me contó un representante forastero de una compañía multinacional cafetalera, los terratenientes locales que también prueban suerte como coyotes o intermediarios comerciales pueden eliminar de la competencia a los compradores corporativos recurriendo a fuertes redes de paternalismo, compadrazgo, y reciprocidad en las comunidades indígenas. En otro nivel, Utrilla ha hecho todo lo que ha podido para asegurarse de que este trabajador seguirá abandonando a su parcela en la época de

cosecha para pizcar el café en la finca de Utrilla. Esta lealtad se puede extender aún más: muchos de los propietarios con los que hablé esperaban que en caso necesario sus trabajadores protegerían las propiedades de invasiones, y numerosos casos que datan del siglo XIX indican que los hombres de confianza en las fincas servían como pistoleros encargados de imponer disciplina. Todos los propietarios contaban regularmente con trabajadores leales para dar aviso si se avecinaba alguna violencia. En otro nivel, Utrilla, actuando instrumentalmente o no, proporciona una red de seguridad a sus trabajadores, como lo atestiguaba la gratitud en el rostro de aquel hombre. Por último, en el nivel más profundo, independientemente de la interpretación del suceso en la conciencia de estos individuos, al menos alguna parte de sus respectivas identidades quedó marcada por esta promulgación y reafirmación ritual de la díada padre-hijo, patrón-peón.

Operando en todos estos niveles y más, el paternalismo ha desempeñado un papel central en la configuración de las relaciones sociales durante más de un siglo. El componente más básico de este sistema ha sido siempre la tierra. Con la consolidación del monopolio del control sobre la tierra en Chilón, los terratenientes captaron en efecto la sustancia misma de la seguridad: la subsistencia de los indígenas solo se podía conseguir manteniendo buenas relaciones con sus patrones. De la manera más insensata y solapada posible (dado que la tierra acababa de ser arrancada al control de los indígenas), los terratenientes presentaron el acceso a la tierra como un regalo paternal a «el indio apático… [y] ebrio» (Gremio de Agricultores 1914:19), así como un intercambio económico.

Al mismo tiempo, los propietarios daban adelantos salariales, medicina, ropa y alcohol a los trabajadores con aplomo paternal, borrando las distinciones entre regalo y préstamo, generosidad y usura. Estos lazos —en especial los fuertes lazos de compadrazgo— se transmitían con frecuencia de generación en generación, lo mismo que las deudas de los peones (Olivera 1980). Por ejemplo, Roberto Trujillo sigue dando apoyo monetario ocasional a uno de los ahijados de su padre, ahora septuagenario. Pero el paternalismo puede tener también efectos inesperados. Como nos lo recuerdan Joseph y Wells (1996): el regalo de un terrateniente puede

interpretarse con facilidad de un modo radicalmente diferente. Joseph y Wells documentan casos de trabajadores indígenas que, al recibir atención médica occidental «generosamente» provista por los administradores de las fincas en Yucatán, experimentaban ese trato como tortura sádica.

Una de las descripciones más evocadoras de la naturaleza inestable del paternalismo viene de la ficción, como tantos otros retratos sutiles de las relaciones sociales en los latifundios. En *Guerra y paz,* León Tolstoi, con su mirada incomparable para descubrir matices en las relaciones patrón-campesino, describe el campesinado ruso como «desconcertante». Con el ejército de Napoleón marchando hacia la finca Bogucharovo, la hija del dueño, la princesa María, se entera del hambre y la ruina que la guerra ha desencadenado en sus siervos. Desgarrada por el pesar, ordena impulsivamente a su mayordomo que distribuya todo el cereal almacenado de la finca entre los campesinos antes de que caiga en manos de los franceses. Después de escuchar la orden, los siervos se reunieron furiosos fuera de la casa de la princesa. Confundida, ella piensa que no han entendido su orden y les vuelve a hacer la oferta: tendrán el cereal y pueden incluso seguirla a su finca de Moscú, donde ella les proveerá de vivienda y más alimentos. Los campesinos responden con un silencio sepulcral. Y lentamente empiezan a cantar: «¡Oh sí, un cuento muy artero! Seguirla a la esclavitud. Destruyan sus casas y vengan al cautiverio… ¡Y no les faltará el trigo!, dice ella» (Tolstoi 1996:649).

El gesto magnánimo de la princesa María fracasó totalmente; los campesinos lo interpretan como una maniobra para agobiarlos de deudas. Ella parte a Moscú convencida de que ha presenciado una manifestación más de la necedad de los campesinos. Ambos grupos intuitivamente creen que comprenden al otro. Ambos se equivocan. Mi investigación pasó por muchos momentos semejantes, como lo veremos en los capítulos 8 y 9: los terratenientes descubrían que aquellos campesinos, a quienes creían conocer tan bien, eran en realidad totalmente incomprensibles. Pero en el proceso de tomar conciencia de tales equívocos, terratenientes y campesinos también se fueron formando como sujetos: figuras paternas e indios finqueros.

El régimen liberal y las mediaciones finqueras

> Desde hace tiempo, el gobierno estatal ha percibido la necesidad de poner fin a la servidumbre de los peones endeudados. La humanidad y la economía política, la civilización y la índole de nuestras instituciones lo exigen.
> FRANCISCO LEÓN, gobernador, al presidente Porfirio Díaz, 25 de mayo, 1896.

A pesar de las nostálgicas evocaciones de los terratenientes en lo tocante a la independencia que les proporcionaba su ubicación en la periferia del país, el desarrollo de la producción agraria en Chilón a finales del siglo XIX fue resultado directo de prácticas estatales. La promoción y garantía por parte del gobierno de los cercados de tierras y las empresas cafetaleras hicieron posible ahí la producción agraria. No obstante, las formas que esta producción asumió no fueron siempre las que pretendían los funcionarios gubernamentales. Como veremos, las prácticas que el Estado esperaba que le harían posible la domesticación y subordinación de los terratenientes, irónicamente fortificaron la posición de dominio de estos en el campo.

En el transcurso del siglo XIX, en Chiapas los funcionarios estatales lucharon por racionalizar y controlar a su descendencia más problemática: los terratenientes conservadores atrincherados en el centro y el centro-norte de Chiapas, cuya existencia misma dependía de las leyes liberales agrarias, aunque sus acciones (en particular el control sobre los trabajadores en servidumbre por deudas) eran vistas como amenazantes para el desarrollo progresivo de la agricultura chiapaneca. La abundante investigación sobre este periodo se ha enfocado muy acertadamente en las disputas de alto nivel entre y dentro de las elites, y se ha enfocado ampliamente en las victorias logradas y las derrotas sufridas por campos en competencia.[40] Sin embargo, un acercamiento a micronivel revela que la extensión de gobierno liberal —por medio de censos, estudios de recursos, gravámenes y un sistema legal en expansión— subordinó a los terratenientes de Chilón a una

[40] Véase García de León 1998, Benjamin 1996, Baumann 1985, Hernández 1979.

forma particular de régimen estatal, aun cuando les diera oportunidad de apuntalar su posición como el nexo único entre campo y nación.

A grandes rasgos, en las últimas décadas del siglo XIX, los terratenientes de Chilón se vieron inmersos en una disputa que abarcaba a todo el estado y que oponía a las elites agroexportadoras liberales de las tierras bajas y de la costa contra las elites agrarias conservadoras de los Altos en debates sobre si la población indígena de Chiapas debía seguir en la servidumbre por deudas en las fincas de los Altos o había que liberarla para que trabajara asalariada en las plantaciones cafetaleras de las tierras bajas. Los cafetaleros en las tierras bajas de la región del Soconusco tenían millones de plantas de café que estaban llegando a la madurez después de años de espera, pero no tenían a nadie que recolectara la cosecha. Solo una cosa se interponía entre las elites liberales agroexportadoras y el progreso: aquel sistema retardatario de la servidumbre por deudas. «Ha llegado la hora», escribía el gobernador Francisco León al presidente Díaz en 1898, «de poner fin a la condición increíblemente triste del peón endeudado, porque este es el obstáculo que impide el desarrollo progresista de la agricultura y el nacimiento de las industrias que [la agricultura progresista] genera».[41] Aunque León y otros críticos invocaban la «humanidad» y la «civilización» para condenar «esta monstruosa enfermedad social», los cafetaleros se quejaban de que la servidumbre por deudas desviaba el capital de inversiones más productivas e impedía que se ocupara a la fuerza de trabajo de forma más eficiente (Baumann 1985).

En el transcurso de los años 1890, la legislatura del estado de Chiapas aprobó una serie de leyes dirigidas a limitar el control de la fuerza de trabajo en los Altos. Temerosos de que una abolición demasiado repentina de la servidumbre por deudas fuera a precipitar una gran crisis en el estado, en contrapartida, los legisladores atacaron algunos de los peores abusos del sistema: fueron prohibidos la tortura y el trabajo forzoso, y tras un importante debate en todo el estado en el Congreso Agrario de 1896, se impuso una nueva ley que exigía a los terratenientes registrar las deudas

[41] León a Díaz, 20 de diciembre, 1898, en CGPD, rol 156/XXIII, núm. 17495.

de los trabajadores en la oficina del Jefe Político y limitaba los adelantos de pago al salario de dos meses (Baumann 1985:24). No obstante, incluso estas medidas paliativas encontraron una fuerte resistencia de los terratenientes en los Altos y fue casi imposible imponer su cumplimiento. En definitiva, a pesar de los impactos formativos de las reformas laborales liberales, Chilón salió de todas estas luchas con un sistema modificado, pero aún formidable, de servidumbre por deudas, que en algunos lugares persistió hasta muy avanzados los años 1980. Sin embargo, es importante indicar que aunque los terratenientes de Chilón se resistieron y cooptaron al régimen liberal, no se mantuvieron independientes de los proyectos estatales. Al contrario, se convirtieron en el Estado de diversas maneras, formando y siendo formados a la vez por los mecanismos del régimen estatal.

Los terratenientes de Chilón, como todos los terratenientes en Chiapas, dominaban el gobierno local y estatal, y asignaban los puestos públicos en las presidencias municipales, el congreso, los tribunales y la mayoría de las dependencias. Decir sin embargo que esto se traduce en un aparato estatal subordinado a los intereses de los terratenientes implica un entendimiento relativamente simplista y monolítico tanto de la clase como del estado. Los intereses de los terratenientes no están unificados ni son predecibles, sino que se forman mediante luchas por la hegemonía, luchas que con frecuencia tienen lugar dentro del marco conceptual del propio estado. Más importante aún es que los mecanismos del poder estatal trascienden los intereses de los grupos de funcionarios políticos, operando en cambio (a menudo de forma no intencionada) en múltiples ámbitos, configuradas por diversos programas. Los actores estatales —incuso los actores terrateniente-estado— a veces actuaban de manera que socavaban la defensa que ejercían los terratenientes de los espacios de producción agraria.

Sin embargo, quiero tomar en serio por un momento la noción tan reiterada de que en Chiapas el estado y los terratenientes eran «lo mismo» (véase Benjamin 1996). Con esto no quiero indicar que los intereses del estado y los de los terratenientes se conjugaran a la perfección, sino más bien preguntar: ¿Qué significa cuando ciertos actores son puestos en posición de, casi literalmente, encarnar al estado en un rincón remoto del país,

de ser el agente por medio del que se despliegan las tácticas estatales? Los registros de estudios de recursos, planes de tributación, intentos de imponer el orden en el comercio clandestino del alcohol, y censos de todo tipo —de trabajadores en las fincas, de edificios, de votantes y de cultivos agrícolas— apilados en montones polvorientos asombrosamente altos en los archivos municipales de Chilón y Sitalá atestiguan los esfuerzos del estado por conocer y hacer legible ese rincón apartado del país. Los funcionarios porfirianos querían inventarios de alambiques de aguardiente, cosechas de maíz, casas, árboles útiles y trabajadores finqueros. Exigían reportes sobre las condiciones fitosanitarias de los cafetales y «la altura en metros de cada árbol».[42] Pero sobre todo querían listas de hombres: de electores, contribuyentes, trabajadores y soldados en potencia. Numerosos documentos hablan de intentos en curso de contar, rastrear y gravar a los trabajadores residentes en las fincas. En una época en la que liberar fuerza de trabajo para las plantaciones en la costa era un objetivo central de la intervención del gobierno, los esfuerzos por conocer y controlar a la población de trabajadores agrícolas constituían una amenaza directa para los terratenientes de Chilón. Al mismo tiempo, los funcionarios porfirianos trataron de desafiar la posición de mediadores de los terratenientes extendiendo el alcance de su sistema legal al interior de Chilón y de las fincas. Por ejemplo, una ley de 1849 introdujo ramificaciones de la justicia penal en el reino de la autoridad terrateniente, regulando cuáles eran los delitos que los terratenientes podían castigar directamente (mediante «encierro, cadena o corma [prisión en cepo]») y cuáles las infracciones que se les exigía que remitieran a «la autoridad competente» (De la Peña 1951:356).

Tanto la extensión del cálculo racional como la rendición legal de cuentas pueden verse como un ataque a la hegemonía de los terratenientes. No era, pues, nada raro que estos resistieran con singular alegría. En efecto, una razón importante de que los archivos en Chilón y Sitalá estén repletos de censos, gravámenes y expedientes similares es la pura truculencia de los terratenientes ante estos nuevos requerimientos. En 1901, por

[42] «Circular no. 6», 14 de febrero, 1903, en AMS.

ejemplo, un terrateniente condujo a punta de pistola a dos recaudadores de impuestos fuera de su finca. Cuando funcionarios superiores emitieron acusaciones contra el terrateniente, un médico amigo le ayudó a evadir el arresto extendiéndole un certificado de enajenación mental temporal. En 1888, un funcionario con sede en Ocosingo se quejó al alcalde de Sitalá de que los terratenientes estaban dando muestras de «una apatía extrema en la recaudación de los impuestos [a los trabajadores]».[43]

La resistencia de los terratenientes no es nada fuera de lo común: un episodio más de lejanas escaramuzas en el forcejeo entre los estados y los localismos. Lo que vuelve interesantes y hace que estas enemistades inveteradas del siglo XIX sigan resonando cien años después es que los esfuerzos que hizo el estado para hacer legible y manejable el campo no fueron ni volátiles ni abstractos; se convocó a los propios terratenientes a servir como agentes directos del régimen estatal. Cuando cierto terrateniente condujo a los recaudadores de impuestos fuera de sus tierras, estaba atacando a dos terratenientes vecinos que también fungían como funcionarios gubernamentales. La red del gobierno liberal no se desplegó en el campo. La gente que la puso allí fue precisamente aquella que el estado buscaba convertir en sujetos maleables.

Durante ese periodo, los presidentes municipales, actuando como una especie de asistentes administrativos seleccionados por los propietarios entre sus propias filas, recibían las nuevas políticas públicas del gobierno del estado. Después, por medio de una interminable serie de «circulares» dirigidas a los propietarios de las fincas importantes, los presidentes municipales transmitían las nuevas políticas directamente a los terratenientes para que las aplicaran. Las elites agrarias se convirtieron esencialmente en el estado, con la obligación de llevar a cabo las funciones estatales: construir escuelas, reparar caminos y puentes, realizar censos y reportar la condición de la producción agrícola local. Dentro de los confines de las fincas, a los terratenientes se les pedía que registraran los nacimientos y las defunciones

[43] «Diligencias practicadas contra Manuel Molina por Resistencia a la autoridad», 29 de enero, 1901, en API, expedientes de Ocosingo; Félix Aguilar a [ilegible] Gutiérrez, 11 de junio, 1888, en AMS.

de peones, organizaran a los trabajadores para que pagaran un nuevo impuesto por cabeza realizando trabajo gratuito en obras públicas, y organizaran a los electores para que fueran a las urnas. Tal vez lo más importante era que los terratenientes ejercían *de facto* el poder judicial en sus fincas, desempeñándose como oficiales de policía y jueces en los pleitos entre trabajadores.

En definitiva, la colisión de la territorialidad del estado y la de los terratenientes produjo dos clases de «espacios gobernables». Los terratenientes, como agentes del régimen estatal, promovieron los proyectos territoriales estatales, ayudando en efecto a su propia subordinación y la de sus trabajadores indígenas a la razón de ser de un gobierno liberal. Pero al mismo tiempo, estas prácticas —en particular la de delegar a los terratenientes la aplicación de la ley y de las funciones tributarias— fortalecieron la capacidad de los terratenientes para vigilar los linderos de sus fincas. El control sobre los gobiernos municipales y sobre las poblaciones constituía el canal primordial para la defensa de sus dominios frente a un nuevo conjunto de proyectos territoriales estatales e indígenas que surgieron después de la Revolución mexicana.

5. El Asesinato de Pedro Chulín

Los terratenientes, la Revolución y la Reforma, 1920-1962

De 1916 a 1920, jóvenes ladinos de Chilón se unieron a terratenientes en todo Chiapas para librar una exitosa campaña de guerrilla contra las fuerzas invasoras de la Revolución mexicana. Después de combatir y neutralizar al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, los terratenientes chiapanecos obtuvieron puestos de poder en todos los gobiernos estatales siguientes. No obstante, después del triunfo nacional de las fuerzas revolucionarias, no tardaron en transformar los discursos revolucionarios en un lenguaje de dominación. A escasos ocho años de su victoria contrarrevolucionaria, los antiguos combatientes de Chilón citaban a Karl Marx en el anuncio que hicieron de un nuevo partido político regional: «La emancipación de los trabajadores solo podrá ser trabajo de los trabajadores mismos», declaraban, pero su partido iba a apoyar «la movilización legal» de los trabajadores agrícolas rurales con la esperanza de crear «propuestas revolucionarias eficaces».[1] Para tantos comentaristas que postulan a los terratenientes chiapanecos como titanes de la dominación, bastarían estas palabras para confirmar la ineficacia de la Revolución en Chiapas, la vacuidad de las promesas revolucionarias a los campesinos pobres que esperaban liberarse de la explotación de los terratenientes. Como escribió Carlos

[1] «Gran Partido 'Unión Obrera Chilonera' solicita su registro en esta Secretaría», 25 de abril, 1928, en AGN, documento 2.312(5).

Fuentes poco después del levantamiento del EZLN en 1994, «En Chiapas, la revolución no triunfó […] las prácticas oligárquicas no solo no devolvieron la tierra a los campesinos sino que se la quitaron parcela a parcela». Chiapas fue «una reserva colonial» gestionada por y para los latifundistas.[2]

Yo propongo una lectura diferente de la Revolución y sus efectos en la relación entre terratenientes, campesinos y el estado en Chilón. Hasta en el Chilón dominado por los terratenientes, el régimen posrevolucionario estatal se territorializó de maneras radicalmente diferentes a las de administraciones previas. En las violentas décadas que siguieron al derrocamiento de Porfirio Díaz, los grupos pelearon por definir el régimen posrevolucionario en todos los niveles de la sociedad mexicana, desde las carreteras secundarias de Chilón hasta Los Pinos en la Ciudad de México. En este contexto, no defendieron terrenos autónomos de despotismo —«reservas coloniales»— en pleno engrosamiento del régimen posrevolucionario. Antes bien, el perfil de la producción agraria fue modelado y remodelado por las complejas interacciones de terratenientes, estado y campesinos indígenas mientras se luchaba por definir las formas y los significados del régimen posrevolucionario. Los terratenientes reelaboraron rápida y eficazmente la lógica y las prácticas del régimen posrevolucionario para promover el control privilegiado que tenían de la tierra y la fuerza de trabajo. No obstante, al apropiarse de la Revolución a su manera, los terratenientes también se sujetaron a los discursos legitimadores de la reforma agraria y la justicia social, y se sintieron cada vez más obligados a apuntalar su propia autoridad en declive con concesiones sustanciales a un campesinado también empoderado por las prácticas estatales.

La lucha por San Antonio Bulujib

Carlos Bertoni, a quien se describe en general como un italiano corpulento y bajo, era hijo de piratas corsos que huyeron de la armada francesa escapando entre la espesura de las selvas chiapanecas. «En México», me

[2] *La Jornada*, Ciudad de México, 7 de enero, 1994, p. 1.

informó el nieto y tocayo de Bertoni, «la familia hizo lo que siempre había hecho» —tráfico clandestino de aguardiente— usando las 2000 hectáreas de la finca San Antonio Bulujib como base de operaciones en las colinas alrededor de Guaquitepec y Sitalá. Aun el reclamo de la propiedad de San Antonio por parte de Bertoni estuvo envuelto en polémica y rumores de bandidaje. Durante la Revolución mexicana, en una de las retorcidas intrigas que hacen que los derechos de propiedad chiapanecos sean tan difíciles de descifrar, el propietario sucedáneo de San Antonio, el jefe político porfiriano Abraham Suárez, puso la finca al cuidado de Límbano Penagos, quien a su vez nombró a Carlos Bertoni su administrador legal. Sin embargo, en 1918, Suárez interpuso una demanda judicial aduciendo que Bertoni «no ha rendido una sola cuenta de su administración» y «dispone de la finca como dueño con título perfecto».[3] Los reclamos de Suárez pronto prevalecieron en diferentes niveles del sistema judicial, pero todavía en 1920 Bertoni recibía la visita de funcionarios judiciales a punta de escopeta, les despedazaba los documentos y los sacaba de la finca.[4] La resolución final del caso sigue sin estar clara, pero para 1934 Bertoni controlaba efectivamente San Antonio y la había transformado en un centro cafetalero, ganadero y de producción ilegal de aguardiente con un valor que casi triplicaba el de cualquier otra finca en la zona.[5]

Desde principio de los años 1940, San Antonio recibió una escalada de ataques, internos y externos, cuando los trabajadores residentes en la finca y las comunidades indígenas vecinas se movilizaron en reclamo de la reforma de la tierra contra la propiedad. Durante dos décadas Bertoni respondió atacando a los comités agrarios de Sitalá y Guaquitepec con una amplia gama de maniobras que iban desde la manipulación astuta de la ley agraria hasta emboscadas y asesinatos. Para 1962, los Bertoni habían perdido casi la tercera parte de San Antonio por la reforma agraria, y su defensa, ya con

[3] «Diligencias de averiguación de hechos dictados por el Sr. Abraham Suárez», 11 de noviembre, 1918, en APJ, expedientes de Ocosingo.

[4] «Contra Carlos Bertoni por los delitos de robo de documentos, destrucción de cosa ajena, desobediencia y resistencia a la autoridad», 4 de octubre, 1920, ibíd.

[5] «Dictamen del Gobernador», 17 de mayo, 1946, en RAN-TG, expedientes del ejido Guaquitepec.

décadas de antigüedad, quedó en manos de hijas e hijos de Carlos hasta entrados los años 1980, cuando vendieron la mayor parte de las 1 300 hectáreas restantes durante una ola de invasiones de tierras.

En la actualidad, la tercera generación de los Bertoni lleva el nombre de su abuelo, pero a diferencia de este, Carlos Bertoni Unda es alto y sumamente flaco. Con un carisma avasallador y ojos negro azabache que chispean entre amistosos y delirantes, Carlos podría pasar muy bien por un rey pirata corso, pero cultiva en cambio la imagen de ranchero de Emiliano Zapata, cuyos retratos cubren los muros de su despacho. A diferencia de su abuelo, Carlos no preside una finca lucrativa y umbría sino uno de los despachos más ajetreados en las oficinas del Congreso del estado de Chiapas. Carlos Bertoni Unda ha recorrido un largo camino desde sus primeros años como el hijo del dueño en San Antonio, pasando por las filas de las organizaciones campesinas hasta llegar a un escaño en el Congreso como dirigente del partido de la oposición de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas.

Nuestra conversación se extiende por dos días, interrumpida en partes por periodistas, políticos y una procesión interminable de electores campesinos que solicitan ayuda económica, proyectos de desarrollo y resolución de conflictos. A lo largo de esas tardes calurosas de Tuxtla Gutiérrez, Bertoni muestra un liderazgo obtenido en plena calle, repartiendo consejos paternales y promesas de patrocinio con una sonrisa enorme. Siempre llevaba nuestras discusiones lejos de San Antonio y la historia de su familia, hacia intereses más apremiantes: acuerdos internacionales de comercio, el fantasma del imperialismo estadounidense y una próxima conferencia organizada por él para resolver los pleitos campesino-propietario que permanecían después de la aplicación de los Acuerdos Agrarios de 1996. Las historias de familia que no me contó —reunidas en fragmentos de los registros en los archivos y entrevistas dispersas— dibujan un panorama de las formas en que los terratenientes detuvieron, obstaculizaron y aplastaron la movilización campesina naciente en Chilón durante más de tres décadas.

A finales de los años 1920, inspiradas por el ascenso de políticos de mentalidad reformista al gobierno de Chiapas dominado por terratenientes,

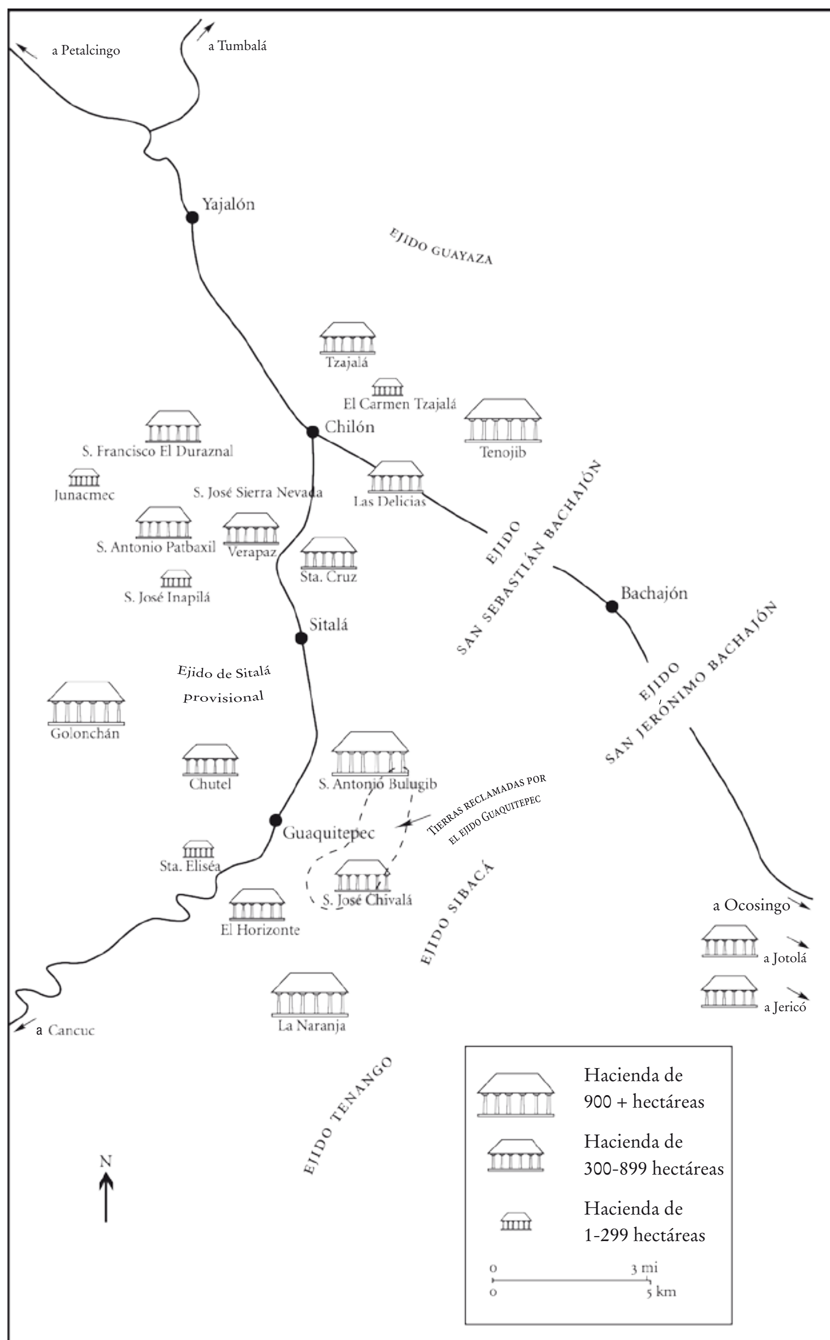
unas 240 familias de trabajadores indígenas en las fincas se unieron para formar los comités agrarios de Guaquitepec y Sitalá.[6] Estos dos grupos iniciaron peticiones por separado para la restitución de más de 1 300 hectáreas que reclamaban como robadas por los ladinos durante los cercados del siglo XIX. Junto con las peticiones exigían la expropiación de tierras de por lo menos nueve fincas, incluida San Antonio Bulujib (véase mapa 3). Los campesinos de Guaquitepec tuvieron que esperar dos décadas la respuesta presidencial positiva a sus demandas, mientras que la comunidad agraria de Sitalá recibió una dotación provisional de tierras después de solo unos meses. Pero para ambos grupos, las resoluciones estatales a su favor fueron solo el principio de sus luchas. Para Carlos Bertoni, la Revolución había finalmente llegado a casa y el resto de su vida lo pasaría defendiendo San Antonio.

Como titular de puestos estratégicos en el gobierno, incluido el de colector de impuestos sobre la elaboración y la venta de licores en Sitalá, Bertoni tenía contactos y recursos importantes para movilizarse contra los comités agrarios de Sitalá y Guaquitepec. Cuando Sitalá recibió la posesión provisional de 600 hectáreas en 1933 —de las cuales casi 300 se iban a tomar de San Antonio—, Bertoni se alió con otros terratenientes afectados para retardar la implementación del decreto hasta mitad de los años 1950. Los terratenientes unidos sobornaron a una serie de funcionarios en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para que registraran en forma fraudulenta la dotación de tierras, amenazaron con expulsar legalmente a los campesinos ocupando sus fincas «a balazos» y ocultaron los nombres de los verdaderos propietarios de las fincas afectadas.[7]

Bertoni se mostró particularmente adepto a convertir la confusión que había en torno a los derechos de propiedad agraria en Chiapas en una cortina de humo protectora. Reportes publicados por la SRA todavía mencionaban a Límbano Penagos como el dueño de San Antonio hasta avanzados

[6] Sobre este interludio relativamente progresista en la política estatal chiapaneca, véase Benjamin 1996, capítulos 6 y 7.

[7] Comisión Agraria de Sitalá al Procurador de Comunidades Indígenas, 4 de diciembre, 1940, en RAN-TG, expedientes de Ejido de Sitalá.



Mapa 3. Fincas de Chilón, *circa* 1950-1960 (ubicaciones aproximadas).

los años 1960, mientras que otros enumeraban a los cinco hijos de Bertoni (que «compraron» San Antonio a su padre en pequeñas parcelas días después de que los campesinos de Sitalá presentaran su demanda de reforma de la tierra). Aunque el comité agrario de Sitalá impugnó la legalidad de las subdivisiones de San Antonio, señalando que las ventas habían ocurrido después de haber presentado ellos su petición, Bertoni detuvo la expropiación respondiendo que las subdivisiones fueron posteriores a la presentación de la demanda pero anteriores a que se publicara oficialmente.[8]

En 1946, funcionarios federales rechazaron la demanda de restitución de las tierras de Guaquitepec perdidas durante el siglo XIX, pero declararon que, como los campesinos habían demostrado la necesidad legítima de tierra, se les entregarían 3016 hectáreas, de las cuales al menos 300 provendrían de San Antonio.[9] Con este decreto, 170 jefes de familia debían recibir la posesión provisional de una parte importante de San Antonio, pero Bertoni les impidió el acceso, tratándolos como invasores de tierras. De 1940 a 1953 siguieron una serie de luchas en las que los campesinos intentaron ocupar San Antonio y Bertoni resistió. Recurrió a contactos en el Departamento Forestal para acusar a los campesinos de delitos ambientales (provocando incendios en la selva), recurrió al apoyo de los gobiernos municipales de Chilón y Sitalá y consiguió múltiples diferimientos de ejecución de jueces en Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez.

Después de una resolución presidencial en apoyo a la demanda, en 1953 se concedió la posesión final a los campesinos. Esto no resolvió nada. Bertoni continuó peleando, alegando que el acto final de posesión estaba repleto de errores técnicos, aunque los campesinos se quejaron de que, con ayuda de elementos corruptos de la Reforma Agraria, Bertoni evitaba ceder las hectáreas de valiosos cafetales prometidas en la dotación original.[10]

[8] «Dictamen», 17 de mayo, 1946, ibíd.

[9] La restitución implicaba un criterio superior de prueba y exigía que el Estado admitiera que los derechos a la tierra de la comunidad fueran anteriores al régimen revolucionario. En cambio, la dotación de tierra circunvenía la cuestión de los derechos preexistentes y hacia los campesinos receptores directos de la benevolencia del estado. Véase Nugent 1993 a Ibarra 1989.

[10] Marcelo Mendoza al Delegado Agrario, 30 de noviembre, 1954, en RAN-TG, expedientes del ejido Guaquitepec.

A semanas de la resolución «final» del caso, Bertoni solicitó un *certificado de inafectabilidad agraria*, jurando que sus propiedades «no tenían absolutamente ningún problema agrario». Ante esto, campesinos de Guaquitepec ocuparon por la fuerza los cafetales de San Antonio.[11]

En el otoño de 1960, Carlos Bertoni, su hija Alfa y el esposo de esta, Alberto Gutiérrez, orquestaron el arresto de cuatro líderes campesinos de Cantajal (un asentamiento indígena dentro de los confines de San Antonio) que habían abogado por las demandas de Guaquitepec desde los años 1940. Pedro, Alonso y Sebastián Chulín, junto con Pedro González, se resistieron a la detención «empuñando sus fusiles…y machetes», pero acabaron siendo capturados y acusados de perjudicar la propiedad de Carlos Bertoni y de «amenazas y heridas contra Alberto Gutiérrez y Alfa Bertoni de Gutiérrez».[12] Los líderes campesinos finalmente obtuvieron su libertad, pero un destino peor les esperaba dos años después.

El 4 de febrero de 1962, Alberto Gutiérrez, acompañado de su hermano y una cuadrilla de defensores (supuestamente campesinos leales), emboscaron a Pedro y Alonso Chulín en un sendero angosto que atravesaba los campos de San Antonio. Pedro murió al instante de heridas de bala en la cabeza y el pecho, pero Alonso escapó con una bala en el costado. Por tres días, del 4 al 7 de febrero, el cuerpo de Pedro permaneció tendido en el campo mientras el juez local encontraba pretextos para no actuar. Bajo presión del presidente municipal en Chilón, el juez local, Luciano Díaz Cancino, finalmente investigó el ataque: en una reunión con Alberto Gutiérrez y Alfa Bertoni, elaboró otra ronda de acusaciones contra los líderes campesinos sobrevivientes por amenazas contra la familia Bertoni.

En algún momento entre la emboscada fatal y finales de marzo, la población de Cantajal se incendió y quedó reducida a cenizas y sus residentes fueron a refugiarse a una finca vecina. Funcionarios del gobierno

[11] «Certificado de Inafectabilidad de San Antonio y Anexos», en RAN-DF, documento 275.1/1800.

[12] Raquel F. Martínez al Agente del Ministerio Público, 22 de octubre, 1960, y Juez Mixto al Comandante de la Policía Municipal, Sitalá, 15 de octubre, 1960, ambos en AMS.

responsabilizaron del incendio a «malhechores indígenas»,[13] pero parece probable que Bertoni, o la policía judicial que perseguía a los líderes indígenas en aquel momento, hubieran arrasado la población. El incendio resultó beneficioso a los Bertoni, al permitirles solicitar una resolución administrativa sobre la inexistencia de Cantajal: «Que conviene a los intereses de la propia Finca, hacer constar el estado en que se encuentra el Paraje o poblado que dolorosamente y para confundir a las Oficinas le nombraron 'CANTAJAL' siendo que siempre se ha reconocido como poblado de esta misma Finca o sea poblado de SAN ANTONIO, pues 'CANTAJAL' no aparece ni ha aparecido nunca en los registros de ninguna Oficina».[14]

De este modo, Cantajal no podía ser considerado sujeto legal ni sus residentes con derecho a acogerse a la reforma agraria. La desaparición administrativa de asentamientos era una táctica común utilizada por los terratenientes para desviar las reclamaciones de tierras porque los burócratas de la reforma agraria dependían de los gobiernos municipales locales para las resoluciones sobre la existencia de centros de población. En este caso, el representante municipal de Guaquitepec había escrito dos cartas al de Chilón —«a petición de nuestro buen amigo don Carlos Bertoni»—, informando a las autoridades que la población se había formado en torno a la época de la contrarrevolución de Alberto Pineda «por conveniencia de los mismos peones y del dueño [de la finca San Antonio Bulugib]». Una semana más tarde escribió agregando información sobre la existencia del poblado.[15] Pero un mes después, Bertoni informó a la misma dependencia que Cantajal «ya no existe». Al año siguiente el presidente municipal de Chilón confirmó que en San Antonio (o Cantajal) «no se encontró construcción nueva ni vieja ni señales de haber sido habitado para ser denominado pueblo».[16] Con ello, las reivindicaciones de los campesinos se extinguieron y sus esperanzas de ampliar sus tierras comunales se esfumaron hasta que

[13] Héctor Gallegos al Presidente Municipal de Chilón, 30 de marzo, 1962, en AMCH.
[14] Citado en Alberto Gutiérrez al Presidente Municipal de Chilón, 26 de abril, 1962, ibíd.
[15] Lisandro Díaz C. a Humberto Martínez V., 9 y 16 de junio, 1962, ibíd.
[16] «Certificación» de Humberto Martínez V., 31 de julio, 1963, ibíd.



Granos de café producidos por campesinos puestos a secar en el camino entre Sitalá y Guaquitepec. La casa grande de San Antonio, hoy abandonada, aparece al fondo, rodeada por un asentamiento indígena (fotografía del autor).

invasores de tierras tomaron los pedazos restantes de San Antonio en 1994, casi a 32 años del día que mataron a Pedro Chulín.

Los «ciudadanos campesinos» y los gobernantes revolucionarios

> Los ciudadanos campesinos de la finca SANTA CRUZ de este municipio, de la propiedad del Sr. Enrique Flores…pidiendo la intervención de esta autoridad en la querella que exponen…Ellos declaran que hace mucho tiempo más de cuarenta años que viven en los terrenos de la finca Santa Cruz hoy propiedad del Señor Enrique Flores…y que el Sr. Flores les obliga trabajar por un peso diario, dandoles tareas de cuarenta metros cuadrados y que es inconsiderable [que] estas tareas lo sacan en dos dias de trabajo; y que como el

> Señor Flores les trata sin consideración y que pretende quitarles sus cafetales y sacarlos de su finca, pues que dichos campesinos todo esto lo ven injusto lo que les pasa [y] suplican atentamente a esta autoridad levante la presente acta a fin de que se presenten ante el Señor Gobernador del Estado en la capital del Estado y les imparta justicia…y se remedie todas las injusticias que sufren del Señor Enrique Flores.[sic].
>
> Acta presentada por el presidente municipal de Sitalá, 2 de octubre, 1954

Los «ciudadanos campesinos» de Santa Cruz, como sus vecinos en San Antonio, libraron una difícil batalla. Lo mismo que los comités agrarios de Sitalá y Guaquitepec, soportaron décadas de retrasos, pequeñas victorias, concesiones restringidas y obstáculos casi irresistibles en su lucha por la tierra. Lo mismo que sus vecinos de San Antonio, los peones de Santa Cruz no lograron el pleno control de sus tierras hasta los años 1980. En realidad, estas luchas parecen confirmar la interpretación convencional de la violenta defensa del territorio por los terratenientes. No obstante, el mero hecho de que los trabajadores en estas fincas sostuvieran una lucha organizada por la tierra durante varias décadas expresa cambios notables en la naturaleza de la política en el campo chiapaneco.

A través de las décadas de mitad del siglo XX, los procesos de formación del Estado posrevolucionario —intentos de crear espacios gobernables subsumiendo al campo en relaciones corporativistas centradas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI)— dieron origen a nuevas identidades indígenas y demandas territoriales. Estos esfuerzos del estado para reordenar redes de mediación política por vía de la incorporación de los trabajadores en las fincas de Chilón a organizaciones de clase (campesinas) y étnicas (indigenistas) acabaron por debilitar la posición de los terratenientes como único nexo entre los campesinos y el Estado. La creación de una nueva forma espacial —el ejido— está en el meollo de este proceso, al proporcionar la base física, institucional y social para la elaboración de nuevas territorialidades indígenas.

Jan Rus (1994), en su magnífico relato de la consolidación del Estado posrevolucionario en los Altos de Chiapas, describe el nacimiento de

«comunidades revolucionarias institucionalizadas» (CRI) en las que jóvenes dirigentes indígenas bilingües ligados al gobierno federal infiltraron las estructuras de liderazgo político, religioso y económico de la comunidad tradicional. Cultivados en la cúspide de la política social radical, bajo el presidente Lázaro Cárdenas, por Erasto Urbina, director ladino de la oficina en Chiapas del Departamento de Protección Indígena, los nuevos dirigentes indígenas emergieron como los mediadores centrales entre el Estado y las comunidades indígenas en los Altos. Urbina «no solo había penetrado los gobiernos de la comunidad interna de los indígenas» con brillantez, «sino que los había reclutado para la tarea de subordinar a los terratenientes y los plantadores al gobierno y al partido nacional» (Rus 1994:277). Pero fuera de los Altos, poco se sabe sobre cómo la extendida presencia posrevolucionaria estatal en el campo se articuló con las formas existentes del poder.

En lugares periféricos como Chilón, dominado por los terratenientes, lo mismo que en los Altos centrales, surgieron nuevos mediadores para integrar las comunidades indígenas a la política nacional. Estos chocaron con frecuencia con los ladinos y proporcionaron a las comunidades indígenas canales alternativos de patrocinio y recursos. Pero los terratenientes de Chilón, a diferencia de los de los Altos, mantenían una capacidad considerable para cooptar y obstaculizar a los nuevos mediadores. De modo que si la formación del estado posrevolucionario en los Altos se puede contar como la historia del ascenso de la comunidad revolucionaria institucional, en la periferia de Chilón sería la historia de la tensión continua entre la comunidad revolucionaria institucional y las fincas.

El desplazamiento de los terratenientes, las fincas sin límites

En 1939, una carta distribuida por el presidente municipal de Sitalá ordenaba a los terratenientes que organizaran «a todos los campesinos que abitan [*sic*] en [su] finca» a dar la bienvenida «y no estorbarlo para nada»

al gobernador en una visita a la ciudad.[17] Esta movilización de grupos de campesinos por su patrón evoca el sistema prerrevolucionario de las mediaciones centradas en el terrateniente, pero el perfil de la política rural estaba dando un giro.

A finales de los años 1920, un puñado de comunidades indígenas en Chilón inició campañas para recuperar el territorio perdido mediante la burocracia de la embrionaria Reforma Agraria mexicana. Después, en 1934, una gira de campaña del candidato presidencial Lázaro Cárdenas desencadenó una ola de peticiones de reforma agraria por todo el norte de

[17] Quintín Monterrosa, Agente Municipal de Sitalá, a Alberto Hernández, 24 de julio, 1939, en AMS. Los análisis en esta sección provienen de largos interludios pasados en seis archivos escudriñando quejas de los campesinos que datan de 1840 a 2001. Estos cientos de cartas, peticiones y apelaciones dirigidas a las autoridades en todos los niveles del sistema político mexicano cuentan una historia extraordinaria. Hasta los años 1940, aparecen solo demandas esporádicas, pero para los años 1980, ocupan cuartos enteros. Unas setecientas apelaciones —pidiendo caminos, escuelas, banderas mexicanas, lámina de metal, sacos de concreto, pelotas de voleibol, pipas de agua, servicio eléctrico y la resolución de penurias legales— que datan solo de 1980 sobreviven en el caótico archivo de municipio de Chilón. De hecho, durante los cinco años que antecedieron al levantamiento zapatista, la cantidad de peticiones enviadas desde Chilón al presidente del país no tenía casi paralelo en México (Presidencia de la República 1993). Con el tiempo, las peticiones fueron cada vez más articuladas y reflejaban la consulta con un número cada vez mayor de organizaciones campesinas y grupos de defensores. Lo más importante es que el contenido de las cartas cambia notoriamente con el tiempo. Desde los años 1840, cuando empiezan a aparecer las quejas, y a lo largo de los años 1940, las cartas tratan casi exclusivamente de pleitos entre campesinos y terratenientes. Para los años 1940, con la formación de comunidades campesinas independientes, surge la evidencia de conflictos con agentes del poder indígenas. A media que las comunidades indígenas desarrollaron sus propias demandas de tierras y sistemas de dominación política, siguieron luchas de poder internas: invasiones campesinas de los campos de otros campesinos, asesinatos intestinos, y corrupción en el seno de la dirigencia del ejido. La mezcla de pleitos terratenientes-campesinos y dentro de la comunidad continuó hasta los años 1970. No obstante, para la década siguiente, las peticiones se centran casi por completo en luchas de poder en el seno de las comunidades indígenas. Por último, los actores implicados en estos conflictos dieron un giro notable. A partir de los años 1930, campesinos que hasta entonces habían estado aislados tenían más acceso a la autoridad exterior. Las comunidades indígenas enviaron un sinnúmero de delegaciones hasta la Ciudad de México para presentar sus alegatos a innumerables mediadores. Durante los años 1940-1960, hicieron su aparición nuevos defensores de las causas indígenas; fiscales especiales para asuntos indígenas, delegados para la acción social, inspectores laborales federales y funcionarios de la reforma agraria, todos influían en los conflictos entre terratenientes y campesinos, a veces chocando con líneas estatales más partidarias de los terratenientes.

Chiapas. Después de tomar posesión como presidente, Cárdenas profundizó la influencia federal en el campo chiapaneco creando una serie de nuevos actores institucionales encargados de apoyar las luchas de los indígenas, de armar a los campesinos frente a los terratenientes y de conceder más de 400 000 hectáreas a peticionarios por todo el estado. Estas reformas hicieron posible nuevas formas de territorialidad campesina, pero como los requisitos burocráticos para las demandas de tierras eran tan largos y misteriosos, también subordinaban a los campesinos a una nueva legión de especialistas estatales y mediadores políticos, una «especie de sacerdotes que servían de intermediarios entre el remoto Estado y la gente del común» (Arturo Warman citado en Ibarra 1989:191).

Chilón quedó muy rezagado de gran parte del resto del estado en la reforma de la tierra y la organización de los campesinos. No obstante, el surgimiento de nuevos mediadores —maestros bilingües, jefes políticos indígenas, comités agrarios y funcionarios federales— en las décadas siguientes a la Revolución tuvo efectos de larga duración en el modo en que los terratenientes, los campesinos y el estado interaccionaron en Chilón. Celedonio Constantino, representante del sector militar de Ocosingo, escribiendo en 1927 para denunciar el maltrato, acoso y trabajos forzados de los campesinos indígenas en Sitalá, iría tan lejos como para proclamar que «estos tiempos han desaparecido por completo».[18] Aquellos tiempos no habían desaparecido para siempre —ni mucho menos— pero algunas cosas habían cambiado. A lo largo de los años 1930 y 1940, nuevas instituciones y actores, incluidos los departamentos de Acción Social y de Asuntos Indígenas, los inspectores laborales federales, los maestros rurales federales y los fiscales especiales para asuntos indígenas comenzaron a intervenir en las relaciones terrateniente-campesino, recibiendo las quejas de los campesinos, presionando a terratenientes y gobiernos locales para que resolvieran los conflictos y ofreciendo canales alternativos de ayuda.

En 1938, Erasto Urbina extendió la mano al distante Sitalá dirigiéndose furioso al «presidente municipal de Sitalá»:

[18] «Oficio 890», Celedonio Constantino, Representante de la Jefatura de Sectores Militares de Ocosingo, al Agente Municipal de Sitalá, 15 de noviembre, 1927, en AMS.

> Atentamente suplico a Ud. ordenar que den toda clase de garantías a los ejidatarios de ese lugar…porque… el señor Ramiro Ramos[19]… ha sercado una parte de los terrenos que corresponde a ésos vecinos, asimismo me han presentado recibos de baldiallajes en que todavia en ésa jurisdicción se paga, suplico que Ud. hacer una vigilancia estricta a efecto que los ejidatarios y los trabajadores indígenas no sean explotados, ya [que] el movimiento social mexicano y la revolucion ha hecho Leyes en veneficio de ésos conglomerados que estaban abandonados a su pura suerte; pero el Gobierno del señor Gral. Cárdenaz [*sic*] y del señor Ing. Efraín A. Gutiérrez están atentos a dar toda clase de protección a los indígenas.[20]

Como una dependencia de Chilón de 1922 a 1944, en 1938 Sitalá no tenía en realidad presidente municipal y el error de Urbina ilustra la lejanía de la región respecto a la influencia del Estado central. No obstante, después de los años 1930, en Chilón los campesinos tenían un acceso sin precedentes a las autoridades superiores. Enviaban delegaciones a San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, demandas por escrito a la Ciudad de México y consultaban con nuevos aliados en el gobierno. En respuesta, los nuevos actores estatales libraron una guerra de papel, defendiendo a los campesinos organizados contra opresores lejanos y a veces, chocando con actores estatales vinculados más estrechamente a los terratenientes. La mayoría de los casos consistía en intentos de los campesinos de tomar el territorio conforme a la legislación de la reforma agraria y en las respuestas violentas de los terratenientes a esos intentos. Pero los nuevos actores estatales también intervenían en los estrechos lazos que se habían formado y que vinculaban a patrones y campesinos. En uno de los casos, el director de asuntos indígenas, después de hablar con un peón que fue a San Cristóbal para denunciar los golpes que le asestó su patrón, escribió a Sitalá reprendiendo al terrateniente y ordenando al presidente municipal que «haga comparecer

[19] Propietario de la Finca Tulaquil, de 200 hectáreas y presidente municipal de Sitalá, 1950, 1956-1958 y 1965-1967.

[20] «Oficio 123», Erasto Urbina al Presidente Municipal de Sitalá, 21 de febrero, 1938, en AMS.

a su despacho al señor Bonifaz… y advertirle que si reincide o maltrata a cualquiera otra persona de la clase indígena será consignado ante las autoridades correspondientes para que se castiguen sus faltas o delitos».[21]

Incluso más amenazantes que los burócratas en oficinas remotas que componían diatribas contra los terratenientes, los maestros bilingües federales que afluyeron al campo a partir de fines de los años 1920, movilizaron directamente a los campesinos indígenas y les enseñaron sus derechos agrarios junto con la alfabetización y la higiene.[22] Estos maestros provocaban gran consternación en los terratenientes. En 1935, campesinos en el municipio aledaño de Sabanilla escribieron a Lázaro Cárdenas relatando la penuria de la vida como trabajadores finqueros y manifestando: «Hoy, como tenemos ya un maestro Federal que nos ha explicado el salario que debemos apercibir y las horas de trabajo que debemos tener, hemos puesto nuestras quejas al Gobierno del Estado y ollendo nuestras quejas ha mandado Delegados a ber estas injusticias [*sic*]».[23]

En Chilón, funcionarios federales y del estado trataron de obligar a los terratenientes a aceptar la responsabilidad de la campaña de educación rural. Estos instaron a los propietarios y administradores de las fincas a cumplir con su deber patriótico patrocinando la construcción de una casa escolar para el programa federal de maestros, realizando censos de los niños y niñas en edad escolar en sus fincas y apoyando económicamente a los nuevos maestros.[24] Los terratenientes se resistieron. Ya en 1927, maestros federales en Sitalá fueron atacados a pesar de las frecuentes intervenciones a su favor de la oficina del gobernador.[25] En los años siguientes, terratenientes y autoridades locales expulsaron varias veces a los maestros de la región,

[21] Director General de Asuntos Indígenas al Presidente Municipal de Sitalá, 22 de julio, 1954, ibíd.

[22] Sobre los maestros federales en Chilón, véase Maurer 1978; sobre los de Chiapas, véase van der Haar 1993.

[23] «Campesinos de Moyos quejándose contra terratenientes», 10 de octubre, 1935, en AGN, documento 2.331.8 (5) 5181.

[24] «Circular 4», 4 de abril, 1928, y «Circular a los Dueños o Encargados de las fincas», 13 de junio, 1934, ambos en AMS.

[25] Secretario General de Educación Pública al Agente Municipal de SItalá, 21 de julio, 1927, ibíd.

mientras que las comunidades indígenas luchaban para mantenerlos en sus puestos (Maurer 1983).

Al mismo tiempo, las políticas indigenistas, desarrolladas en conjunción con la reforma agraria a finales de los años cuarenta y cincuenta y que pretendían castellanizar a la población indígena de México e incorporarla a la vida económica del país, también estaban implicadas en la construcción de nuevas formas de dominación política en Chiapas (Romano 2002, Fábregas Puig 1988, INI 1988, Favre 1985). Durante ese periodo, el estado cultivó nuevas formas de identidad que impulsaron una relación más directa entre este y los campesinos. Por ejemplo, en 1940, el Departamento de Asuntos Indígenas convocó a las comunidades indígenas de la región a que enviaran delegados a un congreso en cuyos talleres se estudiarían cooperativas de producción, procesos electorales municipales, la ley de reforma agraria y cómo negociar un contrato colectivo de trabajo.[26] Nuevas agencias del gobierno encargadas de procesar las demandas legales en las comunidades indígenas desplazaron a los terratenientes y al despacho del juez municipal dominado por terratenientes como únicos administradores de justicia en la región. La primera prueba de este cambio que se conserva en los archivos es una nota escrita a mano por un auxiliar de la Procuraduría Indígena dentro del Departamento de Asuntos Indígenas en la que se informaba a los funcionarios ladinos en toda la región que a partir de la fecha un nuevo centro «atenderá todos los problemas de los Indígenas» en la región.[27] Asimismo, las nuevas agencias comenzaron a dispensar a los campesinos fuentes alternativas de apoyo material del que estaban tan necesitados, incluidas semillas, crédito, vivienda y otros recursos a los que hasta entonces solo habían tenido acceso por medio de los terratenientes. En suma, el Estado «benevolente» fue reemplazando al terrateniente paternalista. Como sostienen Daniel Nugent y Ana Alonso (1994:227), los procesos de formación del Estado posrevolucionario— en particular los

[26] «Convocatoria», 28 de marzo, 1940, en AMS.

[27] Circular del Auxiliar de la Procuraduría del Departamento de Asuntos Indígenas, 31 de mayo, 1941, ibíd.

relacionados con la reforma agraria— construyeron a los campesinos como «hijos» del Estado y a éste «como paterfamilias».[28]

Los ejidos y la creación de la territorialidad indígena

El cambio más importante ocurrido en ese periodo fue la creación de una base agraria y una identidad política indígena independiente fuera de las fincas. Un documento simple escrito en 1940 ilustra gráficamente el cambio. Escrito por el presidente municipal de Chilón al agente municipal de Sitalá, la carta versa sobre los arreglos para un censo inminente. A diferencia del sinnúmero de documentos relacionados con el censo en los archivos locales que se remontan a 1882, esta carta distingue entre poblaciones ejidales y no ejidales. Mientras que en el pasado el estado había convocado a los propietarios de fincas a que hicieran el recuento de la población indígena de la región, ahora los dirigentes indígenas, organizados en comités agrarios, llevaban a cabo sus propios recuentos.[29]

Para 1950, se habían formado comités agrarios en decenas de comunidades indígenas y fincas de Chilón que ejercían el control de unas 25 000 hectáreas, con miles más que seguían pendientes. Para 1962, cuando fue asesinado Pedro Chulín, la tierra que abarcaban había aumentado a casi

[28] No es extraño, pues, que los campesinos en Chilón transfirieran las formas de recurrir y el tono de sumisión de sus relaciones con los terratenientes al nuevo «padre», el Estado. En una carta dirigida a la esposa del presidente Adolfo López Mateos, los peones de la vasta finca Golonchán combinaban sin solución de continuidad la conciencia de la Ley Agraria con un discurso inveterado de humildad.: «Es verdad que, en vista de la resolución negativa sobre la Ley de Tierras Sin Cultivar, está indicado continuar el litigio de este caso ante las autoridades judiciales de esta jurisdicción, pero en vista de nuestra condición humilde como indígenas pobres que ni hablan ni leen el español, y sin nadie que nos defienda a nosotros y nuestros derechos , nos vimos obligados a ocupar un pequeño pedazo de Golonchán»: Campesinos Indígenas de Golonchán a Eva Sámano de López Mateos, 5 de octubre, 1962, en RAN-TG, expedientes del Ejido Golonchán. La presencia de nuevos mediadores es obvia en este llamado, de composición impecable y escrito a máquina, de campesinos analfabetas que no hablaban español.

[29] «Oficio 67», 1 de marzo, 1940, en AMCH.

70 000 hectáreas.[30] En este contexto, las autoridades indígenas eran cada vez más un contrapeso, por muy débil que fuera, del gobierno ladino local. Los expedientes en los archivos muestran el surgimiento de un nuevo ámbito de conflicto paralelo a la lucha por la tierra: la competencia entre las autoridades indígenas y los gobiernos ladinos locales. Cada vez con más frecuencia, los nuevos dirigentes indígenas se organizaban en torno a los comités agrarios y organismos ejidales de gobierno, y hacían campaña contra los abusos de sus contrapartes ladinas. Por ejemplo, las autoridades indígenas en Bachajón desafiaron la capacidad que tenían los ladinos de gravar con impuestos a miembros ejidales y su producción de café. En varias ocasiones, esta competencia obligó a la integración étnica del nivel inferior del gobierno municipal, a medida que «autoridades superiores» amonestaban a los ladinos locales para que nombraran funcionarios «más identificado[s] con el campesinado del lugar».[31]

La evidencia más perturbadora del cambio en el campo es, sin embargo, la explosión de relatos de pleitos inter e intracomunitarios indígenas en los años cuarenta y cincuenta. Las confrontaciones violentas en el seno de las comunidades indígenas no eran nada nuevo en la región. La evidencia en los archivos correspondiente a fines del siglo XIX indica que los delitos violentos —usualmente peleas individuales asociadas con ebriedad y acusaciones de brujería— habían sido desde hacía tiempo parte de la vida cotidiana en las comunidades indígenas y en las fincas. Para los años cuarenta y cincuenta, empero, estos relatos comenzaron a reflejar el nacimiento de demandas indígenas de tierras como un *locus* de la lucha política. En el año bastante típico de 1950, por ejemplo, las autoridades en Chilón empezaron a conocer casos relacionados con la balacera fatal que acabó con la vida de un indígena por un ladino y un conflicto de tierras ladino-indígena. Mientras tanto, pasaron por los tribunales 15 pleitos por tierras entre indígenas, tres homicidios de indígenas por indígenas y 13 asaltos no fatales con machete y armas de fuego en comunidades indígenas. Aunque

[30] Diario Oficial de la Nación, varias ediciones.

[31] Secretario General de Gobierno al Presidente Municipal de Chilón, 26 de enero, 1967, en AHPL.

muchos de estos delitos seguían el modelo antiguo de acusaciones de brujería y broncas de borrachos, fueron predominando los conflictos sobre tierras y autoridades ejidales, reflejando los elevados desafíos que una porción módica de autonomía indígena aportaba a las luchas intestinas. Un crimen horripilante en el gran ejido de San Sebastián de Bachajón, por ejemplo, estaba claramente asociado con los intentos de una facción campesina de intimidar a rivales dentro del ejido.[32] Al mismo tiempo, los miembros de ejidos más pequeños se peleaban cada vez más con rivales externos.[33]

Como en las comunidades revolucionarias institucionalizadas de los Altos, caciques indígenas como los Chulín encabezaron estas peleas. José Lazos fue un ejemplo de esta nueva especie. En los años cuarenta, el nombre de Lazo aparecía con frecuencia en demandas por pleitos entre comunidades indígenas. En uno de los casos, fue acusado de quemar cultivos y de invadir tierras reivindicadas por grupos rivales, y en otro caso, de cultivar tierra que pertenecía a un ejido del que él no era miembro.[34] El último en particular ilustra con precisión tanto las tácticas de Lazo como las profundas divisiones que acompañaron el nacimiento de caciques indígenas. En abril de 1942, el juez municipal de Sitalá redactó un requerimiento en apoyo a Lazos:

> José Lazos [en compañía de varios otros, se disponía a quemar] un terreno donde está prollectada la afectación para los Ejidos de este Pueblo y que serían las tres horas del dia cuando se presentaron en el lugar donde ellos trabajaban, el C. Juan Ramirez, Auxiliar de la Procuraduría de Asuntos Indígenas, el Presidente del Comisariado Ejidal de este Pueblo, C. Lorenzo Nuñez y el C. Juan Ruíz, Ramirez le preguntó al exponente, ¿Con qué autorización estás trabajando en estas tierras, que no sabes que Uds. no pueden trabajar por no estar

[32] *Horizontes* (Yajalón), 15 de septiembre, 1967.

[33] Los comités agrarios de Pojcol y El Carmen, por ejemplo, chocaron a lo largo de los años sesenta a causa de reivindicaciones rivales de varias fincas en la parte oriental de Chilón: RAN-TG, expedientes de Ejido de Pojcol. June Nash (1967) también observó un marcado giro en el carácter de la violencia intracomunitaria después de los años cuarenta en los altos centrales de Chiapas.

[34] [ilegible] al Agente Municipal de Sitalá, s.f., y «Acta del Juez Municipal», 14 de abril, 1942, ambos en AMS.

> sensados en el grupo de Ejidatarios y tienes el permiso del Forestal? A lo que Lazos contestó que tenía su permiso por separado y entonces [un compañero de Lazos] contestó, que se acordara que el C. Diputado a su paso por este lugar les había dicho que trabajara… que la tierra era para travajarla, a lo que Ramirez contestó: el Diputado vaya a CHINGAR SU MADRE, el no tiene que meterse en estos asuntos de tierra… y que en el Pueblo habían unos pinches auxiliares Forestales y que por la tarde iva a subir al Palacio Municipal para que les demostrara que no le podían impedir la quema de las sementeras y entonces Lazos contestó que podía hacer lo que quisiera que ya vería la manera de defenderse [*sic*].[35]

En este mundo tenso con un gobierno desafiante y facciones indígenas, los nuevos caciques abogaban por las demandas de tierras de la comunidad y por desempeñar un papel en la toma de decisiones políticas, pero también empezaron a acumular tierra y riqueza dentro de los ejidos. A fines de los años 1970, un campesino le dijo a Pedro Ovalle Muñoz (1984:68): «Existe el acaparamiento de tierras entre nosotros, a veces se muere el papá de alguien que [queda] chamaco todavía, tratan de invadirle lo que es su parcela y como no tiene ningún documento que lo ampare, el otro se mete y empieza a alambrar, o hacer su milpa ahí, sembrar café, o hacer potrero, en fin, le dan algun uso al terreno… Hay personas quién tienen acaparadas 100, 200 hectáreas sin trabajarlo, sin hacerlo producir [*sic*]».

¿Estos tiempos han desaparecido por completo? Los terratenientes y la Revolución

Como nunca hasta entonces, después de 1930 los campesinos sortearon la tiranía de las autoridades ladinas locales apelando a los de arriba. De este modo, los campesinos de Chilón obtuvieron importantes concesiones y se encontraron integrados a complejas estructuras de representación política corporativista autoritaria. En qué medida estos giros —visibles en el

[35] «Libro de Juzgados de 1942», entrada del 14 de abril, ibíd.

mundo de papel de memos, informes y circulares— cambiaron las mecanismos cotidianos de la dominación ladina es bastante más misterioso.

Hay fuerte evidencia que indica que casi todo seguía siendo igual en Chilón. Mientras que las uniones campesinas radicales proliferaban en otras regiones de Chiapas, los grandes grupos organizados hicieron pocas incursiones en Chilón. Allí, la organización de los campesinos siguió siendo aislada y episódica. En una zona surcada desde hacía mucho por rigurosas divisiones étnicas, las comunidades indígenas habían obtenido concesiones notables, pero seguía habiendo graves desigualdades.

En 1962, mediante resoluciones presidenciales se decretó la creación de 12 ejidos que abarcaban casi 70 000 hectáreas en Chilón y Sitalá. Siete peticiones ejidales de 12 presentadas habían llegado a la etapa final de la legalización: la posesión definitiva de la tierra. Cinco demandantes habían recibido solo la posesión provisional, mientras que por lo menos cuatro grupos más esperaban respuestas a sus peticiones y tres solicitudes de ampliación de ejidos preexistentes se abrieron paso entre la burocracia de la reforma agraria.[36] No obstante, los terratenientes ladinos todavía controlaban más de 15 000 hectáreas de la tierra más productiva de la región, dominaban cada uno de los aspectos de la política local y monopolizaban todos los niveles del comercio. En 1962, los 20 comerciantes registrados en Chilón y Bachajón eran ladinos y los líderes indígenas no asumieron puestos de alto nivel en el gobierno municipal hasta 1994.[37] Cientos de campesinos indígenas todavía vivían en fincas y cuando el comité agrario de Chantajal, que enfrentaba el arresto por invasión de tierras mientras que los asesinos de Pedro Chulín estaban en libertad, se preguntaba, «¿Las Leyes establesen distingos al Indio o son para todos? [*sic*]», la respuesta estaba clara.[38] A pesar de los retos de las autoridades ejidales, un puñado de terratenientes-comerciantes ladinos continuó dominando el gobierno local.

[36] *Diario Oficial de la Nación*, múltiples ediciones.

[37] «Censo de Cantinas y Comercios», 1962, y Comité Agrario de Cantajal al Presidente Municipal de Chilón, 8 de febrero, 1962, ambos en AMCH.

[38] Lorenso Maldonado Gonzáles a Presidente Municipal de Chilón, 8 febrero, 1962 en AMCH.

En 1954, una carta al gobernador de los representantes del consejo ejidal de Guaquitepec protestaba:

> Gustavo Vera Cruz…actua como Secretaria Municipal, Tesorero Municipal y Juez Municipal, y tiene muchos años desempeñando estos cargos porque todos los presidentes municipales que ocupan el puesto son primos, cuñados [y] hermanos, como por ejemplo: Fue PRESIDENTE don Rafael Martinez Vera, es PRIMO y COMPADRE, fue PRESIDENTE don Benjamin Trujillo es CUÑADO y COMPADRE, fue PRESIDENTE don Ramiro Vera Cruz, es el HERMANO, ahora es PRESIDENTE don Humberto Martinez Vera es PRIMO y COMPADRE, claro que estos Presidentes lo dejan que haga lo que quiera, para arreglar un asunto se tiene que tratar con el senor Gustavo Vera Cruz y lo toma en forma de negocio porque todo lo resuelve a vase de dinero [*sic*].[39]

Los ladinos también cooptaron los nuevos modelos de mediación y de liderazgo indígena. En 1946, por ejemplo, Isidro Jiménez, presidente municipal en varios periodos y dueño de las fincas Las Delicias y Shishontonil, encabezó una facción de seguidores indígenas en un intento por tomar el control del consejo ejidal de Bachajón. Otro terrateniente osadamente solicitó ser miembro del ejido que acababa de tomar una parte de su finca.[40]

Los terratenientes incluso rompieron filas y abandonaron la defensa compartida de la propiedad para organizar grupos de demandantes de la reforma agraria. Cuando Chantajal se incendió, por ejemplo, sus residentes huyeron a la finca de Manuel Díaz Cancino, primo de Luciano Díaz Cancino, el juez que blindó a los agresores de Pedro Chulín. Todavía en 1948, el comité agrario de Guaquitepec interpuso numerosas demandas contra Manuel Díaz Cancino por intrusión en tierras comunitarias, pero para los años sesenta Díaz se había unido misteriosamente a los Chulín y dos maestros federales para denunciar el trato que daban los terratenientes a la comunidad de Guaquitepec. Manuel Díaz Cancino tal vez fuera «un loco

[39] Domingo Vilchis, Sebastián López, Pascual de la Cruz, Mauro López y Vicente Estrada al Gobernador Aranda Orsorio, 4 de septiembre, 1954, en AHPL.

[40] Delegado Agrario al Jefe de Zona de Organizaciones Agrarias y Ejidales, 11 de agosto, 1971, en RAN-TG, expedientes del Ejido Guaquitepec.

total», como recordaba Roberto Trujillo, o hasta «un hacendado de verdad que trataba a su gente como esclavos», como un pariente recordaba, pero también entendió los beneficios de utilizar las instituciones posrevolucionarias para impulsar sus intereses. Fue capaz de utilizar su posición para desviar la atención de los reformadores agrarios de su propiedad y dirigirla a San Antonio Bulujib.[41]

En suma, consiguieron apropiarse y reelaborar importantes elementos del régimen posrevolucionario en beneficio propio. Pero ellos de ninguna manera permanecieron intactos o idénticos. En realidad, los terratenientes tuvieron que rehacerse a sí mismos a la vez que rehacían la Revolución.

La defensa en el tiempo de la Reforma: El manual de supervivencia de los terratenientes

Para 1962 la familia Bertoni había perdido casi una tercera parte de San Antonio por la reforma agraria pero todavía tenía más de 1 300 hectáreas en diversas parcelas. La historia de cómo se escudaron ante las reivindicaciones de los campesinos nos brinda un panorama, a modo de cápsula, de las diversas tácticas que utilizaron los terratenientes contra sus atacantes: con violencia, dándole la vuelta con creatividad a la ley agraria y recurriendo a aliados en los gobiernos municipal, estatal y federal.

Violencia

Las relaciones que contienen los archivos están repletas de casos en los que grupos campesinos condenan a terratenientes por haberlos amenazado con desalojos, acciones policiales u otras clases de represión. Cuando los residentes indígenas de Golonchán trataron de formar un comité agrario, por ejemplo, el dueño de la finca, Gustavo Flores, reventó la reunión y con su violento griterío consiguió que más de la mitad de la asamblea

[41] Carlos Bertoni al Delegado Agrario, 27 de septiembre, 1948, ibíd.



Ladinos prominentes en Chilón, c.1940 (de la colección privada de Alí Reyes)

saliera huyendo en plena noche.[42] Otras tácticas utilizadas para disuadir a los campesinos de que se organizaran incluían la quema de los asentamientos, como en el caso de Cantajal, y frecuentes ataques a la subsistencia de la comunidad por medio de la pérdida deliberada de ganado en los campos de maíz de los campesinos. Cuando las bravuconadas y otros métodos indirectos no lograban desalentar a aquellos campesinos que reclamaban tierras, los terratenientes congregaban a seguidores campesinos leales para atacarlos o reclutaban a autoridades locales para desalojarlos, tanto si los «invasores» tenían el derecho legal a ocupar la tierra como si no. La violencia no era una vía de un solo sentido; los campesinos también amenazaban e intimidaban a los terratenientes, pero estos respaldaban sus fechorías con la amenaza siempre presente de tener el apoyo del Estado. En realidad, la capacidad de los terratenientes para esquivar a los invasores de tierras siempre ha descansado sobre una base de apoyo estatal. Al menos antes de los años setenta, este se manifestaba primordialmente en forma de impunidad: la capacidad de realizar desalojos violentos, asesinatos ocasionales y

[42] Campesinos Indígenas de Golonchán a Eva Sámano de López Mateos, 5 de octubre, 1962, en RAN.TG, expedientes del Ejido Golonchán.

campañas de acoso sin temor a represalias legales. Solo en algunos casos la policía y otras autoridades reprimieron directamente a los terratenientes, y aunque el drama de la violencia ha ganado un lugar prominente en las nociones populares de cómo se defendían los terratenientes de la reforma agraria, muchos de sus esfuerzos asumieron formas más cotidianas.[43]

Tenencia ambigua y demarcación táctica

Los terratenientes se resistieron sin cejar a la racionalización de los derechos de propiedad tanto deliberadamente como por negligencia. La tierra cambiaba de manos informalmente, a menudo en el seno de las familias o entre amigos cercanos, con retrasos hasta de dos décadas del registro oficial de la concesión de la titularidad. Esta práctica permitía a los terratenientes evadir impuestos por la concesión de tierras, pero también obstaculizaba las demandas de la reforma agraria al generar un rastro de papel de informes confusos y contradictorios. Del mismo modo, los terratenientes subdividían legalmente la tierra entre hijos, esposas, otros parientes y, con menos frecuencia, campesinos leales. En un nivel, esta práctica refleja inocentemente la progresión natural de la sucesión familiar, pero como en el caso de San Antonio, mostraba con frecuencia los esfuerzos intencionales de circunvenir los límites de la tenencia de la tierra. Aunque muchos herederos cultivaban y administraban sus propiedades subdivididas como unidades separadas, era más frecuente que las divisiones existieran solo en el papel. Como decía un anuncio clasificado en un periódico local sencillamente: «Pedro Martínez vende su hermosa finca ganadera cerca de Yajalón con un total de 640 hectáreas, en tres fracciones, debidamente protegidas con certificados de inafectabilidad».[44]

[43] La impunidad de los terratenientes continuó después de 1970 y fue complementándose progresivamente con ayuda de la mano dura de las fuerzas estatales. Sobre «populismo sangriento», véase capítulo 6 y Cruz y Kovic 1993.

[44] *Horizontes*, 16 de enero, 1967, 9.

A medida que se intensificaron las demandas de la reforma agraria en los años cincuenta y sesenta, muchos terratenientes formalizaron el usufructo del que gozaban trabajadores campesinos leales dándoles la titularidad legal de sus parcelas a cambio de promesas de mano de obra. Esta práctica aseguró el acceso a una fuerza de trabajo estable en un momento en el que la expansión de los ejidos arrancaba a los trabajadores de las fincas, pero también sirvió de escudo de defensa para las grandes propiedades con respecto a la reforma agraria. Si bien no existe registro de la creación por parte de Bertoni de propiedades que sirvieran de escudo, de defensa de las acciones de la reforma agraria en tierras de Sitalá, sí hay pruebas de que su vecino José Monterrosa asentó a trabajadores indígenas provenientes de Bachajón en los márgenes de su propiedad. En conflictos subsecuentes, el comité agrario de Sitalá se quejó de que estos campesinos «defienden [la tierra de Monterrosa] como si fuera suya».[45]

Por último, cuando los terratenientes eran obligados a conceder tierra a los reformadores agrarios, intentaban aferrarse, como es natural, a sus campos más productivos. Parte de la resistencia más virulenta estalló cuando los agrimensores del gobierno incluyeron valiosos cafetales en las tierras asignadas a campesinos. Trabajadores de la finca de Jotolá, que habían invadido y solicitado simultáneamente la redistribución de un gran trecho de tierra sin cultivar de esa finca en los años cuarenta, seguramente tuvieron la agradable sorpresa de que en 1961 les fuera concedida una parte considerable de los mejores cafetales de Jotolá. En respuesta a las protestas de los terratenientes, un registro posterior en 1963 reportaba que «el plano proyecto no concuerda con la realidad de los terrenos», y este error retardó otras acciones hasta 1975.[46] Por ende, la mayoría de los ejidos recién formados heredaron la tierra menos desarrollada y menos productiva de la región, en tanto que las fincas conservaron el control de sus mejores tierras.

[45] «Proyecto de dictamen sobre dotación de ejidos al pueblo Sitalá del Municipio de Chilón», 20 de junio, 1933, en RAN-TG, expedientes del Ejido de Sitalá.

[46] RAN-DF, Expedientes del Ejido Delina, documento 25/25269.

Los terratenientes de Chilón también explotaron hábilmente lagunas legales para que sus propiedades fueran declaradas «pequeñas propiedades», y no quedaran sujetas a expropiación. Estas prácticas reflejan algunos de los abusos más cínicos, por parte de los terratenientes, del espíritu, cuando no de la letra, de la ley de reforma agraria. El soborno y la intimidación a veces inducían a los agrimensores del gobierno a reportar en falso el tamaño de las fincas, pero usualmente bastaban medios más legales. Cuando los topógrafos del gobierno evaluaban la exposición de una finca a la reforma agraria, calculaban su equivalente teórico de tierras de riego, un patrón de medida nacional utilizado para comparar distintos tipos y cualidades de tierra. Ajustando este valor, los terratenientes y sus aliados en la burocracia oficial podían hacer que incluso fincas grandes entraran en los límites legales. San Juan Cabtejaj, por ejemplo, una finca de casi 400 hectáreas con diez construcciones para los trabajadores con servidumbres por deudas, huertas grandes con plátanos y cítricos y 100 cabezas de ganado en sus cafetales, recibió un certificado de inafectabilidad con un equivalente de riego de solo 62 hectáreas. De mismo modo, una finca de 294 hectáreas calificó como pequeña propiedad a pesar de que sus cinco secadoras de café de motor y otro equipo para el procesamiento del café hacían de esta finca una de las más valiosas de la región e indicaban una producción mucho mayor que las 40 hectáreas de café que se reportaron oficialmente. De modo que, ya fuera mediante subterfugios, informes falsos o tecnicismos legales, para mediados del siglo XX, la mayoría de las fincas de Chilón estaban dentro del límite legal de tenencia de la tierra.[47]

Como veremos en su momento, los esfuerzos de los terratenientes por ser considerados pequeños propietarios consistían en algo más que solo en medios para esquivar los límites legales de la tenencia de la tierra; eran

[47] Certificado de Inafectabilidad de San Juan Cabtejaj, documento 275.1/1302 en RAN-DF; y RAN-TG, expedientes del Ejido de la Providencia. El Artículo 27 de la Constitución Mexicana establece los siguientes límites para la propiedad de la tierra: tierra de cultivo de regadío, 100 hectáreas; algodón de regadío, 150 hectáreas; plátano, caña de azúcar y café, 300 hectáreas; ganado, tierra necesaria para mantener 500 cabezas. Los chiloneros describían normalmente sus tierras como «monte»; este tipo de tierra se contaba como equivalente a una octava parte de una hectárea de regadío.

parte de un intento discursivo para encontrar su lugar en la nación posrevolucionaria. A raíz de la Revolución, fincas enormes de la época porfiriana acabaron simbolizando el mal y la injusticia. La «pequeña propiedad» representaba el futuro de México en las nuevas visiones del país, y los forjadores de la Constitución de 1917 la consagraron como la categoría más privilegiada y deseada de la tenencia de la tierra (Ibarra 1989:110). No es extraño, pues, que los terratenientes adaptaran su autodefinición a este contexto. En la actualidad, como en el periodo inmediatamente posterior a la Revolución, los terratenientes rechazan en todas partes la imposición de etiquetas como finquero y terrateniente, con su fuerte connotación de injusticia e inequidad. Su autoidentificación como pequeños propietarios o rancheros refleja la profunda convicción de los chiloneros de que ellos personifican al pequeño propietario ideal de la Revolución mexicana.

Los aliados en el Estado

Cuando surgían diferencias respecto a la existencia física de un asentamiento de peticionarios de la reforma agraria, las autoridades a nivel del estado comisionaban al presidente municipal para determinar si la comunidad existía o no. Como pasó con Cantajal-San Antonio: el presidente municipal informaba a las lejanas autoridades que no se había podido encontrar ningún poblado. En 1957, por ejemplo, funcionarios a nivel estatal, respondiendo a la sugerencia de un técnico local de la SRA corrupto, pidieron a Isidro Jiménez, presidente municipal de Chilón, una resolución sobre la existencia de la población de Shishontonil. El grupo había solicitado la redistribución de la finca del mismo nombre y, como era de suponer, Jiménez, que era también el dueño de Shishontonil, respondió por escrito informando rápidamente a la SRA: «no encuentro poblado de este nombre, ni ningún núcleo de campesinos que solicita terrenos con dicha denominación».[48]

[48] «Acta de inexistencia del poblado de Shishontonil», 11 de marzo, 1957, en RAN-TG, expediente del Ejido Shishontonil. El funcionario, un ingeniero agrónomo de nombre Abel

Como en el caso de la muerte de Pedro Chulín, los lazos de parentesco y de compadrazgo ligaban a terratenientes con las autoridades municipales y eso les aseguraba inmunidad ante la ley. Un caso tras otro, los terratenientes eran considerados inocentes o simplemente no se les acusaba del asesinato de campesinos, pero la impunidad también se extendía a abusos más cotidianos.[49] Como me dijo un antiguo presidente municipal, «Los rancheros se dividían el poder entre ellos y ponían al que ellos querían en la presidencia…. De este modo, si alguien se hería en un rancho de ellos, nunca tenían ningún problema legal. Simplemente se arreglaba». Durante este periodo, los funcionarios estatales y municipales se quejaron a menudo del manejo local de las pleitos legales entre terratenientes y campesinos. En 1945, por ejemplo, el Tribunal Regional en Ocosingo devolvió una acusación de Alfonso Chulín al juez que la había emitido en Sitalá, indicando que «tenga más cuidado la próxima vez… porque la denuncia parece que no tiene ninguna validez, puesto que ni los quejosos ni los testigos fueron examinados bajo juramento… Al mismo tiempo, espero que usted también presente los registros que he solicitado correspondientes a los daños sufridos por Juan Alonso Chulín de Guaquitepec que tenemos razones para creer que le fueron turnados a usted… La próxima vez, para evitar que se le haga responsable de cualquier problema, asegúrese por favor de seguir… los Procedimientos del Código Penal».[50] No obstante, como lo prueban encubrimientos subsecuentes confirmados, el tribunal regional tenía poca influencia en el gobierno municipal de Sitalá, dominado por los terratenientes.

Los peticionarios indígenas se solían negar a recibir ayuda de los funcionarios del gobierno estatal y pedían apoyo a los agentes federales que, supuestamente, les eran más favorables, pero estos intentos de eludir la autoridad local no siempre funcionaban. Los terratenientes también engrosaban las filas de las instituciones federales, incluida la SRA y los organismos

---

Trujilo López al parecer hizo carrera determinando qué grupos de campesinos no eran elegibles para recibir tierras; emitió resoluciones similares con respecto a Golonchán, Jericó, y Jotolá.

[49] En un caso documentado, Isaías Solórzano, un terrateniente y antiguo presidente municipal, fue puesto en libertad tras haber sido brevemente detenido por el asesinato de un campesino (*Horizontes*, 23 de agosto, 1967).

[50] Adolfo R. Aguilar al Juez Municipal, Sitalá, 30 de agosto, 1945, en AMS.

de protección indígena. A finales de los años 1930, por ejemplo, en el cenit del apoyo estatal a la política agraria radical, Humberto Martínez Martínez, propietario de las 136 hectáreas de San Antonio Patbaxil en Chilón y único heredero de un cacique porfiriano, prestaba servicios como inspector laboral federal en el norte de Chiapas. No es extraño que los registros indiquen su defensa entusiasta de los terratenientes en por lo menos un conflicto laboral que le presentaron los trabajadores de la finca. Otros funcionarios podían ser seducidos con sobornos —como lo ilustra el caso de San Antonio— o simplemente por medio de redes sociales. En aquella época, como lo destacó un grupo de campesinos, los terratenientes y los agentes de la SRA pasaban con frecuencia noches juntos compartiendo aguardiente.[51]

Las redes de terratenientes también alcanzaban escalones superiores del gobierno del estado. Por ejemplo, uno de los vecinos de Bertoni me dijo: «Un día, durante un periodo de reformas agrarias, el gobernador estaba en nuestra casa. Había venido a inaugurar alguna obra pública y cuando encontró a mi padre solo le dijo que iba a tener que perder una de sus propiedades para la reforma agraria —para solucionar un conflicto agrario— pero él podría escoger qué propiedad iba a ser. Mi padre consiguió que el gobernador se concordara a que si diera [a una] sin ningún problema, el gobierno nunca afectaría [la otra]». La presión agraria finalmente disolvió las dos propiedades de este terrateniente, junto con los bienes de Bertoni y la mayor parte de las tierras controladas por ladinos en la zona, pero eso no ocurrió hasta que las nuevas olas de invasiones de tierras arrasaron toda la región a finales de los años 1970 y en 1994.

Hemos visto que las relaciones entre los terratenientes, los campesinos y el estado seguían dos vías diferentes: la habilidosa apropiación por los terratenientes de la Revolución por una parte y la proliferación de nuevas identidades indígenas y formas de lucha territorial por la otra. Los terratenientes lograron defender con éxito posiciones privilegiadas pero tuvieron que ir

[51] Documento 2.331.8(5)5181, 10 de octubre, 1935, en AGN.

aprendiendo a sortear el sistema tramposo de los derechos de propiedad politizados y de las mediaciones políticas con múltiples canales. Decir que los terratenientes llegaron a hablar con fluidez el lenguaje de la Revolución no significa reducir la Revolución a un artificio de la clase alta. Las ideas entretejidas de la Revolución, la nación y las formas revolucionarias institucionales de gobernar han colonizado las vidas de todos los mexicanos. Todos han aprendido a hablar el lenguaje de la Revolución, a doblegarla en aras de sus propias aspiraciones y a su vez ser doblegados por ella.

Hoy los hombres que libraron la contrarrevolución de Alberto Pineda son los héroes en tonos sepia de los álbumes familiares de los chiloneros. «Los pinedistas eran muchachos jóvenes de por aquí y a los terratenientes les gustaban porque ellos no tocaban sus tierras como los carrancistas», me informó Carlos Setzer. En otra ocasión, Carlos Cañas extendió fotos de su padre, Rubén Cañas, un oficial pinedista, y explicó que la mayoría de los terratenientes que yo había conocido tenían padres, abuelos y tíos que lucharon contra los «invasores carrancistas». Los terratenientes contemporáneos veneran las tácticas crueles del ejército invasor de Carranza en el recuerdo y las comparan con las actuales movilizaciones indígenas: Para los chiloneros, *carrancear* todavía significa «saqueo» o «despojo».[52]

Al mismo tiempo, las visiones que desbordan la realidad de otros héroes de la insurgencia —Francisco Villa, Francisco Madero, incluso Emiliano Zapata— constituyen un aspecto tan fundamental de la educación nacional y del ritual cívico en México que son pocos los terratenientes que escapan a la admiración incómoda tanto del panteón aséptico de una revolución lejana como de los protagonistas de la contrarrevolución local. Los terratenientes en general aprueban la Revolución aun cuando condenan sus manifestaciones más radicales y suspiran por un retorno al «orden y progreso» de la dictadura de Porfirio Díaz. Un ganadero de Chilón incluso puso a sus hijos y sus ranchos el nombre de lugares y acontecimientos importantes en la vida de Pancho Villa. Una vez al año este hombre hace

[52] Los terratenientes rara vez recuerdan las tácticas igualmente bárbaras de las guerrillas pinedistas, como el linchamiento de campesinos seguidores de Carranza colgados de una ceiba en Bachajón, por ejemplo.

una peregrinación de unos 2 250 kilómetros al lugar natal del Centauro del Norte.[53] Tal es el poder de la Revolución.

En México, cuya Constitución dispone que la propiedad corresponde en último término a la nación y que es administrada por «el Estado» de acuerdo con «los dictados del interés público, así como el de regular, en beneficio social, […] una distribución equitativa de la riqueza pública […] y lograr el desarrollo equilibrado del país», el acceso a la tierra depende de la participación en política, o para ser más precisos, de estar comprometido e incorporado en los discursos y prácticas del régimen posrevolucionario.

En 1962, el año que murió Pedro Chulín en uno de los campos de San Antonio, 30 hombres pertenecientes a las familias terratenientes más importantes de Chilón se reunieron para formar una asociación que iba a imbricar firmemente a los chiloneros en el tejido del régimen del estado posrevolucionario. La fundación de la Asociación Ganadera de Chilón (AGL) reflejaba los cambios que arrasaban el sur de México: los ranchos ganaderos, otrora un aspecto subsidiario y poco desarrollado de la agricultura tropical, habían asumido vastas proporciones. En unos cuantos años, estimulados por los subsidios de Estado, los pastos cubrían más de la mitad de la superficie de Chiapas. En Chilón, los miembros fundadores de la AGL inicialmente reportaron tener más de 2 500 cabezas de ganado, cantidad que se duplicaría en los 20 años siguientes.[54] Quizás es aún más importante que, como organización corporativista sectorial creada bajo los auspicios del Estado y estrechamente vinculada al PRI, la AGL vinculaba a los rancheros en Chilón con los esfuerzos de cabildeo regional y nacional que

[53] Para este terrateniente, la lección fundamental de la vida de Villa fue que «con igualdad de derechos, cada quien es libre de forjar su propio futuro y salir adelante con trabajo honrado y el deseo de progresar».

[54] «Lista de socios de la Asociación Ganadera Local de Chilón, Chiapas», 14 de septiembre, 1965, y «Relación de Socios de la Asociación Ganadera Local de Chilón, Chiapas», 1980, ambos en AGL. En 1965, los miembros tenían en promedio 70 cabezas de ganado cada uno, con las manadas más numerosas que llegaban hasta 200. Para 1980, la AGL declaró casi 5 000 cabezas y esta cifra no incluía a cuatro de los rancheros más grandes en la organización, que no proporcionaron datos sobre sus manadas; la manada promedio había subido a 85 y la más numerosa llegaba a 409.

lograron sustanciales concesiones y permitieron que los chiloneros participaran en una ola sin precedentes de prosperidad basada en la ganadería.

La fundación de la AGL también respondió a otra tendencia. Junto con las disposiciones para la asistencia técnica, mercadotécnica y financiera, la nueva legislación que promovía la crianza de ganado autorizaba a las asociaciones ganaderas locales y regionales de Chiapas a formar fuerzas especiales de policía rural y, de lo contrario, proteger la seguridad en la tenencia de la tierra (Fernández y Tarrío 1983). El año 1962 fue violento, con la muerte de Pedro Chulín, numerosos ataques a los demandantes de tierras en otras fincas (en particular Jotolá y Jericó) y un conflicto creciente en el interior de los ejidos de reciente formación y entre ellos. Cuando el número de invasiones de tierras se disparó en Chilón a finales de los sesenta, la AGL se erigió en el paladín de los terratenientes: el organismo central de coordinación para la defensa legal, política y coercitiva de la propiedad. Trabajando a través de la AGL, los terratenientes pudieron articular eficazmente la importancia de su producción para la nación y defender los espacios de las fincas agrícolas en el contexto posrevolucionario. A la vez, algo fundamental había cambiado en las relaciones entre los terratenientes, el Estado y los indígenas. Allí donde en otro tiempo los terratenientes figuraban como el único nexo entre el campo y la nación, ahora tanto los terratenientes como sus vecinos indígenas se relacionaban con el Estado y unos con otros a través de canales de mediación corporativista.

Se vislumbraba un cambio en el horizonte y algunos terratenientes así lo entendieron. Jorge Martínez, que creció en los años cincuenta y sesenta, rememoraba: «Nuestro padre siempre nos dijo que nuestro tiempo era limitado. Siempre había la sensación de que era solo cuestión de tiempo antes de que los indígenas nos quitaran la tierra, a través de la reforma agraria». Esta premonición significaba que, aun durante un periodo de notable prosperidad agrícola provocada por la expansión de los ranchos de ganadería, el futuro real de los hijos estaba fuera de la tierra. Los Martínez, como muchas otras familias prominentes, canalizaron las ganancias de la ganadería a la educación. Así, en los años sesenta, los jóvenes ladinos empezaron a remontar las huellas de sus abuelos y salieron del campo para

irse a las ciudades cercanas. Algunos fueron más lejos. Lo mismo que Jorge Martínez, varios de los hermanos mayores de Roberto Trujillo asistieron a escuelas secundarias y universidades en la Ciudad de México, siguiendo trayectorias que los condujeron a oficinas de ejecutivos en Pemex y a varias empresas multinacionales. Este éxodo no provocó el abandono de las raíces rurales o la agricultura, como las narrativas teleológicas de la modernización podrían sugerir. En cambio, los salarios profesionales subsidiaron las fincas de las familias. El hermano de Roberto Trujillo, Fausto, observaba, «Cuando los rancheros conversan siempre dicen que 'el rancho pagó esta educación', pero la verdad es que normalmente era al revés. La gente estudiaba y trabajaba para pagar el rancho».

En las décadas difíciles de los setenta y ochenta, de crisis agrícolas, las carreras profesionales de los hijos y las hijas de los propietarios sacaron adelante las fincas. Ellos poco podían hacer, sin embargo, para defender la producción agraria contra al cambio político. Hasta en tiempos de auge, se habían echado a andar dos procesos que destrozarían el control virtualmente indisputable de los ladinos sobre la tierra y la política. A mediados de los noventa, las carreras profesionales y la vida urbana eran más que vías para diversificar la base económica de la familia. Representaban la única escapatoria atractiva de la confusión política y el conflicto agrario y, como veremos en el capítulo 9, desempeñaron un importante papel en los cálculos de los terratenientes sobre los riesgos de respuesta violenta a las invasiones de tierras.

En suma, durante las décadas que siguieron a la Revolución mexicana, los terratenientes mantuvieron una capacidad considerable de defensa contra las formas nacientes de territorialidad indígena producidas por el régimen estatal posrevolucionario. Los terratenientes dieron la vuelta a las instituciones, los marcos legales y las ideologías de la Revolución canalizándolos a nuevas formas de dominio, pero en el proceso descubrieron que los espacios de la producción agraria habían cambiado para siempre. Con su ataque a los dirigentes campesinos, subdividiendo fincas, dando pequeñas «propiedades escudo» a campesinos leales, corrompiendo a funcionarios de la reforma agraria y adornando el lenguaje paternal de las

relaciones sociales en la finca con el fervor revolucionario, los terratenientes montaron una defensa táctica del territorio agrario. Pero cada vez más, estas prácticas tuvieron consecuencias imprevisibles de larga duración. La violencia y la corrupción interceptaban el conflicto, pero encendían tensiones y contradicciones en el campo. La creación de propiedades escudo reconfiguró las fincas en formas que solidificaron las peticiones indígenas de usufructo de las tierras y contribuyeron a consolidar la territorialidad indígena. Como reflexionaba Oscar Franz: «Nosotros pensábamos que al dar a los indígenas tierras en propiedad haríamos que defendieran las nuestras, y así fue, pero también les dimos la sensación de ser dueños e hicimos que quisieran ser dueños de más». Lo más importante es que, si bien los terratenientes continuaron dominando el gobierno local, los nuevos modelos de mediación política durante ese periodo desplazaron a los terratenientes como el único nexo entre los campesinos y el país, y socavaron el deslinde material y discursivo del «adentro» y el «afuera» de las fincas. Para finales de los setenta y en los ochenta, con la crisis económica profundizándose en el campo chiapaneco, todas estas contradicciones estallaron en un conflicto agrario a gran escala.

6. Los muertos de Golonchán

Ganado, crisis y conflicto, 1962-1994

> ¿Qué cómo fue la catástrofe de Golonchán? A las cinco de la tarde los finqueros vestidos como policías estatales vinieron con el ejército [...] y todos venían portando armas. Traían arrastrando un cañón y cuando comenzó la balacera, llegó hasta las casas una bala que parecía una mazorca de maíz ya desgranada que se esparcía a nuestro lado con brillos metálicos. Huimos a las orillas del monte, arrastrándonos sobre el vientre porque las balas eran abundantes. Hubo muchos que perecieron. Doce de entre nosotros murieron, dieciocho fueron heridos, y los heridos están llenos de deudas por causa de las medicinas [...] Esta es la tragedia que sucedió el 15 de junio a las cinco de la tarde.
>
> Testigo anónima, 1980 [*apud* García de León 2002:207]

El 15 de junio de 1980, terratenientes vestidos con uniformes de policías, junto con soldados federales bajo el mando del general Absalón Castellanos Domínguez, irrumpieron en una reunión de indígenas invasores de tierras afiliados al Partido Socialista de los Trabajadores (PST) ocupando parte de la finca Golonchán. Cuando el tiroteo cesó más de dos horas después, al menos unos 12 campesinos yacían muertos.[1] Los heridos

[1] Tanto terratenientes como líderes campesinos implicados en el incidente coinciden en que fue mucho mayor el número de muertos que el que indica el recuento oficial. El general Castellanos Domínguez fue más tarde gobernador (1982-1988) y después, en 1994, fue secuestrado por militantes zapatistas en represalia por su gobierno de puño de hierro.

fueron incontables y cientos de personas huyeron de Golonchán a fincas de los alrededores ocupadas por miembros del PST. Muchos otros refugiados desaparecieron en poblados lejanos en las selvas del oriente de Chiapas.

Los muertos de Golonchán tienen su manera de aflorar en lugares inesperados. Don Roberto recuerda haber encontrado a uno de los muertos en la selva Lacandona en un viaje de trabajo de la Secretaría de Salud. Otro difunto cultiva supuestamente una pequeña parcela en las afueras del vecino Ocosingo. En medio de esta confusión, los muertos muy reales de Golonchán también viven en los recuerdos de la lucha agraria de indígenas y terratenientes. Para los terratenientes, en particular los que no están directamente implicados en los sucesos de junio de 1980, «Golonchán» simboliza un momento en el que «el gobierno actuaba rápidamente y con mano dura» para proteger los derechos de propiedad. No es extraño, pues, que después de 1994 muchos terratenientes exhiban conscientemente «Golonchán» como lo opuesto a la respuesta del gobierno a las invasiones de tierras más recientes. Por ejemplo, Alfredo Pinto, cuya finca San José Sierra Nevada fue invadida en 1980 y en 1994, negó que hubiera tenido dificultades agrarias antes del levantamiento zapatista. Cuando lo desafié con mi conocimiento de la invasión de su propiedad y del desalojo de los invasores por el ejército en 1980, respondió, «Aquellas no eran invasiones *reales*. No como en 1994, que fueron invasiones completas que nos obligaron a irnos, con amenazas de muerte y todo lo demás. Aquellas eran solo pequeñas invasiones y el gobierno intervenía rápidamente para recuperar las propiedades. Esto resolvía el problema».

La ocupación de Golonchán por miembros del PST formó parte de una ola de invasiones de tierras que se difundieron por todo el estado, y en realidad por todo el país, a finales de los setenta y principios de los ochenta. A finales de los sesenta comenzaron a proliferar por todo Chiapas organizaciones campesinas que eran con frecuencia críticas del Estado, y estallaron violentos conflictos entre grupos campesinos de la oposición, campesinos y terratenientes, campesinos afiliados al PRI y fuerzas

Castellanos Domínguez es el patriarca de una próspera familia de terratenientes de Ocosingo y Comitán de la que formaba parte la novelista indigenista Rosario Castellanos.

del Estado. Para 1980, campesinos que representaban a varias tendencias políticas, pero principalmente alineados al PST, habían tomado casi 70 de las fincas más grandes en el centro-norte de Chiapas.[2] La masacre de los miembros del PST en Golonchán fue únicamente un suceso de la enorme ola de represión ejercida por terratenientes y fuerzas gubernamentales que siguió los pasos de esta escalada de conflictos agrarios. En efecto, cuando la invasión de tierras se tipificó como delito federal en 1977, se emprendió una campaña militar coordinada contra los invasores de tierras; los líderes campesinos sufrieron cada vez más acosos y los terratenientes desalojaban a los campesinos con toda impunidad. Se llegó a denominar este periodo de 1976 a 1983 como del «populismo sangriento».[3] No es extraño que, después del levantamiento zapatista de 1994, periodistas y activistas desentierren a los muertos de Golonchán como evidencia emblemática de la actual dominación de los terratenientes chiapanecos por la fuerza.

En Golonchán los finqueros obtuvieron una gran victoria que asestó un golpe decisivo a la movilización campesina. ¿O tal vez no? Para los terratenientes afectados por las otras invasiones del PST, los recuerdos de ese periodo no son tan nítidos. Una conversación con un terrateniente, que de joven ayudó a canalizar la oposición de los terratenientes hacia el PST y podría haber participado en los sucesos del 15 de junio de 1980, me proporcionó un atisbo de esa ambigüedad. Después de describir los esfuerzos organizados de los terratenientes para cabildear a funcionarios estatales en favor del desalojo de los invasores de Golonchán y la subsecuente respuesta del ejército, yo interrumpí el relato para comentar:

Bobrow-Strain: O sea que finalmente ustedes obtuvieron lo que querían.

Terrateniente: No, en absoluto. Una vez que el movimiento agrario terminó, el gobierno nos dijo que participáramos en su plan de adquirir las propiedades invadidas y entregárselas a los campesinos.

[2] Sobre este momento en Chiapas y México, véase García de León 2002, Harvey 1998, Martínez Quezada et al. 1994, Gómez y Kovic 1993, Reyes 1992, Rubio 1987, Alonso 1984, Singer 1984, Pontigo y Hernández 1981.

[3] Sobre el populismo sangriento, véase Benjamin 1996:235. Véase también Gómez y Kovic 1993, Reyes 1992:104, Burguete 1987.

Bobrow-Strain: ¿Por qué desalojó el gobierno a los invasores si a fin de cuentas iba a entregar las tierras a los campesinos?

Terrateniente: Porque querían deshacerse de los invasores del partido de la oposición [el PST]. Después les dieron las tierras a los campesinos que seguían siendo leales al gobierno. Y estos eran tantos que el gobierno propuso comprar otros ranchos. Compraron Golonchán. Compraron Picote, San Antonio Bulujib, San Juan Cabtejaj, que ahora se llama San Juan de la Montaña, y Verapaz. Fue el fin de la ganadería en Sitalá.

En definitiva, la represión gubernamental a los invasores de tierras pertenecientes a grupos de oposición coincidió con la demanda de desalojos por parte de los terratenientes —un hecho que ha permitido que muchos observadores maquillaran los sucesos de Golonchán como un triunfo incuestionable de la hegemonía de los terratenientes—. Sin embargo, como lo indican las palabras de este terrateniente, un estudio atento de aquel momento en la formación y reformación de la agricultura finquera en Chilón cuenta una historia mucho más compleja y ambigua.

El expediente público sobre Golonchán en el Registro Nacional Agrario en Tuxtla Gutiérrez tiene más de 20 centímetros de grueso, y ha sido meticulosamente purgado de referencias a los sucesos del 15 de junio de 1980, pero no de las historias, ambigüedades y contradicciones. Sin desafiar el hecho de la colusión entre terratenientes y actores estatales en la dura represión de los invasores de tierras, yo desentierro los muertos de Golonchán una vez más para contar una historia diferente, no de una inequívoca conspiración de clase entre los terratenientes y el estado, sino de un momento inestable en la relación entre los terratenientes y el estado. La masacre de Golonchán y los desalojos que siguieron en todo Chilón y Sitalá ilustran un movimiento ulterior en el terreno inestable de las mediaciones políticas descritas en el capítulo 5; cambios en los que un organismo cada vez mayor de organizaciones campesinas en competencia fue desplazando a los terratenientes como mediadores entre el estado y el campo. Estos cambios surgieron y dieron origen a nuevas articulaciones de terrateniente, estado y territorialidad indígena.

Para entender estos cambios, hay que seguir el despliegue de un proyecto estatal dirigido a reorganizar los espacios de la producción agrícola en el sur de México. Los esfuerzos del Estado para abastecer de carne de res a la creciente fuerza de trabajo urbana industrial del país promoviendo la producción de ganado en el sur de México, coincidieron con la defensa del territorio por los chiloneros, ofreciendo nuevas claves políticas y económicas para la producción agraria. Pero la transición a la cría de ganado tuvo también consecuencias devastadoras para la supervivencia de los campesinos. En los años setenta, la combinación de la cría de ganado y la organización emprendida por nuevos actores políticos —curas que predicaban la teología de la liberación y seguidores del partido de oposición PST— radicalizó las luchas indígenas territoriales. Este proceso culminó con la invasión de Golonchán y muchas otras fincas a finales de los setenta y principios de los ochenta.

La ganadería y el conflicto

En la primavera de 1949, Francisco Cancino, propietario de la finca Zapucaná de Sitalá, se quejaba de que ganado descarriado había pisoteado varios campos de caña y maíz.[4] El dueño de los animales, Enrique Flores, era uno de los ganaderos pioneros de la región. Él y su hermano Gustavo (dueño de Golonchán) poseían más de una tercera parte del ganado en Sitalá y Guaquitepec y si bien esos animales causaban conflictos entre los terratenientes, los Flores acabarían por provocar problemas aún mayores entre los terratenientes y sus trabajadores indígenas.[5]

En los años cincuenta y sesenta, el ganado se dispersó rápidamente por todo el paisaje del centro-norte de Chiapas. Fue la época de los cercados de tierras, con la tala de árboles y la destrucción de cultivos por los terratenientes y los trabajadores para hacer lugar a los pastizales. Las que habían sido fincas abiertas y la Asociación Ganadera Local emergieron como

[4] «Acta del Juzgado», 20 de abril, 1949, en AMS.
[5] «Relación de todas las personas ganaderas », 10 de octubre, 1947, ibíd.

una de las instituciones preeminentes de la región en los aspectos social, político y económico. Entonces empezaron a colocarse cercas de alambre de púas. Los cuantiosos subsidios del gobierno dirigidos a incentivar la producción ganadera por todo el país promovieron un cambio profundo en el campo que llegó a denominarse la ganaderización de México. En Chilón, la expansión ganadera también llegó como una respuesta directa a los giros más localmente específicos en la economía política de la agricultura finquera: en primer lugar, la competencia de grandes productores de azúcar fuera de Chiapas y las enérgicas medidas del gobierno contra la producción clandestina de aguardiente provocaron el derrumbe del cultivo de caña de azúcar a pequeña escala y dejaron a los terratenientes que la cultivaban ávidos de encontrar nuevas fuentes de ingresos. En segundo lugar, la escasez cada vez mayor de mano de obra, resultado de los programas de reforma agraria que ofrecían a los trabajadores indígenas su primera oportunidad de abandonar las fincas y cultivar sus propias parcelas, animó a los terratenientes a realizar el cambio de la producción cafetalera de mano de obra intensiva a la cría de ganado casi sin mano de obra.[6] El giro hacia los pastizales cercados y los ranchos ganaderos produjo un gran auge en los ingresos de los terratenientes pero desplazó a los campesinos, desestabilizó el suministro de los alimentos básicos y dispuso el escenario para la protesta social masiva.

La ganaderización de México

Antes de 1950, a pesar del lugar central que ocupaban los rancheros y los ranchos de ganadería en la cultura popular mexicana, los mexicanos en general comían relativamente poca carne de res (Martín 1960, Sanderson 1986, Robles 1988). A medida que el país se industrializó después de la

[6] La reforma de la tierra alejó a los campesinos de las fincas de Chilón de dos maneras: con la creación de ejidos, como se estudió en el capítulo 5, y facilitando la migración a tierras abiertas a la colonización en las zonas bajas de la selva lacandona. Sobre esta migración, véase Leyva y Ascencio 1996.

segunda guerra mundial, la disonancia entre la cultura ranchera nacional y la dieta campesina real ejerció cada vez más presión en la política agrícola y la producción de reses para consumo doméstico adquirió una nueva urgencia. El presidente Ruiz Cortines (1952-1958) se apresuró a poner en marcha un plan de emergencia para promover el sector agropecuario basado en «créditos amplios y oportunos para todos los ganaderos…; el control y erradicación de plagas y enfermedades; incremento de los programas de inseminación artificial…; [y] represión enérgica del abigeato» (*apud* Robles 1988:78). En las tres décadas siguientes, el ganado emergería como la fuente principal de acumulación para el desarrollo nacional y como un ingrediente axial en los esfuerzos por consolidar la legitimidad posrevolucionaria del gobierno.

De 1950 a 1960, la inversión en ganadería casi se cuadruplicó y, gracias en buena medida a las inyecciones masivas de crédito fuertemente subsidiado, el sector ganadero creció a un ritmo sin igual (Chauvet 1999:52, Sanderson 1986). Es importante que fueran los propietarios medianos y grandes del sector privado, y no del ejidal, los que cosecharan los beneficios de esta notable expansión. En efecto, entre 1950 y 1970, el empeño lucrativo de la producción ganadera llegó a ser dominio casi exclusivo de propietarios privados, como los cafetaleros de Chilón[7] (Rutsch 1984:24). En 1960, solo 595 de las casi 4000 cabezas de ganado de Chilón se encontraban en ejidos (Secretaría de Industria y Comercio 1960). Con las reclamaciones de los rancheros de grandes trechos de tierra legitimadas por las exigencias del desarrollo nacional, el sector ganadero incrementó la producción sin invertir significativamente en mano de obra, manteniéndose como un intento mayoritariamente extensivo (Chauvet 1999, Robles 1988, Rutsch 1984).

Confinado en otro tiempo a los desolados desiertos norteños donde un centenar de hectáreas apenas mantenían a un novillo flaco, el ganado encontró un nuevo hogar en el exuberante trópico del sur. Los pastos

[7] Entre 1950 y 1970 la producción de ganado en los ejidos declinó marcadamente de 26 a 17.7% del total de la industria. Mientras, la participación de los propietarios privados en la producción ganadera en el país ascendió de 33 a 73.3% (Rutsch 1984: 24).

se esparcieron por toda la «frontera ganadera», en particular en los estados de Chiapas, Veracruz y Yucatán. Entre 1940 y 1960, los rancheros en esos estados aumentaron el total de la manada hasta 3 millones de cabezas (Villafuerte et al. 1997:20). En contraste con la ganadería tropical orientada a las exportaciones que había en muchos otros países latinoamericanos, los ranchos ganaderos proliferaron por todo el sur de México para abastecer a los mercados *internos*. En este sentido, aunque los rancheros en el norte de México continuaban exportando ganado y carne a los Estados Unidos (Sanderson 1986), la ganadería tropical existía verdaderamente para apuntalar el crecimiento urbano industrial de México. La cría de ganado en el trópico estaba también explícitamente vinculada con la necesidad de dominar, poblar y conquistar territorio. Como lo expresó un político en 1955, «Vivimos en una época que pasará a la historia como la liberación de los países coloniales; esta liberación depende en gran parte de la conquista del trópico y de su integración a la economía y la civilización del… mundo» (*apud* Villafuerte *et al.* 1997:14). Los paladines de esta gran conquista se jactaban de que «los trópicos tienen vocación ganadera» (*apud* Fernández y Tarrío 1983), pero fue el arrollador apoyo estatal lo que permitió a los rancheros del sur seguir esa «vocación».

Respaldado por las iniciativas del Banco Mundial, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover la cría de ganado tropical, el Estado derramó fondos al sur como nunca antes lo había hecho. En Chiapas, cuatro gobernadores consecutivos patrocinaron programas diseñados para estimular la producción ganadera y convertir el sector «en una de las bases firmes de sustentación económica del estado» (Gobernador Aranda Osario, *apud* Fernández y Tarrío 1983:49). A lo largo de los años cincuenta y sesenta, los ganaderos recibieron incentivos fiscales de hasta 70% sobre las ganancias, la construcción de carreteras para transportar el ganado a los mercados, una amplia gama de asistencia técnica y crédito virtualmente gratuito, material para cercas y medicamentos de veterinaria (Fernández y Tarrío 1983:50; Villafuerte et al. 1997). El número de cabezas de ganado en Chiapas creció 260% entre 1950 y 1970, y a lo largo de ese

periodo los rancheros privados controlaban más de 70% de la ganadería del estado. Más importante todavía era que la cantidad de ganado clasificado como *fino*, de pura sangre —animales pertenecientes casi en exclusiva a ganaderos privados— se incrementó más de 2000% (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Número de cabezas de ganado en todo el estado y en propiedad privada, Chiapas, 1950-1970

	Todo Chiapas		Propiedad privada*	
Año	Total	Categoría fina	Total	Categoría fina
1950	480 308	11 278	351 771	6 811
1960	682 512	57 982	525 086	49 954
1970	1 249 326	148 185	890 094	140 191

*Más de cinco hectáreas
Fuente: Calculado de Villafuerte et al. 1997:196.

El ganado prometía transformar la atrasada estructura colonial de Chiapas en agroempresas modernas, y los impulsores del «magnífico futuro ganadero» del estado (De la Peña 1951:491) pusieron la mira en Chilón como reserva sin explotar, madura, para el ganado. A pesar de las vastas posibilidades para la ganadería en esta rica región (De la Peña 1951:513), Chilón, frenado por agresivas enfermedades, ácaros, murciélagos vampiro y falta de infraestructura de mercado, estaba muy a la zaga de otras partes de Chiapas. Con las carreteras hacia el interior intransitables la mayor parte del año, los bueyes sementales tenían que ser transportados por aire a la región, a bordo de avionetas de carga de hélice, de ida y vuelta, y la producción estaba tan dispersa que los terratenientes se referían a ella como «cacería» del ganado en lugar de «cría». Sin embargo, mediante un empeño estatal concertado para combatir las amenazas a la salud del ganado y la apertura de carreteras hacia el interior de la región, todo estaba a punto de cambiar.

Para los chiloneros, los incentivos para que se involucraran en la ganadería no podían haber llegado en mejor momento. A mediados de los cincuenta, tanto los mercados de café como de caña de azúcar

experimentaron importantes contracciones, el primero debilitado por sobreproducción cíclica en los mercados internacionales y el segundo agotado permanentemente por cambios más cerca de casa.[8] De este modo, para cuando la producción ganadera comenzó a despegar en los años cincuenta y sesenta, Alejandro Díaz explicaba: «La gente que cultivaba la caña [de azúcar] ya no podía sacar ninguna ganancia y buscaba otras maneras de ganarse la vida y se cambiaron a… la ganadería. Con el ganado había más circulación de dinero que nunca antes…. El ganado recuperó la economía…. La gente también estaba contenta porque cuando había dependido del café o la caña, siempre tenía que esperar a la cosecha para tener dinero. Con el ganado podían obtener dinero siempre que lo necesitaran. Si tenían un gasto, podían vender ganado…. El ganado era más constante». Así pues, aunada a los apoyos estatales lucrativos, la liquidez durante todo el año que daba el ganado demostró ser una bendición para los productores, tan constreñidos hasta entonces por los ciclos estacionales del café. «El ganado trajo una tremenda riqueza a la región», recordaba Enrique Díaz Pérez: «El ganado es capital vivo y enriqueció al municipio».

«El ganado fue ganancia», como les gusta decir, pero la ganadería también era una solución muy necesaria para otro problema. A medida que más y más trabajadores finqueros formaron o se incorporaron a ejidos en el periodo posrevolucionario, conseguir fuerza de trabajo barata y confiable se hizo cada vez más difícil. Miguel Utrilla recordaba ese periodo: «En los años cincuenta, la gente empezó a ver que el café era algo bueno y quiso tener sus propios cafetales. Quieren tener su propio lugar para plantar café, que lo ven como si fuera oro. Una vez que la gente tiene sus propias rancherías y sus cafetales, se hace cada vez más difícil contratar mano de obra. Vas con alguien que contrataste por años para cosechar el café y te dirá

[8] La poderosa familia Pedrero de San Cristóbal había conseguido el control del sistema de autorización de bebidas alcohólicas y del impuesto sobre el consumo en Chiapas, y se valió de esa autoridad para obtener el monopolio absoluto de la producción legal de aguardiente en el estado. Para imponer su monopolio, la policía del impuesto al consumo de los Pedrero promovió allanamientos de destilerías clandestinas en Chilón y Sitalá y sustituyó el alcohol producido localmente por latas de 20 litros de su propio aguardiente que llegaba semanalmente de San Cristóbal.

[imitando una voz humilde], 'Noooo, patróóón. ¿Por qué no le pregunta a mi hijo? ¿Por qué no le pregunta a mi hermano?'».

Delio Ballinas, que perdió dos propiedades por la invasión a principios de los ochenta, vivió el mismo proceso. «Llegaron los sacerdotes y empezaron a decir a los indígenas que si ellos habían vivido de la propiedad por diez años, tenían derecho a ella». Los peones que no formaron ni se incorporaron a un ejido en Chilón, prosiguió Ballinas, «abandonaron nuestros ranchos y se fueron a la selva, donde el gobernador les dio tierra, y nos quedamos sin mano de obra». Ballinas reclutó a trabajadores temporales hasta del distante San Cristóbal, pero nunca pudo conseguir suficientes.[9] Pero la alternativa —obligar a los trabajadores residentes a que se quedaran en la finca— estaba perdiendo atractivo. A medida que las peticiones de la reforma agraria por los trabajadores residentes proliferaron en los cincuenta y sesenta, los trabajadores que vivían en terrenos de la finca significaban una constante amenaza.[10]

Los terratenientes recurrieron a una serie de soluciones. La principal fue fraccionar en parcelas sus fincas para dar a los trabajadores leales pequeñas propiedades que pudieran pagar con mano de obra. Esta práctica tan extendida estableció una fuerza de trabajo segura con menos demandas legales sobre las fincas de los propietarios y, en términos ideales, una deuda de gratitud con el terrateniente.[11] La producción de ganado, con sus requerimientos de mano de obra increíblemente bajos, era otro método para reducir la dependencia de los trabajadores residentes. Más importante aún

[9] Cultivadores de café como Carlos Setzer y Rodolfo Domínguez empezaron a contratar mano de obra de Guatemala para los periodos pico de la cosecha.

[10] En el capítulo 8 estudio los importantes apoyos políticos a la territorialidad de los finqueros asociados con la transición a la ganadería, en particular protecciones legales redobladas para la propiedad de la tierra y la creación de nuevas fuerzas de policía rural.

[11] Como vimos en el capítulo 5, esas pequeñas propiedades también servían de defensa de las fincas contra las invasiones. Ramiro Ramos, cuya finca Tulaquil estaba directamente en la ruta de los invasores del PST, admite que el apoyo de campesinos leales a los que les había dado tierra a cambio de trabajo le permitió evitar la invasión. Sin embargo, esta estrategia podía fracasar. Ruperto Monterrosa, cuya propiedad El Desengaño fue invadida en 1980, me dijo: «Cometimos el error de darles a los campesinos pequeñas parcelas de tierra, pero eso lo que hizo fue darles el gusto de la propiedad y el afán de tener más tierra».

quizá sea que los terratenientes no tardaron en darse cuenta de que el apoyo cada vez mayor del estado a la producción de ganado acarreó una serie de nuevas leyes, instituciones y mecanismos políticos que permitieron a los terratenientes rehacer la territorialidad de la agricultura finquera.

En 1965, la Unión Ganadera Regional de Chiapas (UGRCH), con base en Tuxtla Gutiérrez, envió una circular a sus agremiados en la que se celebraba el extraordinario éxito del cabildeo con la Secretaría de Industria y Comercio para establecer un precio garantizado para las reses sacrificadas en canal y afaenadas superior «incluso al que se había prometido».[12] Pero a juzgar por la correspondencia en el archivo de la AGL, a los chiloneros no les importaban tanto las garantías económicas como las legales y políticas. Carta tras carta se quejaban de las invasiones reales y potenciales, de las demandas fabricadas de la reforma agraria y de la alteración de la producción por el sabotaje de los campesinos. Las protestas de los terratenientes no cayeron en oídos sordos.

Un ferviente patrocinador de la producción de ganado, el gobernador José Castillo Tielemans (1964-1970), expresó claramente los requisitos duales de la industria en expansión. El sector ganadero, sostuvo, requería dos cosas: estímulos económicos y todas «las garantías legales [...] a fin de que puedan [...] desarrollar sus actividades sin amenazas ni incertidumbres» (*apud* Fernández y Tarrío 1983:51). Además, como lo expresó más enérgicamente un gobernador posterior: «Reitero la firme determinación del jefe del ejecutivo estatal de no permitir ninguna invasión que venga a romper la tranquilidad de la gente del campo... [de modo que] los ganaderos del estado puedan sentirse seguros y continuar produciendo beneficios para toda la familia chiapaneca» (gobernador González Blanco, *apud* Fernández y Tarrío 1983:55).

Las palabras del gobernador tienen un doble sentido, revelador por irónico: el término exacto que emplea para indicar a la población del estado en su totalidad —«la familia chiapaneca»— se usa también comúnmente para describir a las elites terratenientes más ricas del estado. Tanto si el

[12] UGRCH a AGL (circular), 18 de julio, 1965, en AGL.

gobernador pretendía este doble significado como si no, refleja con precisión lo que lograron las instituciones y los marcos legales de la ganaderización: los beneficios políticos garantizados para los terratenientes debido a su demostrada capacidad de producir para el cuerpo social en términos amplios. Estos beneficios adoptaron dos formas: la provisión de protecciones legales extensivas al pasturaje y la creación de nuevas instituciones para imponer y defender estas protecciones.

En 1937, en interés de «la conservación y el incremento de la riqueza ganadera [de México]», el reformador radical de la tierra, el presidente Lázaro Cárdenas, decretó un anexo al código federal agrario que iba a tener consecuencias duraderas y decididamente conservadoras en Chiapas. El anexo garantizaba a los ganaderos la exención de la ley de reforma agraria y elevaba espectacularmente el límite legal de la «pequeña propiedad» a cualquier extensión de terreno que se requiriera para mantener 500 cabezas de ganado. Con Cárdenas, esta exención era temporal —limitada a 25 años— y se aplicaba únicamente si las necesidades agrícolas de todas las comunidades campesinas dentro de un radio de siete kilómetros habían sido satisfechas (Reyes 1998*b*:159-160). No obstante, para finales de los años cuarenta, la concesión temporal de Lázaro Cárdenas se había vuelto permanente. Para asegurar la inmunidad elegible de los terratenientes, las burocracias federales les ofrecieron certificados de inafectabilidad, especificando que sus propiedades estaban exentas de la Ley de Reforma Agraria. Comenzando con el gobierno del presidente Miguel Alemán (1946-1952), el «presidente hombre de negocios» (Krauze 1997) y arquitecto de la contrarreforma agraria de México, decenas de miles de hectáreas de tierra recibieron certificados de exención en Chiapas. Aunque la cría de ganado real quedó muy rezagada en Chilón, los chiloneros no tardaron en sacar ventaja de esta tendencia. Cada una de las fincas grandes de la zona pidió la inafectabilidad y más de la mitad de las solicitudes se presentaron entre 1952 y 1955.

Aunque los certificados de inafectabilidad eran signos clave del apoyo del estado a los terratenientes, solicitar uno de esos certificados podía resultar bastante oneroso, como Enrique Pinto, dueño de la finca San Antonio

Patbaxil, de 136 hectáreas, quien se quejó al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) después de tres años invertidos en el proceso de solicitud: «No se puede trabajar con mayor entusiasmo las tierras en virtud de las constantes amenazas de grupos campesinos que pretenden solicitar tierras en esta región cosa que me perjudicaría grandemente y por otro lado no puedo solicitar préstamos al Banco por no tener al Certificado de Inafectabilidad Agrícola, así pues, ruego nuevamente informarme el estado de trámite de dicho expediente ya que en mi última visita a la Ciudad de México, acudí a esas Oficinas y en forma verbal me informaron que dicho expediente estaba por resolverse y de esto tiene más de un año».[13]

Ocho años después, Pinto sí recibió la confirmación final de inafectabilidad de la reforma agraria, después de haber sido rechazada y tener que pasar de nuevo por todo el proceso. Aunque la lógica en que se basa tanto el rechazo como la subsecuente concesión de la inafectabilidad no es ni mucho menos clara, el hecho de que San Antonio Patbaxil funcionara como una finca en unión con la propiedad San José Sierra Nevada, propiedad también de la familia Pinto, puede indicar la razón del retraso. En otro caso, las autoridades federales enviaron reiteradas veces de vuelta una solicitud hecha por Esperanza Zepeda para aclaraciones, una de las veces señalando incluso que los técnicos de la SRA local que midieron sus tierras no se dieron cuenta de la existencia de toda una población de peticionarios indígenas de la reforma agraria ubicados dentro de la demarcación de la finca. En otra carta se preguntaba cómo era posible que Zepeda negara que Santa Cruz estaba dentro del radio de siete kilómetros de distancia de cualquier comunidad de la reforma agraria, cuando ella misma enumeraba también el ejido de Bachajón como su vecino inmediato al este.[14] A pesar de estas complicaciones, el gobierno federal concedió eventualmente

[13] Certificado de Inafectabilidad, San Antonio Patbaxil, en RAN-DF, documento 275.1/1504. El tiempo transcurrido desde la primera solicitud hasta recibir un certificado de inafectabiidad iba de uno a diez años, pero la mayoría de las peticiones de los propietarios de tierras recibían respuesta en un promedio bastante por debajo de los siete años que tenían que esperar los campesinos por sus peticiones de tierras.

[14] Certificado de Inafectabilidad, Guadalupe Fracción Sur, documentos 275.1/1945 y 275.1/2223; DAAC al Departamento de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera, 9 de abril, 1965;

a Zepeda un certificado de inafectabilidad plena en 1972. Como lo indica el caso, aunque la exención era mucho menos automática de lo que se decía con frecuencia, la mayoría de los chiloneros recibieron respuestas relativamente rápidas y positivas a sus peticiones, tanto si en realidad satisfacían como si no los requisitos laxos del código agrario.[15]

Dado el carácter politizado de los derechos de propiedad en México, la exención de la reforma agraria hubiera tenido poca repercusión en los productores sin medios efectivos para hacerla cumplir bajo el régimen del PRI. En consonancia, a comienzos de los años treinta nacieron una serie de asociaciones ganaderas corporativistas jerárquicamente organizadas para servir de guardianes institucionales de la propiedad en Chiapas. En la cima de esta pirámide, autorizada por una ley federal de 1936, la UGRCH actuó como organismo coordinador para las asociaciones locales que comenzaron a aflorar por todo el estado a mediados de los cuarenta. Entonces, como ahora, la UGRCH fungió como una cámara de compensación para los subsidios ganaderos y los programas de extensión, como patrocinadora de ferias y concursos de ganadería, y como refuerzo general de la producción ganadera en el estado, pero su función primordial era servir de canal a través del que los terratenientes pudieran ejercer presión sobre el estado para resolver las reivindicaciones de la reforma agraria en su favor (Reyes 1998*b*). Con este fin, la UGRCH patrocinaba esfuerzos de cabildeo preventivo contra demandas de los campesinos y ayudaba a los terratenientes a negociar en el laberinto de la burocracia de la reforma agraria. A lo largo de los sesenta, esta Unión circuló boletines regulares a sus miembros con títulos como «Cómo denunciar una invasión de tierras».

Si la UGRCH coordinaba el cabildeo de alto nivel para los ganaderos del estado, las asociaciones locales formaban la línea del frente de la defensa de los terratenientes. En Chilón, la AGL (fundada en 1962), como

---

y Director General de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera a la Oficina Técnica (circular). 1 de marzo, 1965, expediente 23/27859, todos en RAN-DF.

[15] Recuérdese el caso de San Antonio Bulujib en el capítulo 5, en el que los Bertoni falsificaron claramente el requisito de que su propiedad estaba libre de reclamos pendientes de tierras. Pero recuérdese también que las exigencias políticas hacían que los funcionarios pasaran frecuentemente por alto las protecciones garantizadas por la exención.

contrapeso al activismo naciente de las organizaciones corporativas de campesinos como la Confederación Nacional Campesina (CNC), respaldó a terratenientes individuales en sus pleitos con campesinos.[16] En numerosos casos, la AGL confirmó las quejas de terratenientes en cartas de apoyo dirigidas a diversas dependencias estatales. En 1965, por ejemplo, la AGL, esgrimiendo su pertenencia a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNG), escribió a la DAAC que «pusiera las cosas en claro» sobre los tratos por debajo de la mesa y las falsas afirmaciones hechas por los campesinos invasores de la finca San José Mequeja. No obstante, la AGL desempeñó a menudo un papel más inmediato en la resolución de conflictos de tierras, como lo reveló el desventurado propietario de la finca Jericó en una carta de 1965 a la AGL: «La última vez que hablé con el Lic. de Cosas me dijo que *de nuestra asociación depende* que los invasores desalojen puesto que ellos podían intervenir con el presidente municipal y encarcelar al grupo de vivales que explota a esos tontos indígenas».[17]

La capacidad de la AGL para intervenir directamente en los conflictos agrarios reflejaba, por supuesto, la impunidad general de que gozaban los terratenientes y las estrechas conexiones entre ellos y los funcionarios locales, pero también hablaba de políticas específicas diseñadas para reforzar ese sector. Para la mayoría de los impulsores de la ganadería, el robo de ganado era el factor que impedía a Chiapas alcanzar su verdadero potencial agropecuario. «Una sequía, una peste, una inundación, con todo y que son grandes daños que traen consigo, no provocan el malestar, la inconformidad y el desaliento que el abigeato crea», escribió un observador (Chanona 1952:104), y el venerable Moisés de la Peña coincidía (1951:483). En el meollo del problema del robo de ganado, sostenía el venerable, había una «falta de autoridad» fundamental. La ley de 1940 que permitió las

[16] En efecto, la UGRCH y la AGL, ambas organizadas bajo los auspicios de la Confederación Nacional de Ganaderos (CNG), reflejan la arquitectura de las organizaciones corporativas campesinas jerárquicamente organizadas, una perfecta ilustración de la manera en que el PRI vislumbró cómo incorporar a los sectores rivales de la economía y ordenar sus relaciones.

[17] AGL a la DAAC, 9 de agosto, 1965; Josefina Ordóñez a AGL, 8 de octubre, 1965 (cursivas del autor), ambos en AGL. No queda claro por el contexto si De Cosas era un funcionario de la reforma agraria o un asesor en la UGRCH.

asociaciones de ganaderos en Chiapas trató de abordar esa falta de autoridad con una serie de disposiciones que alentaban a los terratenientes a formar cuerpos de policía para combatir la plaga de los abigeos. De acuerdo con esta ley, los miembros de las asociaciones locales de ganaderos podían formar una brigada montada de defensa, y el gobierno del estado les suministraría las armas (De la Peña 1951). No es raro, pues, que aunque la evidencia en los archivos en Chilón y Sitalá apunta a los propietarios ladinos como los culpables en la mayoría de los pleitos sobre ganado, la policía que perseguía a los abigeos no tardara en encontrar trabajo defendiendo las fincas contra las invasiones de campesinos. Para 1963, cuando todavía no hacía un año del asesinato de Pedro Chulín, la UGRCH pudo fácilmente convocar a sus miembros a que «apoyemos a la Policía en las celebraciones del Día de la Policía… porque últimamente ellos han hecho un trabajo especial de combatir el robo de ganado *y todos los problemas recientes*».[18] Por ende, al mismo tiempo que la ley de 1940 facilitaba la creación de las policías ganaderas (que sus oponentes solían llamar «guardias blancas»), su fuerte retórica en apoyo al desarrollo y en contra del robo de ganado promovió una mayor tolerancia de la represión en nombre del progreso económico.

En suma, para los años sesenta y setenta, la producción ganadera ofrecía a los terratenientes un mercado lucrativo, requerimientos bajos de mano de obra y peticiones privilegiadas de una amplia variedad de apoyos estatales. El ganado permitió que los terratenientes reelaboraran y defendieran los espacios de las fincas agrícolas a la vez que redujo enormemente su dependencia de los trabajadores residentes, pero esta estrategia fue la que en definitiva fracasó de manera violenta.

Las contradicciones del ganado

La ganaderización de Chilón brindó a muchos terratenientes una prosperidad y una estabilidad sin precedentes. Sin embargo, para la mayoría de

[18] UGRCH a todas las asociaciones locales de ganaderos, 30 de noviembre, 1963, en AGL (cursivas del autor)

los campesinos significó hambre y desempleo. En todo México, durante los años setenta, los pastos y los cultivos forrajeros desplazaron a los cereales básicos (Rubio 1990, Sanderson 1986). A medida que los terratenientes convirtieron en pastizales tanto sus propios campos de maíz como las milpas que en otro tiempo cultivaban los trabajadores residentes, el abasto de alimentos cayó en forma abrupta. En 1980, el presidente municipal de Chilón escribió frecuentes quejas sobre la «gran escasez de maíz y frijoles» en la región debida a la expansión de los pastizales.[19]

Cinco días antes de la masacre de Golonchán, Rodolfo Domínguez, en sus esfuerzos por conseguir el maíz y frijol que necesitaban desesperadamente, envió una delegación de ejidatarios y peones leales al PRI a que solicitaran apoyo al presidente municipal por medio del Instituto Nacional Indigenista (INI).[20] El hecho de que estos campesinos recurrieran al INI en busca de alimentos refleja un cambio monumental en las relaciones sociales tradicionales en las fincas. Previamente, durante décadas, el terrateniente suministraba a los trabajadores víveres en emergencias, en tiempos difíciles. Pero con la importancia cada vez mayor de la ganadería, como lo reveló Alejandro Díaz, «dejó de ser conveniente tener [peones residentes] en nuestras fincas». A partir de 1959, las actas de los tribunales en Chilón testifican las crecientes preocupaciones de los terratenientes por encontrar maneras de deshacerse de los trabajadores con derecho a usar la tierra que, de otro modo, podría servir para pastos. Un hombre que había comprado parte de Patbaxil, por ejemplo, se negó a aceptar la propiedad «junto con todos sus sirvientes», como era costumbre, y se quejaba amargamente de dos familias que se oponían a abandonar la tierra.[21]

Valiéndose de una popular regla general, los terratenientes reportan que mientras que una hectárea de cafetales necesita 200 personas (es decir, personas-días de trabajo), un ranchero puede manejar 200 hectáreas de ganado. Para 1978, la tierra dedicada a cultivos agrícolas se había reducido

[19] «Informe del Gobierno Municipal», 1980, en AMCH; Presidente Municipal de Chilón a Diputado Federal, 9 de febrero, 1980, en RAN-TG, expedientes del Ejido de Chilón.

[20] Rodolfo Domínguez al Presidente Municipal de Chilón, 10 de junio, 1980, en AMCH.

[21] «Juzgado», 14 de febrero, 1959, ibíd.

a solo 12% del estado y el ganado ocupaba más de 40% de la superficie de Chiapas. Aun así, la ganadería empleaba entonces únicamente el equivalente a una tercera parte de todos los que trabajaban en el menguado sector agrícola (Fernández y Tarrío 1983:138). En suma, la expansión de los ranchos de ganado generó simultáneamente disminución en el suministro de alimentos básicos y en el empleo local. Mercedes Olivera, antropóloga y activista que pasó tiempo en la región durante esta transición, describe sus consecuencias: «Nosotros veíamos, grupos de campesinos [que habían sido expulsados de fincas], caminando por las carreteras. Se nos acercaban para decirnos que buscaban un nuevo patrón y nos preguntaban si sabíamos dónde lo podrían encontrar». A medida que la crisis económica se fue profundizando en los años ochenta (Rus 1995), el sentimiento de abandono que tenían los campesinos no tardó en transformarse en rabia y movilización. Olivera informa que ella y otros estudiantes organizaron a campesinos sin tierras para que reclamaran las parcelas que habían perdido en la transición a los ranchos de ganadería, viendo a veces con horror cómo los «sentimientos de aflicción [de los campesinos] se convertían en odio y violencia».

Los curas, los partidos y la transformación de la territorialidad indígena

Comenzando en los años setenta y aguijoneados por los efectos brutales de la ganaderización en los medios de subsistencia de los indígenas, nuevos mediadores radicales lograron insertar una cuña irreversible en la relación entre los terratenientes, los campesinos indígenas y el Estado. Los movimientos campesinos nacientes en el centro-norte de Chiapas en los años setenta formaban parte de una gran respuesta nacional de los campesinos sin tierras y con poca tierra a los efectos de una crisis agrícola prolongada, las contradicciones de la ganaderización, la respuesta letárgica de las burocracias de la reforma agraria del país, el desmoronamiento de la CNC alineada con el gobierno y las secuelas de la represión de los movimientos democráticos populares en 1968. Alentadas por las reformas

políticas y la agenda populista del presidente Luis Echeverría (1970-1976), movilizaciones a gran escala se esparcieron por todo el campo mexicano (y persistieron a pesar de la represión en el sexenio del sucesor conservador de Echeverría).

Los textos sobre las luchas agrarias de Chiapas en este periodo han enfocado casi toda su atención en los conflictos en Simojovel y Venustiano Carranza (Harvey 1998, Toledo 1996). En los dos casos, el desplazamiento de miles de campesinos por la construcción de presas hidroeléctricas intensificó las contradicciones que ya hemos mencionado, y tuvieron como resultado choques dramáticos que pasaron frecuentemente a ser noticias nacionales. Pero poco se ha escrito sobre el estallido de la lucha agraria en Chilón, donde dos fuerzas emergentes canalizaron a los campesinos descontentos hacia la conciencia política y la resistencia organizada: (1) la creciente politización de las iniciativas de organización comunitaria llevadas a cabo por la misión jesuita en Bachajón y (2) la aparición de un partido político de oposición militante, el PST, consagrado a buscar con determinación los derechos de los campesinos a la tierra.[22]

Desplazamiento del patrón: la teología de la liberación y el reto a la producción agraria

La misión jesuita en Bachajón, fundada en 1958 con los objetivos de «convivir con el indígena, aprender su lengua, predicar el Evangelio, catequizar, impartir sacramentos y buscar su desarrollo social y material [de los indígenas] (*apud* Díaz Olivares s.f.:129), pasó la primera década realizando trabajo misionero relativamente tradicional. Inicialmente, este enfoque suave se ganó el apoyo decidido de muchas elites terratenientes a la misión, pero para 1971, respondiendo a los vientos de cambio que soplaban por toda América

[22] Ovalle Muñoz, 1984, es el único estudio académico específicamente centrado en el conflicto en Chilón durante ese periodo, aunque numerosos autores mencionan o discuten la masacre de Golonchán, a veces utilizando otros nombres equivalentes, como «Wolonchán» y «Colonchán» (e.g., García de León 2002, Benjamin 1996, Pontigo y Hernández 1981).

Latina, la agenda empezó a cambiar. Estimulados por la nueva apertura en la Iglesia católica después del Concilio Vaticano II (1962-1965) e impulsados por las contradicciones de la creciente pobreza y la intensificación del régimen autoritario, muchos católicos latinoamericanos empezaron a concebir un nuevo tipo de Iglesia. Desafiando décadas de teología conservadora, sacerdotes y pensadores laicos como Gustavo Gutiérrez y Juan Segundo conectaron la teología con el análisis social, político y económico radical para imaginar una praxis religiosa basada en el compromiso material con el mundo. En reuniones celebradas en Brasil, Suiza y, la más importante, en Medellín, Colombia, se forjó una nueva «teología de la liberación» que asumió una incipiente forma institucional. Obispos, teólogos y dirigentes laicos opinaban que la iglesia debe desprenderse de su histórica complicidad con la opresión y ponerse firmemente del lado de los pobres de América Latina.

El obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, fue un uno de los primeros seguidores de la teología de la liberación y participante activo tanto en el Concilio Vaticano II como en la Conferencia de Medellín de Obispos Latinoamericanos (1968). Bajo su influencia, la Iglesia Católica en Chiapas comenzó a dar un giro y a distanciarse de la evangelización misionera tradicional y la castellanización (imposición de la lengua y las costumbres ladinas) y consagrarse a un proyecto más radical imbuido de construcción de conciencia política crítica y nuevas formas de identidad indígena.

La teología de la liberación arraigó rápidamente en el Chiapas tseltal, primero en Ocosingo y después en Bachajón. El trabajo se inició con la capacitación de cientos de catequistas indígenas laicos, hombres y mujeres tseltales que iban por las montañas de comunidad en comunidad predicando el Evangelio y vinculando su enseñanza religiosa con la política agraria. «Después de 1971», el padre Morales me contó, «comenzamos un trabajo intensivo sobre problemas agrarios. Tradujimos la Ley Agraria al tseltal y celebramos talleres sobre la lucha agraria, todo bajo el lema de no violencia y no invasiones. La gente se estaba volviendo consciente de su realidad».

En 1974, catequistas tseltales de Bachajón y Ocosingo desempeñaron un papel formativo en la organización de un congreso que llevó a indígenas de todo el estado a San Cristóbal de Las Casas a discutir sobre la

tierra, el comercio, la educación y la salud. Concebido por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Suárez, como una simple celebración del quinto centenario del nacimiento del primer obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas, el congreso asumió un cariz más crítico cuando Velasco Suárez delegó la responsabilidad de convocar a la reunión a Samuel Ruiz (CENCOS 1974). Bajo la dirección de Ruiz el congreso se convirtió, en palabras del padre Morales, «en un proceso, no en un acontecimiento», una oportunidad de convocar a las comunidades indígenas para un año de reuniones en las que discutieron sus intereses, esbozaron sus demandas políticas y económicas, y formularon planes. En suma, los preparativos del congreso despertaron la conciencia de toda una generación de dirigentes indígenas laicos que venían de comunidades tseltales, tsotsiles, choles y tojolabales.

En la misma reunión, tseltales de Bachajón, Chilón, Sitalá y Yajalón denunciaron a los funcionarios corruptos de la SRA, a los jefes políticos indígenas respaldados por el PRI, a los comerciantes ladinos y a los terratenientes. Los tseltales atacaron la explotación general de los trabajadores residentes en fincas y denunciaron los abusos de los finqueros y las fallas del estado, incluidos 18 años de lucha agraria reprimida en la finca Santa Cruz de Enrique Flores. Al final, todos los participantes prometieron organizar agresivamente luchas agrarias y colectivos económicos (CENCOS 1974).

A medida que se fue imbuyendo del espíritu radical de la teología de la liberación, la misión de Bachajón comenzó a poner la mira en el lugar de los ladinos como el nexo entre los campesinos y el sistema de gobierno en general. Las empresas cooperativas, incluido un colectivo para beneficiar el café, no solo buscaban mejorar «el desarrollo social y material» de las comunidades indígenas, sino que también desafiaban explícitamente a los monopolios comerciales ladinos (Díaz Olivares s.f.). Los jesuitas tomaron la temprana decisión de «nunca trabajar directamente con los finqueros» y el padre Morales me dijo por qué: «El finquero era el intermediario entre el sacerdote y la gente, pero los finqueros dominaban a través de la religión. Rompimos el esquema y nos centramos en la gente. Hicimos más que celebrar ceremonias; reinterpretamos la palabra de Dios a la luz de la realidad. Esto fue dinamita pura» (Human Rights Watch 1997:3).

Y *fue* pura dinamita. En la mente de muchos terratenientes, la Iglesia que alguna vez había figurado como amiga y aliada de confianza ahora solo sembraba la división y el odio. Miguel Utrilla, que de joven había sido uno de los terratenientes más fuertes aliado de los jesuitas, aún se siente traicionado por esos cambios. Los jesuitas ya no permiten a los indígenas nombrar a los ladinos padrinos, se quejó Utrilla: «Los curas están sembrando la diferencia étnica, tratando a mestizos e indígenas de manera diferente, separándolos. Recuerdo que una vez uno de mis trabajadores —era tseltal pero también hablaba español— tuvo que ir a las charlas sobre el matrimonio que daban los curas antes de casarse. Le convenía asistir a las charlas que se daban en español, pero los curas insistieron en que los tseltales solo podían asistir a las sesiones en tseltal».

Para la mentalidad de los terratenientes lo peor era que la construcción de estas diferencias étnicas acabó describiendo a los ladinos como villanos. Delio Ballinas daba una opinión más dura pero más extendida del papel de los curas en este proceso: «Antes de los curas, los trabajadores eran muy leales. Sí, muy leales. Pero los curas comenzaron a sembrar el odio entre ellos. A enseñarles a atacarnos. Los curas llegaron a Pantelhó hace treinta y cinco años y comenzaron a enseñar a los indígenas a pedir aumentos de sueldo, a pedir escuelas. Diciéndoles que si habían vivido en una finca por diez años, tenían derecho a reclamarla».

A lo largo de los años setenta, la organización eclesial fue atacada por terratenientes, comerciantes, campesinos alineados con el PRI y funcionarios estatales. Por ejemplo, en 1975, una carta del alcalde de Chilón a la legislatura del estado denunciaba a los catequistas indígenas como vagos y agitadores, y en 1976 el alcalde de Sitalá se quejó con funcionarios del gobierno de la organización de los jesuitas en la finca Golonchán.[23] No obstante, fue la presencia cada vez mayor del PST la que encauzó definitivamente la situación en Golonchán hacia la violencia.

[23] Presidente Municipal de Chilón a Diputado González Camacho, 21 de enero, 1975, en AHPL; Presidente Municipal de SItalá a PRODESCH, 7 de octubre, 1976, en RAN-TG, expedientes de Ejido Golonchán.

Aprendiendo a invadir tierras: El PST en Chilón

En los años setenta aparecieron por todo Chiapas movimientos campesinos independientes. En Chilón, fue el recién formado Partido Socialista de los Trabajadores el que enarboló la bandera de la lucha agraria. A nivel nacional, el PST surgió de los movimientos de democratización que nacieron en 1968 y fue posible gracias a las reformas electorales en la presidencia populista de Luis Echeverría, que facilitaron la formación de nuevos partidos políticos (Alonso 1984). A partir de 1973, los militantes del PST presionaron a Echeverría para que expandiera e intensificara los programas de redistribución de la tierra, y para finales de los setenta, la influencia del partido se había difundido a Veracruz, Puebla, Jalisco, San Luis Potosí y Chiapas. En 1977, en respuesta a la represión de la movilización campesina por el sucesor conservador de Echeverría, José López Portillo, el PST emprendió una campaña nacional de invasiones de tierras. En el punto crítico de esta campaña en 1980, más de 25 000 militantes del PST ocuparon más de 150 000 hectáreas en todo el país (Alonso 1984).

El PST penetró en Chilón y las comunidades de los alrededores en 1976. Aunque el PST y los jesuitas se dividieron definitivamente después de la masacre de Golonchán, el partido trabajó estrechamente con activistas eclesiales al principio, enfocando su atención en las comunidades en las que los catequistas habían establecido una base de conciencia campesina crítica. Un tseltal de Petalcingo recordaba así la llegada del PST: «En 1976 llegó un partido… el PST, entonces desde allí empezamos a ver, ya habíamos empezado a darnos cuenta de que no nos habíamos estado defendiendo… darnos cuenta de cómo es que ellos [los ladinos] nos roban, cómo nos explotan, cómo nos maltratan, pero no teníamos la fuerza, ni sabíamos cómo empezar, cómo… liberarnos de ese ladino… cuando ese hermano [el activista del PST] llegó, empezó a ayudarnos a liberarnos» (*apud* Sánchez 1999:93).

Liberarse de los ladinos significaba luchar por la tierra, y el PST se lanzó a la contienda, capacitando a campesinos en la ley agraria y predicando el evangelio de la invasión de tierras. En Chilón, otro tseltal recordaba que los indígenas «estamos tramitando papeles, solicitando a Reforma Agraria

y no nos hace caso. Vino la organización del PST, pues, dice, ya vamos a tener tierras, entonces cuando ya tenemos esa organización del PST entramos a invadir en los terrenos» (*apud* Ovalle Muñoz 1984:69).

A medida que las invasiones de tierras dirigidas por el PST se extendieron, los terratenientes tomaron medidas para defenderse. Telegrama tras telegrama pedían ayuda: «Carácter urgente ruégole intervenir comisiónese partida militar este lugar para garantizar tranquilidad vecinos esta población… Tacuba Nueva encuéntranse agitadores PST maniobran sacerdotes jesuitas, reuniendo personas distintos municipios, pretenden tomar este entre 10 a 15 de abril».[24] Los terratenientes organizaron delegaciones para defender su caso en la Ciudad de México y en algunas ocasiones tomaron los asuntos en sus propias manos. Algunas de las más vociferantes denuncias del PST, no obstante, venían del interior de las comunidades indígenas.

En 1983, por ejemplo, líderes del ejido Paxbarril (beneficiarios ellos mismos de la reforma agraria) cabildearon intensamente para bloquear los intentos del PST de presentar denuncias contra las fincas aledañas. Esta protesta encabezada por indígenas contra el PST expresa los importantes giros en el terreno de la mediación política. Deseoso de desafiar la autoridad del PRI presentando candidatos de oposición a las elecciones ejidales y municipales, el PST era una amenaza para los jefes políticos indígenas estrechamente alineados con el partido gobernante. En una nota impecablemente manuscrita al presidente municipal de Chilón, miembros de una minúscula comunidad indígena alineada con el PRI expresaron su conmoción de que «Grupos Socialistas de afuera del Poblado quieren ser Agente [Municipal] de nuestro lugar».[25] El PST, de acuerdo con sus detractores, estaba socavando la autoridad en las escuelas, recibiendo armas de los jesuitas, amenazando con matar a seguidores del PRI y tomando tierras en los ejidos.[26] En una carta al entonces gobernador Juan Sabines, miembros del

[24] Presidente Municipal de Chilón a Gobernador Patrocinio González (telegrama), 25 de marzo, 1980, en AMCH.

[25] «Acta levantada en el poblado de Piquinteel», 10 de octubre, 1980, ibíd.

[26] Confederación Nacional Campesina al Presidente Municipal de Chilón, 24 de enero, 1980; y Agente Municipal al Presidente Municipal de Chilón, 8 de julio, 1980, ambos ibíd.

ejido San Sebastián Bachajón denunciaron al PST por supuestos abusos y apelaron al gobernador para que interviniera en la batalla desencadenada por la dirigencia de la comunidad de Alan Sacjún: «La mujer llamada Casilda Silvano Guzmán, que es dirigente del PST, dijo que nos llevarían a la cárcel a todos los hombres y que a las mujeres, las maltratarían a todas. Genaro Domínguez llegó en Alán Sacún a entrenar a todas las personas en cuestión de armas para que sepan manejarlas y que después entran matando a todas las personas que ellos quieren y encuentran. Además en el camino a Alan Sacún han tirado un árbol grande que tapa el camino para que no puedan entrar enemigos y los Federales… Genaro Domínguez y Casilda Silvano dijeron además que el C. Gobernador no tiene valor, pero que Genaro Domínguez sí tiene mucho más valor que el Gobierno».[27]

En medio de esta rivalidad partidaria y conflicto de clase, las invasiones de tierras se multiplicaron por todo el país. Una tras otra, los campesinos ocuparon algunas de las más grandes y valiosas fincas de la región: Golonchán, Verapaz, Junacmec, Duraznal, El Desengaño, Picoté y Jotolá. Enrique Flores, el hombre que fue acusado de permitir que su ganado pisoteara los campos de otro terrateniente ladino, vio *sus* alambradas cortadas y la tierra ocupada por indígenas invasores de tierras. Después de décadas de conflicto, San Antonio Bulujib sucumbió a la invasión. Para 1980, los campesinos habían tomado 68 propiedades en Chilón, Yajalón, Sitalá, Tila y Tumbalá, y los conflictos más encarnizados estallaron en Sitalá y Chilón (Pontigo y Hernández 1981).

Las tensiones aumentaron. Los ladinos pidieron protección contra los campesinos hostiles, en particular del PST, de quienes se creía planeaban no solo la invasión de tierras de cultivo sino la toma total de poblaciones como Chilón y Yajalón. En marzo de 1980, cumpliéndose aparentemente los peores temores de los ladinos, más de un millar de indígenas militantes entraron en Yajalón contra la voluntad expresa de las autoridades municipales (Alonso 1984). Sin embargo, a fin de cuentas iba a ser el choque entre dos grupos indígenas lo que llevó este conflicto a un desenlace violento.

[27] Agente y Juez Municipal de Chilón a Juan Sabines, 10 de julio, 1982, en AHPL.

La masacre de Golonchán

En la primavera de 1980, unos 800 miembros del PST entraron en Sitalá procedentes del centro-norte de Chiapas para ocupar una parte de la finca Golonchán. Para el PST estaba claro que esa propiedad, de un rico terratenientes ausente, con una extensión de más de 1 000 hectáreas de cerros, en su mayoría sin explotar, era una candidata perfecta a la expropiación. No obstante, el PST no era el primer grupo en pensarlo. Casi 20 años antes, docenas de familias de trabajadores residentes en Golonchán habían presentado su propia petición de derecho a la propiedad.

A estos peticionarios originales las cosas no les fueron bien. Con escasos recursos y poco apoyo externo, tuvieron que hacer frente a un terrateniente volátil que los amenazó con frecuencia y que arregló con Abel Trujillo, un funcionario de la reforma agraria presuntamente corrupto, que llevara a cabo «una medición favorable de la propiedad».[28] El trabajo preliminar de Trujillo consiguió que la petición no prosperara. Más de 40 jefes de familia calificados para recibir tierras habían presentado la petición original; pero el censo de Trujillo consideró que solo cinco personas eran elegibles para tierras en toda la finca, demasiado pocas para permitir que el caso procediera.[29] En la primavera de 1963, funcionarios de la reforma agraria rechazaron la petición por falta del número requerido de personas calificadas. Aquel verano, 34 cabezas de familia de Golonchán apelaron a la

[28] En 1962, por ejemplo,, el propietario de Golonchán irrumpió en una reunión del Comité Agrario mientras se esperaba a Trujillo. Según los campesinos, «el licenciado Gustavo Flores dio voces y anuncio que llegarían federales en el caso de que continuáramos reunidos para formar los censos, con lo cual nuestros compañeros indígenas se asustaron y temerosos de ser atropellados huyeron, quedando un pequeño núcleo de como 14 personas, lo que dio motivo a que se levantaron las actas con dicho número»: Campesinos Indígenas de Golonchán a Eva Sámano de López Mateos, 5 de octubre, 1962, en RAN-TG, expedientes de Ejido Golonchán.

[29] «Informe de la CAM», 2 de mayo, 1963, ibíd. Antes de que una petición de la reforma agraria pueda proceder, hay que establecer dos calificaciones: la ciudad (o centro poblacional) ha de ser considerada colectivamente calificada en razón de su ubicación, sus años de existencia y el número de individuos calificados para la reforma agraria que residen en ella; y los beneficiarios de la reforma agraria que se proponen en esta población deben cumplir extensos criterios para ser considerados calificables.

esposa del presidente López Mateos, explicando su respuesta al veredicto: «Es verdad que ante la negativa la ley de tierras ociosas señala el procedimiento a seguir o sea el de promover un Juicio ante las autoridades del lugar, pero ante nuestra humilde condición de indígenas, pobres, que no sabemos ni hablar el español y sin que tengamos persona que salga al frente de nuestra defensa y derechos y que el tiempo de preparación de siembras por este año pasaba y que al no hacerlo nos moriremos de hambre por todo un año, nos vimos obligados a ocupar una pequeña extensión de los terrenos de Golonchán».[30]

En los diez años siguientes, los trabajadores de Golonchán ocuparon ilegalmente la finca. Se hicieron varios intentos de salir del punto muerto, incluida la propuesta de trasladar a los invasores a otras tierras en la vecina Pantelhó. Los trabajadores se mantuvieron firmes en su posición y eventualmente recibieron la «rectificación» del censo de Trujillo confirmando la existencia de 59 personas calificadas.[31] No obstante, es difícil determinar con exactitud qué sucedió en Golonchán en los años sesenta y setenta. Al parecer, se formaron facciones entre los demandantes de tierras, y la evidencia indica que algunos de los invasores trabajaban con la misión de los jesuitas; por lo menos una de las disputas acabó en la invasión violenta de las tierras de una facción por otro grupo.[32] Sin embargo, hay algo que es cierto: cuando los militantes del PST llegaron a Golonchán en 1980, la finca no era una página en blanco, sino un territorio ocupado que estaba ya envuelto en una maraña de conflictos.

El 31 de mayo de 1980, el conflicto entre los militantes del PST y los peticionarios originales de la finca estalló violentamente cuando miembros del PST la ocuparon por la fuerza. Aprovechando la oportunidad de desacreditar al PST, el presidente municipal de Yajalón, un defensor del PRI, se pasó por alto a su contraparte en Sitalá y envió un boletín a la prensa nacional: habían resultado muertos 45 campesinos en un choque entre el PST y la CNC. Más tarde, cuando se desentrañó este flagrante intento de

[30] Campesinos de Golonchán a Eva Sámano de López Mateos, 1 de junio, 1963, en AMS.
[31] «Informativo de la CAM», 5 de junio, 1980, en RAN-TG, expedientes de Ejido Golonchán
[32] Jefe de la Zona Ejidal al DAAC, 19 de junio, 1972, ibíd.

describir al PST como agresores violentos, el número oficial de muertos quedó reducido a cinco y después a solo uno. Independientemente del número de víctimas, al final del día el PST había encaminado a los peticionarios originales de Golonchán desde sus casas y ahora ocupaban la finca.[33]

La palabra masacre se difundió rápidamente. El padre Mardonio Morales escuchó las noticias en un programa nocturno en español de Radio Moscú, una emisora en onda corta. Con una cita para ver al gobernador Juan Sabines que ya estaba programada para el día siguiente en Tuxtla Gutiérrez, se apresuró a llegar a la capital del estado. A su llegada descubrió que su cita había sido cambiada por una comida en casa del gobernador, donde se les unió un alto funcionario de la reforma agraria. En el transcurso de esta reunión y en una segunda, en Bachajón, se llegó a la siguiente decisión: El gobernador acordó comprar Golonchán y redistribuir la finca entre 90 peticionarios originales y ofrecer trabajo en proyectos de construcción del gobierno a los invasores del PST.

Dividido entre querer resolver el conflicto en Golonchán y no querer que lo asociaran con el gobierno, el padre Morales finalmente decidió acompañar a Sabines en un viaje de inspección a la finca en helicóptero. En aquel asentamiento de techos de paja de Golonchán, los militantes del PST acogieron desafiantes la propuesta de Sabines: abandonarían la finca, dijeron, solo en ataúdes. Sabines pactó prometiéndoles dar al PST concesiones de tierras en el interior del estado en la selva oriental. Esta oferta aparentemente satisfizo al PST, que celebró la exitosa resolución de sus

[33] El análisis que sigue deriva de entrevistas con el padre Mardonio Morales y terratenientes en Sitalá, así como con Ovalle Muñoz 1984, Pontigo y Hernández 1981, y los siguientes artículos en la revista semanal *Proceso*: F. Gomez. «En Chiapas, el Gobierno…», junio 9, 1980, pp. 10-14; H. Castillo, «Organizaciones políticas gatilleras», junio 9, 1980, p. 12; F. Ortega, «A tiros, la tropa evacua la finca invadida en Wolonchán…», junio 23, 1980, p. 26; G. Correa, «Sabines nos mandó matar…», junio 30, 1980, pp. 12-15; R. Millán, «Las autoridades provocaron...», julio 7, 1980, pp. 22-23; F. Ortiz, «Confirma el alcalde de Sitalá…», julio 21, 1980, p. 10; F. Ortiz, «Policía y tropas en Chiapas, al servicio de finqueros…», julio 21, 1980, pp. 10-13; I. Ramírez, «Los problemas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, juntos en Chiapas», marzo 22, 1982, pp. 12-17; G. Correa, «Despojos, represión y abuso oficial…», marzo 22, 1982, p. 14-15; G. Correa y P. Hiriart, «Con el apoyo de Sabines…», marzo 29, 1982, pp. 20-21; *unomásuno*, V. Avilés, «En busca de una credencial del PRI, los indígenas», 2 de julio, 1980, p. 4.

demandas. No obstante, menos de dos semanas después, la propuesta del gobernador, en palabras del padre Morales resultó ser nada más que una «mala broma».

El 15 de junio, de 700 a 1000 miembros del PST se reunieron en Golonchán para celebrar su victoria. Al caer la tarde, los celebrantes notaron que un destacamento de soldados se había posicionado rodeando la comunidad. No está claro cuándo comenzó el tiroteo, pero cuando paró, más de dos horas después, tanto la población de Golonchán como la promesa de Sabines de resolver el punto muerto «por medios pacíficos» estaban en ruinas. Murieron por lo menos doce miembros del PST.

La victoria pírrica de los terratenientes

Informes de testigos oculares en la prensa denunciaron a los terratenientes por su implicación en la masacre, sugiriendo que ellos habían pagado al ejército para que llevara a cabo el ataque (*Proceso,* 30 de junio, 1980:12-15). Un terrateniente ubicado en la escena por testigos oculares confirmó que ellos estaban implicados, pero negó que realmente tomaran parte en la masacre.

> Primero dimos [a las tropas de Seguridad Pública] caballos para que pudieran entrar [en Golonchán]. Cuando llegaron hubo disparos y las [tropas] huyeron… Entonces nos comunicamos con el general, que envió unos 150 efectivos del ejército. De nuevo hubo una refriega de disparos y muchos cayeron muertos, cuatro federales y muchos, muchos invasores…. Esto fue lo que hizo famoso en el mundo a Sitalá, la cruda intervención del gobierno…. Yo no fui con el ejército a Golonchán, pero después un soldado con el que tenía amistad me contó lo que había pasado…. Hubo muchas más personas muertas de las que dijo el informe oficial.

Independientemente del nivel de implicación de los terratenientes, el violento desalojo de los invasores en Golonchán desencadenó un furor de operaciones antiinvasiones en todo Chilón y Sitalá. A raíz de Golonchán,

efectivos del ejército arrasaron casas y desalojaron a los invasores de San José Sierra Nevada, Jotolá, Duraznal y otras fincas de la región (Ovalle Muñoz 1984). Pero esta represión intensificada a los invasores de tierras representaba una victoria pírrica de los terratenientes. Si bien los invasores de algunas fincas fueron expulsados y los propietarios recuperaron el control de sus propiedades, Juan Sabines no tardó en maniobrar para pacificar los conflictos y reforzar el apoyo al PRI redistribuyendo fincas a los campesinos amistosos. Caso tras caso, funcionarios estatales desalojaron a campesinos de partidos de oposición para entregarles la tierra a otros campesinos más adeptos al PRI.

Ernesto Monterrosa fue uno de los beneficiarios de esta redistribución. Antiguo peón en San José Sierra Nevada, Monterrosa se convirtió en dirigente campesino afiliado al PRI en los años setenta. A finales de esa década, él recordaba, «Los rancheros me encarcelaron en Yajalón porque había muchas invasiones y ellos pensaban que yo era un líder de la invasión…. Estuve encerrado tres días hasta que el [funcionario de la SRA] llegó y dijo que yo no estaba con el PST, que yo era de la CNC». La afiliación al PRI significaba más que ser puesto en libertad para Monterrosa. Significaba tierra. Después del desalojo de los campesinos de la Verapaz, una finca de 400 hectáreas propiedad de Oscar Franz, Sabines ordenó a Franz vender «voluntariamente» la tierra al grupo de Monterrosa de acuerdo con el Programa de Rehabilitación Agraria (PRA). Este programa, promovido por el general Absalón Castellanos Domínguez, que sucedió a Sabines como gobernador, administró las subvenciones para comprar tierras de propietarios privados y darlas a los ocupantes establecidos en las tierras cuyas demandas no habían sido resueltas por la SRA. Monterrosa explicó: «El gobierno la compró para nosotros porque respetábamos la ley y el orden. El PST no respetaba la ley y ellos no consiguieron ningún rancho… Los terratenientes vendieron porque tenían miedo. Había mucho miedo».

Oscar Franz, como todos los terratenientes que vendieron, tenía complejas razones para que le pareciera bien la compra. Franz cargaba con una importante hipoteca sobre Verapaz —carga que le quitó de encima la venta—, pero Franz también coincidía con Monterrosa: el miedo influyó

mucho en su decisión de aceptar la baja oferta de Sabines. La ocupación durante todo un año de Verapaz había alterado significativamente las operaciones de la finca y Franz «sabía que la situación agraria iba a empeorar, de modo que ¿por qué no vender ahora antes de que empeoraran las cosas?». El antropólogo Henri Favre, famoso por su estudio de los tseltales de Bachajón, sintetizó la situación con contundencia:

> En 1980, el gobierno de Chiapas hizo saber oficialmente a la población blanca establecida en Pantelhó, Sitalá y el resto del municipio de Chilón que no estaba en condiciones de garantizar ni la seguridad de sus personas ni la de sus bienes. Colocó a los ladinos pasmados ante un dramático dilema: o bien permanecer en el lugar y afrontar ellos mismos los riesgos y peligros de las reivindicaciones indígenas…o renunciar a sus tierras que el gobierno se proponía comprar al precio medio de 7 000 pesos la hectárea, precio infame, aun irrisorio, por incluir el ganado, los cultivos, y las instalaciones agrícolas. En total 63 propiedades, de las cuales la mayor tenía 310 hectáreas y la más pequeña 4 hectáreas, y que representaba une superficie de 7 153 hectáreas, fueron adquiridas por el Estado y luego repartidas entre mil familias indígenas por intermediarios de… la Confederación Nacional Campesina, que aprovechó la ocasión para consolidar su implantación local» (Favre 1985:194).

Aunque el gobernador Sabines expresó un fuerte apoyo a la institución de la propiedad privada y prometió reforzar la protección contra las invasiones, sus acciones hablaron con más claridad. La propiedad privada podía y sería utilizada para atenuar las tensiones en el campo. La participación de los terratenientes en las adquisiciones de tierras no fue, por supuesto, totalmente voluntaria, pero pocos fueron los que se resistieron. Todavía existe un desacuerdo básico sobre si las sumas pagadas por Sabines fueron tan risibles como lo sugiere Favre o fueron ingresos inesperados para los propietarios que no dejaron de reírse camino al banco.[34]

[34] En general, en la izquierda se supone que los precios que se pagó por las tierras en los ochenta aportaron ganancias fabulosas e inesperadas a los terratenientes. Este es también el sentir común respecto a los precios en 1994-1998, supuesto que yo pongo en duda más adelante. Por lo tanto, en el caso de los años ochenta yo tomo con cierta cautela los supuestos

A pesar de todo, para los años ochenta, la situación económica de los terratenientes era cada vez más precaria, ya que estaban atrapados entre la recesión general del estado (Rus 1995), el declive del apoyo estatal a la producción y la creciente militancia de los trabajadores indígenas. Desde este punto de vista, parece probable que muchos de los terratenientes recibieran el PRA como una manera muy necesaria de escapar del estancado mundo de la agricultura con dinero en el banco, independientemente del nivel de compensación. En este sentido, el PRA se podría interpretar simplemente como un rescate oportuno orquestado por amigos de los terratenientes en el gobierno. Pero esta explicación la desmiente el hecho de que numerosos propietarios, como Delio Ballinas, usaran de inmediato los pagos del PRA para adquirir nuevas tierras en zonas menos afectadas por el conflicto político, lanzándose una vez más al mundo inestable de la agricultura finquera. Solo una cosa está clara: a pesar de las expulsiones que siguieron a las matanzas en Golonchán, muchos terratenientes, en palabras de Oscar Franz, «no teníamos más opción que vender o seguir invadidos», al margen de sus intereses o deseos en el plano económico.

---

que indican que los precios eran ridículamente altos en los ochenta o absurdamente bajos en el periodo intermedio. Incluso entre terratenientes, varían enormemente los recuerdos de cuán lucrativas fueron las ventas. Alejandro Díaz, por ejemplo, sostuvo que los precios de venta «eran una excelente cantidad de dinero». Oscar Franz, por otra parte, coincidía con Favre. «El precio estaba bien, pero nosotros teníamos ganado y maquinaria [para beneficiar café] que valía mucho más. Sabines solo nos dijo, 'Nosotros solo compramos tierra, no casas', de modo que no recibimos ninguna compensación por toda nuestra infraestructura». Un cierto número de terratenientes cuya tierra *no* había sido invadida, pusieron voluntariamente sus propiedades a la venta, una opción que es fácil interpretar como prueba de que los precios eran favorables. No obstante, esos vendedores «voluntarios» explican su participación como una respuesta racional a la amenaza actual de invasión. Algunos datos reales sobre los precios de venta se pueden encontrar en las oficinas del registro público en Yajalón. Los registros de siete fincas (divididas en veintisiete parcelas legales) que abarcaban unas 2,500 hectáreas muestran un precio de adquisición promedio de 1,638 pesos por hectárea. Ajustándolo por la inflación y el cambio en el valor de la moneda, los precios de 1980 fueron similares a los que se ofrecieron después de 1994. En último término, como lo sostengo en el capítulo 7, no es posible una afirmación general respecto al valor de las adquisiciones en 1994-1998. Numerosos factores —nivel de endeudamiento, cambio generacional y grado de dependencia de la agricultura para el sustento (e.g. Delio Ballinas dependía sumamente de los ingresos de sus propiedades invadidas, en tanto que Gustavo Flores tenía muchas otras fuentes de ingresos) distorsionan cualquier cálculo.

Interpretación de Golonchán: Los partidos, la mediación y el lugar de los terratenientes en el nuevo terreno político

Días después de la masacre, un grupo de refugiados procedentes de Golonchán llegaron a Yajalón. Habían ido a renunciar a su afiliación al PST y a rogar que les dieran credenciales del PRI. Después del ataque armado, los comerciantes en Sitalá dejaron de vender alimentos a miembros del PST y las credenciales de miembros del PRI eran vistas cada vez más como la única protección frente a la represión (*unomásuno*, 2 de julio, 1980:4). Un funcionario de la oficina del presidente municipal — la misma dependencia que había responsabilizado tan eficazmente al PST de los 45 muertes el 30 de mayo— abordó a la multitud con condescendencia señorial: «Ustedes lo pueden ver. Estos indios fueron engañados. Los del PST les prometieron que si votaban por ellos tendrían tierras, camionetas y ropa y como son re flojos pos luego luego se apuntaron… Los azuzaron a invadir fincas y ahora después de los muertos en Golonchán, se dieron cuenta del engaño; quemaron sus banderas del PST y ahora el partido (PRI) los recibe» (*unomásuno*, 2 de julio, 1980:4). Uno por uno, en un acto de contrición casi religioso, los refugiados pasaron ante el funcionario para entregarle sus credenciales del PST y pusieron sus huellas dactilares en las flamantes credenciales del PRI.

El PST siguió siendo una importante fuerza de oposición en la región toda la década de los ochenta, pero en muchos sentidos, la masacre de Golonchán y la subsecuente represión de otros invasores de tierras que había inspirado le partieron el lomo al partido. Después de Golonchán, la misión de los jesuitas en Bachajón también rompió con el PST, frustrados y decepcionados por las tácticas enardecidas del partido. En la peripecia tal vez más extraña en esta historia, a finales de los ochenta estaba claro que el PST no era en realidad la fuerza «independiente» de oposición que pretendía ser. Desde el inicio, el PST había sido un retoño del PRI, financiado en secreto por el partido gobernante y alojado en oficinas pagadas por el gobierno del estado (Aubry 1986:2). José López Arévalo, hijo de un terrateniente que se hizo periodista de izquierda y fue candidato al Congreso por

el Partido de la Revolución Democrática (PRD), me dijo: «Más tarde descubrimos que el PST era un satélite del PRI, pero… en ese tiempo parecía un verdadero partido de izquierda. Ahora sabemos que lo fundó el PRI para ser válvula de escape para el conflicto agrario con las invasiones sin que el PRI se implicara directamente en ellas».

En un sentido muy real, por tanto, el PST representa una división crucial dentro del PRI por motivos de clase y raciales: por una parte, a lo largo de la agitación de finales de los setenta y principios de los ochenta, el aparato tradicional del PRI se mantuvo firme apoyando a sus terratenientes y comerciantes ladinos; por otra parte, el PST, como un sustituto del PRI inclinado a la izquierda, desafió a los ladinos ricos fomentando el conflicto de clase y racial. El PRI había comenzado a ver que cultivar, controlar y apaciguar a mediadores indígenas más que a las autoridades tradicionales ladinas era la única manera de solucionar el conflicto agrario de la región, aun cuando a veces significaba retroceder en cuanto al apoyo histórico del partido a los terratenientes ladinos. Este giro marcó, en palabras de José López Arévalo, «el principio de una reconquista indígena de la región, una reindigenización de la región»

En los diez años siguientes, funcionarios federales y estatales institucionalizaron el programa de pacificación de Sabines por medio de adquisiciones de tierras en la forma del PRA. Conforme a este programa, el gobierno compró más de 80 000 hectáreas para 9 253 solicitantes (Benjamin 1996:248, Reyes 1992:117). Al igual que los empeños de redistribución de Sabines, el PRA funcionó principalmente como una manera de reforzar a la CNC indígena contra sus rivales que proliferaban, permitiendo incluso a la CNC invadir propiedades que previamente habían sido ocupadas por grupos de oposición. Como resultado de estas invasiones de invasiones, la mayor parte de la tierra que se había distribuido por medio del PRA acabó en manos de miembros de la CNC, generando hasta más resentimiento entre los grupos de oposición en el campo.

Al mismo tiempo, Castellanos Domínguez complementó el PRA intensificando el apoyo a los dueños de propiedad privada. Durante su régimen, los terratenientes en todo Chiapas recibieron más certificados de

inafectabilidad que los que habían recibido en anteriores gobiernos (Reyes 1992). No obstante, como lo confirmarían los sucesos posteriores a 1994 (cuando los funcionarios agrarios ignoraron olímpicamente los certificados de inafectabilidad de los terratenientes), las promesas de apoyo del estado a la propiedad privada eran una moneda gastada en el nuevo clima político. Los terratenientes permanecieron fieles al PRI hasta mucho después de 1994, pero los funcionarios estatales mostraron cada vez menos necesidad de recompensar su lealtad. Aunque la asociación entre los terratenientes y el régimen del PRI siguió siendo estrecha, sus esfuerzos resultaron ineficaces —y tal vez hasta contraproducentes— para contener las filas cada vez más numerosas de la oposición indígena en el campo chiapaneco. Los intereses de los terratenientes tendrían que haberse sacrificado, o por lo menos eludido, para mantener al PRI en el poder. En los tiempos de crisis venideros, la mediación directa con los grupos indígenas —a veces en detrimento de los intereses de los terratenientes— iba a ser la auténtica moneda de la política rural.

III El perfil de la resignación

7. Las invasiones de 1994-1998

La agricultura finquera se desintegra

Relativamente aislados aún de los conflictos que se estaban desatando al este de Chilón entre los insurgentes zapatistas y el ejército mexicano, los miembros de la AGL clausuraron su asamblea en enero de 1994 con una nota común: «Como último punto en asuntos generales, se acordó lo siguiente: llevarse a cabo la rifa en la asamblea del mes de abril dándoles un plazo para pagar los números que se les dio a todos los socios el 16 de febrero del presente».[1] No obstante, antes de la fecha límite para el sorteo, casi todas las mujeres y hombres presentes en la reunión perdieron sus tierras y nunca las iban a recuperar. El viernes de Carnaval y durante la segunda semana de febrero, miles de campesinos indígenas tomaron 40 propiedades que abarcaban más de 2000 hectáreas en Chilón. A lo largo de la primavera y el verano siguieron más invasiones. Para diciembre de 1999, el número de miembros de la AGL había caído de 81 a poco más de 40, debido a que las adquisiciones gestionadas por el estado distribuyeron 7312 hectáreas —66% de las propiedades privadas mayores de cinco hectáreas en el municipio— a los indígenas que solicitaban tierras.[2] Fue un final

[1] «Libro de Actas de la Asociación de 1994», minutas de la asamblea de enero, en AGL.

[2] Las ventas de propiedades para campesinos que pedían tierras gestionadas por el Banco Estatal de Crédito Rural del Istmo y registradas en «Libros de Escrituras Públicas, 1994-1999», en RP-Y.

extraño para una década que comenzó con la promesa del entonces presidente Carlos Salinas de liberalizar las leyes de la reforma agraria de México, promesa que, como en general se suponía, solo iba a conducir a que se incrementara la concentración de la tierra, se acabara con la redistribución y a que las elites terratenientes tuvieran tiempos mejores.

Carlos Salinas no fue el primer presidente mexicano en declarar la muerte definitiva de la reforma agraria ni el primero en entender que, en la tierra de Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, su *post mortem* era prematuro. En 1991, convencido de que el estancado campo mexicano necesitaba una fuerte dosis de terapia de mercado, Salinas abogó por cambios al Artículo 27 de la Constitución Mexicana. Las reformas constitucionales ponían un alto a futuras redistribuciones de tierras y permitían que los agricultores obtuvieran títulos de propiedad de parcelas que previamente habían pertenecido colectivamente al sector social del país (ejidos y comunidades agrarias establecidas conforme a las disposiciones de la Constitución de 1917).[3] Aunque los cambios no disolvían abiertamente el sector social, establecían una serie de medidas para que los agricultores pudieran voluntariamente privatizar sus posesiones. El mensaje fue claro para muchos en el campo: Carlos Salinas había terminado efectivamente con el compromiso que había contraído hacía 60 años el gobierno federal de decretar una reforma para declararse a favor de los mercados agrarios. Sobre el papel y en la retórica pública, con solo concesiones mínimas a la larga historia estatal de apoyo paternalista a los agricultores, Salinas había puesto el futuro del México rural en manos del mercado.[4]

Sin embargo, no más de tres años después, la reforma agraria volvía a estar sobre la mesa. En Chiapas, la redistribución de la tierra se reafirmó

[3] Las comunidades agrarias, como los ejidos, son una categoría de la tenencia de la tierra en el sistema de la reforma agraria mexicana. El grupo de campesinos que desea establecer una comunidad agraria debe rendir pruebas de que la tierra en cuestión era propiedad de la comunidad y se la apropió ilegalmente un terrateniente antes de 1917; éste es un umbral legal más alto que el que se requería para la formación de un ejido. Los miembros de la comunidad agraria son normalmente indígenas y poseen su propia tierra colectivamente.

[4] Sobre las reformas al Artículo 27 de Salinas, véase Vázquez 2004, Cornelius y Myhre 1998, de Janvry et al. 1997, Randall 1996, y DeWalt et al. 1994.



Un finquero enfrenta a un invasor indígena, julio 1998. Los invasores acababan de empezar a segar el sorgo de la finca para construir casas [foto del autor].

primero como una demanda central del EZLN y después como una serie incontrolable de tomas de tierras que agostaron el campo, propulsadas por el caos político que quedó después del levantamiento zapatista. Si bien los zapatistas son ampliamente famosos con razón por su singular visión de la ciber-revolución, por la autonomía indígena y por la lucha por la dignidad humana en un contexto de globalización neoliberal, esta oleada de tomas de tierras y las redistribuciones que les siguieron puede muy bien ser que representen el efecto material más palpable del levantamiento en Chiapas.

A diferencia de oleadas anteriores de ocupaciones en Chiapas, estas invasiones no se limitaron a tierras de mala calidad ni fueron anuladas mediante la represión. Al contrario, las invasiones masivas de tierras obligaron a una redistribución que afectó todos los rincones del estado e incluyó algunas de las tierras agrícolas más valiosas de Chiapas. Pero se trató de algo más que de una simple reelaboración física del campo chiapaneco. Las invasiones en Chilón no se pueden entender simplemente como una «fiebre de tierras» (Paige 1975) en la que los campesinos sin tierras se aprovecharon de la inestabilidad política para tomar el recurso productivo que tanto necesitaban. La tierra representaba mucho más que un factor de

producción escasa. En Chilón, los sucesos de 1994-1998 reflejaron un potente resurgimiento de proyectos territoriales indígenas que remodelaron los espacios y las relaciones sociales de la producción finquera.

Hasta en Chiapas: La diferencia que significa una revolución

El reconocido analista político Enrique Krauze (1997:780) declaró que Chiapas era un lugar que la Reforma Agraria ignoró, pero con frecuencia no fue el olvido en el que sumieron a Chiapas los burócratas de la reforma agraria, sino sus dependencias (con buenas y no tan buenas intenciones) lo que provocó el conflicto en el campo chiapaneco. La reforma agraria *había* llegado a Chiapas. Había llegado como una práctica del régimen estatal que buscaba incorporar a los campesinos en sus relaciones paternalistas de dominación. Había llegado como un modo de pensar sentido a fondo sobre las tácticas y las metas de la lucha rural y la relación entre el Estado y el campo. Sin embargo, lo más importante era que la reforma agraria había llegado como un ataque desigual, caprichoso, pero en definitiva amplio, a la oligarquía rural terrateniente.

En las primeras décadas del siglo XX, las elites estadounidenses, alemanas y mexicanas eran dueñas de vastas propiedades en Chiapas que producían café, caucho y otros cultivos para los mercados internacionales. El censo agrícola de 1930, llevado a cabo poco después de la Revolución mexicana, encontró 22 fincas de más de 10 000 hectáreas, y que 4% de los terratenientes controlaba 67% de la tierra cultivable en el estado (Secretaría de Economía 1930, cuadro 42). Desde entonces, la movilización campesina y la reforma agraria patrocinada por el Estado han fragmentado grandes latifundios constantemente y con eficacia. El tamaño promedio de las tierras en manos privadas disminuyó precipitadamente en las décadas posteriores a la Revolución mexicana, de más de 200 hectáreas en 1930 a menos de 50 en 1990, mientras que la cantidad de tierra en posesión del sector social del estado ascendía a cifras astronómicas. Cuando empezaron a sentirse los efectos de la ola más reciente de luchas por la tierra, el sector

social controlaba 4.2 millones de hectáreas (57 % de la superficie del estado), en tanto que los terratenientes privados controlaban 2.4 millones de hectáreas (33 % del estado) (véase cuadro 2).

Cuadro 2. Hectáreas cultivadas en los sectores privado y social, Chiapas, 1930 y 2000

	1930		2000	
Sector	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Privado	4 011 298	97 %	2 443 694	33 %
Social	104 509	3 %	4 244 363	57 %
Ambos sectores	4 115 807	100 %	6 688 057*	90 %**

* El aumento de tierra en cultivo entre 1930 y 2000 se debió a la expansión en el interior de la selva Lacandona.
** El restante 10 % está en zonas urbanas y de parques nacionales que no se contaban en 1930.
Fuente: *Censo Agrícola Ganadero*, 1930, y cuadros de la Secretaría de Reforma Agraria.

Aunque mucha de la tierra redistribuida fue en forma de miles de hectáreas previamente sin explotar abiertas a la colonización en la selva Lacandona (Leyva y Ascencio 1996), el ataque sostenido de los campesinos movilizados obligó al estado a abandonar su protección a los terratenientes ladinos y la producción finquera más de una vez en la historia reciente. Solo con este telón de fondo del cambio se pueden entender las invasiones de 1994-1998: un escenario dramático en un lento proceso de movilización agraria y de reclamo del campo por los campesinos.

Además del impacto que tuvo en la tenencia de la tierra en Chiapas, la Revolución estableció un sistema inquietante de representación política autoritaria que se mantuvo dispuesto a defender los intereses de los terratenientes ladinos, pero que estaba basado también en gran parte en la construcción de organizaciones campesinas dirigidas por líderes indígenas identificados con el partido en el poder (e.g., Rus 1994). Tanto para los campesinos como para los terratenientes, los derechos de propiedad

giraban en torno a la participación política o, para ser más precisos, en lograr y mantener su pertenencia a un bloque hegemónico construido a partir de pactos inestables, consentimiento, coerción y concesiones. En un país en el que la propiedad se atribuye en definitiva a la nación y está administrada por el Estado, la lucha por la tenencia de la tierra es también la negociación de la naturaleza y las formas del régimen estatal. Como lo observó Jorge Ibarra Mendívil (1989:18), los derechos de propiedad están tan politizados en México que los modos en que se logran e impugnan no solo construyen sujetos rurales particulares, sino que también desempeñan un papel importante en la constitución del estado como entidad. En definitiva, estas luchas produjeron un estado fragmentado e incongruente formado por diversos actores e instituciones involucradas en intentos, constantemente renovados pero no siempre unificados, de forjar un equilibrio y manejar los conflictos «negociando con las fuerzas clave de la sociedad civil» (Fox 1993:2).

Los resultados impredecibles y contradictorios de estas prácticas estatales solo sirvieron para generar más motivos de conflicto. Por ejemplo, los actores estatales podían conceder una parcela de tierra al grupo *A* con el fin de calmar el conflicto y satisfacer las demandas de este grupo, mientras que ignoraban convenientemente el hecho de que la misma parcela de tierra ya había sido concedida al grupo *B* años antes y en circunstancias similares. Las largas demoras —décadas o más— en la regularización de las concesiones de tierras fomentaron este tipo de maquinación. Todavía más común era que un departamento de la SRA, interesado en proteger a los terratenientes, podía hacer caso omiso de las demandas de los campesinos sobre una propiedad con el fin de satisfacer la solicitud de algún terrateniente de un certificado de inafectabilidad de la reforma agraria. Mientras tanto, otro departamento, en un intento de acallar las exigencias campesinas, podía pasar por alto un certificado de inafectabilidad legalmente emitido y autorizar la redistribución de una propiedad.[5]

[5] La SRA federal emitió más de un millón de certificados de inafectabilidad a dueños de «pequeñas» propiedades en Chiapas (véase capítulo 6). Estos certificados cobijaban a las propiedades frente a la expropiación, al menos en teoría. Durante las invasiones de 1994-1998,

No es extraño, pues, que los actores rurales respondieran a estas resoluciones contradictorias intensificando la presión directa. Como se lamentaba un terrateniente, «Cuando dos grupos se enfrentan con sus demandas y los dos tienen razón, lo único que les queda… es despedazarse entre ellos».[6] Por ende, los intentos del Estado de calmar las hostilidades solían tener el efecto contrario, inflamar los agravios y producir sujetos rurales definidos en buena medida por el violento drama del conflicto agrario. Con el tiempo, este proceso modeló la forma en que se desplegaron otras luchas en Chiapas, a medida que las instituciones y las prácticas de la reforma agraria —en particular los rituales de la invasión de tierras— se volvieron vehículos de una amplia gama de ambiciones y agravios.

Los tiempos, los espacios y los significados de la invasión

Después de sus primeros golpes a varios centros urbanos, el levantamiento del EZLN dejó su marca más profunda en tres municipios de las tierras bajas de la selva oriental de Chiapas: Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, que más adelante se ganarían la denominación oficial de «zona de conflicto». Allí, unas 65 000 hectáreas de propiedad privada cayeron directamente bajo el control de las fuerzas del EZLN.[7] Fuera de la zona de conflicto, en enero hubo solo invasiones dispersas. Pero en febrero ya estaba claro que las nuevas movilizaciones agrarias no se iban a confinar a una sola región. El 2 y 5 de febrero, los campesinos tomaron la primera de lo que iba a sumar un total de 45 propiedades en Suchiate y Tapachula, sede de las tierras

los actores estatales ignoraron los certificados y eran ellos los que decidían qué tierra se iba a redistribuir.

[6] Para numerosos ejemplos de este tipo de demandas rivales y superpuestas, véase Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Chiapas, «Relación de poblados que han solicitado tierras y resultados (1922-1979)», en la biblioteca del INAREMAC, documento núm. 1.9.10. Esta dinámica no se limitaba, por supuesto, a Chiapas. Por ejemplo, véase Dennis 1987 sobre Oaxaca.

[7] Tratadas por todos los actores implicados como ocupaciones militares y no como invasiones de tierras, estas tomas siguieron una dinámica diferente a la de las movilizaciones por venir y no son el tema de este capítulo.

agrícolas más valiosas de Chiapas. En las semanas siguientes, los campesinos tomaron propiedades en 70 de los 111 municipios, afectando todos los rincones del estado, incluidas sus zonas más ricas de producción de café, ganado, caña y maíz (véase cuadro 3).

Cuadro 3 Número de invasiones de tierras, Chiapas, 1994-2000

Año	Invasiones
1994	960
1995	153
1996	97
1997	54
1998	16
1999	0
2000	0

Fuente: «Predios invadidos 1994-2000,» tabla inédita proporcionada por la Secretaría Estatal de Desarrollo Agrícola, Tuxtla Gutiérrez.

Pocas invasiones ganaron tanta notoriedad como la toma de más de 900 hectáreas de la finca Liquidámbar y sus subdivisiones en Ángel Albino Corzo. Fotografías ampliamente difundidas de miembros de la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPVF), radicales, posando al lado del jacuzzi y los grabados de obras de Andy Warhol de la colección del propietario de la finca, captaban el enorme abismo entre terratenientes ricos y campesinos pobres que se percibía como el catalizador principal de las invasiones. Liquidámbar, un mosaico de parcelas de casi una docena de secciones legales que abarcaba por lo menos 1 910 hectáreas, era una de las plantaciones de café más productiva y renombrada en Chiapas. Su dueño, un extranjero del mismo talante que los caciques que dominaban la región Frailesca «con horca y garrote». Entre 1994 y 1997 miembros de la UCPVF combatieron al dueño de Liquidámbar y la policía del estado, sufriendo múltiples desalojos, nuevas invasiones, muertes y balaceras, desapariciones y asesinatos. Cediendo a presiones externas y a la increíble persistencia de

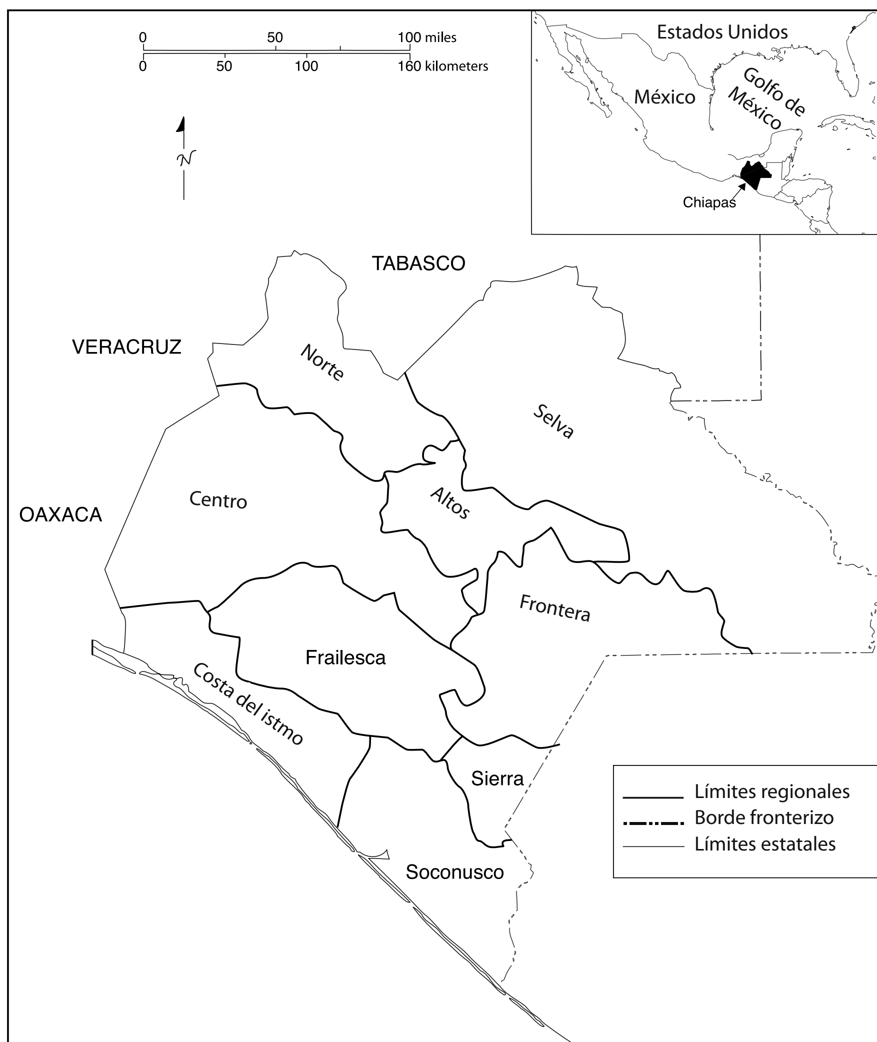
la UCPVF, en agosto de 1998 el gobierno del estado entregó 225 hectáreas de Liquidámbar a pesar de los fuertes vínculos de la UCPVF con el EZLN y el Ejército Popular Revolucionario. Al final, Liquidámbar permaneció en gran parte intacta y pudo reiniciar sus operaciones del todo después de, supuestamente, haber perdido varios millones de dólares a causa de los altercados. No obstante, el caso demostró la capacidad de los grupos campesinos para impulsar la redistribución a pesar de estar en desventaja.[8]

El caso de Liquidámbar no era el típico. De 1994 a 1998, grupos de oposición como la UCPVF por todo el estado lucharon duro para obtener concesiones y soportaron todo el peso de la represión y desalojos, pero muchas de las propiedades invadidas no eran el patio de recreo de ricos entusiastas del arte ni muchas de las luchas de invasión fueron tan costosas. La brecha entre terrateniente y campesino era a menudo mucho más estrecha y en algunos casos prácticamente imperceptible. Parece que tampoco el tamaño y el valor de las propiedades predice si los invasores iban a ser expulsados o no: las pequeñas propiedades fueron desalojadas con algo más de frecuencia que las grandes.[9] A grandes rasgos, los desalojos fueron más comunes alrededor de las fincas grandes productivas de las regiones Sierra y Frailesca (véase mapa 4), pero los diez municipios con tierra agrícola más valiosas en el estado tuvieron una cuota promedio de desalojo exactamente igual al promedio de todo el estado (25 %).[10] Aproximadamente 48 % de las propiedades invadidas en el estado fueron «voluntariamente desocupadas» por diversas razones. Unos cuantos casos que se reportan como de abandono «voluntario» no cabe duda que ocultan desalojos

[8] Este relato de los sucesos en Liquidámbar proviene de una secuencia de textos de *El Tiempo* (San Cristóbal de Las Casas), 16-20 de junio, 1998; SAIIC 1997; y AMDH 1995. Como algo típico de la confusión que rodeaba la política agraria chiapaneca, algunos relatos afirmaban que Liquidámbar cubría hasta 3 500 hectáreas. Los periódicos mencionaban el nombre del propietario de maneras diversas como Lawrence Hudler, Lauren Huckler y Laurent Hutile.

[9] Esta y las subsecuentes afirmaciones cuantitativas en este capítulo fueron calculadas de la SRA 2000, CESMECA 1998, INEGI 1995, y dos tablas inéditas que me proporcionó la Secretaría Estatal de Desarrollo Agrícola, Tuxtla Gutiérrez.

[10] Estos diez municipios sufrieron ligeramente más invasiones que las que les correspondían.



Mapa 4. Regiones de Chiapas (denominaciones oficiales).

encubiertos por los propietarios. Lo más común era que los grupos campesinos aceptaran abandonar las tierras en contienda a cambio de una consideración privilegiada en las negociaciones de compra subsecuentes. En Chilón, por ejemplo, casi cada propiedad desocupada voluntariamente se acabó entregando a un grupo campesino, aunque no necesariamente a los invasores originales. Los campesinos también desocupaban propiedades con el fin de ocupar otras, mientras seguían manteniendo *de facto* el control sobre la propiedad abandonada y presionaban para que se vendiera. En otros casos, como veremos, los campesinos abandonaban las propiedades invadidas porque cultivaban en otros predios y las habían invadido con fines simbólicos o políticos.

Los Acuerdos Agrarios

En Chiapas, las adquisiciones por campesinos de propiedad privada gestionadas por el estado surgieron a principios de los ochenta como una manera de solucionar los conflictos de tierras y a la vez evitar la burocracia de la reforma agraria irremediablemente sobrecargada. En los años noventa, con la convergencia del supuesto «fin de la reforma agraria mexicana» (DeWalt et al. 1994, cf. Kay 1999:283) y la movilización sin precedentes de campesinos y políticos de alto nivel con necesidad desesperada de restablecer la tranquilidad en Chiapas después del levantamiento zapatista, las adquisiciones de tierra gestionadas por el estado adquirieron una nueva y extraordinaria importancia. En abril de 1994, a meses escasos de haber comenzado las invasiones, funcionarios del estado y miembros del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) —la organización-sombrilla más importante de grupos campesinos chiapanecos— establecieron un marco para las negociaciones que iba a «agilizar y canalizar las demandas de tierras y conciliar entre invasores y propietarios» (*apud* Villafuerte et al. 1999:139). Una comisión recién formada constituida por terratenientes afectados, grupos campesinos, la SRA y la Procuraduría General se dedicaron de inmediato a subsidiar la compra de unas 39 000 hectáreas. Las

organizaciones campesinas prometieron abstenerse de nuevas acciones y los funcionarios estatales, desalojar todas las propiedades invadidas después de ese acuerdo. No obstante, las invasiones continuaron (aunque a ritmo más lento), las fuerzas de policía realizaron desalojos desperdigados, los terratenientes se negaron a vender sus propiedades y el programa de adquisiciones se estancó en el caos que rodeó las elecciones para gobernador en Chiapas (Villafuerte et al. 1999:140, *La Jornada*, 6 de julio, 1994).

Se necesitaba claramente un nuevo impulso, y en los últimos meses de 1994 funcionarios estatales revelaron el primero de varios fideicomisos que gestionarían la transferencia de propiedades privadas a los campesinos por medio de préstamos sin interés a 30 años. En un intento de concretar más los planes para solucionar la crisis agraria del estado, dos dependencias federales, la SRA y la Procuraduría Agraria, se unieron a la Secretaría de Desarrollo Agrícola y formaron la Mesa Interinstitucional Agraria, que aceptaba las peticiones de las organizaciones campesinas centrada en tres temas: la sobrecarga de peticiones de tierras, la necesidad de resolver conflictos dentro del sector social y la adquisición de tierras. En los dos años siguientes, la comisión revisó más de 2000 peticiones, casi la mitad de las cuales solicitaban la adquisición de nuevas tierras (Reyes 1998*a*:26). En marzo de 1996, después de prolongadas negociaciones, la comisión, 60 organizaciones campesinas oficiales y casi un centenar de grupos independientes firmaron un conjunto de acuerdos (Acuerdos Agrarios), en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Estos acuerdos marcaron un hito y consolidaron todos los programas anteriores, además de comprometer al gobierno a conceder préstamos para la compra de hasta cinco hectáreas por peticionario (Becerra 1998) (véase cuadro 4).

Al igual que las invasiones, los acuerdos afectaron a propiedades grandes y pequeñas en regiones de fabulosa riqueza y tremenda pobreza. La mayor parte de las tierras vendidas entraban en la categoría de valor medio a bajo (SIC 1998). Sorprendentemente, sin embargo, los acuerdos también apuntaron a tierras más valiosas. Por ejemplo, en todo el estado, como 10% del dinero autorizado por los acuerdos se dedicó a la adquisición de más de 13000 hectáreas en el Soconusco, la rica zona cafetalera de

Chiapas. En total, como 2.3 % de las tierras autorizadas para venta estaban dentro de los diez municipios de Chiapas con valor agrícola más alto por hectárea (conteniendo 7.3 % de la propiedad privada del estado). Aunque esta cifra parece proporcionalmente baja, esos diez municipios suministraron casi siete veces más tierras a los campesinos de conformidad con los acuerdos de los diez municipios con tierras menos valiosas.

Cuadro 4 Acuerdos Agrarios: número de hectáreas y familias receptoras en varias fases de la instrumentación, 2000

	Hectáreas	Familias
Comprometidas	249 259	60 942
Autorizadas	244 201	58 441
Pagadas	229 112	n/d
Transferencia final	195 962	n/d

Nota: n/d = no disponible.
Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria, «Acuerdos Agrarios: Programa Fideicomiso (General)», 2000.

En un intento de distanciar los acuerdos de la larga historia de reformas corruptas en Chiapas encabezadas por el estado, se concedió a los grupos campesinos préstamos subsidiados y autorizados «para encontrar y seleccionar tierras para ocupar conforme a sus gustos; tierras que satisfagan realmente sus necesidades». En boca del representante especial del gobierno federal en la entidad, «nunca más es ya un funcionario de gobierno quien escoge y compra la tierra para después asignarla a algún grupo campesino» (Becerra 1998). Todo lo que se necesitaba era el acuerdo entre campesinos y terratenientes, compradores solventes y vendedores dispuestos. En este sentido, la comisión buscaba privatizar la solución de los conflictos agrarios; satisfacer las demandas de los campesinos con la creación de un mercado fluido de tierras. Como subrayó el presidente Ernesto Zedillo (1998), «El gobierno no ha comprado tierras, sino quienes están comprando las tierras son los propios campesinos». A primera vista, parecía que los acuerdos representaban una nueva generación de reformas

«dirigidas por el mercado» (e.g., Deininger 2003). En realidad, la línea entre las «viejas» reformas dirigidas por el estado y las «nuevas» reformas dirigidas por el mercado era bastante borrosa (Bobrow-Strain 2004): las movilizaciones masivas de campesinos habían obligado, desde todos los puntos de vista, a poner de nuevo sobre la mesa política la reforma agraria intervencionista tradicional y la redistribución de la tierra dirigida por el estado. A pesar del marco de las reformas basado en el mercado, los campesinos «adquirían» las tierras por medio de acuerdos solo en el papel. Como lo observó un funcionario de la reforma, cuya identidad debe ocultarse por razones obvias, informalmente en 2001, «Nadie [en esta dependencia] espera que los campesinos devuelvan los préstamos algún día. Estos eventualmente desaparecerán fundidos o convertidos en 'asistencia al desarrollo'».

Los acuerdos también pretendían despolitizar la redistribución al disociar las compras de tierras del acto de la invasión. «Los Acuerdos», declaró el presidente Zedillo, «se sustentaron en principios firmes e invariables, que son: el apego a la ley, la participación directa de los hombres del campo en la solución de sus demandas, el diálogo de buena fe para encontrar soluciones de conciliación en lugar de enfrentamientos y el respeto» (Zedillo 1988). En consecuencia, los acuerdos facilitaron la adquisición de dos veces la tierra que se había invadido en los años anteriores. No obstante, sin las invasiones la redistribución podría haber desaparecido por completo, como fue la intención de los cambios al Artículo 27. Las ocupaciones ilegales orillaron al Estado a aplacar la demanda de tierras de los campesinos, pero también motivaron la oferta de tierras para satisfacer esa demanda. Con un tamaño medio de 50 hectáreas y una distribución con un fuerte sesgo hacia las propiedades más pequeñas (véase cuadro 5), pocas de las propiedades invadidas se las hubieran podido apropiar los campesinos mediante el proceso legal de la reforma agraria, con límites más altos de propiedad de la tierra. Las invasiones transformaron esas propiedades en objetos legítimos de los procesos de redistribución.

Las invasiones pandémicas combinadas con la falta de apoyo estatal a los desalojos también generó un clima de miedo e inseguridad en el

campo que hizo que aumentara la buena disposición de los terratenientes a cooperar con los planes de adquisición del gobierno. La volatilidad de los derechos de propiedad que sacaron a la luz las invasiones y la percepción del peligro en aumento en el campo sacudieron la confianza de los terratenientes en la propiedad. Por todo Chiapas, los terratenientes se hacían eco del sentir de un ranchero de Palenque: «Nadie va a invertir en tierras con todas estas invasiones. Si ellos ven que tu tierra está bien cultivada y bien cuidada, la tomarán». Y coincidían con Roberto Trujillo en Chilón: «¿De qué sirve desalojar a los invasores si siempre tienes miedo de que te maten en el camino al rancho?». Los temores de Alfredo Pinto eran a largo plazo: «Mientras no haya seguridad en el campo, espero que ninguno de mis hijos se haga ranchero… salvo tal vez en otro estado».

Cuadro 5 Número de invasiones de tierras, Chiapas, 1994-1998, por tamaño de la propiedad invadida.

Tamaño de la propiedad invadida (hectáreas)	Número de invasiones
1-9	10
10-24	142
25-49	150
50-99	214
100-199	244
200-299	210
300-399	71
400-499	18
500-599	10
600-699	0
700-799	3
800-899	4
900-999	3
1,000-1,199	0
1,200-1,299	1
1,300 +	1

Fuente: Calculado de CESMECA 1998.

Las movilizaciones removían una larga historia de miedos a la violencia étnica en la clase alta. Los ladinos sazonan las explicaciones de su resignación con representaciones del salvajismo indígena, imágenes de horda que reflejan la condición de enclave de los ladinos y la conciencia de que, dada la gran escala de las movilizaciones campesinas, no era posible proteger a los terratenientes si estos optaban por resistir. El miedo y la inseguridad afectaban las decisiones de muchos más que los terratenientes desposeídos por las invasiones: nunca apareció en las estadísticas oficiales un número inescrutable de invasiones *de facto* en el que los campesinos no ocuparon propiedades pero usaron la violencia y la intimidación para impedir que los propietarios y sus labradores trabajaran la tierra. Otros propietarios vendieron porque consideraron que las visitas a sus propiedades no invadidas eran demasiado peligrosas. Hasta en Palenque, donde los terratenientes reprimieron con eficacia numerosas invasiones, un prominente propietario reflexionaba: «No hubo ataques —físicos— pero mentalmente nos habían atacado. Ahora la gente tiene miedo de ir a sus ranchos… algo que ha dañado la producción». Al fin y al cabo, con campesinos hambrientos de tierra, terratenientes angustiados y actores estatales que deseaban con desesperación apaciguar el conflicto, el recuento final de las ventas autorizadas bajo los acuerdos sumó un total de más del doble de las tierras originalmente invadidas. No obstante, muchas veces los Acuerdos Agrarios atizaron los mismos conflictos que trataban de mitigar.

Los Acuerdos Agrarios y la institucionalización del conflicto

El 3 de agosto de 2000, 30 campesinos fuertemente armados y disfrazados de policías atacaron a 92 familias que ocupaban 193 hectáreas de la finca Nuevo Paraíso en Yajalón. Más adelante, esa misma semana, la policía bajo el mando del procurador especial federal para delitos cometidos por probables grupos civiles armados penetró en Nuevo Paraíso para encontrar que los invasores originales se habían ido, sus viviendas habían sido incendiadas y sus milpas estaban salpicadas de casquillos de bala. A primera vista, parecía un caso típico de desalojo patrocinado por los terratenientes, pero

la investigación ulterior reveló una historia más compleja. Los hombres que realizaron la expulsión eran campesinos afiliados al infame grupo paramilitar progubernamental Paz y Justicia, pero ellos eran también —técnicamente hablando— legítimos dueños de Nuevo Paraíso.[11]

En 1995, el terrateniente y comerciante de Yajalón Rodolfo Domínguez, presionado por los bancos para que pagara cuantiosas deudas, vendió Nuevo Paraíso por medio de un programa de fideicomiso del gobierno a los residentes de dos comunidades tseltales cercanas, Emiliano Zapata y Pinabetal. Estos campesinos eran, dependiendo de la fuente, militantes del PRD, partido de oposición (como constaba en documentos del gobierno y lo indicaba el hijo de Domínguez) o del PRI, el partido en el poder (según el propio Domínguez). Antes de que se llegara a concluir la venta, no obstante, los miembros de una comunidad incondicional del EZLN ocuparon la finca y le pusieron el nombre de Tierra y Libertad. Para complicar más las cosas, el segundo grupo de demandantes, según un oficial del municipio de Yajalón que ayudó a mediar en el pleito, estaba compuesto por «antiguos trabajadores de la finca… a los que se había dejado fuera de la dotación original». Cuando se le preguntó si este grupo había pretendido con anterioridad tierras en Nuevo Paraíso, el hijo del antiguo dueño respondió, «Más o menos», cambiando de tema abruptamente.

Poco después de 1997, los residentes de Emiliano Zapata y Pinabetal —nuevos dueños de Nuevo Paraíso con anterioridad— o bien se convirtieron del PRD al PRI, o bien radicalizaron su condición en el PRI, fusionándose con la Unión de Comunidades Indígenas, Agropecuarias y Forestales (UCIAF) y Paz y Justicia, y preparando el escenario para el desalojo y la nueva invasión en octubre de 2000. Es importante tomar en cuenta que una de las razones para el ataque a Nuevo Paraíso no fue el hambre de tierra sino más bien el apoyo del grupo Tierra y Libertad a los candidatos de oposición en las elecciones de 2000. Es decir, la invasión tenía la intención de enviar un mensaje político. No obstante, a pesar de la fuerte conexión de los agresores con el PRI, la Procuraduría Federal

[11] Eran miembros de la UCIAF, asociada con Desarrollo, Paz y Justicia, el frente legal de Paz y Justicia.

actuó sorprendentemente contra la UCIAF, Paz y Justicia y los residentes de Emiliano Zapata y Pinabetal. La Procuraduría dictó órdenes de detención de los 54 beneficiarios originales de la adquisición gestionada por el estado y arrestó a 11 dirigentes del desalojo del 3 de octubre, acusándolos de «portar armas de fuego reservadas para uso militar, terrorismo, asociación ilegal, sublevación, crimen organizado, ataque [y] daños a la propiedad» (*Chiapas al Día*, 8 de noviembre, 2000; *Excelsior*, 23 de noviembre, 2000). Entre los que fueron detenidos estaba Samuel Sánchez Sánchez, un representante del PRI en la legislatura del estado y dirigente paramilitar sumamente visible (PGR 2000). Los cargos contra los miembros paramilitares se estancaron y el episodio representa un momento decisivo en la limitada represión del gobierno a un grupo que había sido en otro tiempo uno de sus aliados encubiertos en el conflicto de Chiapas. Y lo más importante para nuestros intereses es que el caso ilustra a la perfección las contradicciones centrales de los Acuerdos Agrarios.

Los funcionarios estatales concibieron los acuerdos como un remedio decisivo para los disturbios en Chiapas, un reactivo del siempre elusivo *finiquito agrario*, la solución final agraria (Villafuerte et al. 1999). Al dar pasos monumentales para acabar con el hambre de tierras en Chiapas, el presidente Zedillo concluyó, que, después de los acuerdos, «Ya no hay razones para el enfrentamiento entre formas diferentes de la propiedad» (Zedillo 1998). Pero a pesar de la concesión de más de medio millón de hectáreas, los conflictos por la tierra causaron estragos. Nuevo Paraíso no estaba solo. Por todo Chiapas, invasores, reinvasores, grupos campesinos rivales, terratenientes y antiguos propietarios se seguían atacando unos a otros. Según Mario Ruiz Ferro, entonces gobernador, con los acuerdos «se han resuelto casi totalmente los problemas de invasiones de tierra, que en otros años fueron la causa principal de conflictos y violencia» (*apud* Reyes 1998:28). Pero lo más sorprendente respecto a los acuerdos es que abordaban solo una faceta de las múltiples lógicas de la invasión de tierras, sin tocar fundamentalmente —y en ocasiones inflamando— muchos otros factores que incitaban a la invasión. Aunque los acuerdos trataban la tierra únicamente como un factor de producción, las invasiones de tierras en

Chilón surgieron de una variedad de proyectos territoriales. Las invasiones formaban parte de las luchas existentes por la hegemonía en las que la función de la tierra como un factor de producción era solo una parte.

Otros significados y materialidades de la invasión

En 1976, los miembros del ejido San Sebastián de Bachajón pretendieron la restitución de las tierras que supuestamente habían sido robadas a la comunidad indígena de Bachajón por ladinos en el siglo XIX. Después de casi una década de obstáculos y demoras, en 1983 los ejidatarios pretendían, con documentos de 200 años de antigüedad, del Archivo de América Central en Guatemala, reivindicar su «título primordial» a la tierra en cuestión. Presionaron a burócratas en la Ciudad de México y Jalapa para que resolvieran. La resolución llegó en 1990: los documentos eran auténticos pero insuficientes para probar la desposesión.[12]

Los ejidatarios ignoraron la resolución negativa y se enfocaron en la validación institucional de sus documentos, llevando su caso más lejos. Cuando el levantamiento zapatista creó un vacío político que facilitaba la toma de tierras en disputa, los ejidatarios, bajo los auspicios de la CNPI, organizaron la toma de más de 2 000 hectáreas de propiedad privada de ladinos a principios de febrero de 1994. «Pedimos [que] esto no se entienda como despojo o invasión», adujeron, «sino que estamos actuando de acuerdo a derecho y respetando el dictamen otorgado por las autoridades agrarias».[13]

En el transcurso de la primavera y el verano, una gama diversa de grupos, desde el Comité Municipal de Solidaridad, progobierno, hasta el Centro para los Derechos Indígenas (CEDIAC) con base eclesial, siguió a la CNPI en la pelea, porque, como lo expresó un dirigente afiliado al PRI, «si no lo hacíamos, nos iban a dejar atrás cuando se hubiera tomado toda

[12] «Dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario», 8 de marzo, 1990, en RAM-DF, expedientes de San Sebastián Bachajón.

[13] «A la opinión pública», folleto firmado por el presidente del Ejido San Sebastián Bachajón, s.f. (primavera 1994), en AGL.

la tierra». En el lapso de unas cuantas semanas, el paisaje de Chilón comenzó a cambiar a medida que los invasores iban quemando pastizales o fumigándolos con herbicida para abrir espacio al maíz. Una carta a los terratenientes decía así: «Le estamos comunicando que hemos llegado a un acuerdo en donde los que suscribimos nos declaramos dueños de la tierra de la que nos estamos posesionando desde el día 13 de febrero 1994 por lo que le informamos que le damos 73 horas a partir de hoy para que saque su ganado, en caso de no cumplir lo repartiremos entre los militantes de la coordinación regional de pueblos indígenas (CNPI) porque perjudica nuestros cultivos y nos urge sembrar las tierras que el ganado esta ocupando».[14]

Esta carta evoca cambios radicales en el paisaje de Chilón y una potente y nueva visión de la territorialidad indígena. El ganado, en otro tiempo pilar de la agricultura finquera de la región, ahora era una especie invasora en suelo indígena. En el transcurso de 1994 y de los años siguientes, los pastizales se convirtieron en campos de maíz, comunidades indígenas y escuelas difundidas por todo el paisaje agrícola, y letreros que decían «Rancho las Delicias» o «Finca El Carmen» fueron sustituidos por otros que decían «Comunidad en Rebeldía» o «Emiliano Zapata». ¿Qué había en el fondo de esta transformación del espacio? Los grupos indígenas, por supuesto, proclamaban unánimemente los cambios como la restitución de antiguos derechos a la tierra y la devolución de la tierra a los que la cultivaban. No obstante, yo sostengo que más que ser simples reivindicaciones raciales, los acontecimientos de 1994-1998 surgieron de múltiples proyectos territoriales, a menudo rivales, de los que eran la expresión.

Para muchos campesinos, las invasiones fueron en efecto el acceso a las tierras que necesitaban desesperadamente. A pesar de las vastas extensiones que ya se habían distribuido a los campesinos por medio de la reforma agraria, la insuficiencia de tierras para los campesinos en Chiapas es

[14] La CNPI a Efraín Vera Arévalo y Rosemberg Molina Hidalgo, 28 de noviembre, 1994, ibíd. Véase capítulo 9 para un relato de lo que le sucedió a Efraín Vera cuando trató de recuperar su ganado.

ampliamente reconocida.[15] Con una población ejidal envejecida —la mitad de los titulares de los derechos rebasan los 50 años— la base de tierras del sector social también debe mantener a miles de familias jóvenes que descienden de titulares de derechos pero que no tienen su propio acceso legal a la tierra. En un estado con fuentes de empleo no agrícola limitadas, los hijos y nietos de los ejidatarios ensanchan las filas de los que poseen poca tierra o ninguna. Con la frontera agrícola oriental de las tierras bajas ya divididas en parcelas o cercadas en reservas naturales protegidas (Leyva y Ascencio 1996) y redistribuidas o fragmentadas en pequeñas parcelas legales casi todas aquellas fincas que sobrepasaran los límites establecidos para la tenencia de tierras, las invasiones brindaban una de las pocas formas que quedaban para incorporar tierra adicional al proceso de la reforma agraria.

A primera vista, pues, las invasiones parecen encajar en la definición clásica de Paige (1975:42-43) de la «fiebre de tierras» que cunde «cuando una burguesía con tierras ha sido debilitada… [permitiendo] una fiebre de tierras simultánea en miles de campesinos empeñados en obtener tierras que puedan considerar legalmente como suyas…. [Es] un movimiento breve e intenso dirigido a tomar tierras pero que carece de objetivos políticos a largo plazo». Pero las invasiones de tierras han servido desde hace tiempo no solo como un medio para el acceso a una tierra que es escasa, sino también como una táctica crucial y versátil de política rural. Las invasiones han figurado en el centro de los empeños de fragmentación de los grandes latifundios y para acicatear a los burócratas moribundos de la SRA, pero también han desempeñado su papel en las diversas disputas entre organizaciones campesinas, partidos políticos, líderes rivales y grupos étnicos.

Las tomas de tierras fueron con frecuencia un medio para que los partidos políticos y las organizaciones campesinas consolidaran bases de apoyo y compitieran contra rivales. A finales de los setenta y principios de los ochenta, por ejemplo, más de 400 invasiones realizadas por organizaciones campesinas independientes obligaron al gobierno de Chiapas, dominado por los terratenientes, a intensificar la redistribución. En 1983,

[15] Según la SRA 2000, la base de tierras del sector social en Chiapas comprende 41 hectáreas por jefe de familia con titularidad de derechos o siete hectáreas per cápita.

el gobernador Absalón Castellanos Domínguez inauguró el Programa de Rehabilitación Agraria (PRA). Como hemos visto, este programa otorgaba la condición de ejido a los ocupantes de tierras ya establecidos cuyas demandas no habían sido resueltas por la SRA y les facilitaba el dinero para adquirir tierras de propietarios privados. Con más de 80 000 hectáreas en juego, el PRA no tardó en deteriorarse y convertirse en una lucha de poder entre las organizaciones independientes y la principal organización campesina de México alineada con el gobierno, la Confederación Nacional Campesina (CNC). La CNC, que ya estaba viendo disminuida su legitimidad debido a su incapacidad para resolver las demandas acumuladas de reforma agraria y temiendo que el PRA fortaleciera a sus rivales, anunció una serie de invasiones violentas de tierras que ya habían sido invadidas en un intento de mantener el control político sobre la organización campesina (N. Harvey 1998:153). Por medio de estas segundas invasiones, los campesinos leales a la CNC quitaron a los grupos independientes las tierras que reclamaban y negociaron tratos aparte con el gobierno para canalizar la tierra redistribuida a través de la CNC (N. Harvey 1998, Reyes 1992). De este modo, la mayor parte de las tierras distribuidas por medio del PRA terminaron en manos de miembros de la CNC, generando aún más resentimiento entre los grupos de la oposición en el campo. La dinámica fue similar en 1994 cuando grupos rivales reclamaron derechos sobre las mismas parcelas de tierra y las organizaciones progubernamentales volvieron a invadir las tierras ocupadas por los grupos de oposición (o viceversa).[16]

Las invasiones de tierras también desempeñaron un papel importante en la lucha cada vez más reñida por el control de los gobiernos municipales y, en términos más amplios, fueron determinantes para las luchas continuas por la democratización de esos gobiernos. En los años ochenta y principios de los noventa, los esfuerzos por descentralizar el gobierno en México transformaron a los gobiernos municipales, que de ser coordinadores pasivos de proyectos estatales y federales pasaron a ser administradores

[16] Por ejemplo, miembros de la CIOAC y un grupo campesino alineado con el PRI se han alternado la tenencia de varias propiedades en Villa Corzo desde 1995 (*Cuarto Poder* [Tuxtla Gutiérrez], 22 de mayo, 2000).

de las obras públicas, de los créditos agrícolas y de otros programas de ayuda al desarrollo. Los presupuestos municipales subieron astronómicamente, hasta el doble y más en términos reales en todo Chiapas solo entre 1983 y 1987, seduciendo a nuevos pretendientes al poder local (INEGI 1990:329).[17]

En marzo de 1994, Manuel Jiménez Navarro, el líder del grupo de invasores de tierras más importante de Chilón, utilizó esa posición como trampolín en su campaña para imponer la renuncia del presidente municipal, que era un terrateniente ladino. Dos años más tarde, el apoyo del PRD a las tomas de tierras facilitó la victoria de *su* candidato frente a Jiménez Navarro. En numerosas ocasiones, tanto en Chilón como por todo el estado, estas invasiones de tierras políticamente motivadas fueron breves aventuras; los invasores (que normalmente ya poseían alguna propiedad en otra parte) se alejaban de la parcela invadida después de haber hecho su declaración política. En efecto, Daniel Villafuerte (comunicación personal, 12 de mayo, 2000), un atento observador de las invasiones y los acuerdos, señala que en numerosos casos no se podía encontrar a los demandantes campesinos originales una vez que el gobierno acordaba la adquisición de la tierra invadida.

No es extraño, pues, que una vez en el puesto, los dirigentes campesinos canalizaran importantes recursos del estado a sus bases electorales. Los registros municipales muestran que la administración del PRD, por ejemplo, ayudaba a los miembros que querían construir casas en propiedades

[17] Israel Gutiérrez explicaba: «Antes de 1984, los presidentes municipales recibían cheques de Tuxtla para los gastos y salarios de sus oficinas, y eso era todo. Esto empezó a cambiar en 1981, cuando Juan Sabines empezó a canalizar dinero directamente a los presidentes. Después, en 1984, con los cambios al Artículo 27 de la Constitución, el presidente tuvo que controlar su propia chequera. Antes el único dinero que el presidente manejaba provenía de los impuestos al café y de las multas que podía recaudar. Ahora hay un director de obras públicas y un director de desarrollo agrícola que manejan cantidades de dinero y proyectos. Esto ha tenido un gran impacto en la población. Antes nadie quería ser presidente, y tenían prácticamente que obligar a algún terrateniente o comerciante a asumir el puesto, ahora *todos* quieren ser presidentes».

invadidas.[18] Estas políticas provocaron reacciones de las organizaciones campesinas rivales, que se manifestaron en parte en el terreno de la invasión de tierras. En este caso, por ejemplo, los Chinchulines, un grupo paramilitar indígena alineado con el PRI, lanzaron un ataque contra la nueva administración municipal del PRD y sus seguidores campesinos.[19] Los Chinchulines criticaron la canalización de recursos de la nueva administración a sus seguidores y exigieron que se desviaran los recursos a sus propios miembros: «el Presidente Municipal, Manuel Gómez Moreno, ha estado actuando desde el inicio de su administración con parcialidad, es decir, beneficiando solo al grupo que lo apoyó para que asumiera el poder, no tomando en cuenta las necesidades de los otros grupos que carecen de apoyos necesarios para su subsistencia» (*apud* CDHFBLC y CEDIAC 1996:7). En abril de 1996, militantes de los Chinchulines tomaron las oficinas administrativas de Chilón y mandaron al alcalde del PRD al exilio en Tuxtla Gutiérrez (*La Jornada*, 12 de julio, 1996). A consecuencia de esta y otras acciones violentas, incluidos los ataques a invasores de tierras del PRD, los Chinchulines obtuvieron un crédito del estado de 200 000 pesos para el cultivo de café y el control de lucrativas concesiones de transporte.[20]

[18] «Libro de Sesiones de Cabildo, 1996», actas del 26 de septiembre y 2 de diciembre, en AMCH.

[19] Los Chinchulines se formaron en 1988 como Frente Unido de Ejidatarios para combatir a los rivales políticos por el control del consejo ejidal de San Jerónimo Bachajón. En estas reyertas, lo que estaba particularmente en juego eran las concesiones de transporte, el control sobre la extracción de grava, y la concentración de la tierra dentro del ejido. De los múltiples reportes de prensa consultados sobre los Chinchulines se destaca uno en particular: Ortiz, «Las atrocidades y la impunidad del grupo armado 'los Chinchulines'», *Proceso*, 13 de mayo, 1996, pp. 18-23.

[20] CDHFBLC y CEDIAC 1996; CONPAZ et al. 1996; entrevista con un antiguo miembro anónimo de los Chinchulines, Chilón, 20 de diciembre, 2000. A pesar de esta victoria, las cosas no acabaron bien para los Chinchulines. En abril y mayo de 1996, los conflictos entre los Chinchulines y rivales por el control del consejo ejidal de San Jerónimo Bachajón se volvieron cada vez más violentos. El 4 de mayo, los Chinchulines atacaron a un grupo de ejidatarios que votó contra ellos en las elecciones para el consejo. Al día siguiente, 200 de sus adversarios bajaron a Bachajón y llevaron a cabo una «operación meticulosa» (*Proceso*, 13 de mayo, 1996) para ejecutar al líder máximo de los Chinchulines. Ese mismo día otros tres dirigentes Chinchulines fueron muertos en las peleas que siguieron. En represalia, los Chinchulines, sin líderes, se amotinaron en Bachajón, incendiaron 23 casas, sacaron a un sinnúmero de

A un nivel incluso más mercenario, la fiebre de invasiones brindó amplias oportunidades a la codicia individual. Las resoluciones chuecas a las disputas de tierras permitieron que algunos terratenientes bien situados se forraran los bolsillos. Otros, que querían que el gobierno les liquidara en efectivo para saldar deudas o invertir en otras zonas, organizaron las invasiones de sus propias tierras por grupos campesinos que se prestaban a cooperar. Los dirigentes indígenas campesinos también manipularon las invasiones en beneficio propio. Por lo menos en dos casos en Chilón, los dirigentes juntaron a campesinos que ya tenían tierras en otra parte para que invadieran propiedades que el líder podría revender después de que el grupo fabricado regresara a su lugar de origen. Un funcionario indígena de bajo nivel me explicó: «Yo sé que algunos dirigentes, amigos míos incluso, que ya tenían tierras se aprovecharon del movimiento para invadir más tierras que después podían vender…. Invadían y después dejaban la tierra abandonada hasta que podían vender [ilegalmente] pequeñas parcelas a otras personas que necesitaban tierra».

Por último, sobre todo en regiones con grandes poblaciones indígenas como Chilón, las invasiones formaron parte de una lucha más amplia por el carácter racial del espacio y la política. A lo largo de varios siglos de levantamiento tras levantamiento, las comunidades indígenas trataron de

opositores de Bachajón y mataron a dos maestros. La rebelión recibió considerable atención a nivel nacional e internacional gracias a la rápida respuesta de trabajadores de derechos humanos jesuitas apostados en Bachajón. Después de permitir que los Chinchulines operaran con considerable impunidad durante varios años (para un atisbo de esta historia, véase Unión de Indígenas Tseltales de San Jerónimo Bachajón al Presidente del Congreso del Estado, 25 de noviembre, 1991; testimonio ante la legislatura del estado de Chiapas de Víctor Ortiz del Carpio, 15 de julio, 1993; Comisión Estatal de Derechos Humanos al Presidente Municipal de Sitalá, 11 de septiembre, 1995, todo en AHPL), la comisión estatal encargada de investigar los sucesos del 5 de mayo, 1996, resolvió ampliamente a favor de los adversarios de los Chinchulines. El estado aceptó poner en libertad a las personas arrestadas en conjunción con el asesinato de cuatro Chinchulines, recompensó a las familias de los maestros asesinados por los Chinchulines y brindó ayuda material a los adversarios de los Chinchulines cuyas casas y coches fueron incendiados en la revuelta: «Informe de la Comisión Plural para el Caso de Bachajón», 9 de mayo, 1996; «Acuerdo 00354», Congreso del Estado, LIX Legislatura, Comisión de Hacienda, 14 de agosto, 1996; «Convenio del 6 de Septiembre», firmado por la Comisión Plural para el Caso de Bachajón, PGR, Comisión de Desplazados, y Gobierno de la República, 6 de septiembre, 1996, todo en AHPL.

arrebatar el control del territorio a los ladinos. Unos 20 años antes de las invasiones más recientes, las luchas territoriales alcanzaron otro nivel cuando comunidades desperdigadas por todo Chiapas comenzaron a expulsar a los ladinos. A principios de los setenta, a pesar de las intervenciones del ejército mexicano en favor de los terratenientes ladinos, los tsotsiles de San Andres Larráinzar libraron una exitosa campaña para proscribir a los residentes no indígenas del municipio. De San Andrés, las confrontaciones entre indígenas y ladinos se desparramaron a Simojovel, Teopisca, Venustiano Carranza, Chalchihuitán, Mitontic y Chenalhó (Nash 2001:99). La historia de esta «reivindicación» racial no está escrita en su mayor parte, pero los resultados son tangibles. Las comunidades de los Altos, como Larráinzar, Zinacantán, Chalchihuitán, Tenejapa y Huixtán, se fueron «limpiando» gradualmente de ladinos. En el norte, Bachajón y Petalcingo también expulsaron a los ladinos a finales de los setenta porque, como me explicó un miembro indígena del gobierno municipal de Chilón, «nosotros no queríamos verlos ya en nuestras calles». Otras zonas experimentaron expulsiones parciales (e.g., Chilón, Yajalón). Las movilizaciones de 1994-1998 continuaron esta lucha por el espacio: en algunos municipios como Chilón y Simojovel, las invasiones sacaron efectivamente a los ladinos del campo y los llevaron a la relativa seguridad de las ciudades, si bien en el lejano Sitalá ni siquiera la seguridad de la ciudad pudo impedir la intimidación a los ladinos después de 1994.[21] En otras zonas, como Palenque y Yajalón, los ladinos organizados mantuvieron su terreno, pero en ambos casos las invasiones representan una pieza de una lucha continua por la «reconquista indígena» del territorio.

A Manuel Jiménez Navarro le parecía casi irrelevante si los invasores indígenas necesitaban tierra o no. Los tseltales eran los «auténticos dueños» de esa tierra, que era parte de un «territorio original indígena».[22] Por ende,

[21] Véase Toledo 2002 sobre el caso de Simojovel.

[22] Véase también «A la opinión pública», pliego petitorio firmado por Nicolás Guzmán P., Manuel Jiménez Navarro y otras autoridades ejidales, s.f. (*c.* febrero 1994), y «Restitución del territorio original a los pueblos y comunidades indígenas», firmado por ejidatarios de San Sebastián Bachajón, CNPI, y Comité de Campesinos Pobres, 22 de febrero, 1994, ambos en AGL.

las invasiones habían tenido con frecuencia como primer objetivo desplazar a los ladinos, como otro dirigente indígena declaró: «Las invasiones no eran por la producción, para hacer producir la tierra. Eran para restituir la tierra a los indígenas, para restituirles el derecho a la tierra que se les había quitado. Las invasiones se realizaban para que los indígenas pudieran tener tierra, tanto si producían en ella como si no».

Las luchas por definir la etnicidad del territorio eran también profundamente materiales. Ernesto Monterrosa expresó: «Cuando tomamos la tierra ganamos la primera etapa. Tomar el poder político es el siguiente paso». En Chilón las invasiones desencadenaron una transformación que marcó época en la composición racial de la política local. Los dirigentes indígenas estrechamente implicados en las invasiones de tierras obligaron a renunciar a los presidentes municipales ladinos. En marzo de 1994, el dirigente de la CNPI Manuel Jiménez Navarro sacó de Chilón al presidente municipal Roberto Trujillo, líder de una poderosa familia latifundista ladina vinculada con el entonces gobernador Elmar Setzer, e hijo de un presidente municipal por varios periodos y fundador de la AGL. Uno de los antiguos funcionarios municipales de Jiménez Navarro explicó: «Nosotros no teníamos ningún problema con Roberto [Trujillo], solo queríamos ver qué podía hacer un gobierno indígena para variar». Entre 1994 y 2005, tres indígenas, todos vinculados de alguna manera a las invasiones de tierras, fueron por periodos consecutivos presidentes municipales en Chilón y los terratenientes y comerciantes ladinos fueron marginados del PRI y del gobierno municipal que dominaron durante más de 60 años. En la campaña final para las elecciones de 2000, ladinos connotados se salieron por completo del PRI local dominado por indígenas y apoyaron al incipiente PAN de la región. En el vecino Sitalá, durante mucho tiempo ciudadela de un régimen ladino sumamente represor, sufrieron un giro similar en la etnicidad de la política, con los líderes indígenas compitiendo y arrasando en las elecciones locales.[23] Los ladinos en toda la selva pluvial y el norte de Chiapas se quejan amargamente de las nuevas administraciones indígenas,

[23] Aunque los ladinos al parecer mantuvieron importantes puestos en Sitalá bajo la presidencia municipal indígena.

poniendo de relieve el bajo nivel de estudios de los funcionarios y la fuerte corrupción. En efecto, como sus predecesores ladinos, los nuevos gobiernos indígenas contienen sus propios elementos autoritarios represivos y probablemente sí están implicados en actos de corrupción.[24] A pesar de todo, las quejas de los ladinos también reflejan los diferentes modos en que el giro étnico en la composición de la política municipal ha redirigido los flujos de recursos y el patrocinio. La mayoría de los observadores coincide en que las administraciones indígenas han desviado en gran parte el financiamiento de las ciudades ladinas hacia su propia clientela en los ejidos y el campo.

En su intervención en un simposio internacional sobre la reforma agraria, Arturo Luna, un antiguo líder de la CIOAC que llegó a funcionario estatal, recordó a los que le escuchaban que aunque el resultado de las invasiones de 1994-1998 fue «la mayor reforma agraria [en Chiapas] del último medio siglo», sin políticas que «incorporen la tierra y la producción» y que habiliten a los campesinos para vivir de la tierra, la reforma fracasaría (Luna 2001). En octubre de 2002, un informe del representante especial de la SRA para Chiapas parecía confirmar la profecía de Luna (*La Jornada*, 28 de octubre, 2002). Al menos 40% de la tierra concedida por medio de los Acuerdos Agrarios había sido abandonada por sus receptores originales. El representante especial denunció a los campesinos corruptos que invadían la tierra «pero que en realidad no la necesitaban». Sus explicaciones evocan algunos de los múltiples proyectos territoriales camuflados en invasiones de tierras. Pero hay otra explicación posible para el abandono tan extendido de la tierra, una explicación más próxima a la opinión de Luna. Sobre todo desde la caída masiva de los precios del café en 2000, las tierras invadidas siguen sin cultivar porque los agricultores campesinos carecen de los

[24] En la primavera de 2001, manifestantes indígenas expulsaron al presidente municipal de Sitalá y lo llevaron al exilio, acusándolo de embolsarse dinero etiquetado para obras públicas. Mientras tanto, durante el año que pasé en Chilón, el presidente se construyó una de las casas más ostentosas de la ciudad, rodeada de rejas eléctricas de más de tres metros y medio de altura.

recursos básicos necesarios para hacer que su propiedad produzca. Los informes sobre la escalada de la emigración del campo chiapaneco a los Estados Unidos plantean la pregunta de si los acuerdos simplemente aceleraron los procesos de transformación del campo activos en todo México en un refugio para los trabajadores migrantes y sus familias (De Janvry et al. 1997).

Aunque los impactos a largo plazo de las movilizaciones de 1994-1998 sobre la subsistencia de los campesinos están por verse, los acontecimientos de esos años acarrearon de inmediato consecuencias en las trayectorias más amplias del cambio agrario en Chiapas. Después de 1992, muchos analistas temían que los cambios al Artículo 27 de la Constitución que permitían la privatización y la venta libre de la tierra del sector social marcaran el inicio del retorno a la época prerrevolucionaria de las vastas haciendas y plantaciones. Los acontecimientos que siguieron demostraron que también era posible lo contrario. Hoy, en gran parte de Chiapas, la minifundización —la fragmentación de las tierras de campesinos en unidades inviables— representa una amenaza mucho más grave para la subsistencia de los pobres en zonas rurales que la monopolización de la tierra por unos cuantos propietarios.[25] Disuadidos por la naturaleza voluble y altamente politizada de los derechos de propiedad, los inversores prefirieron la explotación indirecta del campo. En lugar de acumular tierras en unas cuantas manos corporativizadas, docenas de nuevos inversores en agroempresas han recurrido a contratos de corto plazo y otros arreglos flexibles con pequeños propietarios (Pólito Barrios 2000).

Hace más de un siglo, Karl Kautsky observó que «la importancia política [del sector rural] está en proporción inversa a su importancia económica» (1899:312). Hoy, los campesinos de Chiapas —cuya contribución económica a la economía mexicana ha menguado— han destrozado las imágenes de un México políticamente estable orientado a incorporarse a las filas de los países «desarrollados». El levantamiento zapatista y las

[25] Véase Villafuerte et al. 1999. Aunque los observadores responsabilizan a menudo a las presiones demográficas del problema de la minifundización, esta explicación no logra captar las complejidades de la tenencia de la tierra en Chiapas (Bobrow-Strain 2001).

movilizaciones campesinas subsecuentes tocaron muchos puntos sensibles: no solo contradijeron la imagen optimista de México proyectada internacionalmente por los dirigentes tecnocráticos del país, sino que han sacado a la luz la bancarrota del «liberalismo social», los tan alabados empeños de Carlos Salinas para fundir reformas económicas ortodoxas neoliberales con programas sociales que se proponían extender el régimen de un solo partido (Cornelius, Craig y Fox 1994, Dresser 1991). Más de una década de liberalización económica ha vapuleado a los pueblos indígenas y al campo en particular y ha traicionado los ideales de justicia social, paternalismo y populismo agrario, sobre los que el PRI construyó su régimen a nivel discursivo. Es más, la rebelión en Chiapas —un estado en el que el apoyo de las poblaciones rurales al PRI ha sido arrollador en décadas de elecciones— amenazó el predominio electoral frágil y dependiente de las zonas rurales del partido en el poder. De muchas maneras, los empeños del PRI en contener la propagación del malestar agrario y la deserción electoral mediante los Acuerdos Agrarios reprodujeron la inveterada política de patrocinio recompensando a las bases leales: en conjunto, los grupos incondicionales del PRI, SOCAMA (Solidaridad Campesina Magisterial) y la CNC, recibieron casi 30% de la tierra asignada a más de 250 organizaciones campesinas a través de los acuerdos (SIC 1998). Esto no debería sorprender a alguien que esté familiarizado con la política mexicana. Pero lo que sí merece destacarse es hasta qué punto las movilizaciones obligaron al estado a extender su botín a grupos orgullosamente independientes y hasta hostiles. La CIOAC y otros grupos de oposición que participaron en las negociaciones sufrieron el impacto de los desalojos y la represión, pero también consiguieron decenas de miles de hectáreas para sus miembros.[26] Algunos observadores endilgaron cínicamente a los programas de redistribución de la tierra la etiqueta de ser «una pieza clave de la guerra de baja intensidad a la que están sometidas las comunidades indígenas» (López 2000:143). Pero esos programas podrían también encuadrarse como parte de la actual «paradoja de la revolución [mexicana]» (Middlebrook 1995). En México, los

[26] Calculado a partir de CESMECA 1998 y SIC 1998.

actores estatales ejercen un control autoritario de la población, pero hacen frente a las consecuencias no deseadas de consolidar el poder estatal en torno a los ideales legitimadores de la revolución agraria. En este contexto, los movimientos sociales mantienen una considerable capacidad de resistir al régimen estatal y ganan sustanciales beneficios materiales para ellos. Los grupos indígenas esgrimieron un poder considerable después de 1944, consiguiendo una redistribución de la tierra sin precedente e impulsando múltiples proyectos territoriales, pero ¿qué pasó con los terratenientes? A medida que las invasiones se propagaron por Chilón en febrero de 1994, los rancheros conmocionados contemplaban las invasiones a distancia, intervenían para salvar ganado y organizaron reuniones de emergencia de la AGL. Un mes más tarde, el gobierno municipal ladino de Roberto Trujillo renunció bajo coacción y fue reemplazado por el dirigente de la CNPI, Manuel Jiménez Navarro. El 15 de marzo, la AGL envió su primera declaración importante por escrito sobre las demandas al presidente Salinas, a la legislatura del estado de Chiapas y a las secretarías de Defensa y de la Reforma Agraria. En este documento, los terratenientes exhortaban al gobierno a desalojar de inmediato todas las propiedades invadidas; a separar el ejido de Bachajón de Chilón, creando con ello dos municipios, uno indígena y el otro ladino; a instalar un retén militar en Bachajón y construir una carretera periférica alrededor del poblado «para evitar así el peligro de secuestros y torturas de que constantemente son objeto las personas y autoridades de distintos municipios… que desafortunadamente tienen que pasar por la única calle principal de este PUEBLO SIN LEY». Si estas demandas no eran satisfechas, trinaban los ganaderos, ellos actuarían en forma unilateral para «rescatar» sus propiedades, amenazando con que «si hoy las autoridades nos dan la espalda NO VOTAREMOS EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES».[27]

Los terratenientes presionaron para que se realizaran los desalojos y amenazaron con violencia en el verano de 1994, pero sus demandas fueron prácticamente desatendidas, ya que los gobiernos federal y estatal se habían

[27] Carlos Alexis Hernández Vera y Elí Rodríguez Zúñiga a Carlos Salinas de Gortari et al., 15 de marzo, 1994, en AGL.

distanciado de ellos. Ni una sola de las cuatro demandas originales de los chiloneros fue satisfecha. En abril, un acuerdo firmado entre el gobierno del estado y las organizaciones campesinas estableció un programa de adquisiciones subsidiadas de las propiedades invadidas, pero solo tuvieron efecto los desalojos autorizados de las propiedades invadidas después del programa. Aquel verano, cuando los terratenientes de todo Chiapas realizaron una manifestación de protesta masiva en la capital del estado, los chiloneros una vez más abrigaron esperanzas de que sí habría desalojos. Muchos pensaban que sus protestas habían conseguido que el gobierno se comprometiera a una acción inmediata. Cuando un mediador federal «pospuso» los desalojos y con una respuesta por escrito a las demandas de los terratenientes confirmó la actitud poco cooperadora del estado, los chiloneros empezaron a moderar su posición.[28] En agosto, la AGL elevó su oferta de propiedades en venta a 34 (2 183 hectáreas) y limitó estratégicamente sus demandas de desalojo a 15 ranchos (991 hectáreas) invadidos por grupos campesinos de la *oposición*.[29] La oferta final de la AGL, enviada por fax a los funcionarios estatales en diciembre de 1994, pedía solo 11 desalojos y ofrecía 36 propiedades a la venta (2 225 hectáreas).[30]

En último término, según los registros del gobierno, solo una propiedad fue desalojada por los propietarios o la policía en Chilón, y el estado se comprometió a la compra de miles de hectáreas de tierra.[31] La

[28] Véase *La Jornada*, 6 de julio y 6 de agosto, 1994, para reportajes de la moratoria federal a los desalojos; Secretaría de Gobierno y Secretaría de Hacienda del Estado, «Respuesta al pliego de peticiones de la coalición de propietarios rurales», s.f. (*c.* verano 1994), en AGL.

[29] AGL al Diputado Gonzalo López Camacho, 8 de agosto, 1994, ibíd.

[30] «Pliego peticionario que presentan los productores agropecuarios del Mpo. De Chilón », 21 diciembre, 1994, ibíd. La decisión de si se ofrecía o no una propiedad a la venta la tomaba individualmente cada propietario en el contexto de discusiones con frecuencia enardecidas en el seno de la AGL. Los primeros borradores de la carta de oferta de la AGL atestiguan este proceso: están cubiertos de garabatos y tachaduras que dicen «X es sí», «Y es fuera» y «Z está por decidirse». Lentamente, la AGL fue elaborando un consenso general en favor de la participación y aquellos propietarios que se tardaron demasiado en decidir participar, en general, se toparon con más dificultades en las negociaciones con el estado.

[31] La única propiedad desalojada fue después adquirida por un grupo campesino progubernamental. A través de docenas de entrevistas y estudios de otras fuentes de datos, identifiqué dos o tres probables desalojos que no aparecían en los informes oficiales. Los

transferencia formal de la propiedad de los ranchos invadidos resultó ser más complicada. En Chilón, tanto campesinos como propietarios obstruyeron el programa de adquisiciones por diferentes razones,[32] pero las adquisiciones fueron frenadas más que nada por la confusión y la corrupción generalizadas que han infestado siempre los derechos de propiedad en Chiapas: de 19 propiedades problema reportadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, los dueños titulares de seis de ellas no eran los dueños reales (algunos habían fallecido), y cuatro propiedades simplemente no estaban registradas ante ninguna autoridad.[33]

El precio de la cooperación

Entre febrero y diciembre de 1994, según documentos de la Tesorería mexicana publicados en *La Jornada*, el gobierno emitió 455 cheques por un total de 221 millones de pesos para la adquisición de 39 049 hectáreas (*La Jornada,* 2 de junio, 1995). El receptor de estos primeros y lucrativos pagos fue un grupo de elite de funcionarios de alto nivel, que incluía al coordinador de Asuntos Agrarios y a parientes de varios exgobernadores. Esta clase de corrupción de alto nivel tiene precedentes históricos: la compensación por las propiedades afectadas por la reforma agraria en los ochenta, por ejemplo, fue extraordinariamente beneficiosa para los

---

propios campesinos con frecuencia desalojaban violentamente a miembros de organizaciones campesinas rivales y ocupaban ellos mismos las propiedades, pero yo considero estos casos como un fenómeno aparte. Muchas otras propiedades fueron «voluntariamente desocupadas» por los invasores a la espera de un acuerdo de compra que esperaban conseguir del estado con su actitud de cooperación. En Chilón, la mayor parte de estas propiedades desocupadas fue finalmente vendida a campesinos, pero no necesariamente a los invasores originales.

[32] Algunos campesinos que habían invadido tierras se negaron a entrar en negociaciones con el gobierno, prefiriendo el acceso informal a la tierra del que ya gozaban al título legal y una hipoteca. Del mismo modo, algunos terratenientes fuertemente endeudados se negaron a aceptar ventas que no cubrían sus gravámenes. Otros terratenientes simplemente dieron largas al asunto, frustrados por la baja compensación que les ofrecían por sus ranchos.

[33] «Predios ocupados, San Sebastián Bachajón, que no pueden ser adquiridos», e impresión de una hoja de cálculo elaborada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Gobierno del Estado, s.f., ambos en WTL.

terratenientes bien situados. Hasta la AGL denunció abusos de terratenientes, llamando la atención del gobernador sobre rancheros que se habían invadido a ellos mismos con el fin de reclamar el pago.[34] No es nada raro entonces que la imagen de obesos terratenientes sonriendo camino al banco dominara las concepciones populares de las adquisiciones de tierras invadidas, pero muchos de los terratenientes en Chilón tuvieron experiencias bastante diferentes.

Cuándo y a qué nivel los terratenientes recibían pagos era una prueba de su peso político y capacidad para negociar con los funcionarios estatales. La familia Martínez, por ejemplo, recibió una compensación rápida y sustanciosa por su finca San Francisco el Duraznal, gracias a una conexión con el candidato presidencial del PRI, pero lo más común era que los terratenientes esperaran de tres a cinco años para recibir sus cheques. Delio Ballinas del Carpio, dueño de dos ranchos (de 23 y 40 hectáreas), sostiene que sus trámites «estaban atascados» porque él «no tenía el dinero que se necesitaba para engrasar las ruedas».

Si bien algunos terratenientes cosecharon beneficios inesperados a consecuencia de las invasiones de tierras, la evidencia indica que la compensación —calificada de abismal por los terratenientes y por los dirigentes campesinos como una manera de enriquecer a los terratenientes— tal vez haya sido bastante razonable. Para diciembre de 2000, los terratenientes de Chilón habían recibido unos 32 millones de pesos por 101 propiedades que abarcaban 7312 hectáreas, con pagos que iban de 2800 a 6800 pesos por hectárea, tal como lo determinó un evaluador federal.[35] Precisar si esta suma sustancial era suficiente para que los dueños fueran con una

[34] Carlos A. Hernández Vera, presidente de la AGL, a Artemio Rojas, representante del gobernador en la Comisión Ejecutiva Agraria, 12 de mayo, 1994, en AGL.

[35] «Libro de Escrituras Públicas (1994-1998)», en RP-Y. Como lo indican estas cifras, la mayoría de las propiedades adquiridas en Chilón eran relativamente pequeñas, con un promedio de 56 hectáreas. Más de la mitad de las propiedades invadidas en todo el estado medían menos de 50 hectáreas y solo una cuarta parte tenía más de 100 hectáreas (Villafuerte et al. 1999:136). Las propiedades programadas para la venta por medio de los acuerdos tenían un tamaño medio de algo menos de 60 hectáreas (calculado a partir de CESMECA 1998). Contrariamente a la percepción popular, la mayoría de los propietarios afectados eran rancheros relativamente menores. A pesar de todo, en muchos casos una sola familia

sonrisa en la cara camino al banco, es difícil de demostrar de todos modos. Debido a un impuesto importante sobre el traspaso de todas las ventas de tierras de propiedad privada, los propietarios reportaban transacciones muy por debajo del valor real. En uno de los casos, un propietario que oficialmente declaró un precio de venta de 2 millones de pesos por su rancho, envió una carta al registrador de la propiedad quejándose de que el comprador le debía aún 5.5 millones de pesos de un trato de 9 millones en total.[36] Por lo demás, los precios de la venta de fincas de ganado y cafetaleras reportados públicamente en los años inmediatamente anteriores a 1994, oscilaban entre 1 000 y 5 000 pesos por hectárea,[37] indicando que si era cierto que los precios de venta anteriores a 1994 reflejaban subestimaciones, los pagos del gobierno de 2 800-6 800 pesos compensaban a los propietarios casi o por debajo del valor en el mercado. Un funcionario de alto nivel y antiguo evaluador de tierras en las oficinas de Yajalón del Banco Nacional de Desarrollo, Banrural, cuyas reconocidas simpatías políticas estaban lejos de los terratenientes locales, pensaba que «el valor de la tierra se mantuvo estable antes de las invasiones, pero descendió dramáticamente después de 1994». El funcionario bancario especulaba que en la primavera de 2001, los cafetales se vendían en alrededor de 20 000 pesos por hectárea mientras que los buenos pastizales se vendían en alrededor de 9 000 pesos.[38] Lo interesante es que cuando estas cifras se ajustan teniendo en cuenta la inflación, reflejan casi con exactitud los precios que pagaban los funcionarios del gobierno después de 1994: aproximadamente 2 800-6 300

poseía múltiples divisiones de una gran finca. La familia Utrilla, por ejemplo, vendió cinco extensiones legalmente subdivididas de El Horizonte en Sitalá, con un total de 771 hectáreas.

[36] «Fracción La Alianza», en RP-Y, «Libro de Escrituras Públicas, 1988». Por otra parte, los precios de venta de las propiedades invadidas los reportaba directamente el Banco de Crédito Rural del Istmo, y todos los observadores asintieron que el Banco reflejaba con exactitud los precios de venta.

[37] Muestra de 50% de las transacciones registradas en «Libro de Escrituras Públicas (1993-1999)», en RP-Y.

[38] Los campesinos, cuya participación en los mercados de tierras suele reflejar un cálculo económico diferente, pueden estar dispuestos a pagar pecios incluso superiores (i.e., Chayanov 1986). En un conversación informal en julio de 2011, un campesino de la región afirmó haber comprado una hectárea de cafetales por 60,000 pesos.

pesos (1994). No obstante, los cheques emitidos por el gobierno del estado no compensaban a los propietarios por los animales que se habían perdido en el transcurso de las invasiones o por las inversiones de capital como establos, equipo de ordeña y otra infraestructura agropecuaria.

Sin embargo, el valor de la tierra laborable no se puede separar de las expectativas de rentabilidad a futuro. Más de un indicador agregado sugería que la visión de 1994 les habría parecido bastante tenue a los terratenientes, con la repercusión negativa de la reestructuración económica neoliberal en el sector ganadero y cafetalero. Pero la crisis económica por sí sola no puede explicar la diversidad y complejidad de los factores implícitos en la resignación de los terratenientes como veremos más adelante.

8. Los sueños del desarrollo

La producción del lugar de los terratenientes en el país

Dime lo que ves desaparecer
y yo
te diré quién eres.
W.S. Merwin, «Para ahora»

En este capítulo se estudia la producción cultural de la «producción» y cómo este campo tan significativo definió la manera que tuvieron los terratenientes de entender sus opciones y su posición estratégica ante las invasiones de tierras. Después de 1994, los cambios en cómo se posicionaron y fueron posicionados los terratenientes en relación con el país en términos amplios, en los debates en torno al significado de la producción, generaron un fuerte sentido de los límites para el uso de la violencia.

Para los propietarios de tierras, la producción trasciende el terreno del trabajo y se extiende a casi todos los aspectos de la vida. Este marco es determinante para entender el mundo. El campo cultural de la producción representa lo que Michael Omi y Howard Winant (1994:56) llaman el «proyecto racial»: «simultáneamente, una interpretación, representación o explicación de la dinámica racial y un esfuerzo por reorganizar y redistribuir los recursos de acuerdo con líneas raciales particulares». La producción es también un proyecto territorial, que interpreta y representa

configuraciones particulares del espacio con el fin de naturalizar las relaciones socioespaciales existentes y reivindicar normas acerca de cómo debería ordenarse el espacio.

La producción, como el eje local de la raza y la diferencia de clases, condicionó los intentos de posicionarse en el panteón del desarrollo nacional que hicieron los terratenientes. A finales de los ochenta y en especial después del levantamiento zapatista, los inestables equilibrios de la economía política mexicana debilitaron la capacidad de los terratenientes para conseguir apoyo estatal en su defensa del territorio. Los propietarios experimentaron este giro, realizado a través del campo cultural de la «producción», como un vuelco total de la manera de funcionar el mundo, con fuertes implicaciones para sus cálculos de los límites y posibilidades de la acción violenta. Durante décadas el discurso de la producción había estado en el centro de la confianza que tenían los terratenientes de que su trabajo era de un gran valor para todo el país, valor que sería recompensado con apoyo político y económico. Pero para 1994, ese orden social ya no parecía tan cierto ni seguro.

La producción de terratenientes

Para los terratenientes en Chilón, la historia de 1994 está escrita en el paisaje, tan clara como el pasto y el maíz. Costras color café de pasto que ha sido eliminado con herbicidas esperan a ser plantadas. Brotes tiernos de maíz compiten con marañas de forraje tropical. Casas de tablones de pino se elevan en los campos donde alguna vez pastó el ganado, y de noche el humo azul de los fogones y el aroma de tortillas de maíz suspendidos en el aire de los que alguna vez fueran los pastizales más productivos de Chilón. Las invasiones de 1994-1998 afectaron al café y al ganado más o menos por igual, pero para los terratenientes, los pastos ocupados cuentan la historia más triste. Si bien los cafetales se extienden lejos de las principales vías de acceso, en terreno empinado y envueltos en árboles de sombra que los cubren, los pastizales de Chilón llegan hasta los caminos para que el transporte tenga un acceso fácil, y gran parte de ellos se extiende

formando un conspicuo anillo que bordea Chilón. Por eso es aquí donde los efectos de la invasión son más visibles.

Para los terratenientes, el cambio en el paisaje cristaliza las pérdidas de 1994 y la locura de los acontecimientos desde entonces. En el Capítulo 2, rememoré cómo don Roberto, observando la ladera de un cerro que antes de 1994 había pertenecido a Elí Rodríguez, el ganadero más prominente de Chilón, comentó: «Estos pastos fueron unos de los más productivos en Chilón. Mirabas por allá y solo veías el verde lleno de ganado. Después [en febrero de 1994] indígenas de Piquinteel —del otro lado del cerro— lo invadieron. Ahora míralo. Tiene unas milpas por allá, de un lado, y el resto está cubierto de monte». «Alguna vez el camino de Bachajón a Chilón fue todo ganado, hasta donde alcanzaba la vista», observaba Ofelia Jiménez con amargura. «Ahora allí no hay nada».

Por supuesto que *hay* algo. Las hierbas silvestres que lo invaden, no cabe duda, pero también pueblos indígenas dispersos, escuelas destartaladas, un poco de ganado y muchas milpas. Es el paisaje vivo de la subsistencia campesina. Lo que no hay es *producción*, una acepción particular, racial, del significado de producción. Para los propietarios y ganaderos, la producción estaba profundamente arraigada en la transformación de la naturaleza y la acumulación de capital por medio de la agricultura; significaba algo más que un medio de subsistencia.

La palabra «producción» es de raíz latina, «pro», hacia delante, y «ducere», conducir, llevar, y esta etimología es muy cercana en su significado al sentido que tienen de la producción los terratenientes ladinos de Chilón. En definitiva, la producción es un campo amplio de significado y práctica que atañe a las prácticas responsables de cultivo y la cría de ganado («llevar adelante») en múltiples ámbitos de la vida, desde la construcción de la masculinidad hasta la definición de las relaciones de los terratenientes con el estado mexicano. Explorando el significado de producción podemos ver cómo se entienden los terratenientes a sí mismos y sus relaciones unos con otros, con sus vecinos indígenas y con el país.

Para los ladinos, una de las acciones más incomprensibles de los invasores indígenas fue la destrucción aparentemente irracional de mejoras



El paisaje idealizado de la producción ladina. (Foto del autor.)

primordiales de la tierra, el material mismo de la producción. Como Ruperto Monterossa dijo trinando, «Cuando invadieron, destruyeron el equipo para beneficiar el café, los establos de la ordeñadora, todas la instalaciones para el ganado…. Si iban a tomar la tierra, ¿por qué no *hacían algo* con todo ese equipo?». Expresiones como esta, repetidas por casi todos los rancheros con los que hablé, atestiguan el sentido colectivo que tenían los terratenientes de la irresponsabilidad y la otredad de los insurgentes indígenas. A nivel táctico, este discurso replica la retórica antipropietarios de los movimientos sociales indígenas así como la crítica más abstracta, pero no tan sentida de manera palpable, de los intereses de los finqueros expresados en la teoría política económica. El discurso de la producción invierte las acusaciones de las improductivas «prácticas rentistas», normalmente referidas a las clases latifundistas, convirtiendo mágicamente a *los señores con tierras en transformadores activos de la naturaleza*. Los campesinos indígenas, sostienen los terratenientes, son los verdaderos parásitos que viven



Un asentamiento indígena y las milpas que despuntan en pastizales invadidos. (Foto del autor.)

de la abundancia natural de la tierra, una tierra que originalmente se hizo productiva con el sudor y el sacrificio de los terratenientes.

Aun así, cuando se les presiona, algunos ladinos admiten que la tragedia que ellos ven escrita en el paisaje no es que la tierra no esté produciendo nada, sino que «no está produciendo lo que *debería*»…. No es que los indígenas no estén produciendo, sino solo que obtienen el producto sin *trabajar* la tierra». Los ladinos, me dice Rodolfo Domínguez, invierten en la producción con el objetivo de crear ganancia, mientras que los indígenas «cultivan para el consumo del hogar, no por la producción». O como lo aclara Miguel Utrilla, «Los indígenas solo trabajan por necesidad, para comprar cosas que necesitan en aquel momento, y después paran de trabajar». Por eso lo que yo llamo el discurso de la producción de los propietarios de tierras no se refiere al acto generador de la agricultura misma, sino a la creación de diferentes tipos de valor social y económico por medio de diferentes tipos de esfuerzo físico y emocional, la vocación de acumulación.

La vocación de acumulación

Mediante las prácticas discursivas de la producción, los terratenientes construyen su sentido de la identidad sobre un terreno movedizo plagado de contradicciones. Sin embargo, es un error reducir el tejido de la identidad terrateniente a la simple mecánica de la mistificación ideológica. Las raíces profundas crecen en terreno movedizo.

Al principio de conocernos, el ganadero Eulalio Hernández insistía, «La agricultura es un trabajo honorable… la agricultura es una labor de amor, algo a lo que hay que entregar todo tu ser… Se trata de progreso, superación con un enorme esfuerzo… es mi vocación…. Cuando [el gobierno] me preguntó, '¿Cuánto vale tu rancho?', yo dije, '¿Cuánto vale tu ojo?'». Detrás de la bravuconada, el arrebato de Eulalio expresa la esencia de la vida del productor: un profundo apego romántico a la tierra, una creencia con carga moral en la conexión entre el trabajo arduo y el progreso, y un fuerte sentido de la vocación o del propósito arraigado en la agricultura. Para Eulalio, que de inmediato y sin vacilar invirtió el dinero que le pagaron por la invasión de su rancho en una nueva parcela de tierra, ser productor agrícola es su trabajo cotidiano, como lo demuestran sus manos agrietadas y su rostro oscurecido por el sol. Pero para muchos de los terratenientes en Chilón que perdieron sus tierras con las invasiones, la producción está inextricablemente envuelta de un anhelo nostálgico por el retorno de un mundo mítico, un mundo que tenía sentido.

Después de la invasión de El Carmen Tzajalá, el hermano bohemio de Roberto Trujillo escribió una novela tratando de desentrañar la pérdida que había tenido su familia. *El sacrificio de Isac* es, como Michael Kammen (1991:688) escribió de la nostalgia, «la historia sin culpa», una elaborada protesta de la inocencia del terrateniente frente a la invasión.[1] Más importante aún es que es un lamento de lo pasajero de una identidad particularmente *generizada* y *racializada*, una elegía de la producción.

[1] Mi estudio de *El sacrificio de Isac* está basado en un manuscrito inédito compartido conmigo en 2000. El libro se publicó en 2002 en Conecult a de Chiapas, Serie Biblioteca Popular. Más adelante, la cita literal del texto es de la página 178.

La novela empieza y termina con la violencia de la invasión y la defensa de los terratenientes de sus propiedades, pero el resto tiene lugar durante un interludio bucólico que desemboca en el conflicto. En el centro de esta pastoral hay un romance asimétrico entre el propietario Ulises y su infantil sirviente indígena Ninfa.[2] A medida que se va desplegando la historia, Ulises y Ninfa pasan los días caminando por selvas exuberantes, atrapando cangrejos en riachuelos, bañándose eróticamente en pozas de agua de montaña, y perdiéndose en un refugio a la sombra de los cafetales. La joven Ninfa sirve con destreza a Ulises, recogiendo frutos dulces y pegajosos y cocinando para él, llevándole el café, cortándole las uñas de los pies y escuchándolo con avidez cuando él pronuncia lecciones sobre la vida. A cambio, instruye a Ninfa en las artes de la relación «del hombre» con la naturaleza: la administración racional de la agricultura y la apreciación romántico-intelectual de los esplendores de la naturaleza.

Todo está en su lugar en esta fantasía con tintes de Gauguin. Los trabajadores indígenas son respetuosos, dóciles y eróticos por encargo. La tierra es abundante y está bien ordenada bajo la guía del dueño. Aparte de las claras imágenes de apego romántico a la tierra y los papeles «correctos» de la raza y el género, no obstante, *El sacrificio de Isac* esconde otro elemento clave de la nostalgia del terrateniente: el anhelo de un sentido perdido de la finalidad en la vida. Ulises se enorgullece de su identidad como progenitor. Su sentido del propósito y su identidad provienen de su papel de alfarero benevolente de la naturaleza femenina, la naturaleza vegetal y la naturaleza indígena, las tres confundidas y difuminadas en una sola. Cuando la novela finaliza, Ulises está de pie en las ruinas de su finca, contemplando la pérdida de su causa y buscando otra fuente de sentido: «No había nada que esperar, no había nada que empezar. Había que continuar, pues todo había comenzado muchos años atrás, cuando sus antepasados

[2] Con la excepción de Ninfa, los personajes indígenas y las poblaciones llevan nombres del Antiguo Testamento (los invasores provienen de ¡Sodoma y Gomorra!), prueba de sus ancestrales modos y su borrascosa impredecibilidad. Muchos personajes y lugares ladinos, por lo demás, llevan nombres griegos clásicos (Atenea, Penélope, Ítaca), que simbolizan, al parecer, la racionalidad y la civilización.

se habían venido a establecer en estas tierras, que entonces eran soledades selváticas…. No. Ulises no podía renunciar a viajar en la historia… tenía que dejar que el viento arrastrara su balsa y no necesariamente a Ítaca; su isla sería aquella a donde la mar lo condujera, porque podía luchar contra Troya, mas no contra el destino». La novela termina con un optimismo agridulce. Ulises ha sido despojado por la fuerza del significado de su vida —ser portador del legado generacional de la producción— pero al menos puede encontrar un sentido nuevo y más existencial del propósito siguiendo simplemente adelante.

Los terratenientes reales no siempre fueron tan afortunados. Muchos, por necesidad, encontraron nuevas carreras, nuevos apegos fuera de la agricultura, remontando las huellas de sus abuelos a la inversa: se fueron de Chilón, regresaron a Tuxtla Gutiérrez o San Cristóbal y al comercio o a trabajos profesionales. A muchos, este camino les abrió nuevas oportunidades y fuentes de satisfacción, pero otros sufrieron la irritación producida por la inactividad y la esterilidad de la vida profesional. Un antiguo ranchero, que pidió que estos comentarios permanecieran anónimos, utilizó dinero de la venta de su propiedad amenazada de invasión para comprar una camioneta pickup y una concesión de transporte comercial. Ahora se gana la vida transportando gente y cargamento por la carretera entre dos ciudades, pero le hace falta la vida activa del trabajo del rancho. Este hombre transpira una imperiosa y casi violenta energía física que es difícil imaginar confinada en la cabina de una camioneta. Aunque está todavía fornido, con músculos gruesos como cables, su cuerpo ha empezado a decaer, tanto por rabia y frustración como por inactividad. Le duelen constantemente la espalda y el hombro, lo cual le dificulta incluso trabajar en el pequeño jardín urbano que compró «para mantener las manos en la tierra».

A diferencia de muchos de sus amigos que recuerdan un pasado romántico y aséptico, él es mordaz y reflexivo, se ríe con ganas de la participación de sus ancestros en el contrabando del alcohol y en sus propios intentos de defender sus propiedades contra los reformadores agrarios. Pese a todo, las historias del pasado aún arraigan su vida en un sentido de la herencia y un continuo de progreso roto salvajemente en 1994. Su familia

comenzó de cero, dice, «reclamando tierra en medio de la nada en un lugar donde no había nadie», y lentamente fue construyendo algo con pura determinación (y un poco de contrabando). Él guarda con cuidado un hermoso mapa de 1873 trazado en tinta como un recordatorio tangible de ese pasado, del cual, recuerda con tristeza, «ya no queda nada».

En ninguna parte es más claro el dislocamiento psíquico del deterioro que en su impacto en los cuerpos de los terratenientes. Así como el ranchero anónimo conecta el dolor de su espalda y su hombro con las invasiones de tierras, los chiloneros atribuyen docenas de muertes e incapacitaciones desde 1994 al coraje, la furia que invade a hombres ancianos ante aquella pérdida de la tierra, el sustento y el sentido. Aunque es difícil saber si la racha de ataques al corazón, diabetes, cáncer, infartos y crisis nerviosas atribuidas al coraje es verdaderamente inconsistente con lo que sería de esperar en una población de hombres en edad de envejecer, los chiloneros lo viven claramente como una epidemia producida socialmente. «Hay por todas partes hombres que se llenaron de coraje y luego murieron», me cuenta Delio Ballinas, mencionando rápidamente a unos cuantos terratenientes que sucumbieron a los achaques después de 1994. La propia vida de Delio ha sufrido la maldición de la pérdida: las invasiones de tierras lo obligaron a abandonar fincas en los años setenta, ochenta y noventa. Después de cada pérdida sucesiva, adquiría otro rancho en otra región. «He tenido una vida tan dura que la mayoría de los hombres se hubieran dado un tiro en la cabeza o se hubieran ahorcado. Primero nos sacaron de Simojovel, después empezamos de nuevo en Pantelhó y finalmente llegamos a tener siete ranchos aquí. Un verdadero éxito. Y perdí esos ranchos [por las invasiones indígenas] y vine a Chilón y aquí tuve dos buenos ranchos, pero después los perdí [con las invasiones indígenas]. Mi familia, que estaba tan acostumbrada a vivir bien y a gastar mucho dinero, empezó a desmoronarse y me echaron fuera cuando dejé de tener dinero. De modo que aquí estoy en estos cuartos, tratando de empezar de nuevo, pero se tiene que ver hacia adelante. No se puede cambiar el pasado».

A pesar de la actitud positiva de Delio, no me queda claro qué es lo que está empezando «en esos cuartos», una casa decrépita de adobe,

alquilada a un amigo, que se desmorona a nuestro alrededor mientras hablamos sentados. Aún más inexplicable: ¿Por qué compraría otro rancho? Desde su oficina en Villahermosa, Tabasco, Jorge Martínez —cuyas prominentes carótidas insinúan que ha peleado con coraje— explica por qué se sigue reinvirtiendo en tierra a lo largo de décadas de pérdida y por qué esa pérdida se siente a un nivel tan corporal. «Se trata de gente que se crió en ranchos, cuya vida ha sido toda en ranchos, que pensaba que iba a morir en ranchos, y ahora son expulsados y ya no les queda nada que hacer».

En el siglo XVII, los médicos suizos prescribían sanguijuelas, opio y un viaje a los Alpes como cura para los brotes de nostalgia que ponían en peligro la vida (Boym 2001). Muchos chiloneros intentan en cambio tomar como pasatiempo las tareas agrícolas. Estos hombres, casi todos mayores, semirretirados, fincan su anhelo de un pasado encantado en el presente manteniendo su vínculo con la tierra y el propósito en pequeñas parcelas en las que plantan café, verduras y árboles frutales. A diferencia de exterratenientes más jóvenes que todavía han de procurar por sus familias, estos hombres cultivan como una manera de mantenerse activos en la vejez. En realidad, muchos sostienen que, dada la inseguridad en la tenencia de la tierra y el clima de violencia política, la agricultura se ha de dejar a los viejos. Casi ningún terrateniente o exterrateniente de más de 40 años desea una vida de ranchero para sus hijos. Hermenegildo Vera, de 81 años, cuyo amor por la vida rural es tan intenso que se escabulló de un hospital días después de una cirugía de corazón para montar a caballo, irrumpe en un llanto de orgullo cuando me dice que todos sus hijos son profesionales: uno médico, otro veterinario y otro maestro. «Yo pasé toda mi vida a caballo», me dice, pero «la educación es la herencia mayor que puedo dejar a mis hijos». Ofelia Jiménez lo dice más sin rodeos cuando le pregunto si sus hijos seguirán siendo rancheros. «¡De ninguna manera!», exclama. «Cualquier cosa menos rancheros. Aun cuando solo sea maestro, cualquier cosa menos ranchero…. Es espantoso con todos estos indígenas ahora, hay demasiados riesgos. Es mejor ser comerciante».

La mayoría de los ladinos de Chilón han tenido en cuenta este mensaje. Unos cuantos, como Samuel Rodríguez Jr., han regresado a la producción

agropecuaria después de haber estudiado para veterinario o agrónomo la mayoría de las veces, pero incluso Samuel tiene sus dudas: «Hay muy pocos de nosotros que quieren continuar [de rancheros]. [Solo] mis primos y yo. Para aquellos de nosotros que crecieron en esta vida —teníamos tres años cuando empezamos a ir al rancho— es difícil dejarlo, pero otras personas lo han dejado o encontrado diferentes clases de trabajos. Muchos se van [de Chilón]…. El amor a la tierra no los atrapó. La mayoría también creció en sus ranchos pero los ven solo como lugares donde pasarlo bien…. No, yo no creo que Chilón se levantará de nuevo, por dos razones: Primero, ya no hay más propiedades. Ahora todas pertenecen a los ejidatarios. Y segundo, no queda nadie para trabajar los ranchos».

Otros, como Oscar Cruz, que no recibió una educación profesional, tienen ansias de poder regresar al trabajo agrícola: «[Después de la invasión] me sentí desilusionado…. No tenía estudios, ningún grado, nada que me respaldara. Desde entonces, he trabajado en pequeños empleos en diferentes oficinas del gobierno. Ahora me gano mi dinero enseñando música en el centro municipal de la comunidad».

El amigo de juventud de Samuel y Oscar, Juan Trujillo (el hijo más joven de don Roberto) es más típico de lo que son los chiloneros de veinte y treinta y pico de años. Después de estudiar para dentista en Oaxaca, regresó a Chilón para ejercer. Junto con Samuel, Juan dedica bastante energía a revivir la asociación de charros de Chilón, el rodeo, pero no tiene ningún deseo de ser un «productor». Al verme caminar de regreso de una entrevista con un exterrateniente desplazado por invasores de tierras, Juan dijo, haciéndose el payaso, «A mí también me afectaron las invasiones, y ahora no tengo dónde ir a divertirme».[3]

Hasta la tendencia de la generación joven a alejarse de la tierra confirma el valor de la producción para los chiloneros. Como lo indica Hermenegildo Vera, los viejos terratenientes sienten que el trabajo arduo y

[3] Terratenientes de todas las edades reflexionan sobre la pérdida de un lugar de diversión, y sus nostálgicos anhelos del pasado suelen evocar días de campo en la infancia, bañarse y nadar en los ríos y montar a caballo. Lo que es revelador en el caso de Juan es que su pérdida se refiere *exclusivamente* a haber perdido un lugar para divertirse.

el sacrificio les permitió transmitir un rico legado de educación y nuevas oportunidades a sus hijos, al contrario de la vida difícil e insegura que ellos tuvieron. Paco Vera, el hijo veterinario de Hermenegildo, declara que él sí ama la tierra, pero es pragmático acerca del futuro: «Los mestizos han abandonado el campo, ahora el campo pertenece a los indígenas». Para ambos, padre e hijo, la capacidad de Paco de encontrar un lugar para él en este nuevo contexto es el triunfo de la ética de la producción de su padre.

La producción, no obstante, no es solo materia de realización personal. Como ya lo he indicado, conecta también a los terratenientes con un pasado noble. Cuando los ladinos llegaron por primera vez a Chilón, a mediados del siglo XIX, me cuenta Miguel Utrilla tomando café, la región había perdido a la mayor parte de su población indígena y «estaba desocupada e improductiva». Los ladinos eran pobres, quizás «tenían una o dos mulas y trabajaban transportando café para las fincas de alemanes». Observaban a los alemanes, estudiaban sus métodos y finalmente, como Prometeo robando el fuego, unos cuantos ladinos «comenzaron a meterse en el bolsillo unos granos de café, llevándoselos para tratar de sembrar el fruto mágico». Con el tiempo, los ladinos aprendieron, lucharon por mejorar y fueron apoderándose del mercado del café de las fincas alemanas, que cada vez eran menos. No tardaron en hacer su aparición otros ladinos, comerciantes, mercaderes y profesionales que vendían bienes y servicios a las nuevas fincas. Pero acabaron sucumbiendo a la seducción de la producción finquera. En muchos aspectos, el relato de Utrilla de la colonización ladina es paralelo a muchos otros más académicos (capítulo 4), así como a la evidencia en los archivos, pero como cualquier narración histórica, se mueve en un terreno de omisión táctica.

A mediados del siglo XIX, Chilón no era exactamente, como es de suponer, una «enorme selva vacía… tan poco poblada que [los ladinos] tuvieron que traer mano de obra hasta del lejano Yucatán», como lo expresa Carlos Setzer, ni un lugar donde los ladinos podían «hacerse de tierra en medio de la nada en un lugar sin nadie», como insistía Alejandro Díaz. La evidencia en los archivos coloniales y en fuentes secundarias indica que Chilón, Bachajón y Yajalón estaban de hecho poblados tanto por indígenas residentes con profundas raíces en la región como por colonos indígenas

más recientes introducidos al lugar por frailes españoles en el siglo XVI. Combinadas, estas comunidades indígenas controlaban grandes extensiones de tierra que fueron tomadas por los ladinos en el siglo XIX.

Está claro, entonces, que la apropiación a gran escala de tierras por colonos ladinos no fue tan inofensiva como lo pretenden sus descendientes contemporáneos y las contradicciones de su posición son evidentes para muchos propietarios. Es difícil, por ejemplo, mantener la ficción de que en la región no vivían indígenas antes del siglo XIX, sobre todo cuando todos saben que las comunidades indígenas de Bachajón, Chilón y Yajalón incubaron un levantamiento dramático y muy estudiado en 1712, una rebelión que está viva en la memoria de los ladinos como un tiempo en el que corrió la sangre «con siete milímetros de profundidad por todo el piso de la iglesia» después de la masacre de la mayoría de la población ladina de Chilón durante un festival religioso.[4]

Cuando se confronta a los terratenientes con contradicciones como esta sale a relucir la verdadera raigambre de los mitos de su origen y su relación con los discursos contemporáneos de la producción. El mito del origen sin culpa de los terratenientes no consiste únicamente en la falta de disposición a hacer frente a una historia de apropiación, sino también en la articulación de lo que es una interpretación particular de lo que significa ocupar un territorio. No había indígenas en el lugar antes de que los ladinos llegaran, dicen ellos, porque los indígenas no ocupaban plenamente el territorio haciéndolo producir. Sus reclamos de tierras no tienen sentido porque ellos no la «usaban». Tanto si el uso de la tierra por los indígenas antes del siglo XIX fue tan ineficiente como los terratenientes afirman como si no, algo está claro: detrás de los intrincados significados de la producción «real» lo que hay es una simple fórmula. Para los terratenientes ladinos, la producción es «lo que nosotros hacemos» y los indígenas no, un encuadre para conocerse a uno mismo mediante la comparación con el Otro.

[4] Véase también Viqueira 1997, Gosner 1992, y el informe original «Informe sobre la sublevación de los Zendales» (1714), guardado en la Bancroft Library de la Universidad de Califormia, Berkeley (MS M-M 435).

La producción del Otro

A pesar del hecho de que, en muchos sentidos, la categoría monolítica de «terrateniente» o «finquero» se desintegra ante las complejas divisiones internas del grupo, la «producción» trasciende las diferencias sectoriales y las posiciones de clase, sirviendo como una amplia línea divisoria entre el indígena y el ladino. Por una parte, los terratenientes usan la producción para distinguirse de otros terratenientes, incluso compiten y entre ellos reclaman ser el productor más auténtico. Delio Ballinas, por ejemplo, que en cierto momento tenía siete propiedades, da un brinco para distanciarse de la etiqueta derogatoria de latifundista. «Ya no hay latifundistas, excepto algunos políticos que tienen miles de hectáreas. Nos cargan con la culpa de tomar la tierra a los indígenas, pero [los latifundistas] tienen miles de hectáreas… y tampoco hacen producir la tierra. La tienen solo para sus paseos. En Chiapas, solo alguien como Castellanos Domínguez [un antiguo gobernador] entraría en esta categoría».

Asimismo, terratenientes como Carlos Setzer, Miguel Utrilla y Roberto Trujillo, que comparten una conexión histórica con fincas cafetaleras definidas por su antigüedad y tamaño, no cuentan como productores a los ojos de muchos pequeños rancheros. Como uno de ellos me lo explicó, «Los rancheros viven del rancho… y trabajan la tierra con sus propias manos, mientras que los finqueros solo tienen un rancho y no invierten en él». Aunque esta noción sigue estando a debate y algunos terratenientes le dan la vuelta a la acusación de parasitismo.

Un hombre al que usualmente se identifica como finquero, un hombre conocido por ser muy trabajador y tremendo bebedor, habla con desdén de los rancheros ladinos a pequeña escala, y los llama perezosos, borrachines e improductivos. En efecto, la ropa de trabajo hecha harapos y grasienta de este finquero y sus enormes y agrietadas manos son prueba del entusiasmo con que emprende el trabajo físico de la labranza. Se presta también a confusión el que numerosos terratenientes coincidan en que la gente puede ser productora incluso si gana la mayor parte de su dinero en el comercio. «Por ejemplo, Carlos Setzer es un productor,» confirma Paco Vera, «aun

cuando la mayor parte de sus ingresos provienen de la compraventa de café de otros». Algunas veces estas fronteras borrosas pueden ser bastante cómicas. Un día un comerciante indiscutiblemente rico, me obsequia con historias de sacrificio y arduo trabajo en la finca de su familia, y culmina con el dicho favorito de los terratenientes: «Un ranchero vive pobre y muere rico». Aunque, mientras permanezco sentado en su sala de estar muy bien amueblada, me confronto con una copia enmarcada de otro dicho que cuelga en la pared detrás de mí: «Un comerciante vive rico y muere pobre».

En último término, pues, el hilo que ensarta las incongruencias del discurso de la producción que esgrimen los terratenientes es la idea de que la producción es algo que los ladinos hacen y los indígenas no. Así como mapea las diferencias de clase en el seno de la comunidad de los terratenientes, también marca una línea divisoria racial.

Mientras tomamos café después del desayuno en el pórtico rodeado de maleza de la casa grande reducida de Carlos Setzer, él explica: «Arón, es como la diferencia entre las abejas africanas y las abejas europeas. Las abejas europeas trabajan mucho, constantemente dedicadas a guardar comida para el invierno. Las abejas africanas, por otra parte, a causa del clima, no piensan en el futuro. Trabajan mucho, pero solo para el día. No producen para el futuro. Los indígenas son como las abejas africanas, no acumulan para ellas ni para el país».

Como descendiente de inmigrantes alemanes, Carlos Setzer ocupa una posición privilegiada en esta jerarquía *racializada* de la producción. Por otra parte, los terratenientes ladinos se ubican a ellos mismos en el incómodo punto medio entre el Otro indígena («que carece por completo de una cultura de producción») y los europeos «más chingones» (duros y capaces). Hasta el mito del origen ladino de Miguel Utrilla refleja esta angustia. Según Utrilla, la cultura de la producción no les llegó naturalmente a los ladinos de Chilón. Explica que el grano primigenio de café —robado junto con la lección de producción de los finqueros alemanes— transformó la naturaleza del trabajo ladino: «En lugar de trabajar la tierra [los primeros ladinos] sembraron para el consumo del hogar, hasta que obtuvieron las primeras plantitas de café. [Entonces fue cuando obtuvimos ese] sentido

del trabajo para cumplir con una responsabilidad. Yo no creo que sea algo que hasta los españoles tengan. Es algo que obtuvimos de ustedes [los europeos del norte]».

Según esta lógica, los rastros de sangre europea que corren por las venas de los ladinos les dieron al menos alguna posibilidad de desarrollar una «cultura de la producción». Los campesinos indígenas no la tuvieron en absoluto. A pesar de que era evidente la orientación sumamente comercial de la agricultura campesina y la influencia astronómica de negocios indígenas dinámicos en la región, los ladinos se aferraban a la idea inquebrantable de que los indígenas no pueden «producir». Miguel Utrilla prosigue: «Los indígenas tienen un estilo más contemplativo de trabajo. Es una característica racial. A causa de este estilo, los indígenas trabajan solo por necesidad, para comprar cosas que necesitan en el momento y después lo dejan. No hay un sentido de que necesitan cumplir la responsabilidad de trabajar».

Cuando pregunto a Utrilla por el incremento de comerciantes indígenas prósperos en Bachajón, lo cual parece ir en contra de su teoría del determinismo racial, él hace un alto en su narración interrumpida y trata de encontrar una explicación. Finalmente responde atribuyendo el éxito comercial de los indígenas a las ganancias fáciles del comercio de drogas más que al trabajo persistente: «Ahora en Bachajón se ven casonas y camionetas del año, pero ¿de dónde sacaron el capital original? Hay campos de marihuana y amapola en toda la zona». Si esto fuera verdad —y podría muy bien serlo a pequeña escala—, entonces el auge de las elites indígenas de los negocios correría paralelo al de la familia de Utrilla mucho más de lo que él estaría dispuesto a admitir. A pesar de las historias de producción y sacrificio, el capital original de los Utrilla manaba de la llave de una destilería de licores. Utrilla recuerda que el almacén de su abuelo en Yajalón era «modesto», pero tenía una excelente provisión de aguardiente, y recuerda que «los indígenas hacían fila para comprarlo cada sábado». Cuando más tarde intenté sondear esta contradicción a fondo, Utrilla se distanció y se volvió más formal, con señales de dar por finalizada una relación que había empezado con el entusiasmo compartido por la historia local.

En efecto, hurgar en las grietas y las contradicciones en el discurso de la producción fue una de las líneas más incendiarias de cuestionamiento que pude seguir, muchas veces produciendo reacciones más emocionales y estridentes que las preguntas burdas sobre la implicación de los terratenientes en la violencia agraria. En último término, creo que la razón de que esta imagen de los terratenientes como excepcionalmente productivos sea sacrosanta reside en el respaldo que brinda a tantas otras convicciones esenciales, desde el sentido que tienen los terratenientes de estar conectados con un pasado noble hasta su manera de entender la arquitectura del orden racial. Esa imagen era también central para su manera de entender el lugar que ocupaban en la nación y de su capacidad de utilizar esta posición para promover un apoyo económico y político determinante.

El cambio de piel del latifundio: los terratenientes y la nación

Después del triunfo de la Revolución mexicana, los chiloneros no solo tuvieron que hacer frente a nuevos desafíos al control que tenían sobre la tierra y el poder político, también tuvieron que hacer frente a su sorprendente caída en desgracia. En las décadas del liberalismo porfirista —edad dorada de la producción finquera que precedió a la Revolución— la agricultura finquera encajaba a la perfección en el proyecto nacional del desarrollo liberal. Aunque las elites de las empresas agrarias en los valles centrales de Chiapas hayan criticado las prácticas de labranza de los chiloneros por ser «[una] traba al desarrollo progresivo de la agricultura»,[5] esas críticas no significaban mucho más que «el narcisismo de la pequeña diferencia». La propiedad latifundista estaba todavía privilegiada y protegida, y el objetivo de las elites liberales no era destruir la agricultura de las grandes fincas sino mejorarla. No obstante, como secuela de la Revolución, los latifundios adquirieron un aura siniestra, cuando hasta las administraciones más contrarrevolucionarias ganaron el refrendo popular yuxtaponiéndose a la imagen de

[5] Gob. León a Porfirio Díaz, 20 de diciembre, 1898, en CGPD, rol 150/XXIII.

una aristocracia porfiriana latifundista y abusiva. En este contexto, las elites finqueras de Chilón se tuvieron que adaptar no solo defendiendo físicamente sus propiedades frente a las demandas de los campesinos, sino también reelaborando simbólicamente su lugar en las taxonomías nacionales de la propiedad. Medidos con el rasero del latifundio, los chiloneros se esforzaron por definir un nuevo lugar para ellos en el sector de la «pequeña propiedad», consagrada en la Constitución de 1917 como la categoría más privilegiada y deseada de tenencia de la tierra en la nación (Ibarra 1989:110).

Esta lucha simbólica tuvo lugar en varios frentes, pero el aumento de ranchos ganaderos, junto con las políticas nacionalistas de la industrialización por sustitución de importaciones que comenzaron en los años cuarenta, abrieron un nicho fortuito en el nuevo cuerpo social, un nuevo punto de apoyo en la lucha hegemónica constante entre los terratenientes, los campesinos indígenas y el estado. La producción de ganado no solo ofrecía a los finqueros una nueva base económica para la producción, sino que los rescataba de su innoble pasado y les daba un nuevo papel que desempeñar en el desarrollo nacional. Para los años ochenta, sin embargo, el nicho había empezado a estrecharse cuando los amplios cambios en la economía política de México daban una vez más un giro a la relación entre terratenientes, campesinos indígenas y estado. Hoy, a pesar de sus trampas manifiestamente irracionales y racistas, el discurso de la producción que tienen los terratenientes refleja en forma contundente su profunda captación de esos cambios.

Producir para la nación

> El abasto de carne ha sido una preocupación constante de todos los países del mundo, porque es la comida más básica y fundamental del ser humano, y en el México de hoy, el consumo de carne es tan bajo… que la producción se ha de quintuplicar si se quiere que [la carne]…llegue a todos los hogares del país.
>
> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *Enciclopedia Popular*, 1946

A lo largo de la mayor parte del periodo posrevolucionario, la política agraria nacional siguió un sistema de dos bandas, equilibrando el proyecto

económico —mediante el suministro adecuado de alimentos con el apoyo a los productores agropecuarios— y el proyecto político —reforzando el sector ejidal como una base política crucial (Fox 1994*a*). Con este fin, un estrato privilegiado de agricultores comerciales recibió una cantidad desproporcionada de apoyo económico dirigido a impulsar la producción, en tanto que el vasto sector campesino mexicano recibía subsidios y un trato favorable de las dependencias estatales, no porque pudiera producir alimentos para la nación sino para que se pudiera confiar en él en la producción de votos para el partido gobernante. Este sistema de dos bandas derivaba de las exigencias de otro reto de doble rostro que enfrentaba el régimen mexicano. Desde 1940, con la rápida emigración rural, la urbanización masiva y el auge de la industrialización que se había logrado con las políticas de sustitución de las importaciones, la política nacional alimentaria ha sido uno de los ámbitos más importantes de la política mexicana (Ochoa 2000, Fox 1993, Austin y Esteva 1987). La capacidad del PRI para mantener la legitimidad giraba fundamentalmente en torno a su capacidad de prender la vela fiscal en ambos extremos: subsidiando los salarios industriales y consiguiendo el apoyo de la nueva clase obrera urbana con comida barata, y a la vez, el suministro adecuado de alimentos y la paz rural por medio de subsidios agrarios y apoyos a los precios (Ochoa 2000).

Para dar de comer a la nueva población urbana de México se requería una reorientación masiva de la producción de los cereales básicos. El apoyo del Estado facilitó la industrialización y modernización rápidas respecto del trigo y el maíz, las tecnologías de la revolución verde se extendieron de su lugar de origen en el norte de México a lo largo de todo el país, y surgió una elaborada red de consejos paraestatales de mercadotecnia y vendedores de alimentos al por menor para abastecer a las ciudades. Mucho se ha escrito sobre la modernización productiva de los cereales básicos en los empeños de industrialización mexicanos (e.g., Hewitt de Alcátara 1978) así como sobre el papel que desempeñó la producción de ganado orientada a la exportación en el norte de México, en la generación de divisas para la industrialización de la sustitución de importaciones (e.g., Sanderson 1986), pero las trayectorias de la producción tropical de carne en México después

de la segunda guerra mundial hablan de otra dinámica. Alimentar a la pujante población urbana en México significaba granos básicos baratos, pero alimentar al México urbano en un estilo acorde con su nueva autoimagen moderna industrial significaba algo más. Significaba carne.

Como vimos en el capítulo 6, la nueva insistencia en la producción de reses para el mercado interno dio a los terratenientes en Chilón un acceso privilegiado a subsidios lucrativos y a apoyos políticos. De un modo menos tangible pero no menos importante, también ofreció a los terratenientes una manera de posicionarse como actores vitales en las construcciones posrevolucionarias de la nación mexicana. Por ello, aun cuando el café seguía desempeñando un papel central en las economías de las fincas, los chiloneros asumieron el papel de rancheros, cambiaron el traje blanco de los plantadores por jeans y botas, y a los cargadores indios por camionetas pickup. En su recreación como vaqueros, los ganaderos y finqueros dieron un paso firme y se incorporaron al panteón nacional, desprendiéndose de su conexión con los latifundios porfirianos. Los tiempos de siervos y amos, las tiendas de raya y las condiciones tipo esclavista no se podían negar, pero siempre podría decirse que existieron en un pasado remoto y en la finca de alguien más. Ahora los finqueros estaban produciendo y acumulando para la nación.

El neoliberalismo y la traición a la producción

A principios de los ochenta, el espacio político y económico de los terratenientes para demandar privilegios basados en su condición de productores comenzó a reducirse por razones relacionadas con los cambios a gran escala en las estrategias del desarrollo nacional. Con el inicio de la crisis de la deuda en 1982 y el subsecuente ascenso de los tecnócratas neoliberales, una severa restricción del crédito, la liberación del comercio, el desmantelamiento de los subsidios para insumos y los controles de los precios sumergieron al sector ganadero en una contracción masiva. Siete años más tarde, la reestructuración neoliberal combinada con un derrumbe sin precedentes de los precios internacionales del café agravaron las dificultades

de los finqueros, hundiendo al sector cafetalero en un descenso precipitado. A pesar de todo, sería francamente simple y economicista llegar a la conclusión de que la resignación de los terratenientes ante las invasiones de tierras de 1994-1998 fue solo una respuesta calculada a la crisis económica. En efecto, más que regodearse en el estancamiento e irse distanciando poco a poco de la agricultura en los años previos a 1994, los finqueros ladinos creyeron que estaban viviendo algo así como un renacimiento rural localmente específico. Sobre todo en el sector ganadero, parecía que los chiloneros habían encontrado la manera de virar de una ganadería extensiva políticamente inviable a la producción más intensiva de lácteos. Por tanto, no fue solo una lógica económica la que inhibió la buena disposición y capacidad de los terratenientes a defender sus propiedades frente a los invasores de tierras; la dinámica política provocada por el ascenso del neoliberalismo desempeñó un papel decisivo. Como los terratenientes siempre observan con rapidez, «La agricultura tiene muchos problemas y muchos riesgos. Si llueve demasiado o si no llueve. Si hay plagas en las plantas. Pero todo esto pasa. Solo la incertidumbre de la tenencia de la tierra se queda con nosotros para siempre».

El café, el ganado y la crisis en Chilón

Desde principios de los ochenta, los rancheros sufrieron la exagerada retirada de subsidios económicos como resultado de la reestructuración del apoyo estatal a la agricultura. El cambio más significativo en la relación de los rancheros con el Estado arranca de la privatización y el recorte de los servicios crediticios. Durante décadas, el sector ganadero gozó de acceso privilegiado a préstamos subsidiados a tasas de interés mucho más bajas que las del mercado abierto. La reestructuración en 1989 del banco de desarrollo nacional de México, el Banrural, dejó a la mayoría de los rancheros como no calificables para los créditos subsidiados y los obligó a buscar préstamos a tasas de interés mucho más altas en la banca privada. Al mismo tiempo, a principios de los noventa México empezó a importar carne de res de Estados Unidos. Como los aranceles mexicanos sobre las

exportaciones de reses de ese país se eliminaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, las importaciones han crecido continuamente (excepto por un breve respiro después de la devaluación del peso en 1995). Los rancheros en Chiapas, produciendo casi en exclusiva para el consumo interno, han visto desaparecer sus mercados tradicionales, saturados de carne de res menos cara (Chauvet 1999).

Asimismo, después de décadas de fuerte apoyo estatal, los recortes a finales de los ochenta golpearon a los productores de todos los tamaños (Hernández y Celis 1994). Combinada con cinco años de descensos históricos en el precio (1989-1993), la reestructuración del sector tuvo como consecuencia la descapitalización general y la regresión tecnológica en la industria. El desplome del café en 1989 devastó a los cafetaleros en Chilón. Carlos Setzer, uno de los mayores productores y comerciantes de la región, recuerda que cuando estalló la catástrofe, en 1989, él tenía 45 000 quintales de café, comprados a pequeños productores o producidos en su finca, almacenados en su bodega. Tuvo la esperanza de sacar casi 200 000 dólares netos después de pagar los préstamos sustanciales con los que lo adquiría y lo producía. En cambio, perdió miles. Antes de 1989, dice, «todos tenían créditos, pero era manejable, los pagabas en la temporada de la cosecha». Como muchos otros productores, después de la crisis, Setzer peleó por mantenerse a flote consiguiendo más y más crédito de varias fuentes, incluidos algunos en dólares de una empresa alemana importadora de café. Cuando conocí a Setzer en 1998, él acababa de renunciar a la casa familiar en Tuxtla Gutiérrez y estaba rematando un almacén de café con instalaciones para el procesamiento que había adquirido en tiempos mejores.

A pesar de esta fuerte descripción colectiva de la crisis, el trabajo de campo me dio una importante lección sobre la dependencia de las tendencias económicas a gran escala en contexto. Desde el comienzo de mi trabajo de campo, los terratenientes insistieron en que sus prospectivas económicas estaban mejorando antes de 1994. Al principio, yo descarté esta insistencia como nostalgia, o más probablemente como un intento de hacer que la pérdida de las tierras pareciera peor de lo que era. Sin embargo, poco a poco empecé a tomar en cuenta la posibilidad de que tuvieran

razón. Desde el punto de vista de las grandes narrativas sobre el desarrollo neoliberal, los terratenientes no podían haber tenido muchas razones objetivas para creer en la posibilidad de un renacimiento agrícola antes de 1994, pero estaba claro que sí las tuvieron.

En 1990, después de una década de producción ganadera en caída, la AGL revivió con optimismo una tradición, largo tiempo en letargo, de celebrar una exposición anual ganadera en Chilón. La feria, que tuvo lugar de 1990 a 1993, celebraba una tendencia creciente de intensificación en el uso de tecnología en los ranchos de la región. Eran cinco o seis importantes productores los que encabezaban ese movimiento, aplicando la inseminación artificial, programas de crianza cuidadosa, gestión más intensiva de la tierra, y mejoramiento de los pastizales; y siguieron otros. Manadas en estado lamentable de ganado criollo y cebú fueron sustituidas gradualmente por vacas lecheras europeas importadas en el norte de México. La Esperanza, el rancho de la familia Rodríguez sito justo a la salida de la ciudad de Chilón, incluso se había ganado fama nacional por sus programas de crianza y por sus vacas suizas color café que habían sido premiadas. Estos cambios no habían alterado en efecto la índole sobre todo extensiva de la producción de ganado en Chilón: para 1993, solo 11 % del ganado del municipio estaba gestionado semiintensivamente (a partir de casi cero en los años anteriores) y las vacas de la mayoría de los ranchos lecheros daban menos de cuatro litros de leche por día.[6] Menos de la mitad de los rancheros llevaba la contabilidad de sus ingresos y gastos, y la rentabilidad del ganado todavía estaba estrechamente correlacionada con la cantidad de tierra disponible para pastura (Vera 1998). No obstante, por medio de un proceso de innovación e imitación, la ganadería en Chilón estaba pasando por una transformación intermitente.

Cuatro factores específicos del contexto potenciaron esta intensificación improbable en una época de crisis. En primer lugar, la propia crisis condujo la intensificación. Desde los años cincuenta, el ganado y el café habían formado dos mitades de un apareamiento complementario: el

[6] Gobierno del Estado, «Diagnóstico Municipal 1993», en AHPL.

ganado constituía una fuente de liquidez todo el año y el café ofrecía una bonanza anual (que con frecuencia se reinvertía en ganado). La producción ganadera estabilizaba eficazmente los ciclos anuales necesitados de fondos por los cafetaleros y ayudaba a mantener los ingresos de los terratenientes durante los ciclos de auge y caída a largo plazo del café.[7] De este modo, ante el catastrófico descenso de los precios en 1989, los terratenientes volvieron a pensar en la empresa ganadera de baja intensidad, canalizando el dinero (procedente normalmente del comercio y de trabajos profesionales) a sus rebaños.

En segundo lugar, en 1992, la corporación Nestlé, respondiendo a una solicitud de los rancheros, abrió un centro recolector de leche en Chilón, proporcionando a los productores un mercado garantizado, créditos a corto plazo y asistencia técnica. La expansión de Nestlé en la región, aunque todavía a escala minúscula, fue para los rancheros un motivo de esperanza y para 1994 ya habían intensificado la producción para suministrar al nuevo sitio de recogida 1 600 litros de leche al día (además de los 500-700 litros ya vendidos a queserías locales).[8]

En tercer lugar, a principios de los noventa, el gobierno puso a disposición de los terratenientes nuevos créditos subsidiados en un intento de rescatar la fallida industria ganadera del país.[9]

Por último y tal vez lo más importante, después de cinco años de pérdidas y de acumular deudas, en 1994 los terratenientes también tuvieron motivos de optimismo respecto de sus cosechas de café. Desde la víspera del alzamiento zapatista hasta el verano y otoño de 1994, cuando los terratenientes tenían que decidir cómo responder a las invasiones, los precios se dispararon inesperadamente. Determinado por las limitaciones coordinadas a la exportación en todo el mundo (1993) y la aparición de una plaga en

[7] Es curioso que las publicaciones de estudios agrarios hayan tenido mucho que decir acerca de la línea divisoria terrateniente-comerciante, pero el capital comercial desempeñaba un gran papel en la economía integral de los ladinos. Efraín Vera explicó: «Ahora mismo soy comerciante porque el café va mal. Cuando el café va bien, paga nuestro inventario aquí en la tienda. Cuando el café va mal, la tienda paga por el rancho».

[8] «Informe del Secretario», 18 de julio, 2001, en AGL.

[9] Gobierno del Estado, «Diagnóstico Municipal 1993».

el café en Brasil (1994), el precio mundial casi se cuadruplicó entre enero y julio de 1994. Cuando los terratenientes lidiaban para responder a las invasiones de tierras, este repunte espectacular dejaba entrever la posibilidad de quedar libres de deudas. «Si hubiéramos podido cosechar aquel año…», gimió años más tarde Wenceslao López. Algunos propietarios llegaron a acuerdos con invasores complacientes, ofreciéndoles derechos incuestionables a la tierra de la finca a cambio del permiso de recoger la última cosecha de bonanza. Pero en la mayoría de los casos, los campesinos indígenas recogieron la imprevista cosecha de 1994.

En suma, si bien es ir demasiado lejos decir que las elites finqueras en Chilón evitaron los embates de la crisis agrícola, no todos fueron devastados por igual. Aunque los terratenientes respondieron a las invasiones con desesperación y resignación casi al unísono, sus prospectivas económicas variaron mucho. Al menos en algunos casos, las señales de recuperación —los precios del café al alza, el ganado conquistando premios y la inversión multinacional— irradian un resplandor sobre la visión que tenían las elites finqueras del futuro.

En el caos y la inseguridad posteriores a 1994, los valores de la tierra cayeron en picada en Chilón, la cartera vencida creció astronómicamente, la producción de leche y carne de res se hundió, Nestlé cerró su centro de recogida, y los productores desesperados buscaban otras fuentes de ingresos. Pero solo la referencia a la crisis no alcanza para dar cuenta de la diversidad y complejidad de los factores que subyacen en la resignación de los terratenientes. Sus esperanzas de un renacimiento se estamparon contras las duras realidades políticas del activismo indígena intensificado y de un Estado neoliberal al que ya no le interesaban los «productores».

La política y el terrateniente en la era neoliberal

Después de la irrupción de las invasiones en febrero de 1994, los chiloneros corrieron a Tuxtla Gutiérrez con la expectativa de recibir socorro inmediato de sus antiguos aliados en el estado. Lo que encontraron a cambio

los persigue hasta el día de hoy. La primera estación de Wenceslao López en Tuxtla fue la oficina del procurador agrario estatal. «Estábamos allí a las ocho de la mañana, pero nos hicieron esperar como mendigos en la acera hasta las tres de la tarde. Cuando por fin estábamos dentro de la oficina, vimos a los invasores y sus líderes sentados en una fila al lado del escritorio del funcionario. En cuanto entramos, el funcionario pidió disculpas para hacer una llamada telefónica. Cuando el funcionario estaba al teléfono, el líder se puso en pie y se sentó sobre el escritorio del funcionario, levantó los pies y los puso sobre la silla. El líder dijo a uno de los otros que le diera un cigarrillo, y justo en ese momento pensé para mí que allí no íbamos a conseguir nada».

¿Qué es lo que dio a los líderes indígenas no solo un lugar a la mesa, sino un lugar a sus pies *sobre* la mesa en el Chiapas posterior a 1994?

México, como la mayor parte del mundo, ha pasado por una amplia reestructuración económica y política siguiendo lineamientos neoliberales en los últimos 20 años.[10] Desde 1988, cuando los esfuerzos para implantar la rápida liberalización ortodoxa del mercado, la privatización, la austeridad fiscal y los recortes en los programas sociales ordenados por el entonces presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) terminaron casi en una calamidad para el PRI, la reestructuración neoliberal ha sido heterodoxa y no convencional. Carlos Salinas, que sucedió a De la Madrid, reorientó rápidamente la política gubernamental hacia una combinación de reestructuración neoliberal y programas sociales motivados políticamente. Remontándose a las formulaciones del siglo XIX del liberalismo mexicano, Salinas apodó a esta plataforma «liberalismo social». Durante el sexenio de Salinas, el liberalismo social demostró ser un marco eficaz para simultáneamente difundir el malestar social, reconstruir el apoyo al PRI e implementar una ola masiva de liberalización y privatización que afectó a casi cada sector de la

[10] Para panoramas generales de la reestructuración neoliberal en México, véanse Otero 2004, 1996, Middlebrook y Zepeda 2003, Dussel Peters 2000, Cook, Middlebrook y Molinar 1994, Lustig 1992. Sobre neoliberalismo en el México rural, véase Cornelius y Myhre 1998, De Janvry et al. 1997, Randall 1996, Grammont y Tejera 1996. Sobre Chiapas, véase Nash 2001, Garcia y Villafuerte 1998, Harvey 1998.

economía mexicana.[11] El buque insignia de la empresa del liberalismo social, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), derramó millones de dólares en proyectos de autoayuda localmente definidos por todos los rincones del país.[12] Nacido para «reparar la red de seguridad social hecha jirones… heredada de la crisis económica y de las medidas de austeridad del periodo 1982-1988» (Dresser 1994:4), el PRONASOL fue tanto una continuación de la inveterada política de patrocinio en México como algo muy diferente. Centralmente, el PRONASOL representaba un importante paso para alejarse de la mediación jerárquica del corporativismo anidada sectorialmente, y orientarse hacia una mediación directa entre las comunidades individuales y el presidente (Dresser 1994).[13] Más importante aún es que el PRONASOL y su programa asociado, PROCAMPO, Programa de Apoyos Directos al Campo, articularon una nueva visión del campo:[14] las políti-

[11] Sobre liberalismo social, véase Soederberg 2001, Centeno 1997, Cornelius, Craig y Fox 1994. Mucha de la investigación se ha centrado en el liberalismo social como un instrumento de legitimación del régimen. Al constatar la eficacia con la que el renovado compromiso de Salinas con los programas sociales difundió la disidencia y logró victorias electorales al PRI (Dresser 1994, Cornelius, Craig y Fox 1994, Santín 2001), algunos estudiosos han reducido el liberalismo social a su esencia instrumentalista. En un texto de 2001, por ejemplo, Soederberg califica al liberalismo social de «superficial» y de «artilugio». Si bien es difícil contradecir su defensa de que el liberalismo social fue diseñado explícitamente para reforzar el apoyo al presidente y paliar la propagación de las desigualdades resultado de las reformas orientadas al mercado, no es sensato analizar este complejo ensamblaje de relaciones de poder solo en términos de sus efectos imprevistos. Mi interpretación del régimen estatal hace hincapié en la necesidad de estudiar sus resultados imprevistos. Todas las técnicas y lógicas del régimen enmarcan los problemas sociales y sus soluciones de maneras particulares al servicio de intereses específicos. No obstante, estos encuadres siempre tienen una vida más amplia que trasciende las intenciones y los intereses que se movilizan para concebirlos

[12] Sobre PRONASOL, véase Dresser 1991, Pastor y Wise 1997, Cornelius, Craig y Fox 1994.

[13] Para una excepción a la regla de que el PRONASOL socavó a las organizaciones corporativistas, véase Fox 1994*b*.

[14] PROCAMPO, lanzado en 1993 como un complemento enfocado a lo rural del PRONASOL, suministró pagos directos de prestaciones a pequeños productores de maíz y otros cultivos tradicionales para compensar los efectos negativos de la liberalización del comercio. Como programa para entregar pagos directos a los productores más que apoyos a los precios u otros subsidios que distorsionan el comercio, PROCAMPO fue diseñado para dar a la agricultura mexicana apoyos más en consonancia con las reglas de la OMC. PROCAMPO no ha recibido tanta atención académica como PRONASOL, pero véase Klepeis y Vance 2003, Sadoulet et al. 2001, Pastor y Wise 1997.

cas liberales sociales habían dado un viraje radical al apoyar la producción agrícola, alejándola de los sectores tradicionales (i.e., maíz, café y ganado) y promocionando exportaciones no tradicionales (e.g., melón, mango y nuez de macadamia) y la dependencia de alimentos importados. En este contexto, los productores tradicionales como los campesinos indígenas de Chilón recibieron apoyo estatal solo en forma de programas políticamente necesarios de *asistencia social* como PROCAMPO, concebido para comprar calma en el campo en plena devastación por la reestructuración neoliberal. Los terratenientes de Chilón —ni campesinos (aptos para el apoyo de asistencia social) ni parte de la casta privilegiada de los productores de agricultura de exportación no tradicional, a quienes favorecían las políticas neoliberales— se encontraron sin un lugar claro en el desarrollo nacional y cada vez más excluidos del apoyo estatal. Ellos experimentaban esta marginación como una traición indudable a la «producción». En palabras de Samuel Rodríguez Sr., «Al gobierno ya no le interesa la producción, le interesa la política».

Son muchos los trabajos que relatan los efectos de la reestructuración neoliberal en el campesinado de Chiapas (e.g., Collier 2005, Nash 2001, N. Harvey 1998), pero solo el politólogo Richard Snyder (2001) ha abordado sistemáticamente la construcción de alto nivel del neoliberalismo en Chiapas y sus efectos en la oligarquía chiapaneca tradicional con tierras. Snyder rastrea la destrucción del sistema «capitalista de compadres» en Chiapas, en el que los funcionarios del estado protegían a las elites locales cafetaleras y ganaderas. Como concluye Snyder, esta destrucción fue resultado directo del ascenso de los tecnócratas neoliberales en el gobierno federal y estatal, y de la militancia creciente de los movimientos sociales campesinos confrontados a la reestructuración neoliberal del campo. Snyder indica que las elites hacendadas sirvieron de corderos de sacrificio útiles cuando estas dos corrientes resolvieron sus diferencias y formaron una incómoda alianza.

Snyder empieza su historia en 1988 con la elección del gobernador Patrocinio González Blanco, un nativo de Chiapas que pasó casi toda su vida en los altos círculos de la elite tecnocrática de la Ciudad de México y era amigo cercano de Carlos Salinas. Después de ocupar varios puestos

importantes, incluida la dirección de Banamex (cuando era el banco nacional), González regresó a Chiapas como gobernador con el objetivo de «reconciliar una estrategia económica [neoliberal] que beneficiaba a un restringido segmento de la población con el imperativo de movilizar apoyo político y preservar la estabilidad con el fin de mantener el dinamismo de su trayectoria política» (Snyder 2001:203). En último término, este imperativo contradictorio constituiría su sentencia de muerte política así como la lógica que había detrás de la inmolación de los intereses de los hacendados.

Como gobernador, González promocionó una agenda económica neoliberal en Chiapas, facilitó la expansión de agroindustrias transnacionales de gran escala en el Soconusco, impulsó nuevos productos de exportación, como flores, melones y nueces de macadamia, y fomentó el turismo como uno de los nuevos pilares de la economía del estado. A la vez, aunque cultivando un clima de inversión favorable, también trabajó para brindar al sector campesino un amortiguador (mínimo) contra los peores impactos de la reestructuración neoliberal. El maíz, sustento vital de los campesinos, fue descartado como «el cultivo del fracaso» (*apud* Snyder 2001:209), pero los más pobres de Chiapas *podían* ser incorporados como agricultores por contrato, jornaleros y asistentes en hoteles en la «nueva economía» del estado. Estos esfuerzos por incluir a los campesinos en el proyecto neoliberal tuvieron resultados desalentadores, concluye Snyder, pero, lo más importante para nuestros fines, tampoco produjeron grandes beneficios a las elites agrarias, pese a la retórica de González a favor del terrateniente.

En 1992, Carlos Salinas nombró a González secretario de Gobernación y al hijo predilecto de Chilón, Elmar Setzer, gobernador interino. Elmar Setzer (hermano de Carlos Setzer) había llegado más lejos y más alto en la política nacional que cualquier miembro anterior de la elite terrateniente de Chilón, y los chiloneros no le quitaron los ojos de encima cuando tomó posesión del cargo. A corto plazo, esperaban los chiloneros, Setzer restauraría el apoyo tan merecido a la producción de café y al ganado, y a largo plazo podría representar los intereses de los chiloneros a un nivel incluso superior. Roberto Trujillo explicaba que, como jefe de la poderosa Secretaría de Gobernación, González era presidenciable y, en consecuencia,

su confederado Setzer «podría llegar algún día a una Secretaría, quizás incluso a la Secretaría de Agricultura». Durante su breve periodo en el puesto, Setzer inició un programa fallido para canalizar los beneficios de la reestructuración económica del sector cafetalero hacia la tradicional oligarquía terrateniente, pero el levantamiento zapatista extinguió con carácter decisivo tanto las carreras de González y de Setzer como las esperanzas de los chiloneros de un retorno a la «producción». A meses del alzamiento, ambos políticos renunciaron tras un escándalo (a pesar de que ellos habían advertido a Salinas del peligro de una ofensiva guerrillera en el sur de México). Para el verano de 1994 estaba claro que las carreras de González y Setzer no iban a ser las únicas víctimas del alzamiento zapatista. Ante las extendidas invasiones y el malestar rural, los cafetaleros y ganaderos pusieron la tierra necesaria para restaurar la calma en el campo. «Tal vez Setzer hubiera actuado con mano dura contra los invasores, pero el nuevo tipo…», Roberto Trujillo musitó, «¡nada!»

En los años que siguieron a 1994, la estrategia de doble banda del liberalismo social prendió incluso más fuerte. Por una parte, el conflicto aumentó el flujo de dinero a Chiapas con la intención de comprar la paz rural. Estos proyectos, como el Programa de Desarrollo Agrícola en el norte de Chiapas y Chilón, que luchaba para asegurar la autosuficiencia alimentaria por medio del cultivo de maíz, frijol y animales de corral (gobernador Ruiz Ferro citado en *La Jornada*, 20 de septiembre, 1997), apuntaban a la menguante producción campesina, pero pocas veces incluían a los grandes finqueros en sus beneficios. Por otra parte, los sucesivos gobernadores lidiaron para forjar una nueva economía para el estado que no estaba basada ni en los «cultivos del fracaso» campesinos ni en el capitalismo de compadrazgo de los terratenientes. El Fondo Chiapas, por ejemplo, inaugurado en 1994 y respaldado por una lista de miembros conocidos de la elite financiera e industrial mexicana más poderosa, canalizó la inversión al turismo del estado, la madera y las industrias de bioprospección (Pólito Barrios 2000). El magnate hotelero con sede en Cancún Enrique Molina, uno de los proveedores del Fondo Chiapas, expresó la voluntad que tenían esos gestores del poder neoliberal: «El conflicto de Chiapas se ha venido

configurando cada vez más como un obstáculo al despegue del proyecto económico mexicano… por lo cual los empresarios e inversionistas han decidido participar en el Fondo Chiapas, y actuar conjuntamente con el gobierno federal y local para oponer el desarrollo a la inestabilidad y beligerancia» (*apud* Pólito Barrios 2000:66). Aunque el Fondo Chiapas puede que no haya cumplido con las expectativas,[15] la caída en desgracia de los terratenientes fue total. Al ya no ser fuerzas de la producción, representan simplemente otra contribución a la inestabilidad y la beligerancia profundamente arraigadas de Chiapas, y ya no son motores sino obstáculos del desarrollo nacional.

La explicación de la traición a la producción

Para los terratenientes de Chilón, el reto que planteaban estos importantes cambios en la política chiapaneca no consistía en entender las modificaciones en las alianzas de clase y otras cuestiones abstractas de ciencia política, sino en lidiar con la traición inmediata a la producción puesto que esa traición se infiltraba en todos los aspectos de la vida. Vistas a través de la lente de la producción, las prácticas agrícolas que los indígenas introdujeron en las antiguas fincas parecían irracionales. El paisaje de quema y roza de milpas campesinas tenía toda la apariencia de un terreno baldío vacío. Más extraño aún, después de tomar las propiedades de los ladinos, se decía que los indígenas invasores de tierras habían destruido la sustancia misma de la producción. Ruperto Monterrosa no era el único ladino que no podía entender por qué los invasores destruían el equipo que encontraban en las tierras que invadían.

Los propietarios de tierras podían clasificar fácilmente la conducta de los indígenas con viejos argumentos raciales acerca de «las culturas de la producción», pero las acciones del gobierno posteriores a 1994, aunque

[15] Para 2004, el Fondo Chiapas había generado solo cinco proyectos y solo 7 millones de dólares en inversiones directas (aunque ayudó a atraer inversiones adicionales externas a sus proyectos). Solo dos de sus cinco proyectos están ubicados en realidad en zonas que vivieron el conflicto sostenido en el periodo 1994-2000 (www.fondochiapas.org.mx/proyectos.html).

estaban claramente relacionadas con la política de pacificación, eran más difíciles de precisar. «El sistema ya no quiere la agricultura progresista», sostenía Eulalio Hernández. «Si la quisiera, nos hubiera protegido a nosotros, la gente que *realmente produce*». Carlos Cañas se lamentaba, «Ya no hay ningún apoyo para mejorar la producción. Cualquier programa gubernamental de producción que existe es solo para calmar a los campesinos». Como es natural, en los relatos de los terratenientes, la perspectiva de la asistencia social politizada del estado se articulaba con la desidia inherente a los indígenas: «En cuanto los indígenas reciben su cheque [del gobierno], hacen cola para comprar Maseca [harina de maíz preparada] en vez de producirla ellos mismos». Con esta desafortunada combinación de paternalismo estatal y de indolencia indígena, el abandono general del proyecto de la producción nacional y de la autosuficiencia alimentaria estaba completo. Para los terratenientes, el estado había optado por la política por encima de la producción, y la erosión de la seguridad y del apoyo representaba el daño colateral de esta decisión tan peregrina.

Mientras los terratenientes se esforzaban por entender las razones que había detrás de este viraje aparentemente insensato de la política estatal que la alejaba de los «verdaderos productores», muchos de ellos se decantaron por teorías de la conspiración para explicar lo incomprensible. Estupefacientes y reservas minerales estratégicas poblaban esas historias y estos productos servían como símbolos de la transición de una economía agrícola basada en productos tradicionales (café y ganado) a una nueva economía neoliberal. Carlos Setzer, por ejemplo, empezó con tenebrosos «intereses financieros internacionales» y las reservas ricas en petróleo y uranio de Chiapas: «Claro que Ruiz [el obispo radical católico de San Cristóbal] está aliado con intereses financieros internacionales. Juntos provocaron el levantamiento zapatista para desestabilizar Chiapas lo suficiente como para que quisiera separarse de México. Cuando fuera un pequeño país autónomo, los derechos minerales no pertenecerían a México y sería mucho más fácil para los extranjeros llegar y llevárselos».

Más adelante cambió su historia, por supuesto: «En realidad otro factor es que los narcotraficantes necesitaban un punto intermedio entre

Colombia y los Estados Unidos para que sus aviones repostaran combustible, y la selva Lacandona era el lugar perfecto. Sabe, una vez un avión llevó rápidamente a Raúl Salinas de Tuxtla a la selva. ¿De qué se trataba? Y en otra ocasión un avión se estrelló en la selva y adivine de quién era. De la hermana del pelón [Carlos Salinas]. Ahora, usted ponga el resto».

Los dos cabos de la historia de Setzer desplegaban elementos de la trama comunes a toda la cultura popular mexicana, incluido el espectro del imperialismo y la colaboración de alto nivel entre funcionarios federales y narcotraficantes. Pero al poner en relieve el viraje de la «verdadera» producción a los intereses tenebrosos de actores internacionales, Setzer captaba algo crucial de la reestructuración neoliberal de México, pero en un sentido que tiene importantes consecuencias: en su intento de explicar el conflicto de 1994 sin admitir su propio involucramiento en él ni reconocer que podría ser que él no fuera tan importante para la nación como productor, Setzer pintaba el conflicto como algo más amplio que lo rebasaba, algo que estaba muy fuera de su control. Esta sensación de que era demasiado grande ese conflicto, cuyos orígenes verdaderos era demasiado difícil entender o controlar, resonaba en muchas de las discusiones de los chiloneros en sus respuestas a las invasiones. «Antes de los noventa *hubiéramos* defendido nuestra tierra», me dijo Paco Vera. «En 1994, el conflicto era demasiado grande…. No defendimos nuestra tierra… porque… el conflicto era más grande que nosotros».

En suma, después de 1994, el nuevo imaginario de desarrollo nacional posicionó a los terratenientes en la nación de nuevas formas. Los cambios en la política estatal significaron que el apoyo a la territorialidad del terrateniente en el que había podido confiar ya no era inminente. Se trataba de algo más que de una interrupción táctica. Transversales al complejo ámbito de la producción, estos cambios dejaron a los propietarios de tierras tambaleándose en busca de nuevas formas de posicionarse en la nación y profundamente convencidos de que el conflicto no era manejable y que la resistencia estaba condenada al fracaso. Las nuevas interpretaciones de los terratenientes de sus relaciones con sus vecinos indígenas reforzaron su deriva hacia la impasibilidad y la resignación.

9. Geografías del miedo, espacios de la resignación

Los hombres tenían el aspecto demacrado por proteger una superficie demasiado extensa.

Bruce Chatwin, *En la Patagonia*

No se puede entender las geografías imaginativas como las… proyecciones totalmente congruentes de sujetos omniscientes. Es necesario encontrar maneras de interrogar el inconsciente y de explorar las múltiples espacialidades inscritas en el interior del imaginario geográfico; estas inclusiones crearon aperturas analíticas para las contradicciones que están contenidas en el interior de (con frecuencia contenidas por) las constelaciones dominantes del poder, el conocimiento y la geografía.

Derek Gregory, «Imaginative Geographies»

En 1848, durante un levantamiento indígena abortado, 30 familias ladinas huyeron de Chilón a la relativa seguridad de Palenque. En un poema escrito más tarde ese mismo año, el terrateniente José Mariano Arévalo se burlaba de los que habían huido:

…pobrecitos los ladinos
que por temor de los *indios*,

van cargando sus niñitos
llorando por los caminos…[1]

Al menospreciar los miedos de los refugiados, Arévalo expresaba uno de los ejes de la incertidumbre en la identidad del terrateniente: la tensión entre una imagen muy sedimentada de ellos mismos como titulares de la autoridad paterna y la intrepidez machista, y una conciencia, igualmente afianzada, de existir como una pequeña minoría racial rodeada y rebasada en número por una población indígena cada vez más numerosa y con frecuencia hostil. Este sentido ontológico de asedio fue un imaginario geográfico del miedo que, en tensión con otras fuerzas y otros imaginarios, determinó los cálculos que hicieron los terratenientes sobre los riesgos de actuar con violencia. El imaginario del miedo de los terratenientes —siempre presente pero en general controlado y domesticado— adquirió un papel formativo después de 1994.

Las geografías imaginativas, tal como yo las concibo, no son mapas mentales ni percepciones ambientales, sino la maraña concreta del conocimiento (representaciones del espacio) y el poder (Gregory 1995, Said 1978). Es decir, el uso que yo hago de los imaginarios geográficos pone de relieve las conexiones dialécticas entre la representación del espacio y los mecanismos de la hegemonía. En las particulares circunstancias en que se encontraban los terratenientes, sus intentos de ubicar al Otro salvaje en una red que fuera legible geográficamente, más que reducir a los indígenas a una docilidad humilde ante su poder, les produjeron miedo, incertidumbre y contradicciones.

Las conexiones entre la explotación capitalista de las fincas y el terror del subalterno son intuitivamente obvias y están a la vez muy estudiadas (Gordillo 2002*b*, Edelman 1994, Taussig 1986, 1980). Tal vez sea menos obvio que los agentes relativamente poderosos de la explotación capitalista pueden también experimentar el miedo colectivo de aquellos a los que dominan, pero el fenómeno no ha pasado inadvertido (Stoler 1995*a*, Orlove

[1] *Colección de poesías de J. M. Arévalo desde 1846 hasta el presente* (1872). Fotocopia en posesión de Alí Reyes.

1994, Taussig 1984). Esta experiencia colectiva del miedo está profundamente arraigada en la producción de espacio. El miedo de los chiloneros a la violencia indígena después de 1994 surgió de representaciones históricas particulares de la geografía y a su vez desempeñó un papel clave en la recreación de los espacios de la producción finquera.[2]

Por más de un siglo, los miedos de los terratenientes al «salvajismo» indígena —miedos que reflejaban configuraciones particulares del espacio y que estaban inscritos físicamente en el espacio— formaron parte de la experiencia que tenían del mundo y que se daba por supuesta. Este malestar habitual adquirió nuevas formas y significados y autorizó diferentes prácticas a medida que iban cambiando las condiciones históricas, pero estaba siempre presente en la vida de los propietarios de tierras. Durante la mayor parte del siglo XX, las relaciones sociales paternalistas en las fincas —entendidas como formas de conocer y controlar a los trabajadores indígenas— crearon espacios físicos y mentales para sentirse a salvo en un mundo de indios hostiles. Para los terratenientes, las muestras indígenas de respeto eran pruebas encarnadas de la existencia de estos espacios de inmunidad. Por ello, el fin del respeto de los indígenas, como lo percibieron los terratenientes después de 1994, representó una transgresión determinante de los espacios de intimidad e inmunidad de la geografía finquera. Después de 1994, esta geografía del peligro irradiaba desde la ciudad indígena de Bachajón a los caminos que los terratenientes utilizaban para ir a sus fincas y se extendía hasta el interior de las comunidades de trabajadores en otro tiempo leales y llegó a penetrar en los propios cuerpos de los terratenientes. En último término, esta geografía del peligro determinó la previsión de los terratenientes respecto de los costos y beneficios de resistir al conflicto agrario por medio de una doble articulación: primero, en el contexto de apoyo estatal menguante, el miedo determinó los cálculos de los propietarios sobre la viabilidad económica de la agricultura finquera; y segundo, el

[2] Este capítulo también agrega un nivel de profundidad geográfica y de matiz a los debates en antropología en torno al papel formativo de la violencia y el terror en la remodelación de las mismas relaciones sociales de las que provienen (Nordstrom 1997, Nordstrom y Robben 19956, Nordstrom y Martin 1992, Feldman 1991).

miedo determinó los patrones y las trayectorias del cambio generacional en Chilón. Juntas, parece imposible y sin sentido que estas articulaciones entre el miedo, la crisis económica y el cambio generacional produjeran respuestas violentas a las invasiones de tierras.

Construcciones del salvajismo indígena

> No se mira atrás en el tiempo, sino hacia abajo y a través de él como en el agua. A veces sale a la superficie esto, a veces aquello, a veces nada. Nada desaparece.
>
> MARGARET ATWOOD, *Ojo de gato*

Cerca de las afueras de Chilón, en una construcción tosca de adobe a la orilla del río Chanoa, Ofelia Jiménez despacha una pequeña tienda de abarrotes. Hija del terrateniente y político Isidro Jiménez, doña Ofelia se mantenía estrechamente conectada con Las Delicias, la finca familiar, hasta que los invasores la tomaron en 1994. Hoy su tienda, con su reserva de velas, jabón, tejidos y alimentos básicos, abastece principalmente a campesinos indígenas, y en ocasiones incluso a las mismas personas que ahora labran la tierra de la familia. Mientras conversamos, el esposo de doña Ofelia atiende a los clientes en tseltal. Saluda a cada uno con una combinación de familiaridad y distancia, riendo y bromeando, pero sin desprenderse de un gesto de condescendencia y desaprobación. Los campesinos dan rodeos y sonríen cabizbajos, con ojos que revolotean entre la autodevaluación y el odio. Son enemigos íntimos, se han ido acomodando a la presencia unos de otros, pero siempre alertas, siempre precavidos.

En las palabras de doña Ofelia resuena también esta tensión. Ella se refiere a los invasores como *la indiada,*[3] un apelativo anticuado que evoca sublevaciones de los siglos XVIII y XIX, y que amontona a los indígenas en una masa indistinguible y abiertamente amenazante. Pero doña Ofelia también expresa que los invasores eran trabajadores residentes, descendientes

[3] Término despectivo para referirse los indígenas en su totalidad.

de sus compañeros de juego en la infancia, familias ligadas a la familia Jiménez por décadas de servicio y lazos de compadrazgo.

Aaron: ¿A qué organización pertenecían los invasores?
Ofelia: Bueno, realmente no sé… era la indiada.
Aaron: ¿Pero usted los conocía? ¿De dónde eran?
Ofelia: Era la misma gente que trabajaba en el rancho desde hacía años, tenían sus milpas en el rancho. Era buena gente. Se quitaban el sombrero para dejarnos pasar [cuando caminábamos por ahí], pero después se volvieron agresivos. Antes eran amables, tenían respeto por el patrón, le pedían un terreno para sus milpas y él se lo daba porque ellos le servían. Después ellos cambiaron.
Aaron: ¿En qué cambiaron?
Ofelia: Tenía que ser que cambiaran, porque mi hermano les dio el mismo trato que mi padre les había dado, todos los mismos beneficios. Ahora no hay respeto.
Aaron: ¿Cómo muestran su falta de respeto?
Ofelia: Es su actitud, cómo [nos] alzan la voz. Nos apuntan con las armas.

Para doña Ofelia, esta transformación de unos indígenas respetuosos a la indiada amenazando con armas fue repentina y culminó en el momento de la invasión. Como la mayoría de los chiloneros, ella creía, hasta el momento mismo en que la noticia de la invasión le llegó por medio de un trabajador todavía fiel, que esas invasiones les sucedían a otros, a gente que no tenía buenas relaciones con «sus indios». Un punto de vista histórico ya inveterado contradice en cada uno de sus aspectos este principio cardinal del discurso ladino. Los cambios *fueron* repentinos —los terrenos del respeto y la autoridad paternal cedieron de manera aterradora y sísmica en 1994— pero fue el lento corrimiento de las placas tectónicas a lo largo de los años lo que hizo posible el cataclismo. No obstante, yo me tomo en serio esa experiencia subjetiva de estar cegado por el cambio rápido e incomprensible. Si queremos entender esta experiencia del vuelco radical de un mundo, hemos de explorar primero las categorías y prácticas mediante las que se construyó el mundo del «viejo» orden.

Un pueblo de lo menos bautizado

«Usted ha escuchado decir 'los bachajontecos son asesinos natos', ¿verdad? Pues bien, es cierto», dice el hombre, sacudiendo la cabeza para enfatizar los horrores que conjuran sus palabras. Yo *había* escuchado el dicho. Los dichos y las historias sobre la naturaleza violenta de los tseltales de Bachajón circulan ampliamente en la región. Una vez don Roberto bromeaba, «Si hubiera esgrima olímpico con machetes, los bachajontecos ganarían. Tienen tanta práctica que pueden cortar una cabeza de un tajo. A veces hasta pueden hacerla volar en el aire».

De modo que el comentario de este hombre no fue ninguna sorpresa. Lo que me llamó la atención es que esta vez la historia la contaba un sacerdote jesuita que residía en Bachajón y era un incansable paladín de los indígenas en sus luchas contra los ladinos. A diferencia de don Roberto, cuya manera de volver exótica la violencia de los bachajontecos acentúa la línea que divide a los ladinos civilizados de los indígenas bárbaros, el jesuita convertía su manera de entender la violencia de los indígenas en una lección de resistencia a la injusticia. «Como los bachajontecos son tan feroces», prosiguió, «los finqueros de Chilón solo lograron establecer sus fincas alrededor de los bordes del ejido; no pudieron quitarles la tierra del todo».

El cacique político tseltal Manuel Jiménez Navarro también evocaba imágenes del supuesto salvajismo de los bachajontecos, esta vez para conectar las movilizaciones contemporáneas con una tradición guerrera primigenia: «Para poder entender las luchas aquí en Chilón hoy, habría que empezar hace quinientos años, cuando esto era territorio maya», comenzó, deslizándose hasta el borde de la silla.

> En aquel tiempo, aquí había dos grupos de indígenas, los Rojos y los Blancos. Los nombres no eran por el color del cuerpo, eran simplemente los nombres que tenían. Pero los Rojos y los Blancos empezaron a pelear porque los Rojos se comían a los hijos de los Blancos cuando los capturaban. Y así no podían vivir, perdiendo niños todo el tiempo. Entonces fue cuando Bachajón recibió su nombre, antes de esto se llamaba Muk'ulum, «Ciudad grande». [Pero entonces]

> la gente dijo, «¡Vamos a pelear, vamos a pelear!» y la otra gente dijo, «¿Quién soy yo? ¿Es que no soy hombre? ¡Cómo puedo dejar de pelear!» Y de ahí viene el nombre de Bachajón: «¿Quién soy yo?» «¿Machajón?», que es lo que decían antes de la pelea en tseltal. Cuando llegaron los españoles lo cambiaron a Bachajón.

En Chilón, como lo indican estos ejemplos, la violencia inculcada de los bachajontecos es una idea que se da por sabida y que articula y determina múltiples proyectos políticos, en un vaivén en el mar de la historia. Se puede rastrear uno de los hilos de este discurso —las construcciones históricas hechas por los ladinos del salvajismo indígena— observando la importancia que tienen en los altibajos de las construcciones del yo y el Otro de los ladinos con los cambios en las condiciones sociales, políticas y económicas.

Una tarde en 2001, don Roberto y yo estábamos pasando el tiempo tomando café y discutiendo los rumores de un posible intento de los campesinos indígenas de expulsar a la fuerza a los ladinos de la ciudad de Sitalá. Nuestra conversación acabó desviándose a Chilón, donde a pesar del fuerte dominio de los ladinos en la autoridad municipal, también ellos habían enfrentado temores recurrentes de ser expulsados por los indígenas. Todavía a finales de los setenta, los indígenas expulsaron a los ladinos de numerosas ciudades, incluida Bachajón. Durante ese periodo, los ladinos en todo el centro-norte de Chiapas pasaron muchas noches haciendo guardias armadas contra un posible ataque. En cierto momento de su relato sobre ese periodo dominado por el miedo, don Roberto me miró con gravedad a través de la neblina de humo del tabaco: «Hasta hubo una época cuando los indígenas llegaron y masacraron a todos los chiloneros mestizos en la iglesia. Dicen que había hasta siete milímetros de sangre por todo el piso de la iglesia». Atónito, logré pronunciar una pregunta, «¿Cuándo fue esto?» Nunca en mi investigación hasta ese momento me había topado con un evento como este en los años setenta. Don Roberto aclaró, «Oh, eso fue allá por los años 1770, o más o menos por entonces».

De hecho, el año fue 1712, durante la fiesta de la Santísima Trinidad, cuando cientos de tseltales enfurecidos bajaron a Chilón y mataron a la mayoría de sus residentes no indígenas. Los relatos coloniales de la masacre —uno de los primeros incidentes de un levantamiento más general que se llegó a difundir por todo el centro-norte de Chiapas (Viqueira 1997, Gosner 1992)— describen la escena en un lenguaje árido y casi clínico.[4] No obstante, para finales del siglo XIX los ladinos habían transformado los sucesos en un melodrama sangriento. Escribiendo en las secuelas de la guerra de castas que inflamó Chiapas en 1868, Vicente Pineda (1888:6) se valió de la masacre de 1712 para ilustrar gráficamente su llamamiento a civilizar a la población indígena de Chiapas y evitar para siempre los disturbios, los males irreparables y los horrores bárbaros que acompañan a las guerras de castas. Pineda, cuyo sobrino Alberto iba a encabezar las violentas campañas de los terratenientes contra las comunidades indígenas durante la Revolución, ofreció un relato vívido de aquel día adornado con sangre y patetismo: madres que imploran infructuosamente por la vida de sus hijos y devotos que mueren aferrándose al altar antes de que los tseltales se entreguen al saqueo y la bebida.

Con las colonias de ladinos en la región aumentando la presión respecto de las tierras comunales de Bachajón, la ciudad figura también en los relatos escritos por viajeros extranjeros, incluidos John Stephens en los años 1830 (1996 [1843]) y Franz Blom en los años 1920 (Blom y La Farge 1926-1927). Estos relatos brindan pruebas de que ya a mediados del siglo XIX circulaban historias de la naturaleza violenta de los bachajontecos por todo el centro-norte de Chiapas. Ni Stephens ni Blom pasaron mucho tiempo en Bachajón y aun así se formaron opiniones extraordinariamente firmes sobre el carácter de la ciudad y de su gente. Por tanto, aunque sin disponer de pruebas, sospecho que estos dos autores extranjeros formaron en buena medida sus imágenes de Bachajón en sus conversaciones con ladinos en Ocosingo, antes de atravesar la ciudad, o mientras descansaban después de haberla cruzado con los pocos «hombres blancos inteligentes»

[4] «Informe sobre la sublevación de los Zendales» (1714), depositado en la Bancroft Library de la Universidad de California, Berkeley (MS M-M 435).

de Chilón. Estas memorias y ejemplos literarios se ofrecen, pues, como sustituto de las construcciones hechas por los ladinos del «bachajonteco».

Aunque John Stephens debe de haber experimentado numerosos momentos horripilantes durante su caminata por algunos de los más remotos paisajes de la Mesoamérica del siglo XIX, él hace especial hincapié en el «notorio mal carácter» de los indios entre Ocosingo y Chilón. Después de una marcha de siete horas desde Ocosingo, Stephens y su compañía (que «no tenía Dragones ni mosqueteros… en los que pudiéramos confiar») entraron intranquilos en Bachajón:

> A las tres de la tarde, desplazándonos en dirección norte-noroeste, entramos en el pueblo de [Bachajón], emplazado en una ubicación abierta, rodeado de montañas, y poblado enteramente por indios, más rústicos y salvajes que cualquiera de los que ya habíamos visto. Los hombres no llevaban sombrero, solo el pelo negro y largo hasta los hombros; y los hombres y las mujeres ancianos con facciones duras y macilentas y ojos oscuros que daban vueltas, tenían aspecto de no estar bautizados. No nos saludaron y su mirada agreste pero fija nos hizo sentir un poco nerviosos…. Tuvimos algunos recelos y cuando dejamos atrás el pueblo, nos sentimos encerrados en tierra de indios salvajes. Nos detuvimos una hora cerca de un arroyo y a las seis y media llegamos a Chilón donde, para nuestra sorpresa y placer, encontramos a un subprefecto, un hombre blanco e inteligente que había viajado a San Salvador y conocía al General Morazán. (Stephens 1996:221-222)

Unos 80 años después, Franz Blom y sus compañeros, caminando en dirección opuesta, también fueron reacios a apartarse de las zonas civilizadas de Chilón. En un desenlace incierto en el volumen I del informe de la expedición, Blom contempla el viaje que tenían por delante: «Nos resistíamos a dejar a nuestro amigable anfitrión [en Chilón]… Delante de nosotros se extendían montañas, valles, ríos y senderos difíciles. El camino llevaba justo a través del país de los Bachajón, temidos por la mayoría de los mexicanos en estas partes del mundo» (Blom y La Farge 1926-1927, I:237).

Cuando el grupo llegó finalmente al infame pueblo, Blom, el experimentado explorador y estudioso de Chiapas, informó que los indios de

Bachajón eran «con mucho los indios menos gratos con los que hemos tenido que tratar. Son borrachos, vengativos y asesinos. Los asesinatos, usualmente estallidos repentinos de alguna enemistad largamente incubada, son a veces tan horribles y brutales que uno pensaría que los ha cometido una persona anormal o degenerada» (Blom y La Farge 1926-1927, 2:329). No obstante, al final, Blom, que pasó más tiempo observando y fotografiando a los bachajontecos que el itinerante Stephens, desarrolla una impresión más matizada del carácter de la ciudad. Blom concluye que a pesar de sus estallidos asesinos y el mal trato a los viajeros, los bachajontecos «no son un pueblo cruel» (Blom y La Farge 1926-1927, 2:330) e incluso empieza a contextualizar sus actitudes a la luz del rudo trato que recibían de los ladinos. A pesar de todo, los relatos de Blom y Stephens comparten un elemento importante. Ambos ponen de relieve su evocación del miedo ubicando el salvajismo de los bachajontecos en una red espacial. Bachajón sirve de barrera física entre civilización y barbarie, un espacio por el que los ladinos deben pasar físicamente para llegar al resto de Chiapas y mentalmente para mantener su dominio.

Reformar a los indios, domeñar el terror

Para los años sesenta, el breve recorrido de *Horizontes* (una publicación periódica regional escrita y publicada por jóvenes comerciantes y terratenientes ladinos, incluido Miguel Utrilla) es muestra de la otra corriente del discurso ladino sobre el salvajismo indígena. Enfocada una vez más en los bachajontecos, esta corriente surgió de un lugar muy diferente a su predecesora; no del miedo sino del espacio relajado y confiado de la autoridad paterna. Juntando elementos del indigenismo mexicano con la soltura que muestran los que están acostumbrados a tratar con subordinados, los reportes de *Horizontes* sobre Bachajón exotizan a los bachajontecos y simultáneamente expresan una preocupación paternal por la violencia de los indígenas. Descripciones de cuerpos decapitados, órganos arrancados de cuerpos vivos y misteriosos homicidios múltiples en Bachajón salpican las páginas de *Horizontes* pero, a diferencia de Stephens y Blom, a estos

autores les preocupa poco su propia seguridad. Vinculada a la brujería, los odios intestinos y el alcoholismo generalizado, la violencia en Bachajón se construía fuera del reino del interés inmediato de los ladinos: una patología que era nativa de Bachajón y que estaba contenida en la ciudad.[5] En su mayor parte, a pesar de unas cuantas afirmaciones sobre crímenes sanguinarios, la violencia en «los ejidos sin leyes» estaba representada casi siempre como algo lamentable, evocando la pregunta: ¿Qué hemos de hacer *nosotros* para salvar a nuestros campesinos de ellos mismos? Los jesuitas de la misión en Bachajón eran los principales aliados de los ladinos en este empeño por disciplinar a los toscos bachajontecos.[6]

En un número especial de *Horizontes* que celebraba el décimo aniversario de la misión jesuita en 1969, Miguel Utrilla y el equipo de la publicación elogiaban a los jesuitas por su noble trabajo de «elevar a los indígenas» mediante la transformación de la conciencia que los apartaba de «las tinieblas del inmenso olvido»: «Como bien sabemos, Bachajón solía ser una de esas poblaciones que permanecen en el olvido, hogar de solo la pobreza y el rencor atávico entre los aborígenes…. Los esfuerzos [de los misioneros], no obstante, han cambiado en gran parte las actitudes de los humildes habitantes indígenas de esta región» (*Horizontes*, 10 de marzo, 1969).

Una fotografía del padre Mardonio Morales y un campesino sonriente en la primera plana ilustraban este cambio. El pie de foto decía: «El jesuita atiende a un campesino nativo de Bachajón quien, con su ropa blanca y sombrero y sonrisa confiada, es prueba irrefutable de una raza saludable que se dirige con firmeza camino al progreso». Los bachajontecos no estaban todavía en el camino al progreso, pero al menos, bajo la benevolente guía de los jesuitas, estaban encaminados en la dirección correcta. A diferencia de aquellos agresivos bachajontecos de la leyenda, el hombre en esta foto lleva sombrero gracias a los esfuerzos de los jesuitas. Mediante la

[5] La única excepción fueron los ataques de *Horizontes* a los comerciantes ladinos de bebidas alcohólicas en Bachajón. La redacción del periódico hacía responsables a estos comerciantes de avivar la anarquía en la ciudad.

[6] *Horizontes*, 28 de junio, 1964, p. 7; 3 de mayo, 1967, p. 10; 8 de noviembre, 1968, p. 3.

alfabetización, las bibliotecas, las cooperativas de café y el estudio de la Biblia, los ladinos pensaban que los jesuitas suavizarían las toscas aristas de los bachajontecos. En cierto sentido, pues, lo que expresan los textos en *Horizontes* sobre la misión de los jesuitas es una transferencia de las cargas paternas de los patrones a los padres jesuitas. En un lenguaje que refleja la creciente influencia de la ideología indigenista, Utrilla y sus colegas presentan la misión como una fuerza modernizadora, que transforma a sujetos indígenas en ciudadanos responsables, despojándolos de su herencia «sin bautizar» y violenta, tratando de incorporarlos a la vida de la nación.[7]

En 1969, los jesuitas de Bachajón podrían haber suscrito este punto de vista, aunque haciendo más hincapié en la fe cristiana; pero comenzaron a surgir cambios irrevocables en la teología de la misión. Fray Mardonio Morales marca el año de 1971 —dos años después de la celebración del décimo aniversario de la misión— como el momento decisivo en su trabajo. Como vimos en el capítulo 6, en 1971, bajo la influencia de la teología de la liberación y con el apoyo de una diócesis cada vez más progresista, los jesuitas comenzaron a capacitar a maestros indígenas laicos, los catequistas, que iban a difundir el activismo político así como el Evangelio por toda la región. Atendiendo explícitamente a las preocupaciones de los trabajadores con servidumbre por deudas en las fincas, los jesuitas tradujeron el Derecho Agrario mexicano al tseltal y varios años más tarde, los representantes indígenas del municipio de Chilón desempeñaron un importante papel en la organización del fundamental Congreso Indígena de 1974, en el que los tseltales afiliados a la misión denunciaron enérgicamente el trato abusivo que recibían de los propietarios, la explotación y la expropiación de tierras indígenas.

Lo que *Horizontes* pregonaba el 10 de marzo de 1969 como «el milagro de los jesuitas en la selva» no tardó en tomar un cariz definitivamente siniestro en la mente de los seguidores ladinos. Los empeños de los jesuitas, junto con el perfil mutante de la política mexicana, hicieron bastante más que transformar la conciencia de los indígenas, también desafiaron las

[7] El 28 de junio, 1964, *Horizontes* da la bienvenida al Instituto Nacional Indigenista por sus esfuerzos para incorporar a «los indios a nuestra civilización».

fronteras defendidas con tanto esmero de las relaciones sociales finqueras, y sacudieron la confianza de los ladinos en el poder del paternalismo para contener el conflicto agrario. Durante los últimos años de los setenta, el miedo de los ladinos aumentó hasta proporciones febriles. Alimentado por los incidentes de expulsión sistemática de los ladinos de las poblaciones vecinas y enardecidos por el malestar campesino en casa, los ladinos comenzaron a temer ataques inminentes tanto en Chilón como en Yajalón. Los cables del telégrafo que conectaban Chilón con Tuxtla Gutiérrez sonaron la alarma: «Por carecer de Policía competente para evitar desórdenes suplico a Ud. concederme una partida de seguridad pública» y «Petición carácter urgente de intervención militar en esta localidad».[8] Como recordaba José López Arévalo, «Hubo expulsiones de ladinos en Petalcingo y Bachajón. Recuerdo que los habitantes de Yajalón estaban aterrorizados y pusieron guardias por toda la ciudad. Era una fortaleza armada y tenías que dar la contraseña para que te dejaran entrar en las casas. Todos estaban refugiados dentro con armas. La gente pensaba que la guerra étnica era inevitable».

Finalmente, ni Chilón ni Yajalón fueron atacados a finales de los setenta y principios de los ochenta, pero como vimos en el capítulo 6, estas luchas, y las formas que tuvo el Estado mexicano de responder a ellas, instalaron el escenario para la eventual desaparición de la producción finquera en 1994. En los setenta y ochenta, militantes indígenas sacudieron a los ladinos hasta la médula al invadir no solo sus tierras, sino también su mente y su sentido de la seguridad. Para muchos observadores, la imagen de ladinos fuertemente armados haciendo guardia en las entradas a la ciudad y a la puerta de sus casas confirmaban la concepción de los terratenientes como potentes y violentos. Pero la escena podría también ser entendida como prueba de la continua capacidad desplegada por la población indígena para producir «acordes de terror exótico… en el parloteo de la noche selvática» (Taussig 1984:491). Sin embargo, lo más importante es que los sobresaltos de fines de los setenta y los ochenta trajeron cambios materiales

[8] Presidente Municipal de Chilón a Gobernador Salomón González Blanco, 16 de enero, 1978 (telegrama), y Presidente Municipal de Chilón al Gobernador Patrocinio González, 25 de marzo, 1980 (telegrama), ambos en AMCH.

en la vida de los terratenientes. En particular, la creciente inseguridad en el campo instó a muchos propietarios a trasladarse a la relativa seguridad de las ciudades. De este modo, los miedos de los terratenientes determinaron a su modo las trayectorias del cambio económico y de la reelaboración de los espacios de la producción agraria en Chilón, iniciando la retirada gradual de la producción agrícola que se intensificaría después de 1994, cuando los acordes del terror exótico sonaron ominosamente una vez más.

El respeto y los espacios seguros

A pesar de los peligrosos espíritus que han atormentado la imaginación de los chiloneros, la mayoría se las arregló para prosperar y dominar tanto sus miedos como a «sus indios». Como hemos visto, asesinatos, linchamientos, quemas de viviendas y golpizas desempeñaron papeles clave en el mantenimiento de la hegemonía de los terratenientes. Esgrimiendo autoridad política y legal junto con armamento cada vez más sofisticado, los ladinos defendieron sus poblaciones, casas y fincas contra los ataques de los indígenas. En caso necesario, cabildearon, y con frecuencia obtuvieron el apoyo estatal a sus métodos de mano dura. Pero la hegemonía también operaba a través de las prácticas más sutiles de las relaciones sociales finqueras. Por medio del ritual de entrega de regalos, la renegociación de la deuda, el castigo corporal, el aislamiento espacial, los incentivos económicos, el alcohol, las fiestas de bautizo y la protección mutua en tiempos de conflicto, terratenientes y campesinos forjaron formas de conocimiento y de subjetividad mediante las que los ladinos ejercían su dominación. Las relaciones sociales en las fincas constituyeron a patrones soberanos y a peones dóciles como sujetos mutuamente inteligibles y vinculados por lazos de una reciprocidad asimétrica. Estas relaciones estrechas no solo apuntalaron la economía de la agricultura finquera sino que también construyeron una zona de seguridad material y simbólica para los terratenientes.

Las interpretaciones que tenían los terratenientes del respeto acordado a ellos por los indígenas son centrales tanto para las construcciones como para las transgresiones de esa zona cognitiva de seguridad. Para los

propietarios, la práctica del respeto —arrastrar los pies, los ojos bajos, los tonos sumisos y las expresiones de gratitud por la generosidad del amo— significaba la primera manifestación externa del orden natural del universo, la confirmación y a la vez la declaración de las relaciones sociales propiamente dichas.

En la novela de Fausto Trujillo *El sacrificio de Isac*, Agar, una anciana indígena, da voz a la nostalgia ladina de ese orden natural en un discurso apasionado a su patrón:

> Antes, en los oficios religiosos, rezábamos en voz alta para que el Señor cuidara al patrón, le diera fuerza, salud y prosperidad, porque de ellas depende la nuestra…. Mientras al patrón le fue bien, nosotros éramos felices; pobres pero felices; teníamos trabajo, comida, nuestra ropita y hasta para alguna fiestecita…. usted es un patrón muy bueno y de eso tenemos que agradecerle a Dios todos los días. Nos da usted las tierras buenas para la milpa; nos da usted trabajo; nos cuida usted cuando estamos enfermos, o nos lleva al hospital; nos adelanta usted dinero cuando tenemos necesidad y… Nosotros, ¿qué le damos nosotros? Nuestras preocupaciones no van más allá de darles de comer a nuestros tres hijos; usted en cambio, tiene que preocuparse de las veinte familias que dependemos de este rancho.

Este pasaje es una fantasía, pero una fantasía que por generaciones fue un marco coherente —la díada de patrón y peón, padre e hijo— para los ladinos y hasta cierto punto para sus trabajadores indígenas para poder entenderse los unos a los otros. De acuerdo con este marco de referencia, los terratenientes cargaban en hombros el peso de proporcionar tierras, manutención y seguridad a sus indios. Como decía Delio Ballinas en tono de queja, «Tener peones implicaba mucha responsabilidad. Si se enfermaban tenías que llevarlos al doctor y pagar las medicinas. Cuando una mujer se embarazaba, que parecía que era como unas dos veces al año, más gastos médicos».

A cambio, los terratenientes recibían el respeto que se les debía: los peones agradecidos (como la Agar de Trujillo en la ficción) actuaban de hecho su subordinación arrastrando los pies, bajando la mirada, quitándose

el sombrero y entregando regalos rituales de productos colocados en la puerta de entrada del amo. Ellos eran la «buena gente», recordaba con agrado Ofelia Jiménez, los que «se quitaban el sombrero a nuestro paso».

Los campesinos leales también proveían literalmente de seguridad al amo, como recuerda Fausto de su infancia: «Los indígenas vigilaban el cuerpo del patrón y sus pertenencias». Y en Chilón circulan profusamente historias de amos salvados de la violencia por campesinos leales que son «evidencia» fundamental de las buenas relaciones entre los ladinos y sus vecinos indígenas. La hermana de Fausto, Eugenia, dice que su «padre siempre los trató bien. Nunca los trató con mano dura o usando malas palabras. Cuando necesitaba que hicieran algo, se lo pedía con amabilidad. De modo que los trabajadores lo protegían a él y nos protegían a todos nosotros porque éramos sus hijos…. Ellos le advertían si había rumores de que iba a haber problemas. Le decían que no saliera del rancho ese día porque algo malo podía suceder». Durante mi estancia en Chilón, vi este sistema de alerta temprana en acción cuando los antiguos residentes de la finca de Benjamín Trujillo fueron caminando a la ciudad para alertar a don Roberto de la posible invasión de su rancho.

De los campesinos leales no solo se esperaba que avisaran a su patrón de un conflicto inminente sino incluso que repelieran a los invasores. Ya en 1933, en documentos de la reforma agraria se constataba que los trabajadores finqueros en Chilón «defienden [la tierra del propietario] como si fuera suya»,[9] y los campesinos leales fueron golpeados o amenazados cuando defendieron propiedades durante las invasiones de 1994-1998. En consecuencia, uno de los aspectos más perturbadores de las invasiones de 1994 para los propietarios fue el extendido fracaso de ese sistema en el que se confiaba. En las historias de los ladinos, el que los campesinos leales no advirtieran a sus amos del peligro y que no respetaran su propiedad son signos que marcan la diferencia entre los problemas actuales y los conflictos anteriores. En las invasiones de los años ochenta, explicaba Carlos Cañas, muchos invasores provenían de otras fincas y hasta aquellos

[9] «Proyecto de dictamen sobre dotación de ejidos al pueblo Sitalá del Municipio de Chilón», 20 de junio, 1933, en RAN-TG, expedientes de Ejido de Sitalá.

campesinos que osaban invadir su propio lugar de trabajo «seguían teniendo aún algo de respeto por los dueños de las propiedades. No se acercaban a ningún lugar próximo al casco [el centro de la finca donde se ubicaba la casa del propietario]. Se quedaban respetuosamente en los márgenes. [Pero] en los noventa, atacaron el propio casco, expulsando al dueño y destruyendo sus bienes».

De hecho, ninguna pregunta llevó a los terratenientes a más rodeos mentales que la de por qué, después de 1994, los trabajadores supuestamente leales traicionaron a sus benefactores. Cuando Eugenia Trujillo elogió la larga conexión de los trabajadores con su familia, le pregunté si conocía a alguno de los invasores y si había hablado con ellos de por qué habían invadido la propiedad de su familia, «Sí», respondió, «y me dijeron que fueron obligados a hacerlo por agitadores de Bachajón; que si no tomaban parte en la invasión, iban a perder sus propias tierras. Les dije que nadie podía hacerles esto porque ellos tenían todos sus papeles en orden. Pero ellos pensaron que no les quedaba de otra».

Eugenia Trujillo tomó esta traición sin inmutarse, en buena medida porque gran parte de la agresión de sus trabajadores estuvo dirigida a su vecino Carlos Setzer y no a ella. Otro antiguo terrateniente era menos optimista:

Terrateniente: Vemos todavía [a los invasores aquí en la ciudad] y cuando los veo quiero estrangularlos. Algunos actúan como si nada hubiera pasado y dicen, «Buenos días, don —», pero es muy difícil olvidar lo que nos hicieron. A veces hasta vienen a la farmacia por medicinas y les digo, «No lo tenemos», aunque sí lo tengamos.

Bobrow-Strain: Parece como si fueran personas a las que conocía bien.

Terrateniente: Algunos eran hasta mis ahijados, y siguen viniendo a la casa diciendo, «Buenas, padrino», como si nada hubiera pasado, pero no puedo olvidar lo que hicieron.

Fausto Trujillo cuenta una historia que para él cristaliza el giro trágico del respeto a la agresión: en algún momento, a principios de los años noventa, él asistió a una fiesta organizada por trabajadores finqueros. En

el transcurso de una noche de bebida y baile se quitó la chaqueta y la dejó a un lado. Cuando la fiesta empezó a decaer, la buscó y no la encontraba. Alguien se la había llevado. «Esto nunca hubiera pasado antes», se lamentaba. «Los indígenas vigilaban el cuerpo del patrón y sus pertenencias». Antes, dijo, después de haber ido a una fiesta como invitado de honor, «una larga procesión de trabajadores indígenas me llevaron a casa con antorchas para asegurarse de que llegara bien. La noche en que me robaron la chaqueta, tuve que encontrar mi propio camino a casa en la oscuridad. Son cambios sutiles como este lo que he notado.... Poco a poco, la distancia entre nosotros fue creciendo hasta que finalmente, en 1994, nosotros [los ladinos] éramos el enemigo».

Conversación tras conversación, los ladinos reflexionaban sobre la pérdida del respeto: los indígenas ya no piden a los ladinos que actúen como padrinos, ya no confían en los registros informales de deudas y salarios de los patrones. La antigua intimidad fundada en la desigualdad se ha resquebrajado. Ofelia Jiménez decía quejumbrosa: «Ahora ellos creen que son iguales y quieren ser los dueños de la tierra y de la ciudad.... Ahora hay indígenas que conozco que entran en la ciudad y ni siquiera me hablan».

Al margen de cómo los propietarios tratan de explicar y racionalizar la conducta de los invasores de tierras, en el fondo se dan cuenta de que las antiguas suposiciones sobre la naturaleza de los indígenas ya no se sostienen. Y siempre que los indígenas se liberan de los marcos de conocimiento que los doman y domestican, el espectro del salvajismo acecha. Y el peligro no era simplemente la pérdida de la chaqueta favorita. La repentina aniquilación del respeto posterior a 1994 representó más que un giro en el orden social; significó el desmoronamiento violento de la territorialidad rentista: «Antes, la gente era humilde, tenía respeto», se lamentaba Gabino Vera, caricaturizando la postura campesina inclinando la cabeza y arrastrando los pies. «Ahora van por ahí amenazando a la gente con sus machetes».

¿Cómo determinó este giro manifiesto de peones familiares dóciles a una turba incomprensible y agresiva, la respuesta de los ladinos al conflicto agrario? ¿Cómo determinó el miedo el perfil de la resignación?

Las generaciones del miedo, las economías del terror: La producción del cambio agrario en Chilón

La población tseltal de Bachajón siempre había separado a Chilón del resto del estado, simbólicamente y a veces físicamente, limitando el paso de los terratenientes por la región. Después de 1994, esta geografía del peligro rebasó las fronteras de Bachajón y penetró en los espacios privados de los caminos principales, las fincas y las casas de los terratenientes.

El calvario de un terrateniente

Wenceslao López recordaba febrero de 1994 como un tiempo de espera, un tiempo de observación, mientras una por una las propiedades de sus amigos sucumbían a los invasores. López recordaba la noche que pasó con un rifle y una pistola en su regazo escuchando los sonidos de invasores merodeando por sus pastizales mientras celebraban la ocupación de un rancho vecino. Cuando finalmente llegaron a la propiedad de López, su esposa, Deyanira, estaba lavando la ropa. Ella prosiguió la historia:

> Yo estaba sola en el rancho, con solo un chamaco [sirviente]. Él vio que los invasores se acercaban y vino corriendo, gritando, «Nana, nana, ¡vienen los invasores!» Aquella mañana yo había estado lavando ropa. Abajo del cerro vi que los invasores habían levantado una especie de bandera blanca y una señal que decía algo así como «No hay paso. Este rancho está invadido y el gobierno nos apoyará». Algo así que transmitía la idea de que el rancho ya era de ellos. Mi esposo llegó de vuelta de Yajalón como a las diez u once [de la mañana] y caminó hacia la casa, seguido de todos ellos con sus rifles y machetes. Y dijo, «¿Por qué no entran y hablamos?», y ellos dijeron «No, tenemos este papel que muestra que el rancho es nuestro, hemos tomado el rancho».

Más adelante aquella semana, López regresó al rancho con una escolta de trabajadores leales armados con machetes, con la esperanza de rescatar ganado y equipo. Cuando se acercaban al rancho, dice Wenceslao, el hijo de otro trabajador leal les advirtió que estaban cayendo en una emboscada.

López se dio la vuelta y poco después recibió un mensaje en su casa en Yajalón que decía «que si alguna vez volvía al rancho, nos matarían».

López tomó la amenaza en serio. Con anterioridad aquel mes, los invasores secuestraron y torturaron al vecino más cercano de López, Efraín Vera:

> Primero castigaron a Efraín a acarrear arena y piedras hasta lo alto de un cerro empinado donde ellos habían montado su campamento. Le pegaron con palos y él subió el cerro hasta que llegó a un poste que habían plantado en el suelo. Le quitaron la ropa, le cortaron el pelo y después lo amarraron al poste. Uno tras otro, los hombres se orinaron sobre él por turnos. Después de haberse estado horas bajo el sol pidió agua y el líder dijo, «¿no preferirías tomar pozol?», y Efraín dijo que sí. Entones el líder puso pozol y lo mezcló con agua en una bota sucia y Efraín dijo que no se iba a beber el pozol. En cuanto lo dijo, los hombres le derramaron a la fuerza pozol por la garganta, usando palos para mantenerle la boca abierta. Entonces dijeron, «O sea que quieres agua», y lo desamarraron del poste. Lo ataron de pies y manos como un puerco y le dijeron que se arrastrara al río, que estaba a cientos de metros. En la orilla del río lo echaron al agua y él empezó a ahogarse porque estaba atado de pies y manos. Finalmente lo sacaron. Algunas personas que habían visto todo esto se lo contaron al hijo de Efraín, que llegó a buscar a su padre. Los invasores pidieron 2000 pesos, que el hijo consiguió del banco en Yajalón, y liberaron a Efraín.

El relato que contó Efraín de su secuestro era más contenido. Contaba los sucesos titubeando y con gran dificultad: «Me agarraron porque derrumbé una casa que ellos habían construido en el rancho y se pusieron locos. Me llevaron a la propiedad invadida de otro y allí me retuvieron un día, atado en el patio». Finalmente, acabó por confesar que los invasores lo obligaron a acarrear tablones de madera camino arriba y que su hijo pagó 200 pesos para que lo liberaran. Pero sobre todo se mantuvo distante, repitiendo por lo bajo, «Sentí la muerte allí».

No presioné a Vera para que hiciera un recuento detallado ni busqué la versión de sus captores, a fin de cuentas no existe tal cosa como una historia de guerra «verdadera». Si el hijo de Vera pagó 200 o si pagó 2000

pesos, o si Vera realmente fue o no forzado a beber pozol de una bota sucia, no me importaban tanto las versiones de su historia como las formas que tuvo de determinar las prácticas de otros chiloneros.

Casi todos los chiloneros que conocí mencionaron las penalidades de Vera. Aunque los relatos del secuestro variaban en algo, todas las versiones conservaban dos elementos comunes. Primero, tenían la estructura narrativa de la historia del Calvario: un hombre es despojado de sus vestiduras y forzado a llevar su propia cruz cerro arriba. Y segundo, todas comparten una fascinación por los temas de calzados y descalzos. Hermenegildo Vera, amigo de Efraín Vera, por ejemplo, ponía muy de relieve en su relato el hecho de ir descalzo: «Le hicieron que se quitara los zapatos. Fue horrible. Tuvo que descalzarse y llevar las piedras de un lugar a otro». Esos dos temas indican que la historia de Vera ejercía una poderosa influencia en los chiloneros, no simplemente por evocar la amenaza del abuso físico sino porque era la amenaza de *un tipo particular de abuso* cargado de significados clasistas. Como lo señaló la antropóloga Mercedes Olivera, que trabajó con campesinos finqueros en el centro-norte de Chiapas como investigadora y activista en los años setenta, las torturas infligidas a los terratenientes por toda la región después de 1994 reflejaban los castigos y las arduas labores impuestas por generaciones de finqueros. En Tumbalá, Olivera recuerda, los invasores forzaron a un propietario descalzo a transportar las piedras que se necesitaba para reparar un camino a la finca —emulando las tareas sin pago más comunes que los trabajadores de las fincas estaban obligados a realizar los sábados—. Los terratenientes de Chilón captaron la referencia: un terrateniente descalzo obligado a acarrear objetos por un sendero empedrado era sometido no solo a contusiones y abrasiones físicas, sino a una inversión total del orden racial y clasista. En un mundo en el que el calzado sirve de marca de civilización, solo los peones y los salvajes caminan descalzos. La historia de Vera, tal como la cuentan los chiloneros, refleja no solo una violencia física aterradora contra uno de los suyos, sino también la violencia contra todo el orden de la sociedad.

Los espacios de la angustia

En inglés la palabra *fear* ['miedo'], relacionada etimológicamente con *pirate* ['pirata'] y *ambush* ['emboscada'], tiene sus orígenes en la raíz indoeuropea *per*, que significa «cruzar», «atravesar» un territorio. Esta profunda afinidad entre terror y el tránsito por un espacio está presente en el temor de los chiloneros a las carreteras.

Durante las semanas que siguieron a la primera ola de invasiones de tierras en la primavera de 1994, los miembros enfurecidos de la AGL de Chilón redactaron una lista de belicosas demandas. No es extraño que la carta, dirigida al presidente Salinas con copias a otras siete instituciones, entre éstas la SRA, la Secretaría de Defensa y la Suprema Corte, exigiera el desalojo inmediato de todas las propiedades ocupadas, acusando a los invasores de Chilón de ser fuerzas subversivas de la oposición y «pseudo priístas». Tal vez menos sorprendente sea —sobre todo dada la temible fama de las elites finqueras de Chiapas de ser los *agentes* de la violencia rural— que cuatro de las cinco demandas de la AGL reflejaran los temores de que se ejerciera violencia contra sus miembros. La AGL pedía (1) «seguridad garantizada de cada propietario»; (2) «Separación del Ejido de Bachajón del municipio de Chilón, convirtiéndolo a su vez en Municipio libre dejando así que los pueblos indígenas sean gobernados por sus propios compañeros indígenas»; (3) «Construcción de un libramiento en el Pueblo de Bachajón para evitar así el peligro de secuestros y torturas que constantemente son objeto las personas [...] que desafortunadamente tienen que pasar por la única calle principal de este PUEBLO SIN LEY»; y (4) «Instalación de un retén militar en Bachajón».

Armados con la perspectiva histórica de las genealogías del miedo racial en Chilón, no puede sorprendernos la insistencia particular de las demandas de la AGL. Bachajón había representado desde hacía mucho una barrera material y simbólica que dividía a los ladinos de Chilón del resto de Chiapas. Es fácil imaginar a John Stephens anhelando una vía que rodeara Bachajón o un retén militar «en tierra de indios salvajes». Pero la ubicación física de Bachajón era solo una de las fuentes del miedo, ya que

la geografía del peligro de la «ciudad sin ley» se derramaba y penetraba por los poros del Chilón ladino.

Las demandas de la AGL en los pasillos de los gobiernos estatal y federal fueron en vano. Nunca se estableció ni el periférico ni los retenes en Bachajón y, lejos de separar administrativamente las dos ciudades, las autoridades permitieron que las elites indígenas de Bachajón tomaran el timón del gobierno municipal de Chilón. Los temores de los chiloneros fueron creciendo y en los meses y los años que siguieron, pedían reiteradamente que la policía y el ejército los protegieran de sus vecinos indígenas. Para el año 2000, con el paso del tiempo y el restablecimiento de una calma relativa en el campo alrededor de Chilón, el tono contundente con el que expresaban su miedo los terratenientes en cierto modo se había reblandecido. No obstante, en 1998, el miedo era un trasfondo constante en las palabras y las acciones de los chiloneros. «Ahora tengo que llevar una pistola, no hay de otra», me dijo un terrateniente de edad en 1998. Después, haciendo gala de arrojo, dijo, «Al menos así, cuando me agarren, me llevaré a algunos de ellos conmigo. Todos vamos armados por aquí porque no hay seguridad».

Este miedo era particularmente manifiesto en las discusiones de los chiloneros sobre los viajes. Después de sobrevivir a una intentona de emboscada en marzo de 1994, Roberto Trujillo me dijo que acabó convenciéndose de que la defensa de la territorialidad de la producción finquera se extendía más allá de los límites de la finca y penetraba hasta los agrestes caminos que conectaban las fincas con las ciudades: «¿De qué sirve desalojar a los invasores», se preguntaba, «si siempre tienes miedo de que te maten en el camino al rancho?». Peor aún cuando los que fueron trabajadores leales dejaron de saber cuál era su lugar. Las transgresiones de los trabajadores de las fronteras de las relaciones sociales finqueras golpearon duramente el corazón de la producción finquera.

Uno tras otro, los terratenientes se quejaban de que esta manera de socavar el orden socioespacial comenzó «cuando los sacerdotes empezaron a sembrar el odio entre los indígenas».[10] Enrique Díaz Cancino, por ejemplo,

[10] Entrevista con un terrateniente que pidió permanecer anónimo. Si bien ningún cura se identificaría como maestro del odio, la misión ha fomentado una actitud de oposición

asoció directamente la organización de la iglesia, la decadencia del respeto y la difusión de la delincuencia. «Antes había más respeto. Ahora los naturales creen que son iguales por los sacerdotes, que les enseñan a rechazarnos. Pero nosotros no somos responsables por lo que hizo Hernán Cortés, ¿o sí? Antes no había robos ni vandalismo como ahora. Yo sé incluso de dos indígenas que robaron dinero a sus propias madres, a este grado de maldad se ha llegado».

Como muchos terratenientes, Enrique Díaz atribuye a los sacerdotes el debilitamiento del orden natural de las cosas, y, como lo indica Zygmunt Bauman convincentemente, cuando la gente habla de orden —en particular cuando añora el orden perdido— se refiere no a «las cosas tal como son [sino más bien] a la manera de gestionarlas; a la *capacidad* de ordenar… la desaparición de los medios y del «saber cómo» *poner las cosas en orden* y mantener ese orden» (*apud* Spark 2001:56). En definitiva, las explicaciones que dan los terratenientes de los orígenes de la agresión de los indígenas servían poco de alivio en este frente, enardeciendo más que suavizando la conciencia que tenían los terratenientes de hasta qué punto los conflictos agrarios de Chiapas habían excedido su capacidad de poner las cosas en orden.

Para Wenceslao López, esta conciencia nació cuando observaba al líder del grupo que invadió su rancho fumando un cigarrillo y sentado encima de la mesa del funcionario de la SRA encargado de negociar el acuerdo. Samuel Rodríguez Sr. se dio cuenta asimismo cuando le presentó sus denuncias de la invasión ilegal a un amigo en el tribunal regional. El amigo le dijo: «Presentaré tu denuncia porque es mi trabajo pero también te voy a decir como amigo que no te hagas ilusiones. No voy a seguir hasta el final la denuncia». El amigo, explicó Rodríguez, «había recibido órdenes de arriba de darle carpetazo. Órdenes de arriba».

---

hacia los terratenientes. Un párroco de Chilón me dijo: «los mestizos dicen que los hemos desatendido en favor de los tseltales, y supongo que en cierta manera están en lo cierto. Los *hemos* desatendido. Muchos de nosotros vinimos aquí porque nos interesaba trabajar con los indígenas». Otro cura me dijo que había tomado la decisión desde el principio de trabajar solo con los campesinos indígenas de la región y «no tratar nunca directamente con los finqueros».

Cuando la amenaza de violencia acecha, la propia incapacidad de poner las cosas en orden y la incomprensión cada vez mayor de quiénes son los adversarios adquieren carácter de urgencia y empiezan a determinar las acciones. Por tanto, para muchos otros terratenientes, la amenaza de la violencia indígena pesó mucho en su respuesta a la invasión. Un terrateniente, que admite que su familia sí expulsó a los invasores con ayuda de oficiales de policía del estado, se queja de que el esfuerzo no sirvió de nada: los invasores —afiliados a la organización paramilitar los Aguilares— fueron sacados del rancho, pero siguen vigilando de cerca la propiedad. «Una vez», me cuenta el joven exranchero, «[mi padre] fue al rancho en contra del consejo de todos y trató de cosechar café [en la propiedad desalojada]. Por poco no sale vivo de una emboscada…. No podemos volver al rancho y nunca vamos a poder».

Cuando pregunté a los terratenientes por qué no defendieron sus propiedades frente a la invasión, muchos de ellos expresaron, tanto un miedo cerval al salvajismo indígena, como una nueva conciencia de la futilidad de la acción violenta:

> Empezamos a comprar armas y estábamos listos. Teníamos un arsenal de calibre superior al de los indígenas, que apenas tenían armas. El problema con ellos es que llegan en grandes grupos…. Los indígenas no tienen control de natalidad y no paran de crecer en número.

> Alfredo, Chamber, Efraín, todos trataron de defenderse asustando a los indígenas, pero había demasiados. Les dije que aunque mataran a dos o tres, no iban a poder hacer nada frente a una plaga de hormigas arrieras.

> Atacaban y amarraban a los trabajadores que enviábamos a cosechar café o a trabajar en los cafetales…. Decidimos que no valía la pena el peligro [para nosotros] ni para los trabajadores, de modo que decidimos vender.

> Antes de los noventa *hubiéramos* defendido nuestra tierra. En la Asociación [Ganadera] cuando oíamos que estaba a punto de haber una invasión, nos íbamos todos juntos a defender esa tierra…. En el 94 nadie se juntó para defender

sus ranchos. El conflicto era demasiado grande, y teníamos miedo de las balas y la muerte como cualquiera.

No nos podíamos defender a nosotros mismos. Había demasiados. Nos hubieran masacrado. Cuando matas a un indígena, llegan miles más.

Muchos chiloneros aludieron también como es lógico al deterioro económico y a los cambios generacionales para justificar su participación en los programas de adquisición gubernamentales. Estos factores desempeñaron un papel formativo —algunos sugerirían que determinante— en las respuestas de los terratenientes a las invasiones. Desde esta perspectiva, el miedo palpable de los terratenientes y el sentido de la futilidad podían simplemente representar racionalizaciones *post hoc* de acciones emprendidas en respuesta a las amenazas a sus intereses económicos. Pero la viabilidad económica y el cambio generacional no se pueden separar de la experiencia del miedo.

La economía del terror

En muchos casos, la participación en los programas de adquisición de tierras de 1994-1998 convenía a los intereses económicos de los propietarios, sobre todo dada la rentabilidad decreciente de la agricultura y el interés cada vez menor de la generación joven de vivir de la tierra. Sin embargo es un error —economismo de la peor clase— pensar que el puro interés de clase se puede separar de las ideologías y externalidades sociales. Es más bien que el miedo y la viabilidad económica de las fincas se constituyen mutuamente de manera importante.

Lo anterior se puede ver claramente en las articulaciones entre la inseguridad y la inversión. Al principio de mi trabajo de campo visité a Paco Jiménez, un joven terrateniente que criaba ganado y forrajes en Palenque, a unos 40 kilómetros al noreste de Chilón. Cuando nos salimos de la autopista para entrar en un campo de sorgo de unas 90 hectáreas, Paco se

desplomó sobre el volante de su camioneta. En una esquina del campo, un puñado de familias indígenas estaba cortando plantas quemadas por la sequía y alzando pequeñas cabañas con madera desechada. Paco era joven, educado en la elite de la Universidad Iberoamericana, y rebosante de ideas innovadoras sobre cómo modernizar su producción. Su porción de este campo de sorgo era parte de ese plan. A medida que nos aproximábamos a los ocupadores, se debatía entre la rabia y la desesperación. Después de una breve discusión con los recién llegados mientras yo esperaba en la camioneta, Paco regresó. De momento, me dijo, su inversión estaba a salvo, pero estaba claramente conmovido. Los indígenas habían iniciado una petición a la reforma agraria sobre una sección del campo propiedad de un socio de Paco que había aceptado vender. Las palabras de Paco resonaban como las de cada uno de los rancheros con los que yo había hablado: «Nadie va a invertir en tierras con todas estas invasiones. Si ellos ven que tu tierra está bien cultivada y bien cuidada, la tomarán».

En Chilón, la sensación que tenían los terratenientes de estar sufriendo un estado de sitio era incluso más palpable y lo mismo sucede con los efectos en la agricultura. Una inseguridad al parecer sin límites en forma de invasiones de tierras y las más prosaicas «armas de los débiles» (J. Scott 1985) desinflaron la voluntad de muchos rancheros de invertir en la producción. En un contexto de lucha agraria y de reconocimiento de que, en último término, los derechos de propiedad pueden ser manipulados por el Estado por razones políticas, proliferó una especie de angustia catastral —una conciencia ontológica que subyacía a la inseguridad de la propiedad privada— entre los rancheros.[11] Alfredo Pinto —asociando el respeto, el miedo, el apoyo estatal y el cambio agrario— dijo enfurecido que antes de 1994 «había *seguridad* y respeto —respeto a la propiedad—. La gente tenía

[11] Aun después de las reformas de 1992 al Artículo 27 de la Constitución, el Estado sigue siendo el dueño final de la tierra en el interior del país, reservándose el derecho de conceder y revocar los derechos de propiedad privada conforme a los dictados del «interés público». Los intentos de mitigar los miedos de los dueños de propiedad privada con el cambio de redacción del Artículo 27 en 1983 (cf. Fox y Gordillo 1989), no han aplacado esta angustia catastral de los rancheros en Chiapas, dada su convicción de que el Estado ha sacrificado con frecuencia sus derechos de propiedad para restaurar la paz en periodos de convulsión agraria.

seguridad para invertir y estaba introduciendo mejoras en sus ranchos. Nestlé acababa de establecer un recolector en Chilón. La gente finalmente estaba obteniendo crías de ganado de alta calidad y poniendo a prueba nuevos tipos de café…. Siempre hubo conflicto agrario, pero no como en 1994, ni invasiones completas que nos forzaran a salir, amenazas de muerte, cosas horribles. Y antes, el gobierno intervenía rápidamente para restaurar las propiedades [a sus dueños]».

Muchos terratenientes, como el hermano de Samuel Rodríguez, Elí, renunciaron a Chiapas después de las invasiones y trasladaron sus operaciones a la relativa tranquilidad de Tabasco o de Quintana Roo. La mayoría de los rancheros, no obstante, diversificaron su actividad emprendiendo negocios más estables a la espera de tiempos mejores. Roberto Abarca y Hans Setzer discutían en futuro: «Yo estoy a la espera del nuevo sexenio para ver qué pasa. Si entonces no conseguimos apoyo, entregaré mi tierra y haré otra cosa». «Necesitamos un dictador, como lo que sucedió en Chile con Allende. Necesitamos resucitar a don Porfirio».

Las generaciones del miedo

El abandono regular de la agricultura y el campo por los jóvenes chiloneros también tuvo mucho peso en las decisiones de los terratenientes posteriores a 1994. Un propietario lo expresaba sencillamente: «Aceptamos el precio de compra [de nuestra tierra] aun cuando no nos gustaba porque ninguno de mis hijos era ranchero». Los cambios generacionales también fueron los causantes de que las respuestas de los terratenientes a las invasiones se alejaran de la violencia, como lo indica César Trujillo en un relato extraordinario de las deliberaciones en la AGL:

> Una de las cosas clave que impidieron la violencia en 1994 fue la cultura diferente de los hijos de los propietarios. Nuestros padres nacieron en el rancho, crecieron en el rancho, aprendieron a hablar y jugar en el rancho. El rancho era su vida. Pero nuestros padres también trabajaron para que sus hijos salieran del

> rancho, para estudiar, para graduarse y hacer carrera. Esto dio a los hijos toda otra perspectiva…. Recuerdo que después de 1994 hubo una reunión en la AGL en la que muchos hablaban abiertamente de violencia. Recuerdo que un tipo dijo, «Yo pondré las ametralladoras. Si necesitamos una avioneta, la conseguiré», y entonces uno de los hijos se puso de pie y dijo que no, que esta no era la manera de hacer las cosas. Que teníamos que dejárselo a la ley. Yo creo que este fue un cambio importante. Si esto hubiera sucedido años atrás, se hubiera resuelto con armas, como en Sitalá [en los años ochenta]…. El hombre joven que se pronunció era Samuel Rodríguez Jr., una de las personas que más tenía que perder con las invasiones.

Sin embargo, es importante resistir a la tentación de suponer que estos cambios generacionales son simplemente el resultado automático de una lógica modernizadora en la que las agroempresas racionales de capital intensivo han desplazado en forma sostenida a los terratenientes tiranos de la vieja guardia feudal o, más prosaico, que el encanto y la comodidad de la vida urbana atraía inevitablemente a la juventud alejándolos de la vida tosca del rancho. Tomando algunas de las palabras de César, la pregunta fundamental es: ¿Por qué los padres para los que «el rancho era su vida» trabajaron tanto para conseguir que sus hijos abandonaran la agricultura? Aunque muchos propietarios explicaban simplemente este esfuerzo en términos de «una fuerte voluntad de salir adelante», la conciencia de la inestabilidad y el peligro intrínseco al trabajo agropecuario solían formar un subtexto constante, como reconoció Hans Setzer: «Mis abuelos vivieron la Revolución. Mis padres vivieron la época de Cárdenas [que supervisó una distribución masiva de la tierra]. Mis hijos no tendrán que sufrir nada de esto porque estarán en las ciudades con buenos trabajos».

Por ende, la insistencia de los viejos terratenientes en garantizar a sus hijos una buena educación es, al menos en parte, una respuesta a la amenaza constante de conflicto agrario. Jorge Martínez recuerda que ya en los años sesenta, «Nuestro padre siempre nos dijo que nuestro tiempo era limitado. Siempre había la sensación de que era solo cuestión de tiempo antes de que los indígenas nos quitaran la tierra».

En definitiva, el miedo, el cambio generacional y la perspectiva económica de la agricultura finquera en una época de reestructuración neoliberal son una misma cosa en la mente de los ladinos. Sus explicaciones de la resignación voltean de inmediato al pasado, al miedo inveterado a los indígenas salvajes, después, a un presente marcado por la agresión indígena sin precedentes, y luego se desplazan hacia adelante, al futuro de sus hijos.

El espacio de la muerte

> El espacio de la muerte es un lugar siempre presente en la imaginación colonial.
>
> MICHAEL TAUSSIG

El «espacio de la muerte», como lo indica Michael Taussig, está profundamente grabado en la imaginación colonial. Está también inscrito en el espacio. El miedo modela el espacio o, para ser más precisos, las representaciones del miedo y la violencia se cuentan entre las múltiples prácticas socioespaciales con las que se produce el espacio. El «espacio de la muerte» no es solo una metáfora espacial, *es* espacial.

El imaginario geográfico del miedo que tienen los chiloneros, desarrollado a lo largo de años turbulentos, desempeñó un papel central en la definición de los empeños de los terratenientes de conocer, disciplinar y controlar a la numerosa población indígena de la región. Para 1994, la constelación de estrategias y técnicas que desplegaron los terratenientes para conocer, disciplinar y controlar el «salvajismo» indígena había empezado a perder coherencia. Por décadas, las relaciones de los terratenientes con los indígenas construyeron una red de espacios que ellos concebían como seguros, conocidos y gobernables —linderos materiales y simbólicos que confirmaban a los ladinos que la vida en medio de indios aparentemente salvajes era posible, que estaban a salvo—. Frente a las múltiples transgresiones de los indígenas de las geografías divididas de Chilón, el miedo cotidiano de los terratenientes se volvió formativo. Articulado con las interpretaciones del apoyo estatal, la crisis económica y el cambio generacional, el miedo produjo la resignación.

10. La espiral agraria

Hemos visto que en el transcurso de más de un siglo, la capacidad de los terratenientes para defender los espacios de la agricultura finquera se basó en diversas prácticas materiales y discursivas que posicionaron a los propietarios como el único nexo entre los campesinos y el Estado, el campo y la nación. El surgimiento de múltiples formas de territorialidad a lo largo del siglo xx fue desplazando lentamente a los finqueros de la posición que ocupaban, remodelando en el proceso los espacios de su producción. Entonces, cuando los campesinos comenzaron a invadir las fincas en 1994, los terratenientes ya habían visto que el inestable equilibrio de la hegemonía se había vuelto en su contra.

En este contexto de hegemonía inestable, a los terratenientes les costó trabajo calcular los costos y beneficios de recurrir a la fuerza para defender sus fincas. No se trataba de los cálculos racionales descarnados del *Homo economicus*, sino antes bien, de luchas dolorosas acerca de la identidad en las que los terratenientes inseguros se enfrentaban al vuelco radical de las categorías que en otro tiempo fueron confiables como la naturaleza, la raza, el desarrollo, el buen gobierno y la masculinidad. Dos luchas interrelacionadas por los significados desempeñaron papeles axiales en estos cálculos. Primero, los propietarios lidiaron con el significado de la producción como marco de referencia para entender el yo, el Otro y sus mutantes lugares en el terreno del desarrollo nacional y el régimen estatal, lo cual produjo una extendida percepción de los límites y restricciones del uso de la violencia. En segundo lugar, al involucrarse en una conversación que tenía décadas

acerca de los significados del «salvajismo» indígena, los terratenientes acabaron atrapados en un peligroso e indefinido asedio por fuerzas que ellos no podían someter. Elaborada a través de las visiones de los terratenientes acerca de la seguridad de la inversión y el cambio generacional, esta sensación de asedio los alejó de manera decisiva de la violencia.

Casi una década después, el reordenamiento espacial y social que surgió de este intenso momento de lucha parece que pasó del terreno de lo coyuntural al de lo estructural. «El campo pertenece ahora a los indígenas», reflexionaba Paco Vera en 2000. «¿Qué van a hacer los mestizos?».

En julio de 2005 regresé a visitar a don Roberto y otros chiloneros. A los pocos días de mi visita, asistí a una reunión bianual de la AGL. El número de miembros de la asociación había descendido a 18 y solo 11 se presentaron aquel día, arrastrando sillas plegables para formar un pequeño círculo en el vestíbulo con eco del local de su asociación. Antes de que Carlos Setzer, quien una vez más se desempeñaba como presidente del grupo, pudiera abrir la sesión, un hombre al que había encontrado solo de paso se lanzó a hablar. Lo hacía apasionadamente, con gotas de sudor en la frente: «Miren alrededor. Apenas alguno de nosotros tiene ya ganado, aun cuando esta es la Asociación Ganadera. Tenemos que revivir la ganadería, tenemos que revivir esta asociación. ¿No podríamos iniciar un banco comunitario? ¿No podríamos obtener de nuevo apoyo del gobierno? *Tenemos que* salvar la asociación. Es el último bastión de los ladinos en Chilón».

Las palabras de este hombre suscitaron expresiones igualmente apasionadas de la asamblea. Circulaban ideas, se hacían llamados a un cambio vigoroso. Me recordó este tipo de conversaciones en mis visitas previas. En visitas anteriores muchos terratenientes todavía abrigaban la esperanza de que las recientes irrupciones de violencia fueran más coyunturales que estructurales, y fincaban sus esperanzas en la transición política, en la fe de que el Estado terminaría por recuperar los sentidos y restauraría el apoyo a la propiedad y la producción agrarias. «Yo aguanto un sexenio más», me aseguró Roberto Abarca en 1998. «Si no hay más seguridad para invertir después de este, me voy a otra parte».

Para 2000 muchos terratenientes habían cambiado de afiliación política al PAN en la oposición, después de años de estrecha asociación con el partido gobernante, el PRI. Las razones de este sorprendente viraje eran claras. Después de 1994, los indígenas que invadían tierras habían ido dominando lentamente el aparato del PRI en Chilón, que ahora figuraba como el símbolo vivo tanto del abandono de los terratenientes por el estado como del consiguiente desquiciamiento del orden social. «Si hubiera un gobernador del PAN», observó un terrateniente, «tal vez pudiera imponer una solución con mano dura». No obstante, por necesidad, apoyar al PAN en 2000 significaba también entrar de lleno a una alianza entre el PRD, de tendencia de izquierda, y el PAN —la Alianza por Chiapas, encabezada por el candidato a gobernador Pablo Salazar Mendiguchía—. A lo largo de su campaña, Salazar apeló hábilmente tanto a la izquierda como a la derecha, a los grupos indígenas y a los terratenientes ladinos. Después de una reunión con Salazar en una de sus visitas de campaña a Chilón, por ejemplo, los líderes indígenas me dijeron que confiaban en que el candidato apoyara la continuación de la reforma agraria, mientras que los ladinos me aseguraron que, una vez elegido, Salazar iba a empezar de inmediato a expulsar a los invasores. Tanto si estas percepciones contradictorias provenían de meras ilusiones como si eran tomadas del mensaje real del candidato, muchos terratenientes apoyaron con entusiasmo la Alianza. Roberto Trujillo, cuyo hijo César presidía el PAN y las campañas de la Alianza en Chilón, hasta entregó parte de su propiedad cerca de la plaza de Chilón para la sede de la Alianza y se destacó por abogar por el cambio político.

En junio de 2000, tanto Salazar como el candidato presidencial del PAN, Vicente Fox, derrotaron al tan profundamente atrincherado PRI en unas elecciones verdaderamente históricas. No obstante, a fin de cuentas, la victoria de Salazar no produjo ni la oleada de la nueva redistribución agraria que algunos líderes indígenas esperaban ni satisfizo el hambre de desahucios y «orden» que tenían los terratenientes. Al regreso de la gran celebración inaugural de Salazar en Tuxtla Gutiérrez, don Roberto estaba callado, casi cabizbajo. El discurso de Salazar había satisfecho en buena medida a la izquierda, con concesiones sustanciales a los zapatistas. En las



Reunión de la Asociación Ganadera Local, junio 2005. Carlos Setzer, sentado al fondo a la derecha; Samuel Rodríguez Sr., sentado a su izquierda (foto del autor).

elecciones municipales, varios meses después, solo los líderes indígenas figuraron como candidatos para el triunfante PRI, y el único candidato del PAN había recabado poco apoyo fuera de la sede municipal, dominada por los ladinos.

De modo que para julio de 2005, había llegado el «próximo sexenio» de los terratenientes y casi se había terminado sin ningún signo de mejora. En este contexto, la pasión que expresaron los miembros de la AGL por revivir su asociación en la última reunión a la que yo había asistido era una pasión vacía, una especie de reflejo automático que no tardó en amainar una vez que Carlos Setzer regañó a los miembros diciendo que el problema que ellos tenían no era el crédito ni la cooperación, sino la falta de seguridad. «Si vamos a acabar con las peroratas», sonrió impacientemente, «quizá podamos ocuparnos de lo que nos importa».

En la agenda de las reuniones bianuales había solo un asunto: la asociación había perdido el control de una pequeña parcela junto a la carretera

situada estratégicamente a la entrada de la ciudad. Antes de 1944, la propiedad servía de centro para el procesamiento de ganado de la asociación. En un pequeño establo, funcionarios del Departamento de Agricultura y el secretario de la asociación verificaban las marcas de la ganadería y los trámites del ganado que entraba y salía de la ciudad. Nestlé puso su equipo de recolección de leche en el lugar y un mural en un tanque de agua proclamaba: «Los ganaderos te dan la bienvenida a Chilón». En otras palabras, antes de 1994, este predio al borde de la ciudad era el foco de lo que los propietarios esperaban que fuera un renacimiento a nivel regional de la producción de los ranchos ladinos.

Más tarde, en 1994, con el ganado y el comercio de lácteos paralizados por las invasiones, la asociación prestó el sitio estratégico al gobierno municipal para una subestación de policía y retén. El puesto iba a servir —literalmente en la mente de los miembros de la asociación— de último bastión entre el Bachajón indígena y el Chilón ladino. El alcalde construyó un fortín de dos pisos en el predio, pero por razones políticas nunca se lo asignó a la policía. Varios años después, los camioneros y taxistas indígenas de Bachajón, respaldados por el PRI, ocuparon el sitio y convirtieron la garita de policía en la oficina de su cooperativa. El alcalde de Chilón autorizó a los choferes a que se quedaran, al parecer con la esperanza de evitar el conflicto. Pero en esta ocasión la AGL quería que le regresaran sus tierras, o como mínimo una renta mensual de los choferes, que mantenían un negocio pujante transportando mercancías y gente entre Chilón y Bachajón desde el sitio.

La reunión transcurrió hasta la calurosa mañana mientras 11 miembros debatían la mejor estrategia para reclamar su lote. Como no surgía ningún plan coherente del enredo de voces, mi mente empezó a divagar. Primero imaginé que el auditorio no estaba vacío y envejeciendo, como lo estaba entonces, en 2005, sino lleno a tope y resonando con las voces urgentes de los más de 80 miembros que había tenido en la primavera de 1994. Por lo que se cuenta, en aquellas ocasiones la sala reventaba de llamados a las armas y discusiones sobre helicópteros, mercenarios y el alfabeto de la guerra: AK-47, M-16, R-15. Estos llamados a las armas nunca

tuvieron respuesta por razones que ya deberían estar claras. De nuevo en el presente, el tono de expresión era mucho menos enardecido, y mi mente siguió vagando, esta vez a un puesto de taxi a las afueras de la ciudad que constituía el fondo de la discusión. Unos días antes, llegando a Chilón en la parte trasera de una camioneta pickup, me había dado cuenta de que el letrero que decía «Los ganaderos le dan la bienvenida a Chilón» estaba tan cubierto de vegetación que apenas era visible desde la carretera. Era una visión gráfica del paisaje cambiante de la ciudad.

Por último Enoch Guirao, un anciano ranchero, atrajo mi mente errante de nuevo al local de reunión. A pesar de su diabetes y renqueando por la edad, Guirao aún dominaba la atención y sus amargas palabras flotaban en el aire: «Chilón ya no es una ciudad de ladinos. Ahora es una ciudad tseltal. Ninguno de nuestros hijos está aquí. Las únicas personas con títulos universitarios en este pueblo son tseltales».

Guirao tenía razón, aunque fuera algo hiperbólico. El cambio en la ciudad se podía palpar. Durante mi ausencia, los comerciantes tseltales habían empezado a extender sin titubeos sus mercancías en las banquetas del centro de la ciudad, convirtiendo la calle principal de Chilón en un espacio de comercio indígena en competencia con las tiendas de los ladinos. Caminando por la ciudad unos días antes, yo pensaba en que esos vendedores ambulantes se habían apropiado de las mismas banquetas que, no hacía mucho tiempo, se esperaba que los indígenas cedieran al cruzarse con cualquier transeúnte ladino en el camino. También me di cuenta de que todo el paisaje sonoro de la ciudad había mudado del español al tseltal en los años que yo había estado fuera, hasta en el palacio municipal. Un antiguo terrateniente observó con tino: «Ahora hasta tenemos que escuchar el informe del presidente municipal en tseltal». En las comidas con don Roberto y doña Gloria tuve incluso la sensación de un cambio en la clientela del restaurante Susy. Había más clientes indígenas de los que yo recordaba y había algo más, justo en el umbral de la percepción. ¿Era mi imaginación o había desaparecido el diminuto ritual de subordinación? Esa breve cesura al borde de la entrada, ese momento casi imperceptible cuando, con la mirada baja y el incómodo rastreo de los pies, los clientes



Vendedores indígenas y camiones de transporte en la calle principal de Chilón (fotografía del autor).

indígenas parecían pedir permiso antes de cruzar el espacio ladino del restaurante. Mientras disfrutaba mi primera comida, un par de hombres tseltales que venían de resolver asuntos en el palacio municipal entraron pisando fuerte y tomaron intrépidamente su espacio en el restaurante como buenos actores tomando posesión de la escena. Era una actuación sutil y sorprendente de reindigenización, toda una historia racial encarnada en gestos y movimientos.

En 2005 la ciudad de Chilón era en muchos sentidos un espacio reivindicado, o para ser más precisos, un espacio que pasaba por un conjunto profundo de reorganizaciones raciales. Los ladinos no habían ni mucho menos desaparecido de Chilón. En la plaza central se había inaugurado incluso un cibercafé incongruentemente moderno y claramente ladino de un hombre procedente del centro del país que se había casado con una mujer del clan Vera. Pero la producción de los ladinos finqueros, como había llegado a entenderla, parecía cosa del pasado y la hegemonía ladina en la

ciudad parecía seguirle de cerca los pasos. La pregunta de Paco Vera ocupaba mi imaginación: si el campo (y quizás la ciudad) pertenece ahora a los indígenas, ¿qué van a hacer los mestizos?

Contemplando la reunión de la AGL, el futuro estaba claro. Solo tres de los 11 miembros presentes tenían menos de 50 años y la mayoría había rebasado con creces los 60. Aunque algunos de estos hombres de edad y una mujer siguen produciendo café o criando ganado a pequeña escala (a lo que ellos a veces se refieren bromeando como pasatiempo) sus hijos buscan nuevos horizontes en otra parte o tratan de reconfigurar sus lugares en la agricultura y en torno a ella.

Cuatro años atrás una escena había cristalizado para mí la lucha de la juventud ladina para definir su lugar en Chilón. A la vuelta de la esquina de la plaza central me había encontrado con Juan Trujillo y Samuel Rodríguez Jr. en plena conversación. Con la esperanza de que podría hacer que hablaran sobre el futuro de los ladinos jóvenes en Chilón, me uní a ellos, recargados en la camioneta pickup de Sam. Estaban profundamente absortos en el tema de la dentadura, o más bien del puente de la dentadura que se le había roto a la madre de Sam. Juan, que a los 30 acababa de terminar la carrera de odontología, inspeccionaba la prótesis dental rota. No se podía reparar pero la armadura de metal se podía volver a usar. Sam se metió el puente en el bolsillo y ambos jóvenes cambiaron el tema de conversación por otro más inminente: reparar el lienzo charro de Chilón, donde esperaban revivir el festival charro de la ciudad (interrumpido desde 1994). Nunca abordamos el tema sobre el futuro de los jóvenes ladinos, pero Juan y Sam estaban activamente involucrados en la creación de ese futuro, el uno abandonando la agricultura por una carrera profesional y el otro buscando una nueva base material y simbólica para la producción agrícola.

Sam, que regresó a Chilón después de obtener el título en medicina veterinaria, había participado en primera línea en los intentos de los ganaderos por pasar del modelo políticamente inviable de la ganadería extensiva a algo más intensivo. Después de que las invasiones de 1994 aplastaran los sueños de los ganaderos de la producción intensiva de lácteos, Sam buscó un nuevo tipo de producción que se ajustara a las realidades

políticas actuales. La encontró en los pollos. En muchos aspectos los pollos son emblemáticos del México neoliberal, del mismo modo que el ganado representó los primeros experimentos del país con la industrialización cara adentro. Si la producción extensiva de carne de res a gran escala alimentó una fuerza de trabajo urbana industrial en auge, los pequeños, flexibles y baratos pollos representan el alimento perfecto para la fuerza de trabajo neoliberal de México, cada vez más empobrecida. Más importante aún es que los pollos se pueden criar en espacios reducidos fácilmente protegidos. No obstante, a mi regreso en 2005 me enteré de que mientras que Juan se había construido un próspero consultorio dental (con un creciente número de clientela indígena), los planes de Sam habían fracasado. Ya no era productor y se ganaba la vida como maestro de escuela secundaria en una comunidad indígena a hora y media de distancia.

Muchos antiguos terratenientes habían emprendido otra ruta, sin regresar a la agricultura pero en torno a ella. Con la tenencia de la tierra firmemente en manos de los campesinos indígenas, estos antiguos finqueros trataban de controlar la economía agrícola sin controlar directamente el proceso de producción. De hecho, después de preguntar, «¿Qué van a hacer los mestizos?» Paco Vera respondió su propia pregunta: «Encontrarán maneras de vivir de lo que produce la gente indígena». La compraventa de maíz, frijol y ganado producido por los indígenas se ha convertido en una fuente importante de ingresos para muchos antiguos terratenientes. Estos terratenientes, convertidos en coyotes, explicaba un comprador para una empresa multinacional de café en Chilón, tienen una considerable ventaja sobre él, porque «ellos hablan tseltal por haber crecido en sus ranchos… [y porque] los indígenas buscan a personas que ya conocen».

Los terratenientes fueron por mucho tiempo vendedores e intermediarios comerciales, pero desde las invasiones de 1994, el comercio es una de las pocas opciones para los chiloneros sin carreras profesionales que se quedaron en la ciudad. En efecto, explotar a los campesinos indígenas por medio del comercio puede que sea la única manera que les queda a los ladinos de reconstruir su hegemonía en el contexto político actual. No hay que confundir este paso de la producción finquera al comercio con la

marcha teleológica del desarrollo capitalista. Es más bien parte de aquello a lo que Alí Reyes se refirió competentemente como una «espiral agraria» determinada políticamente, en la que los finqueros se mueven entre el ganado, el café y el comercio al ritmo en que oscila el precario equilibrio de la hegemonía regional.

En último término, las palabras de Alí expresan muy bien una conclusión central de este libro. Los espacios de la producción finquera en Chilón han sido constantemente formados y reformados por medio de la lucha social, y en este proceso de transformación continua se han ido formando las respuestas de los terratenientes al conflicto agrario. En los capítulos precedentes hemos trazado el arco del declive de la propiedad, siguiendo al sistema de producción finquera desde su formación en el siglo XIX hasta su reciente desintegración en el contexto de la violencia rural y la crisis neoliberal. Esta trayectoria ha confirmado de muchas maneras las predicciones marxistas de la desaparición gradual de la producción latifundista. Pero más que estudiar el caso de Chilón en este nivel de análisis —es decir, trabajando a partir de las grandes dinámicas de la transformación capitalista hasta su manifestación en un caso específico— he comenzado con los «mecanismos infinitesimales» de poder que operan en múltiples escalas —las formas cotidianas del conocimiento y la subjetividad que influyen en los sujetos y la hegemonía— y después he tratado de entender cómo se han expresado estas mismas luchas en los espacios de la agricultura finquera. De este análisis emerge una imagen diferente de la transformación de la producción finquera: las metamorfosis descritas aquí no eran inevitables ni estaban determinadas; la producción finquera es una relación social que se forja en las luchas contingentes por la hegemonía. Esta política cultural de la producción finquera surge en todo el material empírico que hemos presentado. Por ejemplo, hemos visto que la lógica económica de la producción finquera se entreteje con el miedo, que el control privilegiado de los terratenientes sobre la mano de obra activó la construcción de una «familia» finquera marcada por el género y la raza, y que el apoyo estatal desproporcionado a la violencia del terrateniente aumentó, en parte, debido a la particular resonancia entre las construcciones discursivas de



Casa y consultorio dental recién construidos de Juan Trujillo (foto del autor).

la producción finquera y los procesos amplios del desarrollo mexicano. Lo económico siempre y en todas partes ha sido también cultural.

La producción finquera es también una relación espacial. Es una constelación de prácticas socioespaciales mediante las cuales los propietarios, los campesinos y los actores estatales definen, invisten de significado y luchan por los espacios íntimos de la agricultura finquera. La clasificación, sedimentación con significados, vigilancia e imposición de estos espacios son prácticas determinantes por medio de las cuales opera la hegemonía. También son los resultados inestables y en constante cambio de esas mismas luchas. Los conflictos entre terratenientes y campesinos a mitad del siglo XX, por ejemplo, fueron catalizados por la nueva lógica del régimen estatal posrevolucionario, pero también fueron el reflejo de las configuraciones socioespaciales particulares de las relaciones finqueras que se

forjaron a finales del siglo XIX. Estas luchas posrevolucionarias a su vez reordenaron el espacio de múltiples formas. En último término, las nuevas relaciones socioespaciales producidas por las luchas a partir de los años treinta hasta los ochenta determinaron profundamente el curso del conflicto en los noventa.

Vista de esta manera, como una relación social forjada mediante luchas por la hegemonía y la formación del sujeto, no como una categoría económica terminal y limitada, la producción terrateniente puede ser una forma resiliente, incluso en un mundo de competencia capitalista mundial. Los terratenientes se rehicieron a sí mismos y rehicieron la agricultura de las fincas numerosas veces a lo largo del siglo pasado, mezclando la producción con el comercio y el ejercicio profesional en una variedad de formas. Cada configuración sucesiva de la producción finquera influyó profundamente en la dinámica de la dominación y la subyugación en el campo de Chiapas. Por todo ello, los terratenientes y la producción de las fincas privadas —en sus diversas formas y reiteraciones— se han de tomar seriamente como categorías que siguen teniendo importancia para el estudio de la política rural.

Por demasiado tiempo los estudios de la política rural se han involucrado en debates sobre los matices de la categoría de «campesino» y han dejado la categoría de «elite terrateniente» en buena medida sin cuestionar. Ante la falta de una atención académica sostenida, esta categoría se ha rellenado con una economía política anémica; con lecturas restringidas de Marx y Ricardo que favorecen a las tipologías y las teleologías sobre la política, el poder y las especificidades de la historia y la geografía. En cierto sentido, las identidades y los motivos de las elites con tierras se supone que son transparentes y conocidas antes incluso de que empiece el estudio del campo. En consecuencia, la mayoría de los estudiosos del conflicto agrario no ven una necesidad real de aventurarse en el terreno políticamente incómodo de la etnografía entre las elites con tierras. Y es una pérdida. Así como los estudios agrarios en la actualidad exploran a los campesinos en sus múltiples imbricaciones con el trabajo fabril, la migración transnacional, la urbanización, las identidades cosmopolitas y la agricultura capitalista

avanzada, la elite terrateniente —o en términos más amplios, los múltiples grupos y clases incómodos que ejercen una dominación profunda e histórica en la política rural en todo el mundo, aun cuando ellos a su vez estén sujetos a poderosas formas de dominación en la era de la globalización— se han de entender como una categoría impura definida por múltiples y cambiantes posicionamientos. Esta clase de entendimiento no puede provenir de una posición cómoda y a salvo.

Durante mi última visita a Chilón, asistí también a una segunda reunión. Esta vez, años después de que aquel campesino tseltal me confundiera con un sacerdote en la parte trasera de una camioneta, yo estaba presentando mi investigación a miembros del equipo del Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC) con base en la iglesia. Profundamente comprometido en las luchas indígenas por la tierra y estrechamente vinculado a la misión jesuita en Bachajón, el CEDIAC parecía representar todo el trabajo de justicia social y de movimientos sociales que yo temía que mi complicidad de estudioso con los terratenientes podía socavar. Pero ahí estaba yo, discutiendo el manuscrito de mi libro con un público mixto de dirigentes indígenas y jóvenes activistas mestizos. Su entusiasmo y apertura a mi proyecto facilitaron mucho el camino para disolver los temores que acechaban mi investigación. En otros sentidos, ahondaron mi ambivalencia. ¿Acaso era yo ahora un traidor a los terratenientes que habían confiado en mí?

Aquella tarde, durante la comida, don Roberto me preguntó sospechosamente cómo había ido mi reunión con el CEDIAC. «De muchas maneras», respondí sin vacilar, «la manera que tienen ustedes de entender lo que ha sucedido aquí en Chilón y la de ellos no son tan diferentes». Don Roberto pareció sorprendido, de modo que le expliqué que tanto los terratenientes como el equipo del CEDIAC situaban los acontecimientos de 1994 en el contexto de un desplazamiento histórico de los terratenientes ladinos como los mediadores centrales entre las comunidades indígenas y el Estado. Ambos veían que la iglesia y otras organizaciones desempeñaban papeles clave en el proceso, y ambos reconocían que esos papeles iban a reforzar una crisis neoliberal subyacente en el campo (aunque solo un pequeño número de terratenientes empleaban en realidad el término «neoliberal»). «Por otra

parte», concluí, «las interpretaciones de ustedes sobre si estos cambios son buenos o malos y hasta qué punto los pueblos indígenas desempeñaron un papel en ellos son *muy* diferentes». Esta respuesta pareció satisfacer a don Roberto, o al menos le dio algo en que recapacitar.

No mucho después de mi regreso a los Estados Unidos en 2000, un amigo activista que trata de mediar entre los ganaderos y los ecologistas en el desierto del sur de Arizona me comentó sobre la práctica de escuchar atentamente a las personas con las que uno está en desacuerdo en muchos temas: «Supongo que te puedes hacer amigo de cualquiera si te sientas alrededor de la mesa de su cocina y le escuchas». Encontré que esto era cierto en Chiapas y espero haber transmitido el fuerte afecto que siento por terratenientes ladinos como Roberto Trujillo y Alejandro Díaz. Pero la lógica de la mesa de la cocina de mi amigo parte del supuesto de que uno puede sentarse a la mesa en primer lugar. Cuando era nuevo en Chiapas albergaba ingenuamente la idea de que mostrando cómo la globalización neoliberal había creado la crisis en la vida tanto de los indígenas como de los ladinos en el campo, podía revelar un terreno en común entre los dos grupos. Como expliqué en el capítulo 2, la larga historia del antagonismo racial de Chilón, las identidades complejas y las capas profundamente sedimentadas de la dominación no tardaron en disipar esta fantasía. Muy probablemente mi trabajo no llevará a los terratenientes y a los campesinos indígenas a una conversación política en común. A fin de cuentas, mi intento de tomar en serio a los relativamente poderosos está dirigido a los estudiosos y activistas que tildan tranquilamente a las elites con tierras como la de Chilón de ser los malos en una gama diversa de luchas políticas rurales. He escrito este libro contra los esencialismos estratégicos que movilizan la política por medio de los burdos binarios de buenos y malos. Las elites terratenientes no actúan a partir de identidades predeterminadas sino de inciertas articulaciones del significado y la historia. Visto así, las respuestas de las elites terratenientes al conflicto agrario —ya sea en México, Zimbabue, Sudáfrica o Brasil— no pueden ser entendidas ni juzgadas cabalmente sin una exploración refinada y muy probablemente incómoda de sus experiencias vividas.

Bibliografía

Fuentes de archivos

AGL Asociación Ganadera Local, Chilón
AHD Archivo Histórico Diocesano, San Cristóbal de Las Casas
AHPL Archivo Histórico del Poder Legislativo de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez
AMCH Archivo Municipal de Chilón
AMS Archivo Municipal de Sitalá
APJ Archivo del Poder Judicial de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas
CGPD Colección General Porfirio Díaz, Puebla
RAN-DF Registro Agrario Nacional/Archivo General Agrario, Ciudad de México
RAN-TG Registro Agrario Nacional, Delegación Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez
RP-Y Registro Público, Yajalón
WLT Documentos de Wenceslao López Trujillo, Yajalón

Fuentes secundarias

Agnew, John

2000 «Territoriality.» In *The Dictionary of Human Geography,* R. J. Johnston, D. Gregory, G. Pratt y M. Watts (eds.), Oxford, Black-well.

Alejos García, José

1996 «Dominio extranjero en Chiapas, el desarrollo cafetalero en la Sierra Norte», *Mesoamérica* 32, pp. 283-298.

1999 *Ch'ol/kaxlan, Identidades étnicas y conflicto agrario en el norte de Chiapas, 1914-1940,* Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana.

Alejos García, José y Elsa Ortega Peña

1990 *El archivo municipal de Tumbalá, Chiapas, 1920-1946,* Ciudad de México, UNAM.

Alonso, Ana

1995 *Thread of Blood, Colonialism, Revolution, and Gender on Mexico's Northern Frontier,* Tucson, University of Arizona Press.

Alonso, Jorge

1984 *Crepitar de banderas rojas. Campaña y elecciones socialistas,* Ciudad de México, CIESAS.

AMDH

1995 *Boletín Chiapas*, núm. 13.

Ascencio Franco, Gabriel

2002 «La imagen del ranchero en la literatura chiapaneca», *Pueblos y Fronteras* 4:11-30.

Aubry, Andrés

1986 «Retrato político de Chiapas en tres sexenios y tres sexenios de desarrollo a lo chiapaneco», documento de trabajo, San Cristóbal de Las Casas.

Austin, James y Gustavo Esteva

1987 *Food Policy in Mexico, The Search for Self-Sufficiency,* Ithaca, Cornell University Press.

Baumann, Friederike

1985 «Terratenientes, campesinos y expansión de la agricultura capitalista en Chiapas, 1886-1916», *Mesoamérica* 5:8-61.

Becerra O'Leary, José

1998 «Palabras de José Becerra O'Leary, Representante Especial en el Estado de Chiapas», documento leído, mayo 19, en la Casa de la Cultura, San Cristóbal de Las Casas.

Benjamin, Thomas

1996 *A Rich Land, a Poor People, Politics and Society in Modern Chiapas,* Albuquerque, University of New Mexico Press.

Benjamin, Walter

1969 *Illuminations,* Nueva York, Schocken.

Bernstein, Henry

2004 «'Changing Before Our Very Eyes', Agrarian Questions and the Politics of Land in Capitalism Today,» *Journal of Agrarian Change* 4(1):190-225.

Bernstein, Henry y Terence J. Byres

2001 «From Peasant Studies to Agrarian Change,» *Journal of Agrarian Change* 1(1):1-56.

Blom, Frans y Oliver La Farge

1926-1927 *Tribes and Temples, A Record of the Expedition to Middle America Conducted by the Tulane University of Louisiana in 1925,* 2 vols. Nueva Orleans, Tulane University of Louisiana.

Bobrow-Strain, Aaron

2001 «Between a Ranch and a Hard Place, Violence, Scarcity, and Meaning in Chiapas, Mexico», en *Violent Environments,* N. Peluso y M. Watts (eds.) Ithaca, Cornell University Press.

2003 «Rethinking Thuggery, Landowners, Territory, and Violence in Chiapas, Mexico», disertación doctoral, University of California, Berkeley.

2004 «(Dis)accords, The Politics of Market-Assisted Land Reforms in Chiapas, Mexico», *World Development* 32(6):887-903.

s.f. «Liquid Fincas, Land, Commerce, and Liquor in North-central Chiapas, 1820-1950», documento de trabajo.

Borras, Saturnino

2001 «State-Society Relations in Land Reform Implementation in the Philippines», *Development and Change* 32(3):545-575.

2003 «Questioning Market-Led Agrarian Reform, Experiences from Brazil, Colombia, and South Africa», *Journal of Agrarian Change* 3(3):367-394.

2005 «Can Redistributive Reform be Achieved via Market-Based Voluntary Land Transfer Schemes? Evidence and Lessons from the Philippines», *Journal of Development Studies* 41(1):90-134.

Boym, Svetlana

2001 *The Future of Nostalgia,* Nueva York, Basic Books.

Bruno, Regina

1997 *Senhores da terra, senhores da guerra, A nova face política das elites agroindustriais no Brasil,* Río de Janeiro, Forense Universitarial.

Buffington, Robert y William French

2000 «The Culture of Modernity», In *The Oxford History of Mexico,* W. Beezley y M. Meyer (eds.), Oxford, Oxford University Press.

Burguete Cal y Mayor, Aracely

1988 *Chiapas etnocida reciente, Represión política a los indios, 1974-1977,* Ciudad de México, amdh.

Burguete Cal y Mayor, Aracely (ed.)

1999 (ed.) *México, Experiencias de autonomía indígena,* Copenhague, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas.

Cadena, Marisol de la

2000 *Indigenous Mestizos, The Politics of Race and Culture in Cuzco, Peru, 1919-1991,* Durham, Duke University Press.

Carney, Judith y Michael Watts

1990 «Manufacturing Dissent, Work, Gender and the Politics of Meaning in a Peasant Society», *Africa* 60(2), 207-241.

Carrascosa, Manuel

1883 *Apuntes estadísticos del estado de Chiapas,* Ciudad de México, Francisco Díaz de León.

1889 *Memorial que presenta el C. Manuel Carrascosa como gobernador constitucional del estado de Chiapas a la legislatura,* vol. 3. Tuxtla Gutiérrez, Secretaría de Fomento.

CDHFBLC

1996 *Ni paz, ni justicia,* San Cristóbal de Las Casas.

CDHFBLC y CEDIAC

1996 «Reporte sobre el contexto social e histórico del conflicto en San Gerónimo Bachajón», San Cristóbal de Las Casas.

CENCOS

1974 *Documentos del Primer Congreso Indígena, San Cristóbal, 1974,* Ciudad de México.

Centeno, Miguel Ángel

1997 *Democracy within Reason, Technocratic Revolution in Mexico,* University Park, Pennsylvania State University Press.

CESMECA

1998 «Predios invadidos, Chiapas, 1994-1998» y «Fideicomisos agrarios, Chiapas, 1994-1998», San Cristóbal de Las Casas [hoja de cálculo impresa].

Chanona Marín, Luis Alberto

1952 «Perfil de la reforma agraria en el estado de Chiapas», tesis de licenciatura, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México.

Charnay, Désiré

1956 «San Cristóbal», *Ateneo* 6:126-148.

Chauvet, Michelle

1999 *La ganadería bovina de carne en México, Del auge a la crisis,* Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Chayanov, A. V

1986 *The Theory of Peasant Economy,* Madison, University of Wisconsin Press.

Collier, George y Elizabeth Lowery Quaratielo

2005 *Basta! Land and the Zapatista Rebellion in Chiapas,* Oakland, Food First Books.

CONPAZ, CDHFBLC y COCD

1996 *Militarización y violencia en Chiapas,* Ciudad de México, Impretei.

Cook, María Lorena, Kevin Middlebrook y Juan Molinar Horcasitas (eds.)

1994 *The Politics of Economic Restructuring, State-Society Relations and Regime Change in Mexico,* La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.

Cornelius, Wayne, Ann Craig y Jonathan Fox (eds.)

1994 *Transforming State-Society Relations in Mexico, The National Solidarity Strategy,* La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.

Cornelius, Wayne y David Myhre (eds.)
1998 *The Transformation of Rural Mexico, Reforming the Ejido Sector,* La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.

Coronil, Fernando
1997 *The Magical State, Nature, Money, and Modernity in Venezuela,* Chicago, University of Chicago Press.

Cosío Villegas, Daniel
1994 *Historia mínima de México,* Ciudad de México, El Colegio de México.

Deere, Carmen Diana
1990 *Household and Class Relations, Peasants and Landlords in Northern Peru,* Berkeley, University of California Press.

Deininger, Klaus
2003 *Land Policies for Growth and Poverty Reduction,* Oxford, Oxford University Press.

Delaney, David
2005 *Territory, A Short Introduction,* Malden, Mass., Blackwell.

Dennis, Philip
1987 *Intervillage Conflict in Oaxaca,* New Brunswick, Rutgers University Press.

DeWalt, Billie R., Martha W. Rees y Arthur D. Murphy (eds.)
1994 *The End of Agrarian Reform in Mexico, Past Lessons, Future Prospects,* La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.

Díaz Olivares, Jorge
s.f. «Bachajón zona de refugio en los altos de Chiapas», tesis de maestría, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Dresser, Denise
1991 *Neopopulist Solutions to Neoliberal Problems, Mexico's National Solidarity Program,* La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
1994 «Bringing the Poor Back In, National Solidarity as a Strategy of Regime Legitimation», en W. Cornelius, A. Craig, and J. Fox (eds.), *Transforming State-Society Relations in Mexico, The National Solidarity Strategy,* La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.

Dussel Peters, Enrique
2000 *Polarizing Mexico, The Impact of Liberalization Strategy,* Boulder, Lynne Rienner.

Eber, Christine
1995 *Women and Alcohol in a Highland Maya Town, Water of Hope, Water of Sorrow,* Austin, University of Texas Press.

2003 «Buscando una Nueva Vida, Liberation through Autonomy in San Pedro Chenalhó, 1970-1998,» en J. Rus et al. (eds.), *Mayan Lives, Mayan Utopias, The Indigenous Peoples of Chiapas and the Zapatista Rebellion,* Lanham, Md., Rowman and Littlefield.

Eco, Umberto

1995 *The Island of the Day Before,* Nueva York, Harcourt Brace.

Edelman, Marc

1992 *The Logic of the Latifundio, The Large Estates of Northwestern Costa Rica since the Late Nineteenth Century,* Stanford, Stanford University Press.

1994 Landlords and the Devil, Class, Ethnic, and Gender Dimensions of Central American Peasant Narratives, *Cultural Anthropology* 9(1):58-93.

Estado de Chiapas, Oficina de Informaciones

1895 *Chiapas, su estado actual, su riqueza, sus ventajas para los negocios,* Tuxtla Gutiérrez.

1909 *Anuario estadístico del estado de Chiapas*, Tuxtla Gutiérrez, Tipografía del Gobierno.

Executive Intelligence Report

1994 «Surge en Chiapas 'Sendero Luminoso Norte', Avanza el complot narcoterrorista para aniquilar a las naciones de Iberoamerica», *Executive Intelligence Review News Services*, enero.

Fabregas Puig Andrés

1988 *Indigenismo y cambio estructural en Chiapas, Avances y perspectivas,* Tuxtla Gutiérrez, Universidad Nacional Autónoma de Chiapas.

Favre, Henri

1985 «El cambio socio-cultural y el nuevo indigenismo en Chiapas», *Revista Mexicana de Sociología* 47(3):161-196.

Feldman, Allen

1991 *Formations of Violence, The Narrative of the Body and Political Terror in Northern Ireland,* Chicago, University of Chicago Press.

Ferguson, James

1999 *Expectations of Modernity, Myths and Meanings of Urban Life on the Zambian Copperbelt,* Berkeley, University of California Press.

Fernández Ortiz, Luis M. y María Tarrío García

1983 *Ganadería y estructura agraria en Chiapas,* Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Fine, Ben

1979 «On Marx's Theory of Agricultural Rent», *Economy and Society* 8(3):241-278.

Foucault, Michel

1990 *The History of Sexuality, An Introduction,* vol. 1, Nueva York, Vintage Books.

2003 *Society Must Be Defended, Lectures at the Collège de France, 1975-76,* Nueva York, Picador.

Fox, Jonathan

1993 *The Politics of Food in Mexico, State Power and Social Mobilization,* Ithaca, Cornell University Press.

1994*a* «Political Change in Mexico's New Peasant Economy», en M. L. Cook, K. J. Middlebrook y J. M. Horcasitas (eds.), *The Politics of Economic Restructuring, State-Society Relations and Regime Change in Mexico,* La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.

1994*b* «Targeting the Poorest, The Role of the National Indigenous Institute in Mexico's Solidarity Program», en W. Cornelius, A. Craig y J. Fox (eds.), *Transforming State-Society Relations in Mexico, The National Solidarity Strategy,* La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.

Fox, J. y G. Gordillo

1989 «Between State and Market, The Campesino's Quest for Autonomy», en W. Cornelius, J. Gentleman y P. Smith (ed.), *Mexico's Alternative Political Futures,* La Jolla, Center for U.S.Mexican Studies, University of California, San Diego.

García, María del Carmen y Daniel Villafuerte Solís

1998 «Economía y sociedad en Chiapas,» en *La sociedad frente al mercado,* M. Tarrío y L. Concheiro (eds.), Ciudad de México, UAM-X.

García de León, Antonio

1978 «La guerra de los Mapaches, El bestiario de la contrarevolución en Chiapas», San Cristóbal de Las Casas, Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste.

1998 [1985] *Resistencia y utopía, Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia,* Ciudad de México, Era.

2002 *Fronteras interiores, Chiapas, Una modernidad particular,* Ciudad de México, Océano.

Garza Caligaris, Anna María

2005 «Los barrios de San Cristóbal, Población y género durante el Porfiriato», *Anuario de Estudios Indígenas* 10:115-143.

Ghimire, Krishna

2001 «Land Reform at the Turn of the Century, An Overview of Issues, Actors, and Processes», en K. Ghimire (ed.), *Land Reform and Peasant Livelihoods, The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reform in Developing Countries,* Ginebra, UNRISD.

Gómez Cruz, Patricia J. y Cristina María Kovic

1993 *Con un pueblo vivo en tierra negada,* San Cristóbal de Las Casas, CDHFBLC.

González, Luis

2001 «El liberalismo triunfante», en *Historia general de México.* Ciudad de México, El Colegio de México.

Goodman, David y Michael Watts

1997 «Agrarian Questions, Global Appetite, Local Metabolism, Nature, Culture, and Industry in *Fin-de-Siècle* Agro-Food Systems», en D. Goodman y M. Watts (eds.), *Globalising Food, Agrarian Questions and Global Restructuring*, Nueva York, Routledge.

Gordillo, Gastón

2002*a* «Locations of Hegemony, The Making of Places in the Toba's Struggle for la Comuna, 1989-99,» *American Anthropologist* 104(1):262-277.

2002*b* «The Breath of the Devils, Memories and Places of an Experience of Terror», *American Ethnologist* 29(1):33-57.

Gosner, Kevin

1992 *Soldiers of the Virgin, The Moral Economy of a Colonial Maya Rebellion.* Tucson, University of Arizona Press.

Gould, Jeffrey L.

1998 *To Die in This Way, Nicaraguan Indians and the Myth of Mestizaje, 1770-1965,* Durham, Duke University Press.

Grammont, Hubert y Héctor Tejera Gaona (eds.)

1996 *La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio,* 4 vols., Ciudad de México, Plaza y Valdés.

Gramsci, Antonio

1971 *Selections from the Prison Notebooks,* Nueva York, International Publishers.

Gregory, Derek

1995 «Imaginative Geographies», *Progress in Human Geography* 19(4):447-485.

Gremio de Agricultores del Estado de Chiapas

1914 *El servicio doméstico en Chiapas, Estudio económico social aprobado y mandado publicar por el gremio de agricultores del estado residentes en San Cristóbal de Las Casas,* San Cristóbal de Las Casas, Tipografía Flores.

Guha, Ranajit

1982 *Writings on South Asian History and Society,* Delhi, Oxford University Press.

Guthman, Julie

2004 «Back to the Land, The Paradox of Organic Food Standards,» *Environment and Planning* 36(3):511-528.

Gutmann, Matthew C

1996 *The Meanings of Macho, Being a Man in Ciudad de México,* Berkeley, University of California Press.

Hale, Charles

1996 «Mestizaje, Hybridity and the Cultural Politics of Difference in Post-Revolutionary Central America,» *Journal of Latin American Anthropology* 2(1):34-61.

Hall, Stuart

1974 «Marx's Notes on Method, A 'Reading' of the '1857 Introduction,'» *Working Papers in Cultural Studies* 6:132-170.

1996 «On Postmodernism and Articulation, An Interview with Stuart Hall,» en D. Morley y C. Kuan-Hsing (eds.), *Stuart Hall, Critical Dialogues in Cultural Studies,* Londres, Routledge.

2002 «Race, Articulation, and Societies Structured in Dominance,» en P. Essed y D. T. Goldberg (eds.), *Race Critical Theories, Text and Context,* Malden, Mass., Blackwell.

Hart, Gillian

1991 «Engendering Everyday Resistance», *Journal of Peasant Studies* 19(1):93-121.

2002 *Disabling Globalization, Places of Power In Post-Apartheid South Africa,* Berkeley, University of California Press.

Harvey, David

1990 *The Condition of Postmodernity, An Enquiry into the Origins of Cultural Change,* Cambridge, Blackwell.

1999 *The Limits to Capital,* Londres, Verso.

Harvey, Neil

1998 *The Chiapas Rebellion, The Struggle for Land and Democracy,* Durham, Duke University Press.

Hernández, Luis y Fernando Celis

1994 «Solidarity and the New Campesino Movements, The Case of Coffee Production,» en W. A. Cornelius, A. Craig y J. Fox (eds.), *Transforming State-Society Relations in Mexico, The National Solidarity Strategy,* La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.

Hernández Chávez, Alicia

1979 «La defensa de los finqueros en Chiapas, 1914-1920», *Historia Mexicana* 28(3):335-369.

Hewitt de Alcántara, Cynthia

1978 *La modernización de la agricultura mexicana, 1940-1970,* Ciudad de México, Siglo XXI Editores.

Huber, Evelyne y Frank Safford

1995 *Agrarian Structure and Political Power, Landlord and Peasant in the Making of Latin America.* Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.

Human Rights Watch

1997 «Deberes incumplidos, Responsabilidad oficial por la violencia rural en México», en http://www.hrw.org/span ish/informes/1997/deberes8.html. [febrero, 2006].

Ibarra Mendivil, Jorge L

1989 *Propiedad agraria y sistema político en México,* Hermosillo, El Colegio de Sonora.

INEGI

1990 *Anuario estadístico del estado de Chiapas,* Aguascalientes.

1994 *Chiapas, resultados definitivos, VII censo agrícola-ganadero, 1990,* Aguascalientes.

INI

1988 *El INI hoy, 40 aniversario,* Ciudad de México.

Janvry, Alain de

1981 *The Agrarian Question and Reformism in Latin America,* Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Janvry, Alain de, Gustavo Gordillo y Elisabeth Sadoulet (eds.)

1997 *Mexico's Second Agrarian Reform, Household and Community Responses, 1990-1994,* La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.

Joseph, Gilbert M. y Daniel Nugent (eds.)

1994 *Everyday Forms of State Formation, Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico,* Durham, Duke University Press.

Joseph, Gilbert M., Anne Rubenstein y Eric Zolov (eds.)

2001 *Fragments of a Golden Age, The Politics of Culture in Mexico since 1940,* Durham, Duke University Press.

Kammen, Michael G

1991 *Mystic Chords of Memory, The Transformation of Tradition in American Culture,* Nueva York, Knopf.

Katz, Friedrich

1974 «Labor Conditions on Haciendas in Porfirian Mexico, Some Trends and Tendencies,» *Hispanic American Historical Review* 54(1):1-47.

1976 *La servidumbre agraria en México en la época porfiriana,* Ciudad de México, Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Divulgación.

Kautsky, Karl

1988 *The Agrarian Question,* Londres, Zwan.

Kay, Cristóbal

1999 «Rural Development, From Agrarian Reform to Neoliberalism and Beyond», en R. N. Gwynne and C. Kay (ed.), *Latin America Transformed, Globalization and Modernity*, Londres, Oxford University Press.

Keith, Michael y Steve Pile

1993 «The Place of Politics», en M. Keith y S. Pile (ed.); *Place and the Politics of Identity,* Londres, Routledge.

Klepeis, Peter y Colin Vance

2003 «Neoliberal Policy and Deforestation in Southeastern Mexico, An Assessment of the procampo Program», *Economic Geography* 79(3):221-240.

Knight, Alan

1986 «Mexican Peonage, What Was It and Why Was It?» *Journal of Latin American Studies* 18(1):41-74.

Krauze, Enrique

1997 *Mexico, Biography of Power, A History of Modern Mexico, 1710-1996,* Nueva York, Harper Collins.

Lefebvre, Henri

1991 *The Production of Space,* Cambridge, Blackwell.

Lenin, V. I

1977 *The Development of Capitalism in Russia,* Moscow, Progress.

Leyva Solano, Xochitl y Gabriel Ascencio Franco

1996 *Lacandonia al filo del agua,* Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.

Li, Tania M

1999 «Compromising Power, Development, Culture, and Rule in Indonesia,» *Cultural Anthropology* 40(3):277-309.

2000 «Articulating Indigenous Identity in Indonesia, Resource Politics and the Tribal Slot,» *Comparative Studies in Society and History,* 42(1):149-179.

López, Adriana

2000 «Los nuevos zapatistas y la lucha por la tierra», *Chiapas* 9:139-158.

López Reyes, Jasmina

2005 «El café en Yajalón, Cambio social en una región cafetalera», *Anuario de Estudios Indígenas* 10:335-357.

Luna, Arturo

2001 Seminario internacional *La lucha por la tierra y la reforma agraria en el nuevo mundo*, San Cristóbal de Las Casas.

Lustig, Nora

1992 *Mexico, the Remaking of an Economy.* Washington, Brookings Institution.

Mallon, Florencia

1995 *Peasant and Nation, The Making of Postcolonial Mexico and Peru,* Berkeley, University of California Press.

1996 «Constructing Mestizaje in Latin America, Authenticity, Marginality and Gender in the Claiming of Ethnic Identities», *Journal of Latin American Anthropology* 2(1):170-181.

Marcus, George

1983 *Elites, Ethnographic Issues.* Albuquerque, University of New Mexico Press.

Martín Echeverría, Leonardo
1960 *La gandería mexicana,* Ciudad de México, Banco de México.

Martínez Quezada, Álvaro et al.
1994 *Reforma agraria y movimientos campesinos en el estado de Chiapas,* Chiapas, Universidad Autónoma de Chapingo.

Marx, Karl
1967 *Capital*, vol. 3, Nueva York, International Publishers.

Massey, Doreen B
1994 *Space, Place, and Genderl,* Minneapolis, University of Minnesota Press.

Maurer Avalos, Eugenio
1978 «La educación bilingüe en un poblado de Chiapas, México», Ciudad de México, Centro de Estudios Educativos.
1983 *Los Tseltales,* Ciudad de México, Centro de Estudios Educativos.

McDonogh, Gary W
1986 *Good Families of Barcelona,* Princeton, Princeton University Press.

Middlebrook, Kevin J
1995 *The Paradox of Revolution, Labor, the State, and Authoritarianism in Mexico,* Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Middlebrook, Kevin J. y Eduardo Zepeda
2003 *Confronting Development, Assessing Mexico's Economic and Social Policy Challenges,* Stanford, Stanford University Press.

Moguel, Julio
1994 «The Mexican Left and the Social Program of Salinismo», en W. Cornelius, A. Craig y J. Fox (eds.), *Transforming State-Society Relations in Mexico, The National Solidarity Strategy,* La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.

Moore, Barrington
1966 *Social Origins of Dictatorship and Democracy, Lord and Peasant in the Making of the Modern World,* Boston, Beacon.

Moore, Donald S
1998 «Subaltern Struggles and the Politics of Place, Remapping Resistance in Zimbabwe's Eastern Highlands,» *Cultural Anthropology* 13(3):344-381.
1999 «The Crucible of Cultural Politics,» *American Ethnologist* 26(3):654-689.
2005 *Suffering for Territory, Race, Place, and Power in Zimbabwe,* Durham, Duke University Press.

Moyo, Sam
2000 «The Political Economy of Land Acquisition and Redistribution in Zimbabwe, 1990-1999,» *Journal of Southern African Studies* 26(1):5-32.

Nader, Laura
1999 «Up the Anthropologist, Perspectives Gained from Studying Up», en D. Hymes (ed.), *Reinventing Anthropology,* Ann Arbor, Ann Arbor Paperbacks.

Nash, June C
1967 «Death as a Way of Life, The Increasing Resort to Homicide in a Maya Indian Community,» *American Anthropologist* 69(5):455-470.
2001 *Mayan Visions, The Quest for Autonomy in an Age of Globalization,* Nueva York, Routledge.

Nelson, Diane M
1999 *A Finger in the Wound, Body Politics in Quincentennial Guatemala,* Berkeley, University of California Press.
2003 «'The More You Kill the More You Will Live', The Mayan 'Race' and Biopolitical Hopes for Peace in Guatemala», en D. S. Moore, A. Pandian y J. Kosek (eds.), *Race, Nature, and the Politics of Difference*, Durham, Duke University Press.

Neocosmos, Michael
1986 «Marx's Third Class», *Journal of Peasant Studies* 13(3):5-44.

Nickel, Herbert J
1997. *El peonaje en las haciendas mexicanas, Interpretaciones, fuentes, hallazgos,* Friburgo, Arnold Bergstraesser Institut.

Nordstrom, C
1997. *A Different Kind of War Story,* Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Nordstrom, Carolyn y JoAnn Martin
1992. *The Paths to Domination, Resistance, and Terror,* Berkeley, University of California Press.

Nordstrom, Carolyn y Antonius C. G. M. Robben
1995. *Fieldwork under Fire, Contemporary Studies of Violence and Survival,* Berkeley, University of California Press.

Nugent, Daniel
1993. *Spent Cartridges of Revolution, An Anthropological History of Namiquipa, Chihuahua,* Chicago, University of Chicago Press.

Nugent, Daniel y Ana Alonso
1994 «Multiple Selective Traditions in Agrarian Reform and Agrarian Struggle, Popular Culture and State Formation in the Ejido of Namiquipa, Chihuahua», en G. M. Joseph y D. Nugent (eds.), *Everyday Forms of State Formation, Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico,* Durham, Duke University Press.

Ochoa, Enrique C
2000 *Feeding Mexico, The Political Uses of Food since 1910,* Wilmington, Del., Scholarly Resources.

Olivera, Mercedes
1980 «Sobre la explotación y opresión de las mujeres acasiallados de Chiapas,» en G. Munch et al., *El sur de Mexico, Datos sobre la problemática indígena,* México, UNAM.

Olivera, Mercedes y María Dolores Palomo (eds.)
2005 *Chiapas, de la Independencia a la Revolución*, Tlapan, CIESAS.

Ollman, Bertell
1976 *Alienation, Marx's Conception of Man in Capitalist Society,* Cambridge, Cambridge University Press.

Omi, Michael, and Howard Winant
1994 *Racial Formation in the United States, From the 1960s to the 1990's,* Nueva York, Routledge.

Ong, Aihwa
2000 «Graduated Sovereignty in South-East Asia,» *Theory, Culture and Society* 17(4):55-75.

Orlove, Ben
1994 «The Dead Policemen Speak, Power, Fear, and Narrative in the 1931 Molloccahua Killings (Cusco)», en D. Poole (ed.), *Unruly Order, Violence, Power, and Cultural Identity in the Highland Provinces of Southern Peru,* Boulder, Westview.

Otero, Gerardo
1996 *Neoliberalism Revisited, Economic Restructuring and Mexico's Political Future,* Boulder, Westview.
2004 *Mexico in Transition, Neoliberal Globalism, the State and Civil Society,* Nueva York, Zed.

Ovalle Muñoz, Pedro de Jesús
1984 «Movimientos campesinos en la zona tzeltal de Chiapas», *Textual* 17:63-78.

Paige, Jeffrey
1975 *Agrarian Revolution, Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World,* Londres, Free Press.
1997 *Coffee and Power, Revolution and the Rise of Democracy in Central America,* Cambridge, Harvard University Press.

Pastor, Manuel y Carol Wise
1997 «State Policy, Distribution, and Neoliberal Reform in Mexico,» *Journal of Latin American Studies* 29 (2):419-456.

Payne, Leigh A
2000 *Uncivil Movements, The Armed Right Wing and Democracy in Latin America,* Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Paz, Octavio
1985 *The Labyrinth of Solitude,* Nueva York, Grove.

Pedrero Nieto, Gloria
1981 «El proceso de acumulación originaria en el agro chiapaneco», *Investigaciones recientes en el área Maya,* XVII Mesa Redonda, San Cristóbal 3:31-39.

Peña, Moisés de la
1951 *Chiapas económico,* 4 vols. Tuxtla Gutiérrez, Departamento de Prensa y Turismo, Sección Autográfica.

Pineda, Vicente
1888 *Historia de las sublevaciones indígenas habidas en el Estado de Chiapas, Gramática de la lengua tzeltal que habla la generalidad de los habitantes de los pueblos que quedan al oriente y al noreste del estado. Y diccionario de la misma,* Tuxtla Gutiérrez, Tipografía del Gobierno.

Pólito Barrios, Elizabeth
2000 «El capital extranjero y nacional en Chiapas», *Chiapas* 9:61-82.

Pontigo, J. Luís y Gonzalo Hernández
1981 «Poder y dominación en la zona norte de Chiapas», *Investigaciones recientes en el área Maya,* XVII Mesa Redonda, San Cristóbal.

Presidencia de la República
1993 *Temas nacionales en las cartas al presidente,* Ciudad de México.

Procuraduría General de la República
2000 *Boletín* 569/00.

Rabasa, D. R
1895 *Estado de Chiapas, Geografía y Estadística,* Ciudad de México, Tipografía del Cuerpo Especial de Estado Mayor.

Ramírez, José María
1885 *Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas, presentada al XIV Congreso por el gobernador constitucional José María Ramírez,* Chiapas, Imprenta del Gobierno en Palacio.

Randall, Laura ed
1996 *Reforming Mexico's Agrarian Reform,* Armonk, N.Y., M. E. Sharpe.

Reyes Ramos, María Eugenia
1992 *El reparto de tierras y la política agraria en Chiapas, 1914-1977,* México, UNAM.
1998*a* «Los acuerdos agrarios en Chiapas, ¿Una política de contención social?» en M. E. Reyes Ramos, R. Moguel y G. van der Haar (eds.), *Espacios disputados, transformaciones rurales en Chiapas,* México, UAM-X.
1998*b* «Conflicto agrario en Chiapas, 1934-1964», tesis de doctorado, UNAM, México.

Reyes Ramos, María Eugenia, Reyna Moguel y Gemma van der Haar (eds.)
1998 *Espacios disputados, transformaciones rurales en Chiapas*, México, UAM-X.

Ricardo, David

1919 *Principles of Political Economy,* Harmondsworth, Penguin.

Richards, Alan

1979 «The Political Economy of *Gutswirtschaft.*» *Comparative Studies in Society and History* 21(4):483-518.

Robles, Rosario

1988 «Estructura de la producción y cultivos, 1950- 1960», en J. Moguel, R. Robles y B. Rubio (eds.), *Historia de la cuestión agraria mexicana,* vol. 7, México, Siglo XXI Editores.

Romano, Agustin

2002 *Historia evaluativa del Centro Coordinador Indigenista Tzeltal-Tzotzil,* vol 1, México, INI.

Rosaldo, Renato

1993 *Culture and Truth, The Remaking of Social Analysis,* Boston, Beacon.

Rose, Nikolas S

1999 *Powers of Freedom, Reframing Political Thought,* Cambridge, Cambridge University Press.

Roseberry, William

1994 «Hegemony and the Language of Contention», en G. Joseph y D. Nugent (eds.), *Everyday Forms of State Formation, Revolution and the Negotiation of Rule in Mexico,* Durham, Duke University Press.

Rubin, Jeffrey W

1997 *Decentering the Regime, Ethnicity, Radicalism, and Democracy in Juchitán, Mexico,* Durham, Duke University Press.

Rubio, Blanca

1987 *Resistencia campesina y explotación rural en México,* Ciudad de México, Era.

Rus, Jan

1994 «The 'Comunidad Revolucionaria Institucional', The Subversion of Native Government in Highland Chiapas, 1936-1968», en G. M. Joseph and D. Nugent (ed.), *Everyday Forms of State Formation, Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico,* Durham, Duke University Press.

1995 «Local Adaptation to Global Change, The Reordering of Native Society in Highland Chiapas, Mexico, 1974-1994,» *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 58:71-89.

2005 «El café y la recolonización de los Altos de Chiapas, 1892- 1910», en M. Olivera y M. D. Palomo (eds.), *Chiapas, de la independencia a la revolución*, Tlapan, CIESAS.

Rutherford, Blair

2004 «'Settlers' and Zimbabwe, Politics, Memory, and the Anthropology of Commercial Farms during a Time of Crisis», *Identities* 11(4):543-562.

Rutsch, Mechthild

1984 *La ganadería capitalista en México,* México, Linea.

Sack, Robert David

1986 *Human Territoriality, Its Theory and History,* Cambridge, Cambridge University Press.

Sadoulet, Elisabeth, Alain de Janvry y Ben Davis

2001 «Cash Transfer with Income Multiplier, procampo in Mexico,» *World Development* 29(3):467-480.

Said, Edward

1978 *Orientalism,* Nueva York, Pantheon.

SAIIC

1997 *South American Indigenous Information Bulletin.*

Sánchez Franco, Irene

1999 «Teología de liberación y formación de identidad entre tzeltales de la zona norte de Chiapas», tesis de maestría, CIESAS.

Sanderson, Steven E

1986 *The Transformation of Mexican Agriculture, International Structure and the Politics of Rural Change,* Princeton, Princeton University Press.

Santín, Osvaldo

2001 *The Political Economy of Mexico's Financial Reform,* Aldershot, Ashgate.

Sayer yrew

1992 *Method in Social Science, A Realist Approach,* Londres, Routledge.

2000 *Realism and Social Science,* Londres, Sage.

Scott, David Clark

1994 «Chiapas Ranchers Vow to Take Law into Their Own Hands,» *Christian Science Monitor,* april 14.

Scott, James C

1985 *Weapons of the Weak, Everyday Forms of Peasant Resistance,* New Haven, Yale University Press.

Secretaría de Economía

1930 *Censo Agrícola-Ganadera de 1930,* Ciudad de México.

Secretaría de Industria y Comercio

1960 *Censo Agrícola-Ganadera*, Ciudad de México.

SIC

1998 «Los acuerdos agrarios en Chiapas», en http://www.sic.chiapas.com/staach/informe/acuerdos.html. No disponible en línea. Impresión en poder del autor.

Singer, Marie Odile Marion

1984 *El movimiento campesino en Chiapas, 1973,* Ciudad de México, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México.

Slack, Jennifer Daryl

1996 «The Theory and Method of Articulation in Cultural Studies,» en D. Morley y C. Kuan-Hsing (eds.) *Stuart Hall, Critical Dialogues in Cultural Studies,* Londres, Routledge.

Smith, Gavin

1989 *Livelihood and Resistance, Peasants and the Politics of Land in Peru,* Berkeley, University of California Press.

Smith, Katherine E

2006 «Problematising Power Relations in 'Elite' Interviews,» *Geoforum* 37:643-653.

Snyder, Richard

2001 *Politics after Neoliberalism, Reregulation in Mexico,* Cambridge, Cambridge University Press.

Soederberg, Susanne

2001 «From Neoliberalism to Social Liberalism, Situating the National Solidarity Program within Mexico's Passive Revolutions», *Latin American Perspectives* 28(3):104-123.

Spark, Alasdair

2001 «Conjuring Order, The New World Order and Conspiracy Theories of Globalization,» en J. Parish y M. Parker (eds.), *The Age of Anxiety, Conspiracy Theory and the Human Sciences,* . Oxford, Blackwell.

SRA

2000 «Estructura Agraria de Chiapas», en http://www.sra-eservi cios.gob.mx/sra-e/dgia/fuentes/find.asp. Ya no está disponible en línea. Impresión en poder del autor.

Stephens, John Lloyd

1996 (1843) *Incidents of Travel in Yucatán,* Washington, Smithsonian Institution.

Stevens, Evelyn

1973 «Marianismo, The Other Face of Machismo in Latin America», en A. Pescatello (ed.), *Male and Female in Latin America,* Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.

Stoler, Ann Laura

1995*a* *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1770-1979,* 2a ed. Ann Arbor, University of Michigan Press.

1995*b* *Race and the Education of Desire, Foucault's «History of Sexuality» and the Colonial Order of Things,* Durham, Duke University Press.

Taussig, Michael

1984 «Culture of Terror-Space of Death, Roger Casement's Putumayo Report and the Explanation of Torture,» *Comparative Studies in Society and History* 26(3):467-497.

1986 *Shamanism, Colonialism, and the Wild Man, A Study in Terror and Healing,* Chicago, University of Chicago Press.

Tejera Gaona, Héctor
1997 *Identidad, formación regional y conflicto político en Chiapas,* México, INAH.

Tenorio-Trillo, Mauricio
1996 *Mexico at the World's Fairs, Crafting a Modern Nation,* Berkeley, University of California Press.

Toledo Tello, Sonia
1996 *Historia del movimiento indígena en Simojovel, 1970-1979*, Tuxtla Gutiérrez, Instituto de Estudios Indígenas, Universidad Autónoma de Chiapas (Monografías 6).
2002 *Fincas, poder y cultura en Simojovel, Chiapas,* México, IIA-UNAM.

Tolstoy, Leo
1996 *War and Peace,* Nueva York, Norton.

Toraya, Bertha
1985 «Origen y evolución de la tenencia de la tierra en el Soconusco, Chiapas, El caso de Santo Domingo», Cuadernos de la Casa Chata, núm. 125, pp. 91-128.

Vandergeest, Peter y Nancy Lee Peluso
1995 «Territorialization and State Power in Thailand,» *Theory and Society* 4(3):385-426.

Van der Haar, Gemma
1993 *Balancing on a Slack Rope, A Study of Bilingual Teachers in Chiapas, Mexico,* Wageningen, Department of Agricultural Education, University of Wageningen.

Vaughan, Mary Kay
1997 *Cultural Politics in Revolution, Teachers, Peasants, and Schools in Mexico, 1930-1940,* Tucson, University of Arizona Press.
1999 «Cultural Approaches to Peasant Politics in the Mexican Revolution,» *Hispanic American Historical Review* 79(2):269-305.

Vázquez Castillo, María Teresa
2004 *Land Privatization in Mexico, Urbanization, Formation of Regions, and Globalization in Ejidos,* Nueva York, Routledge.

Vera Hernández, Carlos Alexis
1998 «Situación y problemática acerca de la ganadería bovina asociado del municipio de Chilón, Chiapas», tesis de licenciatura, UNACH.

Villafuerte Solís, Daniel, María del Carmen García Aguilar y Salvador Meza Díaz
1997 *La cuestión ganadera y la deforestación, Viejos y nuevos problemas en el trópico y Chiapas,* Tuxtla Gutiérrez, UNICACH.

Villafuerte Solís, Daniel, Salvador Meza Díaz, Gabriel Ascencio Franco, María del Carmen García Aguilar, Carolina Rivera Farfán, Miguel Lisbona Guillén y Jesús Morales Bermúdez
1999 *La tierra en Chiapas, viejos problemas nuevos,* México, Plaza y Valdés.

Viqueira, Juan Pedro
1997 *Indios rebeldes e idólatras, Dos ensayos históricos sobre la rebelión india de Canuc, Chiapas, acaecida en el año 1712,* Tlalpan, CIESAS.

Vos, Jan de
1988 *La paz de Dios y del rey, La conquista de la selva lacandona, 1525-1721,* México, Fondo de Cultura Económica.
1994 *Oro verde, La conquista de la selva lacandona por los madereros tabasqueños, 1722-1949,* México, Fondo de Cultura Económica.
2002 *Una tierra para sembrar sueños, Historia reciente de la selva lacandona, 1950-2000,* México, Fondo de Cultura Económica.

Washbrook, Sarah
2005 «Desarrollo económico y reclutamiento y control de mano de obra en el norte de Chiapas, 1876-1911», en M. Olivera and M. D. Palomo (eds.), *Chiapas, de la Independencia a la Revolución* (eds.), México, CIESAS.

Wasserstrom, Robert
1983 *Class and Society in Central Chiapas*, Berkeley, University of California Press.

Watts, Michael
2002 «Chronicle of a Death Foretold, Some Thoughts on Peasants and the Agrarian Question», *Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften,* núm. 4, pp. 22-51.
2003 «Development and Governmentality», *Singapore Journal of Tropical Geography* 24(1):6-34.

Wells, Allen y Gilbert M. Joseph
1996 *Summer of Discontent, Seasons of Upheaval, Elite Politics and Rural Insurgency in Yucatán, 1776-1915,* Stanford, Stanford University Press.

Williams, Raymond
1980 *Problems in Materialism and Culture,* Londres, Verso.

Winson, Anthony
1982 The Prussian Road of Agrarian Development. *Economy and Society* 11(4):381-408.

Wolf, Eric R
1969 *Peasant Wars of the Twentieth Century,* Nueva York, Harper and Row.

Zedillo, Ernesto
1998 «Palabras del presidente Ernesto Zedillo,» mensaje, may 19 en Casa de la Cultura, San Cristóbal de Las Casas.

Índice analítico

ENEMIGOS ÍNTIMOS
Terratenientes, poder
y violencia en Chiapas
de Aaron Bobrow-Strain

editado por el Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la
UNAM, se terminó de imprimir en diciembre de 2015,
en los talleres de El Atril Tipográfico, S. A. de C. V.
Copilco 76 - A2 /504, Copiloco Universidad 04360, México D. F.
Gustavo Peñalosa Castro hizo la composición en tipo
Minion Pro 18/21.6, 11/13, y 10/13 puntos.
La edición, que consta de 2400 ejemplares impresos en
offset, en papel bond de alto volumen, encuadernación
rústica, estuvo al cuidado de Gustavo Peñalosa C.